

EDICIONES TIERRA VIVA —



RADIOGRAFÍAS DEL AGRO ARGENTINO

EL CAMPO DE QUIENES METEN
LAS MANOS EN LA TIERRA

RADIOGRAFÍAS DEL AGRO ARGENTINO

EL CAMPO DE QUIENES METEN
LAS MANOS EN LA TIERRA

■■ HEINRICH BÖLL STIFTUNG
BUENOS AIRES
Argentina | Uruguay | Paraguay

TIERRA **VIVA**
NOTICIAS DEL CAMPO QUE PRODUCE ALIMENTOS

Ediciones: Darío Aranda, Nahuel Lag, Mariángeles Guerrero

Diseño e ilustraciones: Sebastián Damen

Edición de fotografía: Nicolás Pousthomis

Administración: Walter Honeker

El campo de quienes meten las manos en la tierra

Por Darío Aranda

Familias campesinas, pueblos indígenas y cooperativistas. El campo que produce una enorme diversidad de alimentos sanos, esos que están en los platos argentinos, que hacen a la cultura local, a la historia y al futuro de los sectores populares del país.

Todo eso es parte fundamental de las “Radiografías del agro argentino”. Un material periodístico inédito, **pensado y realizado por Agencia Tierra Viva** para dar testimonio de un sector que resiste la avanzada del extractivismo, que cultiva sin transgénicos ni agrotóxicos, que construye soberanía alimentaria y futuro.

De Cuyo a la Pampa Húmeda, de la Patagonia al Norte, son 23 investigaciones repletas de información cualitativa y datos cuantitativos que reflejan lo que sucede en la ruralidad de Argentina: la concentración de tierras en pocas manos, los monocultivos, las políticas de Estado en favor del agronegocio y de los agrotóxicos que inundan el territorio nacional. Están presentes, inevitablemente, la megaminería, la explotación petrolera y la actividad forestal, todas actividades con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias.

Pero también sobresale la agroecología, que crece en cada provincia; la producción diversificada, desde las huertas para autoconsumo hasta la producción a escala, desde las ferias locales hasta la comercialización regional, con canales cortos de distribución y a precios justos para las mesas argentinas.

Realizado entre 2022 y 2024 por una decena de periodistas y fotógrafos que viven y recorren los territorios —de Jujuy a Tierra del Fuego, de Catamarca a Buenos Aires, de Santa Cruz a Misiones—, en todos los casos se da cuenta de la gran cantidad de organizaciones locales y provinciales que construyen soberanía alimentaria o, en términos indígenas, el buen vivir. Y, no casualmente, se priorizan las voces de mujeres y hombres que todos los días meten las manos en la tierra, que siembran presente y futuro.

En definitiva, este libro intenta ser una contribución para conocer, pensar y saber que “el campo” está lejos de ser un sector uniforme, que es muy diverso —como la misma agricultura y sus 10.000 años de existencia— y tiene actores tan históricos como imprescindibles para la producción de alimentos sanos: familias campesinas, cooperativistas y pueblos indígenas.

ÍNDICE

Agro en Tucumán: caña de azúcar, limón, tierra en pocas manos y el camino agroecológico _____	7
Chubut: un territorio en disputa entre la política extractiva y la soberanía alimentaria _____	21
Catamarca: tierra en pocas manos, 600 mil hectáreas menos en producción y la agroecología que crece _____	37
Río Negro: la agroecología avanza entre la fruticultura intensiva y los conflictos territoriales _____	45
Misiones: monocultivo de árboles, yerba mate, agroecología y territorios indígenas _____	53
Neuquén: fruticultura y monocultivo forestal, la histórica trashumancia y los brotes agroecológicos _____	67
Entre Ríos: agroecología para recuperar biodiversidad entre avícolas, agrotóxicos e incendios _____	79
Jujuy: ingenios azucareros, agroecología y disputa por los territorios _____	89
La Pampa: más transgénicos, el despojo del agua, los campesinos y la agroecología _____	107
Formosa: un Gobierno feudal, desmontes y la vida campesina-indígena que resiste _____	117
Córdoba de sur a norte: el avance del modelo sojero sobre los alimentos y el monte nativo _____	127
Santa Cruz: grandes estancieros, producción ovina, megaminería y la búsqueda de alternativas _____	139

Chaco: la agroecología que asoma entre la sojización, la ganadería y los desmontes _____	151
La Rioja: avance del agronegocio, conflictos socioterritoriales y transición agroecológica _____	161
Buenos Aires: pilar del agronegocio, concentración de tierras y otro modelo posible _____	171
Santiago del Estero: conflictos por la tierra, agrotóxicos y un monte que resiste _____	185
Tierra del Fuego: paraíso turístico, ganadería y lucha socioambiental _____	199
Corrientes: monocultivo de árboles, pérdida de hábitats naturales y la apuesta por la agroecología _____	209
San Luis: modelo transgénico, disputa por el agua y la agroecología como respuesta _____	217
Mendoza: la tierra del sol y del buen vino ya no es lo que era _____	237
Santa Fe: campos de soja, pueblos fumigados y la agroecología que abre senderos _____	249
Radiografía de San Juan: agronegocio y megaminería frente a experiencias agroecológicas _____	261
Salta: matriz colonial, agronegocio, desmontes y mucha tierra en pocas manos _____	269

— Por Mariángeles Guerrero —

01



AGRO EN TUCUMÁN: CAÑA DE AZÚCAR, LIMÓN, TIERRA EN POCAS MANOS Y EL CAMINO AGROECOLÓGICO

Caña de azúcar y limón son pilares del agronegocio, con contaminación, concentración de tierras en pocas manos y trabajo precario. En el otro extremo, Tucumán cuenta con 180 experiencias agroecológicas y orgánicas que muestran otro modelo de producción de alimentos. Solo 60 explotaciones agropecuarias controlan el 50 por ciento de la tierra cultivada de la provincia.



"Una imagen popular que tenemos los argentinos es la del changuito cañero tucumano. Es la imagen que tenemos todos: que el sur de Tucumán es caña de azúcar. Pero es una imagen impostada, porque no es ni yunga nativa ni bosque ni la flora originaria del territorio". Quien habla es Guadalupe Carrizo, de ProEco-Grupo Ecologista de Tucumán. Fernanda Sáez, que es [productora agroecológica de Timbó Nuevo](#) (al noreste de la capital tucumana) ofrece otra imagen que permite dimensionar cómo el modelo económico incide en el paisaje de un lugar: destaca cómo el paisaje muta según la oferta y la demanda de productos en el mercado y cómo eso afecta la identidad del pueblo y las prácticas cotidianas. "El nombre del pueblo, El Timbó, es por un árbol autóctono, pero ya nadie asocia el nombre del lugar al nombre del árbol. Recuerdo venir de chica y ver cientos de ellos. Hoy no hay ninguno".

Tucumán es nacionalmente conocida por dos grandes producciones agroindustriales: la de caña de azúcar (lo que incluye azúcar para consumo y etanol) y la del limón y sus derivados. Estos monocultivos fueron reemplazando a la yunga (selva de montaña) a medida que se fueron consolidando. En los 22.524 kilómetros cuadrados de superficie que abarca Tucumán, se despliegan 15 zonas geográficas diferentes (serrana, pedemonte, llanura chaco pampeana, llanura deprimida y cuencas y valles). Esto permite el desarrollo de distintas actividades agropecuarias. Además de la caña y el limón, también se cultivan oleaginosas (soja, maíz), cereales (trigo) y fruta fina (arándanos y frutillas). En menor medida, se crían animales.

De acuerdo con el [Censo Nacional Agropecuario de 2018](#), los cereales y las oleaginosas ocupan las dos terceras partes de la superficie cultivada de Argentina (el 68,9 por ciento). Pero en Tucumán estos cultivos representan sólo el 39,1 por ciento. Las áreas agrícolas más importantes se corresponden con las regiones del pedemonte y la llanura chaco pampeana, en el sur, centro y noreste de la provincia. Por su parte, la llanura deprimida (centro-este) y las cuencas y valles intermontanos (norte) son sitios de producción ganadera y, cuando se dispone de riego, de pasturas, hortalizas y legumbres. En el oeste se ubican los cerros del Aconquija, los Valles del Aconquija y las Sierras de El Cajón o Quilmes.

Los sectores más importantes desde el punto de vista económico son el cítrico (primer productor y exportador mundial de productos industriales derivados del limón y segundo exportador mundial de limón como fruta fresca); la producción de azúcar y alcohol en base a caña (elabora las dos terceras partes del azúcar consumido en la Argentina); el de frutas finas (segundo exportador nacional de arándanos y primero de frutillas congeladas); y el de oleaginosas, legumbres y cereales que, en conjunto, representa el 13 por ciento de las exportaciones provinciales.

En Tucumán existen, además, otros dos rubros productivos de importancia: el

cultivo de tabaco (en una superficie de 3.500 hectáreas) y el hortícola, representado por un conjunto diverso de especies, donde se destaca la papa (que ocupa unas 8.500 hectáreas), el tomate y el pimiento, cultivados por una cantidad incierta de productores sobre una superficie estimada de entre 11.000 y 30.000 hectáreas.

Sobre la producción de hortalizas para consumo interno, Daniel Robles, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) en Tucumán, sitúa el cordón hortícola más grande en el departamento Trancas, al norte provincial. El segundo en importancia está en Tafí del Valle, al noroeste.

De los 1.700.845 millones de habitantes que tiene Tucumán, según el [Censo Poblacional de 2022](#), 583.312 viven en San Miguel de Tucumán. Pero el cordón hortícola en la ciudad capital es prácticamente inexistente. “Antes había un cordón hortícola, pero con el avance de los barrios privados es muy ínfima la cantidad de productores que quedan. Ese proceso comenzó hace 25 o 30 años y se profundizó durante el gobierno de José Alperovich (2003-2015). Hoy tenemos que viajar entre 60 y 100 kilómetros para traer verduras por cantidad a San Miguel”, relata Robles.

Según el Censo Nacional Agropecuario, en Tucumán se crían 81.881 vacas (sobre un total nacional de 40.023.083); 8.062 ovejas (sobre un total de 8.603.113); 7.482 cabras (sobre 2.568.385), 16.059 porcinos (el total nacional es 3.590.266) y 3.852 equinos (sobre 904.417).

9

Según datos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombes, la superficie neta total sembrada con soja para la campaña 2019/2020 fue 170.030 hectáreas. La de maíz, 88.980 hectáreas. La de poroto llegó a 13.820 hectáreas. La superficie destinada al trigo fue de 83.200 hectáreas y con garbanzos de 13.240. La principal zona donde se ubicaron estos cultivos fue el departamento Burruyacú, en el noreste provincial.

Tucumán es también la cuarta provincia en importancia en la participación de la producción nacional del cultivo del tabaco. Se siembra principalmente la variedad Burley, que concentra el 93 por ciento del área sembrada. En menor medida se producen pequeñas cantidades de tabaco Criollo Argentino y una ínfima superficie de Virginia que se comercializa en Salta. El principal destino del tabaco tucumano es el mercado interno.

Apropiarse de la tierra: un resabio de la colonia

En el libro “La Argentina agropecuaria vista desde las provincias: un análisis de los resultados del Censo Nacional Agropecuario de 2018”, de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Giberti, los autores Marcos Ceconello, Gonzalo Pérez y Jorge Morandi comparan los datos del censo agropecuario de 1988 con los de

2002. Y observan que la superficie implantada en la provincia sólo se incrementó 17.185 hectáreas (1,5 por ciento). La cifra muestra los límites físicos y ecológicos que hoy presenta para la expansión de la frontera agraria. La situación es opuesta a la de las otras provincias del NOA, donde sí se registraron aumentos significativos en la superficie implantada.

Los analistas señalan los cambios “profundos” que vivió el campo tucumano. Entre 1988 y 2002 desapareció el 40 por ciento de los establecimientos agrícolas productivos (EAP) con límites definidos (15.998 a 9.555, en cantidad). Para hacer un paralelismo: en ese mismo lapso de tiempo, la reducción promedio de EAP en el país fue del 21 por ciento. Más acá en el tiempo, el censo de 2018 señala que la cantidad total de EAP en Tucumán es de 4.160, lo que supone una reducción del 58 por ciento (5.527 EAP) sobre las existentes en 2002.

¿Quiere decir esto que hubo menos campos destinados a la agroganadería? **La comparación entre los datos censales permite ver la concentración de la tierra en los últimos 35 años.** El 84 por ciento de las 5.527 EAP con límites definidos, desaparecidas durante el período 2002 – 2018, pertenecían al estrato de hasta 25 hectáreas. Esto significa la pérdida de 4.666 fincas, que aumenta a 5.231 si se incluye a los campos de hasta 50 hectáreas. En cambio, la cantidad de establecimientos aumentó en dos estratos: el de 200 a 1.000 y el de 2.500 y más hectáreas. El número de las explotaciones más grandes (de más de 2500 hectáreas) creció, entre 2002 y 2018, en 98.600 hectáreas.



Emiliano Trodler, economista tucumano, puntualiza en un dato que arroja el último censo: hay 60 explotaciones agropecuarias que concentran más del 50 por ciento de la tierra cultivada en la provincia.

Pero la acumulación de tierras y el desplazamiento de las comunidades está en las raíces de la historia tucumana, desde los tiempos de la colonia. Así lo relata Marcos Pastrana, del Pueblo Diaguita: "En 1617 el comendero Melián de Leguizamón y Guevara pide a España la merced de tierras del Valle de Tafí. La condición para obtener la merced de tierras era que no hubiera pueblos en esos lugares. Pero no era esa la situación, porque el valle estaba lleno de nuestros antepasados. Esos pueblos fueron desplazados del valle y sometidos a la servidumbre".

El 12 de octubre de 2009, el cacique Javier Chocobar fue asesinado a tiros cuando se encontraba junto a sus compañeros defendiendo el territorio de la comunidad indígena "Los Chuschagasta", en Trancas, en el norte tucumano. Producto del ataque resultaron heridos Emilio Mamani y Andrés Mamani. Por el hecho, en 2018 fueron sentenciados el empresario Darío Amín y dos ex policías ligados a la última dictadura cívico-militar, Luis Gómez y Eduardo José Valdivieso Sassi.

En 2020, otro policía retirado (Carlos Flores) le disparó por la espalda al campesino [Juan Carlos "Cheta" González](#) en El Cevilar, departamento de Cruz Alta. "Fue por el problema de las tierras, porque los que hacen soja le alquilaron un tiempo el campo y después se lo querían adueñar. Fue lo que ocurrió en el caso de 'Cheta'. Y siempre está la policía vinculada", explica Robles.



Para el productor de la UTT, ninguna de las dos historias son hechos aislados: “Acá siempre hay problemas por la tierra. Vienen los terratenientes o los que tienen plata y quieren comprar o adueñarse de las tierras. Y como, generalmente, las tierras son de comunidades originarias, la prensa, la policía y los jueces tapan todo”.

Azúcar, “muerte-etanol” y convivir con la contaminación

La introducción de la caña en la provincia se produjo de forma temprana a través de los jesuitas, [según una historización que realizó el Ministerio de Economía de la Nación](#). Este cultivo se expandió con la llegada del ferrocarril y el crecimiento del mercado interno, hacia finales del siglo XIX. Geográficamente, el cultivo de azúcar se concentra en la franja este del pedemonte de las Sierras del Aconquija. Allí existe un clima subtropical con estación seca y abundantes lluvias en verano.

Tucumán es hoy el principal productor de azúcar blanca a nivel nacional: el 60 por ciento de la producción de azúcar se destina a la industria alimenticia y el resto al consumo directo. Según el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), anualmente, [Tucumán produce en promedio 1,3 millón de toneladas de azúcar](#) y elabora más de 300 millones de litros de alcohol.

De los 23 ingenios que hay en el país, la provincia cuenta con 15, que concentran el 68 por ciento de la producción nacional. Cuenta con 5.364 explotaciones agropecuarias que se dedican a la actividad, doce destilerías —de las cuales ocho



fabrican etanol, lo que significa el 55 por ciento de lo elaborado en el país— que generan vinaza y alcohol. El destino de la producción es la industria alimenticia, química, farmacéutica e hidrocarburos. En Lules, al sur de San Miguel de Tucumán, se emplaza la Papelera Tucumán, que elabora papel a base de bagazo (un derivado del azúcar).

La estructura de la producción azucarera en Tucumán es distinta a la de Salta y Jujuy, que también son grandes productores de azúcar. Trodler explica que, a diferencia de esas provincias donde existen integraciones verticales de la producción (el dueño del ingenio es el dueño de la tierra donde se planta la caña), en Tucumán hay entre 5.000 y 6.000 productores cañeros, pequeños y medianos. “Es una especie de clase media cañera que aporta una parte de la producción a los ingenios que hacen la molienda”, dice el economista.

La actividad cañera también se ve afectada por la concentración empresarial. En las últimas dos décadas, la cantidad de cañeros cayó a menos de la mitad. Según el Censo Nacional Agropecuario de 2002, a principios de este siglo había 5.364 explotaciones: el 64 por ciento con hasta diez hectáreas. Según la provincia, en 2017 se contabilizaron 5.300 productores cañeros: el 91 por ciento con menos de 50 hectáreas. El 50 por ciento de la superficie de caña de azúcar pertenece a los ingenios.

Otra situación muy común en Tucumán es el arriendo de tierras heredadas. Existen familias que heredaron algunas parcelas y las destinan al arriendo. Quienes pagan los alquileres son, por ejemplo, los grandes ingenios azucareros. Así lo explica Andrea Haro, trabajadora del Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán: “Hay un encarecimiento muy grande de los costos productivos, entonces si tengo un año malo o un par de años malos, es difícil reiniciar un ciclo después de una etapa de quiebra o de pérdida. Eso presiona al arriendo”.

El Grupo Luque, que opera los ingenios Concepción y Marapa, elabora el 26 por ciento del azúcar tucumana (el 18 por ciento del país). Luego se ubica José Minezzi, que posee los ingenios Famaillá y Bella Vista que producen el trece por ciento del azúcar (nueve por ciento del total nacional). Le siguen el Grupo Colombres con tres ingenios, Arcor con uno y Compañía Azucarera los Balcanes con otros dos ingenios. Estas tres empresas elaboran el 12, 11 y 10 por ciento, respectivamente. Cinco grupos concentran tres cuartos de la elaboración total.

En Tucumán existe la mecánica conocida como "maquila": el pequeño productor cañero lleva la caña cortada hasta la puerta del ingenio, la pesan y sobre el rendimiento más o menos estipulado para la zafra en cuestión (que siempre ronda entre el ocho y diez por ciento) el productor de la caña recibe una parte del azúcar producido (por ley, ese porcentaje es del 58 por ciento). Eso suele generar tensiones entre los ingenios y los pequeños productores, nucleados en asociaciones cañeras como la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT),

Cañeros Unidos del Este y Cañeros Unidos del Sur, Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactu) y otras entidades que nuclean a los grandes cañeros o a pequeños cañeros.

“La producción azucarera en Tucumán está bastante regulada, porque históricamente al ser una industria con un consumo más o menos estable, cuando se producen variaciones en los precios fuertes, lo que tiende a pasar es que hay períodos de sobreproducción y caída de los precios o al revés”, afirma Trodler.

A partir de la caña se produce el etanol con el que se corta el combustible. Este último está en la mira de los empresarios, que hacen lobby para aumentar los niveles de corte (hoy regulado por el Gobierno en el 15 por ciento). “A las petroleras no les conviene el corte. Pero es una política que tiene el Gobierno, que además es algo que se supone que intenta reducir el impacto ambiental del combustible fósil, pero tiene sus contradicciones porque hace que suba el precio de los alimentos e implica el uso de alimentos para producir combustibles”, dice Trodler.

Freddy Carbonel pertenece al grupo ecologista ProEco y destaca el aspecto contaminante de la industria del azúcar. “En las fábricas donde se muele la caña de azúcar se usan combustibles, también bagazo y hay una gran liberación de dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros particulados que van a la atmósfera. Además hay subproductos de la caña que van a la cuenca del río Salí, como la cachaza, que es un jugo medio negruzco”, comenta. El río Salí, que corre de norte a sur, es de gran importancia en Tucumán porque el curso de agua a partir del cual se vertebran las cuencas que llevan agua a los valles.

El integrante de ProEco agrega: “El etanol de ‘bio’ no tiene nada. Es etanol para reemplazar el combustible fósil. Se producen alcoholes de la caña de azúcar y eso trae un derivado que, por cada litro de etanol, generan 13 o 15 litros de vinaza. Y eso va a la cuenca del Salí. Como hubo muchos reclamos de organizaciones socioambientales, últimamente no lo descargan en el río pero lo ponen en piletas de sacrificio y el olor a perro muerto es espantoso. Nosotros decimos que es muerte-combustible porque para producirlo se necesitan muchos campos de cultivo que, en lugar de usarse para producir alimentos sanos con agroecología, se usan para la caña de azúcar que tiene un derivado que contamina”.

En mayo pasado, el presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, —dueño de la compañía Los Balcanes y del ingenio La Florida—, [fue condenado por la contaminación del río Salí con vinaza](#). Pero, lejos de preocuparse por la contaminación ambiental que genera, el empresario azucarero encabeza las operaciones científicas y políticas para implantar en Argentina la caña transgénica en el norte argentino, en complicidad con el jujeño ingenio Ledesma. La caña genéticamente modificada [ya fue aprobada en Brasil](#).

Rocchia Ferro fundó una universidad privada que se llama San Pablo T. “En este contexto donde vampirizan al Estado, llevan a los mejores exponentes de las universidades públicas a esa universidad y ahora están trabajando en la transgénesis de la caña de azúcar”, dice Carbonel. Y lamenta: “La caña de azúcar transgénica significa que no solamente va a ser producida en el llano tucumano, sino que se puede estirar hasta Formosa, Chaco, Salta, en lugares donde hay mucha agua o mucha sequía; en los remanentes de bosque nativo que nos queda”.

En esta línea, Federico Pérez Zamora, director del Centro Integral de Biotecnología Aplicada de la Universidad de San Pablo T, indicó [en una nota periodística de 2018](#) que "en Tucumán lo que más se necesita es una caña con resistencia al stress hídrico, ya que la única chance que tiene la provincia es extender su superficie cañera hacia el este, donde caen de modo acelerado los registros de precipitaciones".

En 2019, Celsa Civardi —una vecina que vive cerca del ingenio Santa Lucía— comenzó a hacer un relevamiento por su cuenta. Había sufrido cinco abortos espontáneos y, charlando con sus vecinos, vio que su caso no era el único. Además, al ser docente, comenzó a notar que los niños empezaban a llegar con los ojos rojos, o que faltaban a clases o se descomponían. Su denuncia ante la comunidad fue clave para impulsar la organización Paren de Fumigarnos Tucumán, que se presentó recientemente.

15

Para Carbonel, “el problema es la ambición de estos industriales y de los partidos políticos hegemónicos, que piensan en grandes ganancias a costa de la naturaleza humana y no humana”.

La fruta agria: el monocultivo de limón

Tucumán es la mayor provincia productora de limones del país. Originalmente la citricultura estuvo asociada a la naranja, con una producción íntegramente destinada al mercado interno. Pero a fines de la década del '60 y principios de los '70, comienza su especialización en el limón, con una fuerte orientación exportadora. El área de cultivo se extendió rápidamente en la provincia, desplazando parte de la superficie azucarera. Actualmente se distribuye en once departamentos, desde Burruyacú (noreste) hasta La Cocha (sur).

El limón, que es la segunda actividad agroindustrial de Tucumán después del azúcar, ocupa una superficie de 49.768 hectáreas implantadas en la provincia, lo que representa el 30,93 por ciento de la superficie nacional de producción citrícola.

Si bien se trata de una industria orientada a la exportación, una parte del limón cosechado va al mercado interno (la fruta fresca). En tanto, se exporta tanto el



limón fresco como sus derivados: aceites esenciales y jugos naturales. Se exporta sobre todo a Europa y Estados Unidos.

La exportación tucumana de fruta fresca representó, en 2021, el 89 por ciento del volumen exportado por el país. En el caso del jugo concentrado, el aceite esencial y la cáscara deshidratada, los valores fueron del 84, 89 y 62 por ciento, respectivamente. En promedio, Trodler estima un ingreso de 450 millones de dólares para todo el complejo citrícola en concepto de importaciones.

Los productores medianos (de 50 a 300 hectáreas) y grandes (más de 300 hectáreas) dan cuenta de alrededor del 90 por ciento de la producción provincial, según datos del Ministerio de Economía. El complejo agroindustrial limonero se articula en torno a grandes empresas integradas verticalmente: producen, empaacan, industrializan y exportan. Cuatro empresas aportan más de la mitad de la producción de limones de Tucumán, cuentan con más del 50 por ciento de la superficie plantada y son proveedoras de algunos insumos. Además, poseen las plantas de empaque de la fruta con mayor capacidad y mayor nivel tecnológico. Siete plantas industriales procesan el 70 por ciento de la producción. Existen 36 plantas de empaques habilitados para la exportación y seis para mercado interno.

Según un relevamiento del economista Trodler publicado por [La Izquierda Dia-](#)

rio, el negocio del limón se concentra en unas pocas empresas de capitales nacionales y extranjeros. San Miguel, Citrusvil, Citromax, Trapani y Argentilemon concentran casi el 70 por ciento de las exportaciones.

Hace algunos años, los productores del sector manifiestan que tienen pérdidas por la baja del precio internacional del limón y la aparición de nuevos competidores. Sin embargo, los balances de las empresas [publicados en la Comisión Nacional de Valores](#) son positivos. Para el economista, esta queja encubre la intención de precarizar aún más, a través de despidos, el sistema de trabajo mal pago y sumamente precario que sostiene este agronegocio.

Limón o caña en Tucumán, manzanas en Río Negro

“El cosechero se levanta a las seis de la mañana, espera a que lo busquen, llega a la finca a las nueve. Para empezar a cosechar espera que el limón no esté mojado por el rocío. Trabaja doce horas por día y vuelve a las ocho de la noche a su casa. No hay un comedor para que puedan almorzar, no hay baños. Es un trabajo muy sacrificado”. El relato es de Julio Delgado, que trabaja en el rubro del limón desde hace 20 años. En su caso, se desempeña en el empaque.

“En el empaque hay muchas irregularidades porque la mayoría de la gente trabaja en negro, más de ocho horas, 12 horas, 16 horas. Y el obrero no tiene un sueldo fijo, depende de lo que rinda la fruta. El cosechero arma lo que se llama maletas, que son 25 kilos de limón y por eso se le paga 200 pesos. El obrero para sacar un jornal de 4000 o 500 pesos tiene que hacer por lo menos más de cien maletas por jornada. En mi caso particular soy embalador y tengo que hacer entre 100 y 120 bultos de 18 y 19 kilos (150 a 120 limones) para ganar un jornal de 5000 pesos o 6000 pesos”.

La recolección de limón está a cargo de empresas tercerizadas, que venden el servicio a los ingenios grandes. “Si el ingenio le paga 150 a la empresa, a nosotros nos pagan 50. No te liquidan bien, te hacen aportes mínimos, no tenés una buena obra social”, cuenta Delgado, que trabaja 16 horas por día embalando limones. Trabaja lo que dura la zafra: junio a septiembre. En enero viaja a Río Negro para la recolección de manzanas.

“Tanto la caña como el limón tienen una estructura de trabajo temporal que está regulado por la Ley de Trabajo Agrario, que establece un tipo de contrato temporal, mientras dura la zafra. La zafra en el azúcar, en general, empieza en mayo-junio y se extiende hasta noviembre o diciembre en el mejor de los casos”, comenta Trodler.

El analista señala que eso genera una masa de desocupación flotante de trabajadores que tienen empleo la mitad del año y la otra mitad no: en ese período se

tienen que rebuscar con changas, en la construcción o como vendedores ambulantes. La situación redundaba en una presión a los salarios de los trabajadores permanentes. "Es una de las claves de la precarización y de los bajos salarios. Las del NOA son provincias donde las principales actividades de lo que tiene que ver con la agroindustria son de tipo temporarias", contextualiza.

Hay entre 40 mil y 60 mil trabajadores de la cosecha del limón. El sindicato Uatre reconoce un piso de 40 mil afiliados, entre los cuales hay una pequeña porción dedicada al arándano y a la frutilla.

Papas criollas y una historia de saqueo

La provincia de Tucumán abastece el mercado nacional con papa para consumo en fresco e industrial bajo la producción de papa semi-temprana, semi-tardía y (en menor medida) tardía. Se destacan las siguientes zonas: los departamentos de Famaillá y Alberdi, de producción temprana o primicia; en el departamento de Trancas se implanta en forma semi-temprana así como en los departamentos del este y sudeste como Granero, La Cocha y Leales, donde también se realiza una producción tardía. En el departamento Tafí del Valle se lleva a cabo una producción semi-tardía cuyo destino es la papa semilla.

La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombes lleva el nombre de quien impulsó el cultivo de caña en Tucumán. Surgió en 1909 y desde entonces fue gestionada por las familias más poderosas de la provincia. Es una entidad ligada al agronegocio, en lo que respecta a la tecnificación para mejorar los índices productivos.

Marcos Pastrana cuenta cómo la papa semilla, una variante cuidada ancestralmente por los pueblos originarios que habitan en Tucumán, fue colonizada por ese ente autárquico y fue impulsada por las familias que gobernaban en ese entonces. "En Tafí del Valle, en una zona agricultora por antonomasia como Las Calderas, antes de la llegada de la Estación en el año 1965, los agricultores tenían más de 300 variedades de papas andinas, una variedad importante de maíz y de otras hortalizas. La Estación Experimental entró seduciendo a los agricultores y diciendo que iban a tener una apoyatura técnica, científica, administrativa, legal. Y que iban a ser nombrados como operarios en la estación. También ahí apareció la frutilla", recuerda.

El relato prosigue: "El Estado, en 1970, empezó a desarrollar los proyectos, a hacer los laboratorios y el seguimiento de los clones. En 1980 se crea la PASE (papa semilla), que tenía tratos con el Estado y con los terratenientes de la zona. Decían que los campesinos iban a tener participación en todos los negocios y la gente se entusiasmó. Llegaron a trabajar cien obreros en ese momento. Luego entró Euro-

semilla, una empresa española que empezó a trabajar con las papas andinas para modificarlas genéticas. Cuando las trajeron, ya estaban modificadas. Esa fue la papa del boom de los años 80. En Argentina esta se declaró la principal zona de papa semilla, por supuesto modificada y resistente al frío y a las plagas".

Pastrana denuncia que a partir de esa situación los habitantes locales, que eran dueños de las tierras y que habían conservado ese saber y esas variedades de papas, quedaron reducidos a su rol de obreros para trabajar en tareas menores. En 1996-1997 a estos obreros ya no los necesitaban por la tecnificación y porque sobraba la mano de obra. Y no les convenía tener un contenido local genuino, local y territorial dentro del proyecto. Recuerda que cerca del año 2000 les ofrecieron el retiro voluntario, pero además tenían prohibido cultivar la papa semilla y las papas andinas. Fueron despojados de sus saberes, de su autonomía y de su libertad.

La historia de la Estación Colombres también se vincula con el auge de la soja en Argentina. "Muy pocos lo saben, pero a través de la Estación Colombres, se terminan de desmontar casi todas las llanuras tucumanas y se empieza a instalar la soja. La selva nativa que quedaba es reemplazada por soja", afirma Pastrana.

La expansión de la producción de oleaginosas ocurrió, fundamentalmente, durante la década de 1990, avanzando sobre tierras de menor productividad. La expansión de la soja en provincias extrapampeanas como Tucumán se asocia estrechamente con la incorporación de paquetes tecnológicos que combinan el uso de agroquímicos, semillas transgénicas y sistema de siembra directa. La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) de Tucumán buscó permanentemente producir cultivares adaptados a esta zona, a través del "Subprograma Mejoramiento Genético del Proyecto Soja".

Guadalupe Carrizo denuncia: "En la zona más llana, donde tenemos más soja es asombroso ver cómo avanzó y cómo se redujo la biodiversidad. Cuando hablamos con la gente de los pueblos es un secreto a voces las enfermedades que existen y no tenemos respuestas de sectores de la salud en relación a eso y al agronegocio. Hoy están fumigando con mosquito a 50 metros de las casas". La ley vigente en Tucumán menciona solo las aspersiones con avionetas, dejando un vacío legal respecto a las fumigaciones terrestres.

Con agroecología, plantar bandera frente a los agrotóxicos

En Tucumán hay 50 establecimientos productivos que cultivan de forma orgánica, 30 que trabajan con los principios de la biodinámica y 101 que practican la agroecología, según el Censo Nacional Agropecuario. La UTT surge en Tucumán a partir de una protesta de entre 20 y 30 familias productoras de la provincia que fueron a reclamar, en 2019, ante la Casa de Gobierno porque no contaban con un

circuito de comercialización justo. “A los seis meses éramos 500 compañeros”, cuenta Daniel Robles. Era en la época de la presidencia de Mauricio Macri. Hoy son entre 1200 y 1500 integrantes en toda la provincia.

“A los pequeños productores el gobierno de Tucumán no nos reconocía como productores de alimentos, no nos asistía ni bajaba nada. Con los verdurazos empezamos a llamar la atención del Gobierno y de ahí fuimos luchando hasta que empezamos a bajar proyectos. Hoy, después de tres o cuatro años de lucha, pudimos acceder a un beneficio y comprar un tractor para trabajar colectivamente. También estamos por inaugurar una plantinera y un almacén”, dice Robles.

En el departamento Leales las familias nucleadas en la UTT producen pollo, cerdo y verdura. En Trancas existen diez grupos de base, se hacen distintas clases de verduras y se crían pollos y otros animales de menor porte. Todo lo que se produce generalmente va al Mercofrut a través de un intermediario que trabaja “a culata de camión”: es decir, paga lo que él quiere, no lo que pide el productor.

Actualmente la UTT no tiene autorización para hacer sus ferias en la capital provincial. “Estamos peleando para que nos dejen vender en las plazas públicas”, afirma el productor. Desde la organización calculan que producen de forma agroecológica unas 50 hectáreas. Luis Frontera, integrante de UTT, relata: “Cuando recién empezamos, hace cuatro años más o menos, era muy poco lo que se sabía de agroecología. Hace tres años comenzamos a formarnos. El primer problema que encontramos es que no había mercados”.

Pero remarca que hoy la agroecología “se está haciendo escuchar”. Observa que es necesario fortalecer los circuitos de ventas. “Para eso estamos gestionando vehículos y nuestro propio almacén, para poner el producto en valor”, argumenta. También están por inaugurar una plantinera: el objetivo es hacer 800 bandejas de plantines para 20 hectáreas de agroecología. “Y estamos trabajando en producir para 20 hectáreas más, para abastecernos. De acá el compañero se va a llevar el plantín y el bioinsumo para producir y va a poner su propio precio. En comercialización se hace la venta y se le paga al productor el precio que él establece”, proponen.

Mientras tanto, este 18 de agosto se presentó la organización tucumana Paren de Fumigarnos. Carrizo es contundente: “Empezamos a pensar en organizarnos para hacer mapeos y difundirlos. Queremos que se sepa lo que pasa en Tucumán, que es tierra de nadie cuando se habla de agrotóxicos”.

02



CHUBUT: UN TERRITORIO EN DISPUTA ENTRE LA POLÍTICA EXTRACTIVA Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

La provincia patagónica tiene lo necesario para producir alimentos en cantidad y calidad: agua, tierras y productores con la experiencia y el deseo de sembrar y criar animales. Pero los gobiernos apuestan todo a la explotación petrolera, a la megaminería y al monocultivo forestal. La agroecología y el comercio justo muestran que otro modelo es posible.



Chubut es la tercera provincia en extensión de la Argentina con 22.468.600 de hectáreas (ha), donde viven 509.108 personas. Con 2,3 habitantes por kilómetro cuadrado es una de las provincias con menor densidad demográfica del país —el 90 por ciento de la población se concentra en cinco ciudades: Rawson, Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel—. En ese vasto territorio, 16.977.583 ha están destinadas a la producción agropecuaria, pero solo el 0,25 (40.083 hectáreas) están destinadas a cultivos, lo que marca la tradición ganadera de la provincia: Chubut cuenta con el 28 por ciento del stock ovino nacional y es la principal exportadora de lana del país.

Esa tradición ganadera y las condiciones excepcionales de los valles y las áreas irrigadas de las zonas de cordillera para producir alimentos se ven amenazadas por las políticas extractivas: megaminería, urbanización para el turismo, política forestal y las novedosas políticas corporativas de energía eólica. Un nombre surge como reflejo de una provincia que aún no genera políticas para sus pequeños productores: Benetton, el mayor propietario de tierras del país.

Chubut se caracteriza por su tradición ovina —acompañada por el crecimiento del ganado bovino—, lo que permite realizar una primera foto de la situación provincial. A pesar de su baja densidad poblacional, según el INTA, la provincia no se autoabastece de carne. A este dato podría sumarse que el déficit persiste a pesar de que la provincia provee el 21 por ciento de las capturas de pesca a nivel nacional. Y, a pesar de la amplitud territorial para desarrollar la actividad, según el Censo Nacional Agropecuario 2018, las explotaciones agropecuarias (EAPs) son 3146, una caída en comparación con los censos anteriores (3730 en 2002 y 4241 chacras en 1988).

El análisis comparativo a partir de los datos del CNA —publicados en el capítulo “Cambios en la producción agropecuaria de Chubut en el periodo 2002-2018” en el libro *La Argentina agropecuaria vista desde las provincias* de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Giberti— se precisa aún más el retroceso de la principal actividad agropecuaria provincial: la superficie en producción se redujo, entre 2002 y 2018, en 2.150.307 hectáreas, un once por ciento. Esa merma “se podría explicar en un 99 por ciento por la disminución en el número de EAPs dedicadas a la actividad ganadera”, sostienen los autores.

Meseta, mallines y pueblos originarios

La actividad ganadera ocurre principalmente a lo ancho de “la Meseta”, campos de estepa con zonas de depresiones o valles que generan los mallines (humedales) que permiten la actividad de pastoreo. “La Meseta” se ubica en el centro de la geografía provincial, entre los valles irrigados de la Cordillera de Los Andes en el extremo oeste y el Valle Inferior del Río Chubut (Virch) en el extremo este provincial.

Esa geografía desafiante para la vida campesina atraviesa múltiples dificultades: desertificación y eventos climáticos extremos, ausencia del Estado para llevar servicios y caminos a la población rural, falta de políticas públicas productivas, abandono de campos de grandes terratenientes y un incesante discurso que busca convertir a esa zona productiva en un “desierto” para instalar proyectos de megaminería, como quedó expuesto en el Chubutazo de 2021 cuando se resistió la [Ley de Zonificación Minera](#).

“Si el Estado estuviera presente en la Meseta habría más oportunidades. La política es que se vacíe. Dicen que no hay fuentes de trabajo, pero podría haber producción de alimentos para abastecer a la provincia”, asegura Gabriela Cual, integrante de la comunidad Mapuche-Tehuelche Mallín de los Cual, productores ovinos en la localidad de Gan Gan, donde la multinacional Pan American Silver busca activar su proyecto Navidad para la extracción de plata.

Esa mirada extractiva invisibiliza la producción local y las ventajas de los agroecosistemas de la Meseta como el acuífero Sacanana, a pocos kilómetros de Gan Gan; o los valles que rodean el río Telsen. “En la Meseta existe una riqueza y una heterogeneidad de dinámicas productivas locales, existe un conocimiento arraigado y vinculado a este manejo de los bienes comunes construido sobre redes comunitarias que sostienen una productividad diversa: horticultura, fruticultura, apicultura, granjas. Son estrategias que están invisibilizadas y desacreditadas en tanto no corresponden con el criterio del sistema de mercado, de exportación de commodities o la mirada hegemónica de ‘desarrollo’”, sostiene Lucía Castillo, investigadora del Conicet-Cenpat.

Otro proyecto extractivo que pone en tensión el uso de las tierras de la Meseta es el energético, en particular de la energía eólica, de la mano del proyecto de [hidrógeno verde](#) de la australiana Fortescue. En la actualidad, según información oficial, Chubut cuenta con el 63 por ciento de la capacidad eólica instalada del país —incluyendo instalaciones como las de la metalúrgica Aluar que es para autoabastecimiento—. A menos de un año del anuncio del proyecto de Fortescue, la empresa australiana compró, al menos, 140 mil hectáreas de campo para generar la energía que abastezca a su planta de producción de hidrógeno verde.

Los valles y el potencial para producir alimentos

El paisaje de estepa es el amalgama de las dos regiones con mayores recursos de la provincia para el cultivo: la precordillera y cordillera —con sus ríos de deshielo y paisajes de pequeñas parcelas de producción— y en el otro extremo las 20.000 hectáreas del Virch, irrigadas por el río Chubut que llega desde las montañas. Sarmiento, departamento ubicado al sur de la provincia, es otro de los valles fértiles de producción.

A pesar del potencial para la producción de alimentos en esos valles, según el análisis del CNA 2018, el cultivo de forrajes anuales y perennes —destinados al ganado ovino y bovino— domina el 24,3 por ciento de la actividad de las EAPs, mientras que solo el 6,1 por ciento se dedica a la producción de hortalizas, 3,9 a frutales y 1,6 por ciento a bosques y montes implantados (industria forestal). Mientras que otras categorías —cereales para granos, viveros, flores de corte, legumbres, cultivos industriales, aromáticas, medicinales y condimentos— se realizan en el uno por ciento de las EAPs.

Según el Censo Agropecuarios de 2018, la producción de pasturas y alimentos frescos representa solo el 0,25 por ciento de la superficie destinada a la producción; el resto es destinada a la ganadería. Esto ocurre a pesar del abastecimiento insuficiente en materia de alimentos, de que la provincia cuenta (según el CNA) con 17.807 hectáreas de superficie apta no cultivada —representa el 44,4 por ciento de las 40,083 hectáreas de cultivos en producción—.

En el capítulo sobre Chubut de *La Argentina agropecuaria vista desde las provincias* —Hugo Bottaro, Mercedes Ejarque, Marcelo Pérez Centeno y Graciela Preda— se indica el lugar del sector en el perfil económico de Chubut: “Las actividades agropecuarias aportan el 3,7 por ciento del Producto Bruto Geográfico (estimado en pesos constantes para 2018) y generan exportaciones por casi 210 millones de dólares (6,6 por ciento del total). Los principales rubros son la lana (sucía y tops de lana peinada) y las frutas de carozo —cerezas—”.

La pozos petroleros y Aluar

¿En qué se concentra el modelo productivo provincial? Según se presenta en la [página oficial del Gobierno](#), la provincia produce el 13 por ciento del petróleo del país y casi el dos por ciento del gas, en una de las cuencas petrolíferas más importantes de Sudamérica, ubicada en el Golfo de San Jorge, y aporta el 21 por ciento de la producción pesquera nacional. La tercera pata se apoya a la industria siderúrgica: la producción de aluminio monopolizado, a nivel nacional, por la empresa Aluar, que [abastece el total del mercado local y exporta el 60 por ciento de su producción](#) desde Puerto Madryn.

Según el [Indec](#), en materia de exportaciones Chubut se ubicaba en el cuarto lugar a nivel nacional con cinco por ciento del total en el primer semestre de 2022, detrás de las provincias de la poderosa región pampeana: Buenos Aires (37,8 por ciento), Santa Fe (22,7) y Córdoba (14, 3 por ciento). En ese período, el petróleo crudo y el aluminio representaron el 84,9 por ciento de las exportaciones provinciales —67 por ciento y 17,9 por ciento respectivamente—. Muy lejos quedaron los pescados y mariscos sin elaborar con el 11,1 por ciento del total, las lanas con el 2,1 por ciento de las exportaciones y las frutas finas aún por debajo.

Producción de alimentos de la cordillera al mar

“En Chubut el periodo libre de heladas es de 170 días, lo que hace que la producción se concentre en primavera-verano, aunque, lentamente, se está comenzando a producir bajo cubierta principalmente hortalizas de hoja. La provincia no está en condiciones de producir el 100 por ciento de los alimentos que consume, sobre todo porque hay mucha fruta que no se da, pero sí hay un potencial para producir muchos más alimentos frescos y carne de manera agroecológica”, sostiene Lucas Díaz, investigador del Centro Experimental Chubut- INTA e integrante del Almacén Patagónico, nodo de distribución de alimentos agroecológicos en Puerto Madryn.

Según [datos de la provincia de Chubut](#), el total de hectáreas bajo riego es de 120.000 hectáreas, unas 45.000 hectáreas en el Virch, seguidas por otras repartidas entre Valle Colonia Sarmiento, Valle 16 de Octubre, Valle de El Maitén, Comarca Andina, Valle de Telsen y Comodoro Rivadavia. Esas cifras contrastan con las 40.083 hectáreas en producción agrícola registrada en el CNA 2018.

Del análisis realizada en *La Argentina agropecuaria vista desde las provincias* surge un dato alentador respecto del incremento de la producción en pequeñas parcelas: respecto al CNA 2002, en las áreas bajo riego, se han incrementado las EAPs en los rangos de menos de cinco hectáreas en un 85 por ciento; entre 5,1 y 10 hectáreas en un 33 por ciento y entre 10,1 y 25 hectáreas en un nueve por ciento. Esto no modifica el nivel de concentración de tierras que se registra a nivel provincial. Las unidades inferiores a 1000 hectáreas de superficie, de actividades ganaderas de secano y agrícolas en valles irrigados, representan el 49 por ciento de las EAPs y ocupan el 1,6 por ciento de la superficie agropecuaria.

Díaz sostiene que en el Virch son 20.000 las hectáreas en producción. De ellas, el 90 por ciento dedicadas a la producción de pasturas y alfalfa para la ganadería. En el Virch la horticultura ocupa 1100 hectáreas de una producción diversificada en pequeñas parcelas, en las que los productores no superan las 20 hectáreas. El cultivo más extensivo es la papa, que ocupa unas 500 hectáreas.

En el modelo potenciado por las políticas públicas, la estrella de los cultivos es la cereza, a pesar de que en los últimos tiempos también comenzó a impulsarse la vitivinicultura y la producción de olivos, con una mirada siempre exportadora. La producción de cereza se destina mayormente al mercado exterior y ocupa alrededor de 400 hectáreas en toda la provincia, representando el 17 por ciento de la superficie destinada al cultivo a nivel nacional (solo superada por Mendoza).

“Chubut y la Patagonia tienen el problema de que no se autoabastece de alimentos. O sea, tienen el desafío de generar políticas de producción para abastecer de alimentos a su población. El desafío es hermoso, pero si no hay financiamiento

ni política pública para los pequeños productores, el sector no se desarrolla y las tierras se utilizan para un perfil más turístico que productivo”, afirma Juan Pablo Acosta, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) de Chubut-Línea Sur.

Acosta habla desde El Hoyo, localidad conocida como “la capital de la fruta fina”, ubicada en la zona cordillerana denominada La Comarca, donde se estiman unas 30.000 hectáreas en producción. A diferencia del Virch –donde se concentra el 57 por ciento de la producción de cerezas– en la comarca se registran un centenar de hectáreas más diversificadas: frambuesas y cerezas, moras, sauco, frutillas. Siempre en pequeñas parcelas también se registran productores hortícolas, avícolas y apícolas.

“La Comarca es un lugar atípico en la geografía provincial, donde tenés mucha agua y buenas condiciones, pero solo podés pensar en parcelas chicas y en un periodo muy corto de producción. En el caso de las frutas finas, pensar en una hectárea lleva mucha inversión”, grafica el integrante de la UTT y se concentra en la producción para el mercado local: “Los pequeños productores de La Comarca tienen una producción diversificada, huerta de verduras, fruta fina, gallinas, huevos, chanchos para encurtidos. El tipo de economía tan frágil hace que tengas varias producciones para poder llegar a fin de mes”.

La UTT nuclea en la zona cordillerana a tres colectivos: el grupo de Familias de Productores y Elaboradores de La Comarca, el grupo Apícola y el Grupo de Mujeres Rubus, que elaboran dulces con las frutas locales. Se trata de productores de



las localidades de Epuyén, Maitén, Lago Puelo y El Hoyo, y con los que abastecen el Almacén agroecológico de El Hoyo, el galpón de acopio en El Bolsón (Río Negro) y una cámara de frío en Lago Puelo.

En esa muestra de la capacidad productiva local, Acosta apunta dos problemáticas. La primera el perfil turístico de los municipios locales: “La competencia con el turismo es constante. No hay tierra para alquilar, tampoco hay casas para alquilar”. Y, por otro lado, “la discusión sobre abastecimiento que está concentrado por los grandes comercializadores con La Anónima como símbolo. Una cadena concentrada que pone el precio en góndola y en territorio”. Como respuesta, la organización puso en marcha el [Corredor Patagónico Soberano](#), un recorrido con camión propio que lleva lo producido a otros puntos del país y abastece de insumos a los productores locales.

De vuelta en el valle inferior, Díaz también señala la problemática del ordenamiento territorial como un eje para la expansión de la producción de alimentos. En este caso, la competencia no es con el turismo sino con la expansión de la mancha urbana. En cuanto a los cultivos, la competencia es con la rentabilidad de la producción de alfalfa y pasturas para la demanda creciente de la producción bovina en feedlots, pero el investigador de INTA señala que “hay mucha superficie en el valle que produce muy por debajo de su potencial, muchas pasturas abandonadas o degradadas, que no tienen un manejo y solo se las usa para aguantar a los animales en períodos de poco forraje”.

“Estamos en un valle con mucha biodiversidad, con parches de vegetación na-



tural, con chacras chicas que no superan las 20 hectáreas, donde hay baja incidencia de plagas y corredores biológicos, mientras que la sociedad tiene mayor conciencia de lo nocivo que son los agroquímicos y reclama alimentos sanos”, concluye Díaz sobre el potencial para la producción de alimentos sanos.

La agroecología tiene otro punto a favor en Chubut. Se trata de la única provincia que cuenta con una [ley que prohíbe el uso de glifosato](#), que entró en vigencia en enero de 2020. A pesar de eso, aún se utiliza el herbicida para el mantenimiento de los canales de riego y la producción hortícola continúa haciendo uso intensivo del paquete químico. La producción de cereza para la exportación también utiliza insecticidas químicos, aunque bajo el control de las normas de "Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)" con certificación extranjera, ya que tiene como principal destino la exportación. Hasta el momento, según el CNA 2018, en Chubut se registran 49 explotaciones orgánicas, 16 biodinámicas y 36 agroecológicas.

Benetton, un modelo de concentración de tierras que persiste

El Maitén es una localidad simbólica en el modelo agropecuario de Chubut. Está ubicada en el límite entre La Comarca Andina y la Meseta, allí donde se produce un cambio abrupto del agroecosistema: de las pequeñas parcelas irrigadas de la cordillera se pasa a los vastos territorios esteparios con precipitaciones de 100 a 400 milímetros anuales. Allí inicia la frontera de la tradicional producción ovina de Chubut hasta llegar al valle inferior, 700 kilómetros al este, donde los sistemas de riego vuelven a reverdecer las áreas de cultivo.

La provincia se conformó en 1957 (hasta entonces era “territorio nacional”). Las denominadas “Campañas del Desierto” lideradas por Julio Argentina Roca iniciaron el reparto de esas tierras patagónicas desde 1861, décadas en las que se creó la Compañía Tierras del Sud Argentino. La firma de capitales ingleses supo controlar el territorio provincial desde la cordillera hasta el mar. En la década de 1980 grandes extensiones de ese territorio no cambiaron de nombre pero sí de dueño: el Grupo Benetton compró gran parte de sus dominios e instaló su cabecera en El Maitén.

Desde la localidad cordillerana del noroeste de Chubut hasta Santa Cruz, el Grupo Benetton controla cerca de 900 mil hectáreas —incluye una porción de tierras menor en la localidad de Balcarce, Buenos Aires—, 260 mil cabezas de ganado ovino —que producen 915 mil kilos anuales de lana— y 22 mil cabezas de ganado bovino, según datos ofrecidos por el [CEO del grupo, Agustín Dranovsky](#).

El caso de Benetton es extraordinario —los chubutenses reconocen que la empresa autogobierna las localidades donde opera, en particular El Maitén— pero es un ejemplo de un modelo de concentración de tierras que persiste en la pro-

vincia: las EAPs superiores a las 10.000 hectáreas, según el CNA 2018, ocupan el 70 por ciento de la superficie agropecuaria y representan el 16 por ciento de establecimientos provinciales. El dominio territorial de la firma italiana también pone en tensión la [Ley de Tierra Rurales](#), que limita a un 15 por ciento el dominio departamental de tierras rurales en manos extranjeras. En el departamento de Cushamen, donde está El Maitén, el 23 por ciento están en manos extranjeras, según los [registros oficiales de extranjerización](#). En Chubut, hay un total de 862.309 hectáreas en manos de personas o firmas de otros países, lo que representa un 3,88 por ciento de la superficie provincial.

La compra de tierras otorgadas a la inglesa Compañía Tierras del Sud Argentino en medio de un proceso de genocidio de pueblos originarios continúa generando reclamos de las comunidades mapuches por el reconocimiento de sus tierras ancestrales. Dentro del territorio del Grupo Benetton, la recuperación del [Lof Santa Rosa Leleque](#), en 2007, es un símbolo de la reivindicación territorial del Pueblo Mapuche.

Por otro lado, en 2017, la muerte de Santiago Maldonado durante la represión de Gendarmería al lof en Resistencia de Cushamen involucra directamente al Grupo Benetton. A cinco años, una [testigo de identidad reservada](#) declaró ante la Fiscalía que escuchó a personal de Gendarmería decir: “Detuvimos a un hippie, lo llevamos al puesto de Gendarmería en Benetton y ahí le estaban sacando información”.

A pocos kilómetros de El Maitén, en dirección a la Ruta 40, se encuentra la zona conocida como Cuesta del Ternero. Allí, en noviembre de 2021, la Lof Quemquemtrew inició otro proceso de [recuperación de tierras](#). La comunidad sufrió un ataque armado que terminó con la vida del comunero Elías Garay Cañicol.

¿Qué negocio se interponía al reclamo de tierras? Una concesión fiscal de 2500 hectáreas por parte del Estado de Río Negro al empresario Rolando Rocco. El [Poder Judicial condenó a los autores materiales](#) del crimen, empleados del empresario, pero no avanzó en la investigación sobre Rocco.

Consultado por la relación entre los reclamos territoriales del Pueblo Mapuche y los negocios agropecuarios, el CEO del Grupo Benetton explicó, en una entrevista InfoCampo, que ellos trabajan con funcionarios nacionales, provincial o municipales “para ver cómo generar el ambiente para que las inversiones se concreten”.

La industria forestal, un modelo en llamas

Según el Censo Agropecuario de 2018, si se analiza la cantidad de explotaciones agropecuarias de Chubut en función de su extensión, el mayor número de esta-

blecimientos se encuentra concentrado en las categorías más grandes (de más de 1000 hectáreas) que corresponden a establecimientos destinados a la producción ganadera extensiva y forestal.

En sus estancias El Maitén y Leleque el Grupo Benetton desarrolla su segundo modelo extensivo: el forestal. La otra gran firma de este modelo es la estancia Tecka —perteneciente a la familia Ochoa-Paz y surgida también tras la venta de tierras por parte de la Tierras del Sud de capitales ingleses—. Según el CNA, solo 55 explotaciones agropecuarias se dedicaban a la actividad forestal (1,6 por ciento del total de fincas provinciales), pero ocupaban 14.985 hectáreas, o sea el 37 por ciento de las hectáreas cultivadas en Chubut.

“Entre Benetton y Tecka reúnen entre 8000 y 10.000 hectáreas forestadas. Sin contar a estas grandes estancias, unos 200 productores se dedican o se dedicaron a la actividad forestal y, entre ellos, el 15 por ciento tenía el 85 por ciento de las tierras”, resume Ana Valtriani, ingeniera agrónoma e investigadora del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (Ciepaf).

Valtriani, que realizó su tesis doctoral analizando el [modelo de desarrollo forestal en Chubut](#), explica que la provincia atravesó tres etapas de forestación. La primera entre 1950 y 1970 —a cargo de la Dirección Nacional de Bosques y el Instituto Forestal Nacional (Ifona)—, otra entre 1970 y 1990 a cargo de los municipios y una última a partir de la década del '90 con la aprobación de la [Ley 25.080](#) de Inversiones para Bosques Cultivados.

Las dos primeras etapas introdujeron el pino —las especies ponderosa y oregón— para reemplazar al bosque nativo, de lento crecimiento, por esta especie foránea con la promesa de ser un modelo de desarrollo. Sin embargo, esas forestaciones quedaron abandonadas y solo el municipio de Esquel continúa realizando las tareas de poda y raleo necesario para el control del bosque implantado, que en ese caso es de unas 1600 hectáreas.

La Ley 25.080 instaló otro modelo de negocio con subsidios estatales para emprendimientos forestales. “Benetton comenzó desde 1992 a tener un crecimiento exponencial de la curva de forestación. Hoy es uno de los pocos que soporta el proceso de gestión, los planes de manejo. Tiene ingenieros y su propia brigada de incendios”, explica la investigadora del Ciepaf.

Valtriani explica que se trató de un error pensar en un modelo exitoso mirando a Misiones —donde la tasa de crecimiento es más rápida y los restos de las tareas de poda y raleo se destinan al mercado de las papeleras— en un contexto patagónico de crecimiento lento. “En un principio se hablaba de 25 años para que la forestación ingrese en etapa de aprovechamiento, ahora se habla de 40 años para tener un rodal de madera limpia”, señala la investigadora y agrega que no

está claro aún el futuro aprovechamiento comercial: que puede ir desde un polo maderero para proveer chips de “bioenergía”, de ingresar en el [mercado de bonos de carbono](#) o hasta utilizar la forestación para emprendimientos inmobiliarios.

“La discusión es cómo se incluye a la agricultura familiar, si se piensa en forestaciones vinculadas a un desarrollo rural territorial con enfoque socioterritorial o solo en algo netamente de tecnologicista, productivista, extractivista. En la actualidad, el Estado —la Secretaría de Bosques junto al INTA— no está en condiciones de promover la producción, no ha formado ni financiado equipos para asistirlos y cumple un rol fiscalista. Hubo algunas experiencias aisladas, pero los costos son elevados y los prestadores de servicio forestal están abocados a los grandes productores”, grafica la investigadora.

En esa política errática que deja la capacidad de recibir los subsidios estatales por forestación solo a las grandes empresas, el pino —en su mayoría la especie ponderosa— le ganó al bosque nativo y se transformó en un problema: el de los incendios forestales.

“Cuando los bosques implantados quedan abandonados, los incendios complican la situación como ocurrió recientemente en [Lago Puelo y Puerto Patriada](#). Cuando se quema, la piña vuela y resiembra. Crecen pinos como escarbadientes y es muy difícil recuperar esas tierras”, señala Valtriani.

31

Además, los pinos aportan dos características que hacen elevar los riesgos de incendio: la resina que producen es muy inflamable, mientras que su extensión como monocultivo se transforma en una bomba de consumo de agua que agrava las condiciones de sequía extrayendo agua de napas, vertientes y cursos de agua cercanos.



Si se comparan las cifras de "bosques" implantados del Censo 2002 con el realizado en 2018, la reducción es de 5404 hectáreas, una bajada del 26 por ciento. El inventario de plantaciones forestales realizado por el Ministerio de Agroindustria y el Centro de Investigación y el Ciefap, en 2016, había arrojado un total de 33.022 hectáreas implantadas, por lo que la diferencia sería aún mayor. Además del errado modelo productivo los incendios parecen ser el motivo.

Desde el 2003 al 2016 los incendios forestales suman 87.000 hectáreas, que representan el 9,6 por ciento de los bosques nativos de la provincia. En 2021, según el reporte del "Manejo de fuego" del Ministerio de Ambiente, en Chubut se perdieron 16.919 hectáreas de bosques en los incendios.

“Desierto” para el extractivismo o arraigo rural campesino

El cordón de la concentrada industria forestal es una de las fronteras donde inicia la Meseta, lugar emblemático de la producción ovina provincial y que refleja desde la producción en grandes y medianas estancias a la vida arraigada de campesinos y pueblos originarios. En la Patagonia se concentra el 70 por ciento de la producción lanera de la Argentina. Y Chubut lidera la actividad. Según [cifras provinciales](#), cuenta con 4.639.561 de cabezas, que representan el 33 por ciento del total nacional, y una producción de 16.886 toneladas anuales. De esa producción, el 93 por ciento se orienta al mercado externo, y de lo que se elabora en el país, se elabora casi en su totalidad en el polo industrial lanero de Trelew.

De todas maneras, desde la década de 1970 se registra una disminución en las existencias de ovinos y una caída de la producción lanera. Según [cifras del Ministerio de Agricultura](#), las exportaciones cayeron de 70.797 toneladas en la zafra 2002/2003 a 40.610 toneladas en 2016/2017. Los motivos son varios pero, entre ellos, se señala la caída de la demanda mundial –la lana ocupa el 1,2 por ciento en el conjunto de todas las fibras textiles usadas a nivel global– y pasó de ser un commodity a un “especiality”, reducido a un mercado exclusivo de altos ingresos.

Otro de los motivos que se señalan en la caída de la producción es la desertificación. Según estudios del INTA, los suelos de la Meseta han perdido gran parte de su cobertura vegetal. Otro reciente estudio del INTA sobre el impacto de las sequías en la producción de pastizales indicó a la localidad chubutense de Río Mayo, en el sudoeste provincial, como el [lugar más seco registrado en el país](#). En la extensa meseta lo que predominan son los campos de estepa, con precipitaciones de entre 100 a 400 milímetros anuales, donde los mallines (humedales) surgen como oasis.

En cifras del Censo 2018, la reducción de la superficie agropecuaria provincial respecto al CNA 2002 fue de 2.150.307 hectáreas y se explica en un 99 por ciento

por la disminución en el número de explotaciones agropecuarias dedicadas a la actividad ganadera entre las 2500 y las 20.000 hectáreas.

Las que persisten son las estancias de más de 20.000 hectáreas que se redujeron mínimamente en cantidad, pero incrementaron en un dos por ciento la cantidad de hectáreas. La concentración, según datos de Senasa, también se evidencia en cantidad de animales por explotación agropecuaria: el 25 por ciento de los establecimientos tiene el 82,4 por ciento del stock ovino provincial.

El “abandono de los campos” o la falta de políticas

El proceso descrito en las estadísticas, las comunidades campesinas y originarias de la Meseta lo llaman el “abandono de los campos”. “Los campos que están abandonados son de grandes propietarios, de estancieros, criollos. Tienen uno, dos o tres campos. Estamos hablando de personas con varias propiedades que podrían mantener su producción”, describe Gabriela Cual, habitante originaria en la localidad de Gan Gan, sin encontrar las razones del “por qué” ver campos abandonados, cuando las seis familias que integran su comunidad cuenta con solo dos hectáreas para la producción.

Mallín de los Cual es una de las comunidades reconocidas junto a otras cercanas como Del Mallín, Los Pinos, Laguna Fría y Chacay, todas desoídas por el Estado en su reclamo territorial en el que fueron viendo históricamente cómo el alambrado avanzaba sobre las tierras comunales y la tradicional forma de pastoreo



a campo abierto. “Para los pequeños y pequeñas productoras un ‘campo abandonado’ es un campo sin ellos adentro. La noción de interacción e integridad con esa naturaleza de la que se sienten parte y se vinculan de manera diversa”, analiza Lucía Castillo, investigadora del Conicet-Cenpat con un trabajo doctoral dedicado a la vida de los productores ganaderos de la Meseta.

“Es desoladora la situación en la que viven los pequeños productores y productoras de la Meseta”, sentencia Acosta de la UTT de Chubut y describe: “Hay falta de políticas públicas de conexión con caminos y servicios, y se viene de años muy duros de sequías o nevadas extremas en las que los rodeos ganaderos se achican y el Estado no está para ayudar a reponerlos. Los jóvenes se van y la población rural está muy envejecida”.

Esa población que resiste en el campo estepario ahora debe enfrentar un nuevo problema como consecuencia de los campos abandonados: el crecimiento de la población de pumas y zorros, predadores naturales de las majadas de ovejas y un incentivo menos a la hora de pensar en invertir y reponer el ganado. El gobierno provincial ensayó como política el pago de la piel del puma, pero eso implica enfrentarse al felino por un pago que, según indicaron los entrevistados, no alcanza para volver a comprar el ganado perdido.

“¿El campo abandonado para qué?”, agrega como pregunta la investigadora del Conicet-Cenpat y señala la lógica empresarial y de política pública provincial y nacional que esconde la idea de la Meseta como si fuera un desierto. “En el proyecto de Ley de Zonificación Minera se describía a esta zona como ‘estéril, atravesada, postergada’ y desde los lugares de poder se sostenía que se ‘debe pensar alternativas productivas para la Meseta’. Como si alguien tuviera que pensar por la Meseta, donde existe una riqueza y una heterogeneidad de dinámicas productivas locales que se basan en recursos ecosistémicos aptos y disponibles”, sentencia la investigadora.

La aparición del proyecto de hidrógeno verde de la australiana Fortescue agrega una capa de tensión al uso del suelo frente a los grandes propietarios que abandonaron sus campos. La propia Sociedad Rural del Valle de Chubut encendió la alerta por la compra de campos productivos con los que la empresa minera busca generar el corredor que abastezca de energía a la planta que proyecta en Sierra Grande (Río Negro). Una problemática que se señala es un decreto del gobierno de Mauricio Macri que impide la [convivencia de la actividad ganadera con los molinos eólicos](#).

Una variante que el escritor español y editor de la revista Soberanía Alimentaria, Gustavo Duch, describió sobre lo ocurrido en Europa: “Con el boom de las energías renovables (...) [quienes marcan el precio de la tierra](#), diez veces más cara que su valor agrario, son inversionistas que la adquieren para huertos solares o parques eólicos”.

Mientras los molinos eólicos avanzan, la población de Chubut logró frenar, hasta el momento, la avanzada de la minería con el Proyecto Navidad como emblema y con [el litio como nueva amenaza](#). “Estamos muy convencidos de que la minería en la Meseta no es desarrollo. Si la minería es todo el progreso que venden, no debería haber pobreza en Catamarca. Donde hay minería, no vemos desarrollo y progreso si no que vemos contaminación”, sentencia Gabriela Cual, que vio divididas a las comunidades durante el debate y también sintió amenazada la producción de su comunidad por el proyecto que contemplaba obtener miles de litros de agua del acuífero Sacanana, que nutre los mallines locales.

Comunidades, cooperativas y agroecología

Las comunidades originarias y campesinas resisten en sus modos de vida a pesar de las avanzadas extractivistas. La venta de lana de oveja y de pelo de chivo son las principales fuentes de ingresos y se enfrentan a las dificultades de la falta de caminos y servicios para la comercialización, lo que muchas veces los expone a “vender al mejor postor”, incluso a sostener un mecanismo centenario de cambiar materia prima por productos básicos o alimento balanceado para sostener los rodeos en el invierno.

“La comercialización del pelo y la lana es para la exportación, ya sea cruda o sucia. Hay dos caminos para las comunidades. Una es la de organizarse en cooperativas, trabajar asociativamente la esquila y la comercialización, lo que les permite licitar a las firmas exportadoras. La otra realidad, es la histórica, la del 'marcachifle' que viene con una camioneta de harina, yerba y aceite; y cambia el vellón de lana por mercadería”, describe el integrante de la UTT.

Gabriela Cual explica que existen iniciativas estatales como el [Programa Mohair](#), pero señala la necesidad de construir desde la asociatividad, en el caso de su comunidad junto a la comunidad Laguna Fría, donde se reúne el pelo de la esquila de todas las comunidades, se clasifica y se vende en Cushamen.

En el caso de la UTT-Chubut-Línea Sur la respuesta fue la creación de la Cooperativa Agrícola Ganadera Peñi Mapuche, integrada por 120 familias socias, que producen en un radio de 150 kilómetros de un lado y del otro de la difusa frontera entre la estepa de Chubut y de Río Negro.

“Por medio de la cooperativa se trabaja una mini hilandería. Se le agrega valor en el lugar de producción obteniendo la lana hilada del pelo de chivo, guanaco u oveja. Esto genera respuestas, puestos de laburo y dinamiza y fortalece la economía regional”, valora Acosta.

La producción de la cooperativa Peñi Mapuche es de entre 30.000 a 40.000 kilos

de lana. La mini hilandería solo permite procesar una pequeña porción, con la que logran salir de la venta del vellón de lana sucio y pueden entregar un producto con valor agregado, con el que comenzaron a abastecer al mercado local. Además, se construyó un circuito de abastecimiento de alimento balanceado producido por la propia organización en Buenos Aires y una compra colectiva de alimentos de productores agroecológicos de otros puntos del país.

“Necesitamos políticas públicas de arraigo rural, que permitan escalar la producción y mejorar el ingreso económico de las familias campesinas. Los dispositivos están, pero tiene que aparecer el Estado a poner los recursos para ampliarlo”, señala Acosta de la UTT.

Los pequeños productores de la Meseta no solo malvenden la lana sino también la carne. “Los frigoríficos llegan con los camiones y los llevan a precios bajos porque los productores no cuentan con los papeles para venderlos en regla o, simplemente, están solos sin nadie que los asista”, explica Acosta y agrega: “Los venden porque de otra manera mueren de hambre durante el invierno sin los recursos para suplementar con alimento balanceado y con la caída de las pasturas”. Ante este problema, la UTT comenzó a promover los “[corderazos](#)” a nivel local e incluso en Buenos Aires para llevar una mejora en los ingresos de las familias campesinas.

Castillo –que integra el área Agroecológica de Cultivo y Construcción Natural de la Universidad Nacional de la Patagonia y se encuentra desarrollando un mapeo agroecológico de la localidad de Telsen– amplía la mirada sobre la Meseta: “Quienes hoy resisten en el territorio están diversificando su productividad porque ya no tienen 500 o 800 ovejas en sus campos sino que les quedan 200 o 100. La miopía desde el Estado está en ver a la Meseta solo desde el punto de vista lanero. En la actualidad, en Telsen, hay vacas, chanchos, huevos, miel y nueces. Hay mucha producción de alimento local y no es valorado”.

A partir de su investigación de más de diez años en Telsen, Castillo explica que la palabra “agroecología” no está dicha por las familias campesinas locales, pero la desarrollan en la práctica, en los modelos de producción, en los circuitos de comercialización. “En Telsen, los pequeños productores venden primero para autoabastecer localmente y luego hacia afuera, pero también se encuentran con la falta de rutas adecuadas a tan solo 185 kilómetros de Puerto Madryn. Telsen podría ser un modelo de autoabastecimiento provincial, la ruta podría asegurar el abastecimiento de alimentos y ampliar alternativas como el turismo rural. La falta de cadenas de comercialización, entre otras, es una decisión política. La agroecología puede acompañar el crecimiento de las comunidades”.

03



CATAMARCA: TIERRA EN POCAS MANOS, 600 MIL HECTÁREAS MENOS EN PRODUCCIÓN Y LA AGROECOLOGÍA QUE CRECE

Solo el 12 por ciento del territorio provincial se destina al agro y, en la última década, 600 mil hectáreas dejaron de cultivarse. Entre la megaminería, el avance inmobiliario y el agronegocio, con la soja como punta de lanza, también existen experiencias agroecológicas, orgánicas y biodinámicas que muestran que otra forma de producción es posible y rentable.



En sus 102.602 kilómetros cuadrados, la provincia de Catamarca alberga múltiples climas y paisajes, desde la agreste puna y territorios de montaña en el oeste, valles, quebradas y bolsones en el centro, hasta el llano y piedemonte en la región oriental. Diversos como sus suelos, temperaturas y disponibilidad de agua son, obviamente, los cultivos que allí se producen.

Según el último Censo Nacional Agropecuario, realizado en 2018 y publicado en detalle en 2021, Catamarca es la tercera provincia con menor superficie porcentual dedicada a la producción agropecuaria. Se destinan para esta actividad **1.178.338 hectáreas, poco menos del 12 por ciento del territorio provincial**. Apenas una década atrás, en 2008, el censo había arrojado que las explotaciones agropecuarias ocupaban una superficie notablemente mayor: 1.801.011 hectáreas. Es decir, **el agro perdió más de 600 mil hectáreas en solo diez años**.

Según explica Ornella Castro, ingeniera agrónoma, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Catamarca e integrante del equipo de Ecología Política del Sur, este descenso de superficie destinada a la actividad agropecuaria “se debe en parte al cambio de uso de suelo producto del crecimiento urbano, que genera múltiples efectos a nivel territorial y social, provocando el desplazamiento de las actividades agropecuarias y perturbando la posibilidad de producción de alimentos, ya que ocupan suelos de alto valor productivo ubicado en las áreas de proximidad de las ciudades”.

En términos económicos, la producción agropecuaria representa alrededor del seis por ciento de la composición del **Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial**, muy por debajo del 30 por ciento que aporta la explotación de minas y canteras. Sin embargo, los números se revierten cuando se leen otros parámetros importantes: en 2018 **la actividad agrícola ganadera generó el 10,6 por ciento de puestos de trabajo formal en el sector privado**, mientras que la actividad minera registró, en el mismo período, sólo el 1,6 por ciento.

Si a esto se suma que la industria manufacturera “aporta el 16,3 por ciento (al PBI provincial), e involucra más del 20 por ciento del empleo privado formal” —apunta Castro—y que en este rubro “tiene relevancia la elaboración de productos alimenticios y bebidas, particularmente la vinculada a la cadena olivícola (con la elaboración de aceitunas de mesa y extracción de aceite de oliva) y la producción de vinos y mostos”, los números terminan por mostrar la importancia de la producción agrícola ganadera en una provincia que suele postularse, desde ciertos discursos políticos, como netamente minera.

Posesión de la tierra en Catamarca

Aunque disminuye la superficie dedicada a la actividad, aumenta la cantidad de

explotaciones agropecuarias (unidades organizadas con superficies no menores a los 500 metros cuadrados, que producen bienes agrícolas, pecuarios o forestales destinados al mercado), que **pasaron de 9012 en 2008 a 10.112 en 2018, según los censos agropecuarios.**

Al mismo tiempo, se observa una tendencia a la concentración de la tierra: son cada vez menos las manos (ya sea personas físicas o empresas) en extensiones cada vez mayores. **El 79 por ciento (poco más de 928 mil hectáreas) de la superficie total dedicada a esta actividad económica se distribuye en 166 unidades productivas de más de 1000 hectáreas.** El porcentaje restante se distribuye en 342 unidades de entre 200 y 1000 hectáreas (14 por ciento, unas 167 mil hectáreas) y en 7310 explotaciones de menos de 200 hectáreas (sólo el 7 por ciento de la superficie total, que equivale a 82.833 hectáreas). De este último grupo, el 72 por ciento de las unidades productivas tiene menos de cinco hectáreas.

El avance de la soja

La soja es el cultivo predominante en Catamarca: ocupa el 100 por ciento de la superficie destinada a la producción de oleaginosas: **46.592,6 hectáreas.** Le siguen el trigo y el maíz, con superficies de **35.715,8 y 21.324,9 hectáreas,** respectivamente. Para la investigadora Ornella Castro, estos datos permiten apreciar “una reconfiguración del perfil productivo, dado que dentro de la disminución de la superficie implantada en casi la totalidad de los rubros que la integran, se destaca un incremento diferencial en un rubro en particular”.

Se refiere al grupo de los cultivos anuales que, en el periodo intercensal 2008-2018, registra un incremento del 30, 32 y 73 por ciento, para la soja, el trigo y el maíz, respectivamente.

Esta reconfiguración productiva está relacionada, por un lado, con “condiciones ambientales y climáticas favorables para la producción en secano de cultivos extensivos” y, por el otro, “con precios elevados a nivel internacional de estos productos, y a la expansión de la frontera agropecuaria”, explica Castro.



Esta expansión territorial, a su vez, se da por varios factores: “La disponibilidad de tierras aptas, en zonas extra pampeanas, que se podían adquirir a precios menores, otra fracción de superficies agrícolas que estuvieron sometidas a modificaciones en su perfil productivo y una fracción que provino de desmontes de áreas naturales”.

Con respecto a esto último, [según datos oficiales](#), en Catamarca se perdieron casi 40.000 hectáreas de flora nativa, desde la sanción de la Ley de Bosques (en 2007). Justamente, la zona con más desmonte se localiza en la región este, donde predomina el cultivo de soja, trigo y maíz.

Asimismo, el nuevo perfil productivo trajo aparejadas “nuevas formas de organización y la aparición de nuevos actores”, afirma Castro y especifica que “en la mayoría de los casos, los nuevos propietarios de la superficie con cultivos de maíz, soja o trigo son foráneos” y no “tienen su actividad principal vinculada al agro”. Así, el capital —que proviene de otras actividades— se invierte a través de empresas que llevan adelante el proceso productivo y luego reparten las ganancias. Además, producen bajo la forma de arrendamiento, por lo tanto, si el terreno se agota, se alquila otro. Esta modalidad tiene su costo para la tierra porque, explica Castro, se focaliza en “obtener el mayor rédito económico y no se considera el valor ambiental de los recursos naturales”.

En contraste con el avance de estos cultivos, otros rubros evidencian un retroceso. Es notable la disminución del cultivo de frutales, principalmente citrus, pistacho y olivo, situación que se explica por la finalización de los beneficios otorgados a empresas agropecuarias que ingresaron al régimen de promoción fiscal, que en el periodo intercensal 1998-2002 tuvo su máximo auge y fue el principal factor de transformación en la configuración agraria provincial.

Este régimen, afirma la investigadora, potenció el proceso de capitalización reinante a nivel global, donde se instauró una agricultura altamente dependiente de insumos externos, mercantilista, regida por la productividad y rentabilidad, y donde primaban los sistemas de monocultivo.

También hubo un descenso marcado del cultivo de forrajeras perennes, como la alfalfa, que en la última década perdió un 87 por ciento de la superficie de cultivo. Este dato cobra mayor relevancia si se considera que, entre 1988 y 2002, la producción de forrajeras perennes había evidenciado “un crecimiento superior al 1000 por ciento”, según apunta Horacio Machado Araújo, investigador y también integrante del equipo Ecología Política del Sur.

Producción familiar y agroecológica

Frente a un modelo de producción que postula la ganancia económica por so-

bre cualquier otro aspecto, que provoca “el desplazamiento de polos de siembra a áreas no tradicionales”, fomenta el monocultivo, agota los suelos y ocasiona “la desaparición o marginalidad de productores familiares que no ingresaron al círculo de capitalización”, enumera Castro, se postula otro modelo posible: el de la agroecología, una disciplina científica que aplica conocimientos de diversas áreas con una óptica holística y sistémica, y con un fuerte componente ético. **Según el último censo, en la provincia existen 155 explotaciones agropecuarias practican la agroecología; 180 de agricultura orgánica y 58 de biodinámica.**

Las explotaciones de tipo familiar parecen ser los espacios más receptivos para producciones más sustentables. Su importancia en un modelo de desarrollo agropecuario es vital, ya que las familias agricultoras suelen producir alimento, en calidad y diversidad, frenan el desarraigo y contribuyen a la preservación de las identidades locales. En esta línea trabajan, desde hace años, Melina Zocchi y Juan Guerrero, técnica y técnico de terreno de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Safci), delegación Andalgalá.

“La agricultura familiar es cultural —explica Zocchi— son familias que vienen viviendo y produciendo en esos mismos lugares, generación tras generación”. Las prácticas culturales se replican así, desde el trabajo con la tierra hasta la elaboración de comestibles y artesanías. “Y todo eso hace a la identidad”, resaltan.

Al principio, según narran, algunos funcionarios políticos hacían campaña otorgándoles a las y los productores insumos agroquímicos de banda roja (la más nociva en la escala). “Eso mataba todo, incluyendo enemigos naturales y generando desequilibrios, con la irresponsabilidad que, además, significa darles ese tipo de cosas, porque la gente vive en los lugares donde produce”, señalan. Sin embargo, el trabajo constante, que incluye un cuidado integral del proceso, el monitoreo de plagas, el preparado de productos agroecológicos o, en su defecto, el uso de productos lo menos tóxicos posibles, y la reserva de semillas nativas y criollas, está dando sus frutos.

Zocchi destaca que los cuatro millones de kilos de membrillos que salieron en 2021 desde Andalgalá fueron el resultado de un manejo agroecológico. Pensar el



agro desde esta mirada no sólo es sustentable, sino también rentable, sostienen, porque la producción crece y, a la vez, aumenta la calidad. “Cada vez es más valorado lo sano y esto permite pelear un mejor precio para el productor”, afirma.

Sembrar el despertar de una conciencia

La búsqueda de modos de producir alimentos sanos y sustentables, respetuosos de la naturaleza, llevó al emprendimiento productivo Moliendas del Ambato, situado en el valle central, y a la Asociación Campesinos del Abaucán (Acampa), de Tinogasta, en el oeste provincial, a encontrarse con la agroecología. El conocimiento de esta perspectiva productiva es aún más profunda, porque conlleva modos de habitar y cuidar el territorio, preservando prácticas culturales, según coinciden Nancy Alcaraz (de Moliendas del Ambato) y Manuel Aguirre (productor, integrante de Acampa y técnico de la organización Be.Pe.).

Moliendas del Ambato produce harinas y tostados para infusión a partir de frutos nativos (como chañar, tusca y algarroba) y granos de producción local y agroecológica. Sus productos abastecen a las familias emprendedoras, pero también se comercializan a nivel provincial y nacional, a través de redes de consumidores y de “comercios justos”, explica Alcaraz.

Hace ocho años este emprendimiento era poco más que una idea, nacida de la necesidad de comer saludable y una ironía: estaban comprando en Buenos Aires alimentos que produce el monte nativo. Esta reflexión llevó a tres familias a organizarse y así compraron el primer molino eléctrico que derivó en lo que es hoy un emprendimiento sustentable y rentable que, además, genera nuevas fuentes de trabajo.

“En este momento estamos dando un salto porque estamos haciendo una unión con productores del valle de Miraflores, donde por primera vez están sembrando trigo en forma agroecológica para nosotros”, cuenta Alcaraz

En el otro extremo del mapa catamarqueño, Acampa trabaja en la misma línea, con productores locales. La idea, explica Aguirre, es demostrar a quienes producen que “se pueden hacer cosas sin veneno, sin introducir agroquímicos”, respetando el ciclo de producción. Señala que el trabajo con la tierra “es un círculo que va girando”: semilla, siembra, cultivo, cosecha, compostación y otra vez semilla.

Nucleados en Acampa, los productores aportan una variedad de alimentos agroecológicos: tomate, maíz, choclo, zapallo, uva, membrillo, ciruelo, damasco y los derivados (como salsa de tomate y vinos agroecológicos), además de alfalfa y pastos. Una mención especial merece la selección de semillas, que permite continuar el ciclo, preservando especies y variedades nativas y criollas.

Alcaraz y Aguirre coinciden en que existe un despertar de la conciencia sobre la alimentación saludable y esto apuntala la rentabilidad de la producción agroecológica, pero “no para obtener ganancias exorbitantes, sino justas”, señala Alcaraz. De hecho, el emprendimiento del que ella forma parte ha crecido “exponencialmente” en estos últimos años. Sostiene que la agroecología no solo es rentable: “Creemos que es posible, creemos también que es esperanzador para una nueva sociedad que busca generar alimento sano y que no queden concentradas las ganancias y la producción en pocas manos sino que se pueda distribuir”. Y agrega un factor más: la visibilización de quienes producen, de los pequeños productores, con su trabajo y con el alimento que abastece a la población. Todo esto englobado en el cuidado de la naturaleza y sus ciclos, entendiendo que “el alimento que tiene venenos no es alimento”.

Extractivismo o agroecología

La producción agropecuaria es una cuestión política. De las decisiones, en este nivel, se fomenta un modelo o se ahoga otro. “En la actualidad, a pesar de que hay estrategias de incursionar en otros modos de producir alimento, considerando y valorando los mecanismos propios de la naturaleza, perduran o tienen más fuerza aquellas actividades relacionadas a la producción agropecuaria con el fin mercantilista, sin considerar los costos o externalidades ambientales ni mucho menos sociales y culturales”, sostiene la investigadora Ornella Castro.

43

En la apuesta hacia modelos más sustentables, Castro opina que no sirve aplicar recetas exógenas. Propone tratar de entender y comprender las relaciones entre los recursos naturales y el ambiente que se generan en cada región, y adecuar o desarrollar un sistema de producción de alimentos que sea acorde a la ecología del lugar.

Melina Zocchi afirma que, más allá de la letra de leyes y organismos públicos encargados, se necesitan presupuestos acordes y decisión política. Apunta que también es necesaria una discusión de fondo sobre el modelo productivo que se quiere para el país: o es extractivista o es sustentable. No pueden coexistir, dice. Y puntualiza: “Agroecología no es una finca con un preparado de laurel, mientras alrededor están dinamitando el cerro, están chupando el agua o están desmontando para la soja”.

La discusión está en la mesa.

04



RÍO NEGRO: LA AGROECOLOGÍA AVANZA ENTRE LA FRUTICULTURA INTENSIVA Y LOS CONFLICTOS TERRITORIALES

Con cuatro zonas productivas bien diferenciadas y predominio de los frutales de pepita y la ganadería ovina, la configuración territorial rionegrina sigue marcada por una histórica concentración de tierras en pocas manos. La proliferación de experiencias agroecológicas crece y le hace frente a los problemas de sequía y a las amenazas extractivistas.



Latitud: S28°28'10.45"
Longitud: O65°47'16.96"

En la zona norte de la Patagonia, la provincia de Río Negro abarca 203.013 kilómetros cuadrados, que van desde la Cordillera de los Andes hasta el Mar Argentino y desde los valles irrigados por los ríos Colorado y Negro hasta la meseta semiárida que limita con Chubut en el Paralelo 42. Se trata de la principal región productora de frutas de pepita del país (junto a Neuquén). Ambas provincias producen el 90 por ciento de las peras y manzanas a nivel nacional, de las cuales el 44 por ciento van al mercado externo, siendo [Argentina la primera exportadora de peras del hemisferio sur y la quinta en manzanas a nivel mundial](#). En la región también se desarrolla de manera tradicional la ganadería: [un poco más de la mitad de la superficie agropecuaria de la provincia se dedica a la cría de ovinos](#), con predominio de los sistemas productivos extensivos sobre pastizales naturales. Otras actividades que se realizan, en menor medida, son la horticultura, la pesca y la explotación de hidrocarburos.

[Según datos del Ministerio de Producción y Agroindustria provincial](#), más de 75.000 personas trabajan de forma directa o indirecta en las cadenas de producción de toda la provincia, de un total de 638.645 habitantes, según el censo 2010. De esa población, el 87 por ciento reside en zonas urbanas y el 13 por ciento en áreas rurales.

Una matriz diversificada

Los complejos productivos tienen una especialización muy marcada y diferenciada por región, según la geografía y las condiciones climáticas. La agricultura está concentrada en el área de los valles del río Negro —Alto Valle, al norte; Valle Medio, en la zona de islas; y Valle Inferior, cercano a la desembocadura— en donde predominan los frutales, aunque también se cultivan hortalizas como tomate y cebolla, al igual que en la zona atlántica, en donde además hay pesca de merluza, calamar y langostinos.

En la región oeste, particularmente en la Comarca Andina del Paralelo 42, se producen frutas finas como frambuesa, guinda y frutilla; mientras que en la zona central y sur de la provincia se desarrolla la ganadería de forma extensiva. [La producción ovina y caprina representa la principal actividad](#) desde el punto de vista de la ocupación del territorio. Su desarrollo está íntimamente ligado al arraigo de la población rural de la llamada “Línea sur”, como se conoce al vasto territorio estepario surcado por la ruta Nacional 23, que atraviesa la Meseta de Somuncurá de este a oeste.

La zona ubicada al sur del río Colorado es un área libre de fiebre aftosa sin vacunación, por lo que el movimiento de ganado y faena se encuentra muy limitado. Por ese motivo hay una tendencia a realizar el ciclo completo dentro de la provincia. Si bien las condiciones agroecológicas de extensas regiones de la Patago-

nia la hacen apta para el manejo de rodeos de cría, en los últimos años hubo un crecimiento de los engordes intensivos situados en la región de los valles irrigados: según los [datos del Senasa](#) en la provincia existen 24 feedlots (grandes establecimientos de engorde de corral).

Con respecto a los cultivos, según el [Censo Nacional Agropecuario de 2018](#), Río Negro registra 107.952 hectáreas cultivadas, es decir el 53 por ciento de la superficie total de la provincia. De esas hectáreas, el 33 por ciento son plantaciones de frutales de pepita y carozo, el 27 por ciento son de forrajeras perennes, el 14 por ciento de forrajeras anuales, el 8,5 de cereales —principalmente maíz—, 3,5 por ciento de hortalizas, 4,5 de bosques implantados y un 10 por ciento del total están aún sin discriminar.

El sector frutícola es el de mayor relevancia económica, ya que se encuentran presentes todos los eslabones de la cadena: producción primaria, empaques, frigoríficos e industrias jugueras.

A su vez, Río Negro cuenta con una terminal portuaria especializada en frutas: el Puerto de San Antonio Este, [que constituye la puerta de salida al mercado externo de la mayor parte de la producción](#). En 2021, la provincia ocupó la posición número 18 del ranking exportador nacional con el 0,5 por ciento del valor exportado, tal como señala el [informe productivo regional del Ministerio de Economía de la Nación](#).

“En comparación de otras provincias, como por ejemplo Santa Cruz, en donde hay más estancias, siguen quedando estos espacios en donde conviven todavía muchos pequeños productores y productoras defendiendo los territorios y produciendo a pequeña escala”, explica Juan Pablo “Pocho” Acosta, referente de la regional Línea Sur de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).

Carolina Michel, ingeniera agrónoma, doctora en geografía y becaria posdoctoral del Conicet, señala: “La particularidad que tienen los productores de la Línea Sur es que, si bien hay una predominancia de la actividad ovina, los campos están integrados por otras actividades, como huertas, frutales, caprinos, bovinos”.

Esta tendencia también se mantiene en la zona andina, en donde se produce en pequeñas parcelas y de manera variada y combinada. “Es muy raro que un productor se dedique a una sola cosa. Es bastante habitual que tengan tres chanchos, 25 gallinas, que haga dulce en la época de la cosecha de la fruta fina y que trabaje con el turismo también. Está muy diversificada la matriz económica de los y las pequeños productores y productoras de la Comarca”, explica Pocho Acosta de la UTT.

El reparto de las tierras del “desierto”

Para entender el actual modelo de distribución y posesión de la tierra en Río Negro hay que remontarse a la segunda mitad del siglo XIX. “A partir de la Conquista del Desierto la mayoría de las tierras fueron entregadas a militares o a gente adinerada de otros lugares. Los emprendimientos productivos e inmobiliarios iniciales fueron de personas que habían adquirido la tierra financiando las campañas, como premio militar”, explica Soledad Urraza, coordinadora del Área de Extensión Rural de Patagonia Norte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Esa configuración de la tenencia de la tierra aún persiste, sobre todo en la de meseta y cordillera, zonas atravesadas por múltiples conflictos territoriales que se sostienen y actualizan en el tiempo.

Muchos de los pequeños productores son de [origen mapuche y han sido desplazados o se encuentran amenazados](#) por emprendimientos extractivos, tales como la megaminería de oro, plata y uranio; la explotación de hidrocarburos y, en los últimos años, el tan aclamado [hidrógeno verde](#).

Por otro lado, en los sectores del Alto Valle y del Valle Inferior del río Negro, ciertas reformas hicieron que productores y productoras más pequeños pudieran acceder a parcelas de cultivo irrigado.

En la zona atlántica, por ejemplo, el proceso fue distinto al de la meseta, tal como relata Josefina Gorriti, integrante del Colectivo Agroecológico del Valle Inferior del río Negro: “En los años 60 se creó el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (Idevi) y se lotearon con fines productivos muchas tierras bajo riego de alrededor de 20 hectáreas”.

Si bien hubo una política más equitativa de distribución en esos sectores, la tendencia también es la concentración de la tierra en pocas manos. Tal como plantean Eduardo Azcuy Ameghino y Diego Fernández en [La Argentina Agropecuaria vista desde las provincias: un análisis de los resultados preliminares del Censo Nacional Agropecuario de 2018](#), este proceso en Río Negro se profundizó en las últimas décadas: se ratifica el fenómeno, comprobado desde 1988, de la progresiva eliminación de unidades productivas, lo cual se agudizó durante los años 90 y se prolonga hasta la actualidad, incluido su reforzamiento por las políticas del



macrismo. La comparación de las explotaciones agropecuarias entre los censos de 1988 y de 2018 demuestra este fenómeno: pasó de haber 7.709 explotaciones a 6.190, es decir que se redujeron en un 12 por ciento.

Según el último Censo Nacional Agropecuario (CNA), **solo 92 establecimientos (el 1,4 por ciento del total) de más de 20.000 hectáreas controlan 2,8 millones de hectáreas, el 25 por ciento de la superficie total relevada.** Si se consideran las 287 explotaciones agropecuarias de más de 10.000 hectáreas (que representan el 4,6 por ciento del total), ocupan el 48,8 por ciento de la superficie censada (5,5 millones de hectáreas). En el otro extremo, **3827 chacras de menos de 100 hectáreas representan el 61,8 por ciento de los establecimientos y ocupan solo el 0,7 por ciento de la superficie (330.272 hectáreas).**

“Los pequeños productores están en tierras fiscales o en reservas indígenas y son muy pocos los que tienen acceso a la propiedad”, plantea la ingeniera agrónoma Carolina Michel. El arrendamiento, en el censo 2002, llegaba al 9,1 por ciento de la tierra en propiedad y aumentó al 12,86 por ciento en 2018. Más allá de los datos que arrojan estas estadísticas, se registraron deficiencias en la cobertura del censo debido a las fuertes restricciones presupuestarias y a las dificultades del uso del soporte tecnológico. “Por los malos caminos, las grandes extensiones y los problemas de acceso a ciertos campos, hubo muchísimas hectáreas que no se pudieron relevar. Además, bajó el presupuesto y donde antes había tres censistas, en 2018 hubo uno, porque se cambió el dispositivo, antes se hacía en papel y esta vez se introdujo una tablet. Se pensaba que iba a ser mejor y al final complicó más el relevamiento. Es lo más actualizado que tenemos, pero no es completo ni está del todo bien, al menos en esta zona.”, explica Carolina Michel, quien realizó un análisis pormenorizado de los cuestionarios y desarrollo del censo.

Desmontes, sequías y extractivismo

Según el Informe de [Monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en 2019](#), la pérdida de tierras forestales durante ese año en Río Negro fue de 600 hectáreas. El informe destaca el impacto que tuvieron los incendios en la pérdida de bosque andino patagónico y no tanto los desmontes con fines productivos. A esa cifra hay que sumarle que en 2021 en Cuesta del Ternero el fuego arrasó con 8500 hectáreas y, a fines de ese año y comienzos de 2022, el incendio en el complejo Steffen-Martin, abarcó unas 6500 hectáreas más.

“En esta zona los incendios tienen que ver más con el negocio inmobiliario o con el monocultivo de pino, que con la producción de soja. El fuego y el desmonte siempre están asociados a generar otros ingresos superiores”, subraya Soledad Urraza, ingeniera agrónoma a cargo de Extensión Rural del INTA Patagonia Norte.



Por su parte, Carlos Irasola, presidente de la Cooperativa Surgente e integrante del espacio de coordinación y gestión de la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos, que conecta a pequeños productores y consumidores de la región, destaca que en algunas áreas de la provincia la deforestación es significativa y está generando cambios importantes en las dinámicas geográficas: “La zona aledaña al río Colorado y al río Negro está siendo desmontada rápidamente, en algunos casos para la implantación de producciones cerealeras. Esto se traduce en que ese suelo fértil que estaba afirmado por las raíces del monte se vuela con los vientos patagónicos y trae además otras problemáticas con la fauna que migra”.

Con respecto a los cambios en el modelo productivo, se observa una disminución de la superficie plantada con frutales: se redujo el 16,92 por ciento entre 2002 y 2018. Tratándose de un cultivo perenne e intensivo esta disminución es muy relevante y es expresión de la crisis en la producción frutícola de la región. En términos generales, las superficies que dejan de producir frutales se destinan a los cultivos de forrajeras y al desarrollo del cultivo de maíz a partir del crecimiento de la producción bovina en los feedlots.

“La región del Alto Valle se ha tornado un lugar de disputa entre lo urbano y lo rural, las chacras están rodeando las ciudades. Con la baja rentabilidad de la fruticultura, mucha gente termina decidiendo lotear. Además, el costo de vida acá es petrolero, los precios en la región del Valle están condicionados por los sueldos petroleros, que no son los que tenemos la mayoría de los trabajadores”, señala Soledad Urraza, del INTA, en referencia a la explotación hidrocarburífera de la Cuenca Neuquina —que se extiende por el Alto Valle—, en donde en la última década comenzó a [desarrollarse el fracking o fractura hidráulica](#).

En relación a la ganadería, las transformaciones en la última década están vinculadas a los eventos climáticos. En particular, la erupción del volcán Puyehue en el año 2011 implicó una mortandad de hasta el 70 por ciento del stock en ovinos. Y en 2020 las intensas nevadas implicaron porcentajes de mortandad superiores al 30 por ciento en promedio. “Hace diez años seguidos que la Provincia declara la emergencia agropecuaria por la sequía y los eventos climáticos cada vez más intensos como nevadas, granizos, inundaciones que se mantienen en el tiempo. La emergencia se convirtió en un estado de normalidad”, apunta la investigadora Carolina Michel.



Iniciativas agroecológicas y cooperativas

Desde el Área de Extensión Rural del INTA Patagonia Norte, Soledad Urraza señala que la producción agroecológica en la provincia está creciendo. “Hace falta poder demostrarles a los productores que transicionando no se van a morir de hambre. Desde el INTA nos entusiasmos y somos ‘evangelizadores de la temática’; pero no generamos el dato para que los productores puedan ver los resultados. Nos falta metodología y parcelas demostrativas”.

Sin embargo, a lo largo y ancho del territorio rionegrino, los emprendimientos agroecológicos se sostienen y conectan entre sí.

Una experiencia valiosa de este tipo de producción es la chacra familiar Isabel Martín, del Alto Valle, que pertenece a la cooperativa de productores La Flor. El ingeniero agrónomo Eduardo Siliquini es quien la lleva adelante, junto a su familia. “En 2016 empezamos en la chacra con un manejo alternativo. El desafío fue hacer manejo integrado de las plagas, utilizar productos que no contaminen, que sean de bajo impacto ambiental. Mantuvimos los cuadros frutícolas, pero incluimos otros cultivos y también ganadería”, cuenta Eduardo, tercera generación de productores del Valle que decidió dar un giro y comenzar a producir de manera agroecológica en la chacra que heredó de su familia.

Actualmente, además distintas variedades de pera y manzana, producen duraznos, ciruelas, damascos, pelones. “Con el tiempo fui aprendiendo y desarrollando un poco más lo que es la dimensión social de la agroecología. Yo milito en el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra, articulamos con UTT y armamos un núcleo de productores familiares. La idea es empezar a hacer asistencia y ofrecer otros alimentos a los lugares donde estamos comercializando la fruta”, cuenta con entusiasmo.

Según el censo de 2018, en Río Negro existen 193 experiencias agropecuarias orgánicas, 35 de agricultura biodinámicas y 119 agroecológicas.

En Viedma, otra experiencia pujante es la del Colectivo Agroecológico del Valle inferior del río Negro, que incluye a 15 familias productoras, la mayoría productores del norte argentino o de Bolivia que se dedican principalmente a la horticultura. “Producen hortalizas a campo principalmente y hace dos años empezaron a producir en invernadero. De estas familias, sólo dos son poseedoras de la tierra, las demás alquilan y eso se nota mucho a la hora de la comercialización”, cuenta Josefina Gorriti, integrante del espacio.

La producción se vende en la feria municipal de verduras de la capital rionegrina, que se realiza dos veces por semana y en una feria semanal exclusivamente agroecológica, impulsada por el Colectivo. “Cuándo hay excedente que no se



puede ubicar en la zona se envía a otros lugares como la Línea Sur, Bariloche, San Martín de los Andes y Villa la Angostura, a través del Tren Patagónico. Esta es una gran asociación, muy benéfica”, agrega Josefina.

Otra vía de comercialización importante para este tipo de proyectos es el **Corredor Patagónico** de la UTT. En palabras de Pocho Acosta, coordinador de la Línea Sur, “es un corredor soberano, con un camión propio de la organización que viene y se va con alimentos cooperativos”. El camión sale de Buenos Aires del Mercado Concentrador Agroecológico de la UTT en Avellaneda y termina en Comodoro Rivadavia. Ya hizo cuatro viajes pasando por más de 15 puntos de abastecimiento, en donde comunidades de vecinos y vecinas se organizan y hacen compras comunitarias.

En la zona sur de la meseta funciona también la cooperativa Peñi Mapuche, parte de la UTT. Con sede en Ñorquinco, abarca alrededor de 120 familias. “Son pequeños crianceros, es una característica de la Línea Sur, donde los rodeos de ganado ovino y caprino rondan los 100 o 120 animales. Son todas economías de subsistencia, de pequeña escala productiva”, explica el coordinador de la UTT.

“La producción agroecológica en la provincia es interesante, está lejos de ser hegemónica, pero son nichos que empiezan a crecer a partir de la demanda de la gente que necesita comer sano”, plantea Carlos Irasola, impulsor de la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos, otra experiencia de articulación regional conformada en 2019 e integrada por organizaciones de consumidores y productores organizados en cooperativas, que involucra a 2000 familias.

“Si se tuviera la decisión de cambiar el modelo de producción, lo cual hoy no se insinúa, se podrían utilizar de manera interesante una cantidad de millones de hectáreas de tierras fiscales y readjudicarlas. Esto podría ser, además de una estrategia de diversificación de la producción, una manera de dar respuesta a los conflictos con el Pueblo Mapuche”, propone Carlos Irasola y concluye: “Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero esto requiere de decisiones políticas y de procesos de gente moviéndose y generando reclamos claros, para que estas cosas empiecen a ocurrir por el peso organizado del pueblo”.

05



MISIONES: MONOCULTIVO DE ÁRBOLES, YERBA MATE, AGROECOLOGÍA Y TERRITORIOS INDÍGENAS

Con la ganadería, la yerba mate y los negocios agroforestales como puntales de su modelo productivo, la provincia refleja lógicas muy contrapuestas. De un lado, maximizar las posibilidades de producción y exportación y, del otro, trabajar sobre la necesidad del cuidado del ambiente y el acceso a la tierra para campesinos y pueblos originarios.



“Allí en la misteriosa Misiones todo es obsesionante: la selva impenetrable llena de enormes árboles que ocultan el sol con lianas é isipó (planta trepadora), el yaguareté, el gato onza, el puma, el yacaré y el oso hormiguero son los dueños de la región para hacer que todo Misiones atrape y atrae”. La frase, extraída de una carta fechada en 1926, pertenece a don Ernesto Guevara, un hombre que al tiempo de haber escrito esto, en 1928, se trasladó junto a su esposa y su pequeño hijo, al terruño que compró en Caraguatay (Misiones), con la idea de abocarse al negocio del momento: la yerba mate. Adquirió una plantación, a la que bautizó “La Misionera”. Sin embargo, la aventura no duró. Su hijo, a quien el mundo conocería décadas después como “El Che”, tenía asma y los médicos desaconsejaron su permanencia en ese lugar tan húmedo.

Eran los tiempos de la “fiebre del oro verde”, como se denominaba a la fascinación con la que cientos de inversionistas se aferraban al cultivo de yerba mate en el aún Territorio Nacional de Misiones. Otro célebre y fallido productor fue el mundialmente conocido escritor Horacio Quiroga. El uruguayo adquirió un yerbal en San Ignacio y, al principio, le puso énfasis a esa faceta productiva. En enero de 1932, según cartas atesoradas por el Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional, Quiroga concretó su primera venta exitosa de 10.000 kilos de yerba.

Entonces, en Misiones, yerba y monte lo eran todo. La actividad yerbatera —o mejor su dicho su faceta comercial— sería regulada en 1935 a partir de la creación de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate. Hoy, en pleno primer cuatrimestre de 2023, la superficie de hectáreas cultivadas de yerba mate en la provincia, según información actualizada del Instituto Nacional de la Yerba Mate, asciende a 209.277 hectáreas, un 18 por ciento más respecto al 2020 (cuando era de 177.530 hectáreas).

Tierra en muy pocas manos

Aunque en el imaginario colectivo la yerba mate siga siendo el producto emblema de la “tierra colorada” y sea imposible disociar a Misiones del cultivo de yerba mate: ¿Es la yerba la principal actividad productiva de la provincia? Claramente no.

El Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2018 determinó que en la provincia de Misiones existen 23.341 explotaciones agropecuarias (EAP), sumando una superficie de 1.887.970 hectáreas. Una de las principales observaciones que se desprenden es que el 86,6 por ciento de las explotaciones corresponden a superficies de entre cinco y 100 hectáreas, lo que marca la predominancia de la pequeña producción. Incluso, el 94,6 por ciento de las EAP de Misiones están gestionadas cotidianamente por los productores directos o por miembros de la sociedad de hecho no registrada.

Sin embargo, el relevamiento marca que el proceso de concentración de la tierra continúa vigente en la provincia: **el 0,7 por ciento de las EAP (160 empresas, todas de más de 1000 hectáreas) concentran el 45,6 por ciento de la superficie ocupada.**

Ganadería a la cabeza

La actividad ganadera ocupa una superficie total de 650 mil hectáreas en Misiones, lo que la convierte, en términos cuantitativos, en la más importante de la provincia. Esto involucra a unas 13.828 EAP, que a su vez condensan 354.052 cabezas de bovinos y 7.265 de ovinos.

La distribución geográfica de la ganadería misionera es amplia, pero encuentra mayor incidencia en los departamentos de General Manuel Belgrano, Apóstoles, Montecarlo y Guaraní.

Fueron los jesuitas, promediando el siglo XVII, quienes introdujeron la práctica ganadera en el actual territorio misionero —antes parte de “Las Misiones Jesuíticas”—, siendo esta inclusión una de las innovaciones más importantes a nivel productivo durante aquel periodo, incorporando al paisaje animales vacunos, ovejas, cabras, caballos y mulas.

En un salto más cercano en el tiempo, cuando la provincia lanzó el Plan Ganadero de 1974, existían 150.000 cabezas de bovinos. En 1999, con la apertura de otro plan (llamado Novillo Misionero 2000), la cantidad de cabezas ascendía a 200.000. Desde entonces y hasta el año 2011, hubo un aumento de 166.511, para llegar a la cifra de 366. 511 cabezas.

En diálogo con Agencia Tierra Viva, Rubén Emilio García, ex director de Ganadería, ex presidente de la Comisión Provincial de Sanidad Animal y ex vicepresidente de Senasa, identifica en esta etapa: “Es ponderable la decisión del gobierno provincial de colocar el desarrollo ganadero como política de Estado. Desde entonces, Misiones es ganadera y la ganadería no ha dejado de crecer en la provincia”.

En su primera conferencia de prensa, en mayo de 2022, tras asumir como ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori, expresó que “el aumento de los índices productivos tiene que ser un objetivo permanente” y que para ello se necesita “apoyo técnico, capacitaciones, transferencia de conocimientos, implementación de tecnología, y todo tipo de herramientas, para ser más eficientes, y explotar al máximo cada hectárea ganadera”.

Además, la actividad ganadera tiene relación directa con uno de sus derivados más solicitados: 319 productores y productoras obtienen más de 17.000 litros de

leche a diario destinados en su totalidad a la industrialización con asiento en el modelo asociativo de las cooperativas. Las principales cuencas provinciales son Alto Uruguay, Centro/Sur y Nordeste.

Modelo forestal en la mira

Misiones concentra el 55 por ciento de la masa forestal implantada en el país. La superficie forestada de la provincia alcanza un total de 419.607 hectáreas distribuidas en 17 departamentos, con mayor predominancia en el norte. Las especies más plantadas son pinos (82,81 por ciento), eucalyptus (6,89) y araucaria (4,47 por ciento).

La industria maderera y forestal en la provincia representa casi el diez por ciento del Producto Bruto Geográfico y el 45 por ciento de las exportaciones. “La actividad forestal misionera se triplicó con la implementación de nuevos equipamientos y tecnología”, asegura a Sebastián Escalada, el responsable del área de Desarrollo del Instituto Forestal Provincial (InFoPro).

Por su parte, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, remarcó en su último informe de gestión (mayo 2022), que “en Misiones el sector forestal es un mercado arraigado, conformado por un conjunto de empresas asentadas que alcanzaron un alto nivel de desarrollo y emplean al máximo su capacidad instalada”.



Desde fines del siglo XIX hasta el presente, la creciente actividad forestal representa la mayor amenaza para la conservación de la selva misionera y los montes nativos. En una primera etapa, el frente extractivo se caracterizó por la sustracción desordenada y masiva de árboles de madera de alta calidad, proceso alentado por diferentes legislaciones y programas estatales de índole nacional.

“San Pedro fue el obraje de la provincia. De acá se llevaron todo, explotaron la selva a más no poder. Primero se repartieron la tierra entre unos pocos y, después, cortaron toda la madera que pudieron. Hay muchas especies de árboles que se extinguieron, no dejaron nada. Los obrajeros, los mensú, los hacheros y los descubrierteros dejamos nuestro sudor y nuestra sangre en el monte, por nada, por unos pesitos, siempre fuimos explotados, por los que se llevaron la selva en carros, camiones y barcos”, le cuenta a este cronista, Julio Cordero, considerado “el último descubriertero” de Misiones, en alusión a un oficio en extinción, que consistía en ser guía en la selva de los capataces en busca de madera nativa.

A partir de 1950 comenzó otra etapa, el de la foresto-industria, donde se ejecuta el modelo de industrialización por sustitución de importaciones para productos forestales, a través de la plantación del grupo de plantas conocido como coníferas de rápido crecimiento, que avanzan sobre la selva y tienen un alto impacto sobre los cursos de agua, tanto en la cantidad como en la calidad.

57

Foto: Depositphoto



La última y actual etapa es la del **agronegocio forestal**, que se inició en la década del noventa en consonancia con un contexto de globalización, e incluyó la privatización de plantas y forestaciones de empresas estatales, dando paso a la transnacionalización al ingreso de actores extranjeros, transformando al sector forestal misionero como una de las actividades industriales más importante de la provincia.

Deforestar el monte nativo para el monocultivo de árboles

En Misiones, el agronegocio forestal desde hace varios años está en la mira de organizaciones campesinas y ambientalistas, que la vinculan de manera directa con situaciones como la concentración de tierras, el uso de agrotóxicos y el daño al ambiente.

En este torbellino de denuncias y acusaciones, fue **la multinacional Arauco —ex Alto Paraná— la mayor apuntada. Con 230.000 hectáreas bajo su control y la pasta celulósica como producto emblema**, Arauco anunció a fines de 2022 una inversión de 200 millones de dólares de aquí en 2025.

“El Corredor Verde, el último remanente continuo de Selva Paranaense en el mundo, está fragmentado y esto compromete el agua y los alimentos en Misiones”, se titula la **carta dirigida en noviembre de 2022 al gobernador de Misiones**, Oscar Herrera Ahuad, que lleva la firma de MAM (Movimiento Agrario Misiones), Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Frente Ambiental y Social Kaapuera, ATE, CTA, CCC, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), RAOM y Laicrimpo (Movimiento Nacional de Salud) y el Movimiento EcuMénico de Derechos Humanos (MEDH), entre otras organizaciones.

En la misiva, anexada a un documento técnico, se denuncia que “las imágenes satelitales muestran claramente que **el desmonte no se detiene en Misiones y por lo tanto**, el escenario que se profundiza es el de supresión de los bienes naturales imprescindibles para todas las formas de vida. El Corredor Verde, área establecida por Ley XVI – N°60 (antes 3631) para conservar el último remanente continuo de Selva Paranaense del mundo, no existe más como tal; está severamente fracturado”.

El mismo texto propone un debate con la sociedad misionera en torno a la idea de un nuevo modelo productivo, “que priorice la inclusión social con la multiplicación de la producción de alimentos saludables y naturales en el territorio, fortalezca a la familia agraria, limite la expansión del monocultivo de especies exóticas y el uso de agrotóxicos, y resuelva de una vez por todas la situación de los pueblos originarios, a través de la mensura de las tierras que les pertenecen y reconociendo su preexistencia en la Constitución Provincial”.

Así mismo, desde el Aty Ñeychyrõ, Organización Tradicional Mbya Guaraní integrada por diversas comunidades, se viene denunciando sistemáticamente situaciones de desmonte y violencia en territorios indígenas. “No existe lugar en esta provincia que nuestros antepasados, abuelos de nuestros abuelos, no hayan pisado, han pescado en los ríos y arroyos, sacando fruta y medicina del monte, mucho antes que cualquier no indígena llegara a declararse dueño de lo que nunca le perteneció, como el río o el canto de los pájaros. Aquellos que muestran un título de propiedad sobre tierras en Misiones, sepan que esos títulos son fundados en el robo y la muerte”, expresa un documento de la organización Aty Ñeychyrõ enviado en octubre de 2022 a diferentes autoridades provinciales y municipales, tras un episodio de intrusión y violencia en la comunidad indígena Yvy Pora.

Este documento se titula “Sin territorio no hay cultura” y, además del caso puntual de esta comunidad, hace alusión a una serie de ataques en diferentes territorios indígenas, que en la mayoría de los casos están vinculados al negocio agroforestal.

Otro dato que aporta a dimensionar el calibre de los desmontes proviene del último Censo Nacional Agropecuario y establece que desde 2002 a 2018, en Misiones (considerada Capital Nacional de la Biodiversidad), se registró una disminución de 195.042 hectáreas de monte y bosques naturales.

Té en caída por la sequía

59

En Argentina existen 39.800 hectáreas de té, de las cuales casi 38.000 se encuentran en Misiones. El salto cuantitativo en la producción de té misionero se dio entre las décadas de 1950 y 1960, cuando de las 1.600 hectáreas se pasó a las 29.960, según datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La cantidad de hectáreas de té en Misiones se mantuvo estable en las últimas dos décadas, aunque en 2022 un total de 18.208 hectáreas fueron certificadas bajo el esquema de agricultura sostenible, un 6,5 por ciento más que en 2019 y abarcando 34 grupos de certificación que nuclean a 1.034 trabajadores directos y a 833 productores.

El total de productores abocados al té en sus diferentes variantes oscila en los 5.000, distribuidos entre el principal epicentro productivo —Oberá y Campo Viera (Capital Nacional del Té)—, y los departamentos del centro de la provincia: 25 de Mayo, Cainguás, Guaraní, San Pedro, Leandro N. Alem y San Javier.

“Llevamos tres veranos consecutivos de sequía. El año pasado (2022) los rendimientos cayeron un 20 por ciento y para este año aún no tenemos los números, pero rondará el 15 por ciento. Desde la provincia se declaró la emergencia agropecuaria y hay un fuerte apoyo para la adquisición de fertilizantes, de manera tal que los productores puedan recuperar los rendimientos, a través de créditos

en diferentes formatos”, señaló Luciana Imbrogno, subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal de la provincia.

La Argentina sigue tomando mate

En su recordada crónica publicada en la revista *Panorama* en 1966, bajo el título “[La Argentina ya no toma mate](#)”, Rodolfo Walsh observaba con pesimismo: “El consumo per cápita disminuye año a año; de diez kilos en 1930, a menos de seis en la actualidad. Para muchos, el mate con bombilla está condenado, salvo en las zonas rurales. Hay que buscar nuevas formas de presentar el producto. Es preciso abrir mercados a la exportación”.

Si bien, a 57 años de aquel artículo, el consumo per cápita —con el doble de población— se mantiene en seis kilos, el mate con bombilla, lejos de extinguirse, se afianza cada vez más como consumo icónico de la “cultura argentina” y gana adeptos en el mundo.

En Misiones, la superficie plantada con ese cultivo, según información actualizada del Instituto Nacional de la Yerba Mate, asciende a 209.277 hectáreas, lo que implica un incremento de un 18 por ciento respecto al 2020 (cuando era de 177.530 hectáreas). Según el [último Registro de Productores y Yerbales del INYM \(2021\)](#), existen 9.334 productores de yerba mate, de los cuales más del 95 por ciento se encuentra en Misiones. El mismo registro indica que **hay 177.534 hectáreas cultivadas con yerba mate en Argentina, de las cuales 154.449 están en territorio misionero.**

En lo que sin dudas acertó Walsh fue en la necesidad de abrir el producto a la exportación. A saber, el informe mensual elaborado por el INYM correspondiente a enero de 2023, señala que ese mes el volumen de yerba mate elaborada con destino al mercado argentino fue de 20.169.584 kilos (20.169 toneladas), mientras que las exportaciones sumaron 2.755.880 kilos (2755 toneladas).

¿Principal país consumidor de yerba misionera fuera de Argentina? Siria.

En marzo pasado culminó en el Dubai World Trade Centre (Emiratos Árabes Unidos), un evento llamado Gulfood 2023, la mayor feria de la industria alimentaria de esa región. Ocho compañías yerbateras misioneras, incluyendo tres cooperativas, estuvieron presentes en el evento. “El Medio Oriente es nuestro principal mercado de exportación y desde aquí se proyecta hacia el todo Oriente. A partir del Mundial y de la consagración de la Selección Nacional de Fútbol se generó un mayor interés en conocer y degustar la yerba mate. Queremos aprovechar al máximo esta oportunidad”, indicó desde Dubai el vicepresidente del INYM, Ricardo Maciel, quien confirmó que también se iniciaron negociaciones

para abrir el mercado de la exportación de yerba mate a Bangladesh, en sintonía con la reciente reapertura de la Cancillería Argentina en ese país.

El precio de la yerba

El kilo de hoja verde que ofrecen los productores de yerba mate al sector industrial quedó fijado en 107 pesos (desde el 3 de mayo pasado), mientras que el kilo de yerba canchada es de 406 pesos. Estos valores tendrán incrementos escalonados, hasta alcanzar los 120 y 456 pesos, respectivamente, en septiembre.

Los precios fueron nuevamente definidos a través del mecanismo conocido como laudo, dictaminado por la Ley 25.564, que establece que los precios para el kilogramo de hoja verde de yerba mate y el kilogramo de yerba canchada deben ser fijados dos veces al año, por acuerdo unánime del Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y que, en caso de no lograrse esa unanimidad, deben ser definidos por la Secretaría de Agricultura de la Nación.

La puja y la falta de consenso entre los productores misioneros y el sector industrial ya es histórica. De un total de 42 sesiones de fijación de precios llevadas adelante en las últimas dos décadas, 26 terminaron en laudo. La última vez que hubo consenso en Misiones fue en marzo de 2020.

61

La fijación del precio por laudo, y la implementación por parte del Ministerio de un “dólar yerba” a 300 pesos para tentar al sector a exportar su producto y liquidar divisas, son las noticias recientes más importantes del universo yerbatero provincial.

Los datos estadísticos registrados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) revelan que durante marzo de 2023 el volumen de yerba mate elaborada a salida de molino alcanzó los 26.494.238 Kilogramos. Sumado a los meses anteriores las salidas con destino al mercado interno totalizan los 66.584.891 kilos para el período enero-marzo de 2023. Al respecto, el movimiento de yerba mate a salida de molino es el indicador más cercano al comportamiento de la yerba mate en góndola, ya que incluye tanto el volumen que se envía a los centros de distribución de las firmas yerbateras como las compras efectuadas por los mayoristas, hipermercados y supermercados.

Como en tantos otros rubros, el de la yerba mate es un universo atravesado por la concentración en pocas manos: **once empresas controlan el 79 por ciento del mercado**, según informa la ONG Defensa de Usuarios y Consumidores.

En contrapartida, afloran desde hace años los emprendimientos cooperativos y la producción agroecológica, basada en preceptos de sustentabilidad, trabajo

digno y comercio justo. Si bien no existe aún en Misiones ningún registro formal que haya relevado exclusivamente a la producción agroecológica, cada vez es más frecuente encontrar marcas nuevas en ferias y mercados.

En la ciudad de Oberá, [Yerbal Viejo](#) es un producto agroecológico que lleva casi ocho años de crecimiento. “Nuestra yerba se produce en una campo familiar, donde hubo una transición a la agroecología. No utilizamos ningún tipo de químico, tampoco fuego, y el estacionamiento es natural, durante doce meses. Estamos organizados en una asociación de productores agroecológicos de la zona. El movimiento va creciendo”, explica el antropólogo y productor yerbatero Johann Sand, uno de los referentes de Yerbal Viejo.

En simultáneo, se producen articulaciones para fortalecer el modelo yerbatero sustentable. [El 31 de enero, por ejemplo, se realizó una reunión](#) entre el presidente del INYM, Juan José Szychowski; el representante de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones y propietario de la yerba mate orgánica Yerbal Viejo, Hugo Sand; y el ambientalista y titular del Instituto Multiversidad Popular, Raúl Aramendy. “El objetivo del encuentro fue identificar nuevas líneas de apoyo para fortalecer este sistema de producción en armonía con la naturaleza, respetuoso de la cultura y los saberes tradicionales, que promueve empleo, el arraigo rural y es sustentable, tanto social como económicamente”, expresó Sand.

Por su parte, el titular del INYM señaló que existe “confianza en las nuevas generaciones para lograr el cambio, confianza en los jóvenes que muestran cada vez más conciencia y compromiso ambiental”.



Los cosechadores de yerba mate

En cuanto al eslabón laboral más vulnerable de la cadena productiva yerbatera, los cosechadores manuales comúnmente llamados “tareferos”, el 2023 comenzó con informaciones dispares. Por un lado, circuló con fuerza en varios medios de comunicación de la provincia una versión que habla de una supuesta “fuga” de tareferos hacia yerbales de Brasil. La fuente mencionada de esta hipótesis era Sergio Dellapiere, referente de la organización Productores Autoconvocados del Norte Misionero.

“No tengo la cantidad de gente que lo hace, pero que yo he tenido diferentes relatos de productores, los cuáles varias veces estuvieron convocando a gente para trabajar. Y acá en el Alto Paraná los trabajadores dicen ‘nosotros no podemos dejar de cobrar los planes; ya que tenemos el riesgo de que después nos dejan sin el plan y no nos queremos blanquear’”, expresó Dellapiere en una entrevista con Radio República, de Posadas.

“Acá pagan miseria a la gente que trabaja en la tarea. Por eso algunos van a Brasil a trabajar. Hay muchísima diferencia en el pago. Allá ganas 9.800 pesos por día, sin gasto de comida porque te dan todo gratis, mientras que acá pagan 3.000 por día y tenés que gastar en comida y sufrir en el campamento”, comentó en la misma emisora, el tarefero y comunicador popular Ricardo Giménez.

63

Por otra parte, en la última semana de febrero, se hizo pública una reunión formal entre la ministra de Trabajo y Empleo, Silvana Giménez, y el Secretario



General del Sindicato de Tareferos de Misiones, Antenor Alvez. “La cantidad de trabajadores subirá en un 30 por ciento para esta cosecha, esto se da a partir de las acciones que llevamos adelante desde el Sindicato con el Gobierno, siempre en búsqueda de mayores beneficios para los tareferos”, sostuvo el gremialista a Canal 12, tras concluir dicha reunión.

Actualmente, existen varias organizaciones y asociaciones representativas del sector tarefero. Si bien en los últimos años las actividades de protesta social de estos núcleos fueron intensas, con frecuentes acampes frente a Casa de Gobierno y cortes de ruta, mayormente en reclamo por mejores pagos, aumentos en los subsidios interzafras y mayores controles en los yerbales, desde agosto de 2021 no se registran movilizaciones importantes, pese a que muchos de los problemas estructurales del sector persisten.

El 23 de marzo de 2023, volcó un camión que transportaba en condiciones ilegales a 14 tareferos de Misiones. Sucedió en la ciudad correntina de Colonia Liebig, hubo heridos y fue otra muestra más de las condiciones de trabajo del sector.

“El sector tarefero, en los diferentes lugares, está contenido por las organizaciones sociales, y muchos han podido acceder a los planes Potenciar Trabajo, al salario universal, lo que sumado al precio de 14.000 pesos por tonelada que se paga, permite que el tarefero subsista en condiciones más favorables que hace algún tiempo. Creo que esa es una de las causas por la que no está activa la protesta tarefera en este momento, pese a que la situación es compleja como para todos los trabajadores”, explicó a Agencia Tierra Viva, María Alvez, referente de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma Regional Apóstoles, bautizada como "Capital Nacional de la Yerba Mate".

Los últimos registros oficiales, indican la presencia de 20.000 tareferos y tareferas en la provincia.

Tabaco: entre el contrabando y la transición agroecológica

En Misiones no se elaboran cigarrillos, pero la provincia es la segunda principal productora de este cultivo industrial —detrás de Salta—, con un 29 por ciento de la producción nacional arraigada en 25.000 hectáreas, principalmente en los departamentos de Manuel Belgrano (10,33 por ciento), San Pedro (9,22) y Cainguás (8,43 por ciento). La presencia actual de más de 17.000 productores sugiere un incremento de casi el doble de la cantidad de tabacaleros existentes en la década del 40, cuando existían poco menos de 9.000, trabajando en 7.500 hectáreas (datos históricos de la Dirección General de Estadística de la Nación).

La producción misionera se basa en la variedad *Burley*. Se planta en invierno y se

cosecha a fines de la primavera. Tras el proceso de secado, la entrega a los centros de acopio suele realizarse en febrero, dando lugar a las negociaciones por el precio. La producción de los últimos años oscila entre los 25 y los 30 millones de kilos por año.

“Ante la muy difícil situación que vive el sector en la provincia, que pueden llevar al colapso a todo el sector tabacalero, expresamos que el valor del dólar de ninguna manera acompaña la posibilidad que el *Burley* misionero sea competitivo en el mundo. A ello debemos agregar las retenciones que se aplican a las exportaciones de tabaco (doce por ciento). A esto se suma la presencia cercana del mercado brasileño, que con algunos pocos reales se está llevando millones de kilos tras la frontera, que significarán millones de pesos que no vendrán a Misiones”, se quejó en un [duro y reciente documento](#) la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM).

Aunque se acordó el precio del tabaco misionero para 2023, sigue vigente el enorme contrabando hacia Brasil. “Nuestro tabaco se va en cantidad a Brasil y para nosotros es difícil ofrecer lo que se paga allí, teniendo en cuenta las retenciones que tenemos y el precio del dólar. Mientras que del otro lado de la frontera se ofrecen entre 900 y 1.000 pesos, nosotros acá peleamos para sacar en boca de acopio un promedio de 500 pesos”, aseguró Carlos Knoll, presidente de la APTM.

Ante este panorama y alentados por el Programa Asistencia Financiera para Reconversión, Tecnificación y Diversificación de Emprendimientos Frutihortícolas en Zonas Tabacaleras (del Ministerio del Agro y la Producción), florecen experiencias que de a poco marcan el traspaso de la producción tabacalera hacia otros rubros.

En principio, las alternativas aparecen como un complemento al cultivo tradicional, pero luego terminan afianzándose como actividad principal. Palta, maracuyá, huertas orgánicas, cultivos con hidroponía, e incluso tabaco orgánico, son algunas de las experiencias que asoman. Una de estas tiene lugar en la localidad norteña de Wanda, donde la Cooperativa Integral del Norte de Wanda, logró en los últimos diez años que **60 de sus 200 socios productores transicionaran del tabaco a la producción orgánica de pollos**. “Estamos llegando a una producción de 30.000 pollos mensuales. La producción avícola es dinamizadora y generadora de otras muchas actividades complementarias dando oportunidades de mejorar las condiciones de vida en el medio rural. La producción de aves y huevos genera un buen volumen de camas de pollo, material que cubre el piso del galpón, utilizado para la elaboración de abonos orgánicos. Con estos se incrementa notablemente la producción frutihortícola agroecológica de la zona”, declaró al diario El Territorio, el presidente de la cooperativa, Samuel Doichele, en ocasión de inaugurarse una nueva planta de faena en Puerto Libertad.

Este tipo de producción es agroecológica. Los pollos se crían con alimento balanceado de maíz no transgénico y sin ningún aditivo. “Este modelo de desarrollo puede aplicarse en zonas donde los agricultores tienen una marcada dependencia de la producción de tabaco, pese a que el cultivo es causa de 21 enfermedades, varias de ellas mortales”, explicó Doicheles.

Otra experiencia es la que viene desarrollando la [Cooperativa Agrícola Monte Nativa](#), en la turística y fronteriza localidad de El Soberbio. Todo comenzó en 2019, cuando un pequeño grupo de productores y productoras abrieron un local para poder vender sus producciones artesanales y parte de sus cosechas. Cúrcuma, mandioca, jengibre, yerba, queso, leche, hortalizas, miel y otros productos, todo elaborado o cultivado de manera agroecológica, eran ofrecidos a través de WhatsApp y distribuidos en el local una vez por semana. “Hasta que en 2020 decidimos conformar la cooperativa. El objetivo fue generar una alternativa productiva organizada, en una zona con fuerte influencia del tabaco”, cuenta la cooperativista Paula Larotonda.

Una de las características principales de Monte Nativo es la implementación de sistemas agroforestales sucesionales. “Interpretando mecanismos de regeneración del monte se pueden establecer principios que ayudan a que nuestras intervenciones puedan potenciar esos procesos. La propuesta es asociar plantas según su necesidad de luz y su ciclo de vida, para garantizar un sistema diverso, y con constante incorporación de materia orgánica al suelo. De esta manera se hace un diseño y una planificación que contempla tanto las necesidades particulares del foco productivo, en nuestro caso jengibre, cúrcuma y yerba mate, como las necesidades para la regeneración del sistema”, detalla Larotonda.

Ese es el rumbo de la cooperativa: “Consideramos fundamental la transformación del sistema agrícola hacia un paradigma sostenible en el tiempo, capaz de producir alimentos sanos y seguros”.

06



NEUQUÉN: FRUTICULTURA Y MONOCULTIVO FORESTAL, LA HISTÓRICA TRASHUMANCIA Y LOS BROTES AGROECOLÓGICOS

Sinónimo de explotación petrolera, Neuquén padece el avance extractivo de los hidrocarburos y del monocultivo forestal. Pero también se organiza para fortalecer formas ancestrales de producción campesina. En ese contexto, coexisten la producción industrial de frutas, con uso de agrotóxicos, y la agroecología como pilar de la soberanía alimentaria.



Neuquén es una de las cuatro provincias de Argentina en la formación petrolera Vaca Muerta. Sin embargo, y pese al desplazamiento territorial por esta actividad, el negocio inmobiliario y el turismo, la explotación agropecuaria tiene su lugar, principalmente a través de la fruticultura, así como su contracara agroecológica en una región marcada por las resistencias contra las distintas formas de avasallamiento extractivista.

El Censo Nacional Agropecuario de 2018 informó que en Neuquén hay un total de 3573 explotaciones agropecuarias, 1995 menos que en el año 2002 (último CNA completado) y 3068 menos que en 1988.

El total de hectáreas de explotaciones agropecuarias con límites definidos es de 3.799.865, lo que representa menos de la mitad de las explotaciones, ya que el 52 por ciento no tiene límites definidos, es decir que se trata de tierras consideradas por el Estado como su propiedad en las que se asentaron mayoritariamente crianceros (ubicadas en gran parte en el norte y centro de Neuquén), lo que la posiciona como la provincia con mayor cantidad de EAP sin límites definidos del país.

El incremento de 1.654.166 hectáreas de EAP con límites definidos entre 2002 y 2018 obedecería, según los investigadores Nadia Taranda y Luis Tiscornia en ["La Argentina agropecuaria vista desde las provincias: un análisis de los resultados preliminares del CNA 2018"](#), por un lado al proceso de titularización de tierras fiscales y, por otro, a la estimación por ocupaciones con permiso, arrendamientos, ocupaciones de hecho, concesión, contrato accidental y usufructo, entre otras delimitadas.

De las 3573 explotaciones, el 2 por ciento tiene el 35,6 por ciento de la superficie: 1.354.442 hectáreas que se reparten en 34 establecimientos de más de 20.000 cada uno. Además, hay grandes estancias, hasta de más de 70.000 hectáreas, que son propiedad de "no residentes" (de la región y del país) y se destinan a actividad turística y de esparcimiento, incluidas en esta categoría la caza de animales terrestres y acuáticos como entretenimiento. Tiscornia señala en "Los estancieros en la provincia de Neuquén. Vigencia de la gran propiedad territorial" que en los departamentos de Lacar y Huiliches un 70 por ciento de las tierras está en manos de extranjeros.

En Neuquén solo 79 estancias de más de 10.000 hectáreas ocupan el 52 por ciento de la superficie total. En el otro extremo, el 70 por ciento de las explotaciones agropecuarias (de menos de 1000 hectáreas) ocupa apenas el 3,9 por ciento de la superficie. Las explotaciones de menos de 100 hectáreas disminuyeron en 756 unidades, representando ahora el 0,3 por ciento de la superficie (en 2002 abarcaban el uno por ciento).

Según el Anuario Estadístico 2021 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en la provincia existen 220 productores de frutas de pepita y carozo en 5572 hectáreas, de las cuales casi la mitad están en manos de quienes tienen más de 100 hectáreas.

En relación a la ganadería, el Senasa informó en 2021 la existencia de 10.086 establecimientos y unidades productivas, en su mayoría con equinos (3576), bovinos (2512) y caprinos (2275), seguidos por ovinos (1777) y en menor medida porcinos, apícolas, acuícolas, avícolas, establecimientos de engorde y ciervos.

Además, hay 96 viñedos que ocupan 1763 hectáreas, de las cuales la gran mayoría (1592) se encuentran en el departamento de Añelo

Petróleo, avanzada territorial y desertificación

En 1997, el entonces gobernador neuquino Felipe Sapag, en el marco de una importante baja en el precio del barril de petróleo, anunció el plan “Neuquén 2020” que proponía diversificar la matriz productiva apostando al desarrollo agroindustrial, del que la minería, el turismo y la generación de energías funcionarían como “ejes complementarios y articuladores”. Con el mismo partido en el poder desde entonces, ese plan se diluyó en demagogia e hidrocarburos.

69

“Ya con la explotación convencional en los departamentos de Confluencia y Añelo se advertía incluso desde organismos del Estado de los impactos de la ac-



tividad hidrocarburífera, por derrames, pero también por procesos de desertificación a los que aportaba la actividad petrolera con la apertura de picadas, locaciones, el polvo en suspensión que afectaba toda la flora y contribuía a que toda la vegetación se fuera secando”, explica Hernán Scandizzo, periodista, investigador e integrante del Observatorio Petrolero Sur (Opsur) y asegura que antes del Plan Estratégico del Bicentenario (2010) del gobierno nacional ya se había planteado el mismo programa, atendiendo al riesgo de la industria hidrocarburífera para el agro.

“Con la llegada de los no convencionales, los pilares de la publicidad gubernamental y de las empresas fue la convivencia entre la actividad petrolera y la actividad productiva”, indica Scandizzo y afirma que aún “si existiera” una extracción no contaminante los impactos de la industria siguen siendo altísimos, ya que se infertiliza la tierra y recuperarla es prácticamente imposible, sin contar los derrames, que efectivamente ocurren, y los residuos que la industria genera: **“Más allá de un hipotético caso de que las empresas logren reducir al mínimo los derrames, está todo el tema de la transformación del territorio, que genera un obstáculo para la posibilidad de desarrollo de actividades, sea para la producción agrícola bajo riego o sea para la ganadería”**.

“La matriz fósil no es eterna. Entonces se debe pensar en el mediano y en el largo plazo también para ver cuáles van a ser las actividades económicas de la provincia y, sin embargo, lo que prevalecen son las miradas a corto plazo que tienen que ver con la rentabilidad de la actividad hidrocarburífera, que es una actividad que está sujeta a la volatilidad de la industria”, explica.

La manzana envenenada

En marzo de 2023 una noticia alarmó a la población del Valle, donde todas las personas saben que en los alimentos hay veneno, pero casi no se habla de ello: habían detectado agrotóxicos en placentas de gestantes consideradas saludables, en el Valle de Río Negro (zonas rurales de Cinco Saltos y Contra Almirante Cordero) y Neuquén (Neuquén capital y zonas rurales de Plottier y Centenario). “Los resultados de este estudio piloto indican que las mujeres están expuestas simultáneamente a una gran mezcla de plaguicidas neurotóxicos y potencialmente peligrosos, los cuales podrían afectar a los neonatos a través de la transferencia placentaria. Los agroquímicos fueron ampliamente detectados en las mujeres embarazadas estudiadas, aun cuando su aplicación fue prohibida hace más de 20 años. La alta frecuencia de detección de clorpirifós demuestra su actual uso en el área de estudio. Además, estos resultados indicarían que el uso del suelo de las zonas rurales representaría una fuente de plaguicidas para sus residentes”, indica el estudio [publicado a fines de 2022 en la revista Salud Ambiental](#), de España.

Eduardo Siliquini es ingeniero agrónomo, productor agroecológico e integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-ST). Explica sobre el cultivo de peras y manzanas que, como son monocultivos y tienen problemas de plagas y enfermedades, se utilizan fungicidas, plaguicidas y herbicidas. “Es mucha la contaminación por agroquímicos. Hay industrias que venden estos paquetes tecnológicos y productores que acceden. La gente tiene que saber que esos alimentos que se producen de manera química no son sanos por la carga de agroquímicos”, asegura.

En la provincia donde la principal causa de muerte es el cáncer, desde el Encuentro Regional de Pueblos Fumigados por el Buen Vivir se dispararon los interrogantes sobre la toma de conciencia de los agrotóxicos que se consumen con los alimentos y los efectos en la salud y en los territorios. Participaron como organizadoras la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (APCA), la Red Jarilla y la Asamblea por los Ríos Libres, todos espacios de Neuquén.

Allí se difundieron informaciones sobre cantidad de residuos agrotóxicos en alimentos de producción regional: “El pimiento/morrón, la manzana y la pera son los tres alimentos con mayor cantidad de residuos de agrotóxicos (37, 35 y 33 principios activos, de un total de 80 agroquímicos encontrados por los controles del Senasa, entre los años 2017 y 2019). Seguidos por la uva (30), naranja (30), tomate (30), limón (29), durazno (28), lechuga (26) y banana (24), por sólo nombrar diez de las 48 frutas, verduras y hortalizas más contaminadas”.

Y también se presentaron alternativas: “Hay otro campo, empobrecido, campesino e indígena, que produce ancestralmente desde otra lógica (...) Existen maneras respetuosas con los ecosistemas, que posibilitan producir alimentos sanos y a menor costo, es decir accesible para las mayorías, sin trabajo esclavo y con derechos laborales; sino pensando en el derecho a la salud y la seguridad alimentaria de todes”. La propuesta pasar por decidir colectivamente quién produce, cómo y para qué, rediscutiendo el acceso y cuidado de la tierra, rediseñando las cadenas de comercialización y modificando los hábitos de consumo.

Avanzada urbana

Siliquini refirió también al negocio inmobiliario, explicando que el avance de barrios privados sobre chacras impactan por la urbanización directamente en la fauna y en las chacras: “Es como una cosa que avanza y va dejando todo perdido alrededor. Hace que el acceso a la tierra para producir sea imposible, porque infla los precios de las tierras. El objetivo no está hacia la producción de alimentos, sino a hacer casas para todo el sector que vive del petróleo, que son sectores con poder adquisitivo que puede acceder a otras cosas”.

En el sur de la provincia los loteos también crecen para favorecer al turismo, con las mismas consecuencias que en el Valle.

Extractivismo forestal

Como en [Chubut](#) y [Río Negro](#), en Neuquén se da la peligrosa convivencia entre especies autóctonas con especies implantadas. Existen en la provincia unas 63.500 hectáreas de "bosques implantados" —eufemismo de monocultivos de árboles—, de las cuales la mayoría está en manos de la Corporación Forestal Neuquina (Corfone), una empresa del Estado, y el resto se divide entre empresas privadas y asociaciones de fomento rural y municipios.

La especie más recurrente en esta región es de pinos ("pinus ponderosa"), considerada como invasión biológica por su capacidad de arrasar con la tierra y con el riesgo de ser una de las especies más flamíferas, además de consumir entre un 40 y un 60 por ciento más de agua que el bosque nativo.

El [incendio en Quillén en diciembre de 2021](#), provocado por la caída de un rayo en estos bosques implantados, consumió unas 6000 hectáreas de bosque en su mayoría nativo y se cobró la vida de dos personas que viajaban en uno de los helicópteros que combatía el fuego.

Desde la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (APCA) presentaron un reclamo cuestionando lo tardío de la reacción y exigiendo "que se contemple el



fin del monocultivos de pino ponderosa, por lo dañina que es esta especie exótica en la región” y propusieron la “reforestación con especies nativas”, además de planes de prevención de incendios y asistencia a brigadistas.

Eduardo Siliquini, del MNCI-ST, explica que el pino también es un monocultivo y, como tal, genera un impacto social, económico y ecológico. “El sur hace mucho que está muy activo con lo que es forestación y sus impactos vienen de esa época. De alguna manera hay una población que fue desplazada hacia parques nacionales con las tierras que se fueron vendiendo y se fueron haciendo producciones forestales”, relata.

Señala que Corfone sembró pino en tierras fiscales que estaban siendo utilizadas por comunidades mapuche, crianceros o familias que producía en los territorios con ganadería, quienes fueron desplazadas por el monocultivo forestal. De esta forma, fue desalojada la actividad caprina en el norte y en el centro de la provincia.

No es sequía, es saqueo

En julio de 2021, y tras cuatro años de alarmante sequía, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro pidió la [declaración de la “emergencia hídrica”](#).

El río Neuquén se encuentra apresado por el Complejo Hidroeléctrico Cerros Co-



lorados. Sobre el río Limay se encuentran las centrales de Alicurá, Piedra del Águila, Pichi Picún Leufú, El Chocón y su compensadora Arroyito. En el río Nahueve (afluente del Neuquén) están finalizándose las obras del Proyecto Multipropósito Nahueve, al cual familias y pobladores del lugar hicieron frente con una intensa lucha junto a activistas de diferentes lugares de la provincia, soportando **represiones, detenciones y desalojos**, una fuerza que no alcanzó para torcer el brazo del Gobierno y sus aliados.

“En el norte neuquino la sequía ha perjudicado a la producción. El rendimiento productivo mermó un montón. Los productores están con aguadas secas, con menos recursos forrajeros en el monte, eso perjudica a la ganadería y hace a que la gente migre desde lo que es esa zona rural a buscar laburo a las ciudades. Como son todos fiscaleros, la venta de la provincia de tierras a estancias en la zona de la cordillera perjudica porque deja menos campos para hacer veranadas a los productores trashumantes y la lucha está hacia los territorios, a que no vendan más tierras que usan los crianceros o las comunidades trashumantes”, señala Siliquini.

La trashumancia es una práctica ancestral que consiste en permanecer en tierras bajas durante el invierno y trasladarse (con los animales) a regiones altas, de mejores pasturas, en el verano (tierras de veranada). Cuando el otoño se aproxima, se vuelve a los campos de invernada y se reanuda el ciclo. El traslado puede durar hasta semanas.

Eduardo Oses, integrante de la Mesa Campesina del Norte Neuquino, explica que



la sequía viene siendo una gran complicación: “La actividad principal de las familias del norte neuquino tiene que ver con la trashumancia, donde el fuerte productivo es la producción caprina y donde se deja descansar los campos en veranada y en invernada también de acuerdo a sus tiempos estacionales. Producto de la sequía, las pasturas están mermando mucho, las aguadas ya no son las mismas y eso va generando también que los animales vuelvan un poco flacos de la invernada y se encuentren con una veranada de mala calidad en pasturas”. También indica que el invierno es más caluroso, las lluvias son menos, la nieve es muy necesaria y cada vez es menos lo que está cayendo en la Cordillera y es preocupante para el sector.

Trashumancia ancestral y familias crianceras

Eduardo Oses narra que en el norte neuquino una de las principales problemáticas que tienen es que un 90 por ciento de las familias crianceras produce y vive en tierras fiscales, no regularizadas por la Dirección de Tierra del gobierno neuquino. “Eso es una deuda histórica desde lo institucional, por gobiernos que no han aplicado políticas con nuestro sector que vayan en sintonía con regularizar la tierra de familias campesinas y crianceras”, denuncia Oses.

Explica que en el último tiempo vienen integrando un proyecto denominado Mesa Provincial de Tierras, junto con la Dirección de Tierras de la provincia, otras organizaciones y asociaciones de fomento rural. Desde el espacio se establece un protocolo de intervención frente a los conflictos. Para Oses esto “es un paso muy importante e histórico, vemos con buenos ojos el trabajo que se viene haciendo”. Reconoce que las familias campesinas y crianceras están desgastadas. Define que la problemática abarca “lo social, lo institucional y las barreras que se dan en esos aspectos”.

Otra de las principales problemáticas tiene que ver con las huellas de arreo, que son franjas de terreno que permiten el tránsito libre de animales que se trasladan de la veranada a la invernada y viceversa. Oses dice que el abordaje viene siendo superficial y no de fondo: “Los conflictos de huellas de arreo suelen ser con privados y para los privados no se aplica la [Ley de Huellas de Arreo, 3016](#), reglamentada en 2016”.

“Las instituciones se tiran el conflicto de una a otra. Se entiende que huellas de arreo es un conflicto de la Dirección de Tierras, pero también debe intervenir el Ministerio de Producción, que hace poco y nada para los productores caprinos”, asegura el integrante de la Mesa Campesina del Norte Neuquino.

Según la Ley de Huellas de Arreo, explica Oses, cuando hay un conflicto, los referentes de las organizaciones junto a gente del Ministerio de Producción van al

territorio a relevar y ordenar que se abran los alambrados, que “por lo general son huellas históricas conocidas por todas las comunidades” a las que un privado les puso un candado.

“Necesitamos que realmente se aplique la Ley de Arreo. Necesitamos la apertura de huellas históricas porque hoy el circuito (de traslado) que están haciendo los productores es el doble y muchas veces el triple del que deberían hacer. Con el solo hecho de abrir una huella de arreo histórico podríamos mejorar condiciones de vida y de productividad a las familias”, asegura Oses.

La agroecología que brota

Miguel Sheridan es productor agroecológico, agrónomo, trabajador del INTA e integrante de la Red de Agroecología. Cuenta que en los últimos ocho años la agroecología viene creciendo en la provincia. “Por año prácticamente se están duplicando los casos a nivel de predios, fincas, chacras, además de todo lo que se está trabajando en huertas comunitarias a partir de organizaciones de la economía popular, institucionalidades como el Programa de Desarrollo Agroalimentario (Proda), Pro-Huerta y distintos emprendimientos autonómicos que llevan adelante huertas, que han sido históricamente las reservas de la producción agroecológica de la provincia de Neuquén”, señala.

Explica que la decisión de “producir de otra manera” nunca está libre de dificultades: “La agroecología es la priorización de los procesos ecosistémicos en un espacio determinado que requiere cierto nivel de acceso a los bienes comunes, a la tierra, el agua, la semilla como los principales y a partir de ahí, más allá de la situación de tenencia de la tierra, en esas condiciones se puede avanzar hacia la agroecología para los mercados de intercambio, ferias, comedores, comercialización por canasta y bolsones. No son productos exportables, se despega de todo lo que es las divisas”, detalla.

Detalla que las certificaciones agroecológicas no son lo mismo que la concepción de la certificación orgánica, sino que se trata de monitorear de forma participativa la calidad del proceso productivo, trabajar los conflictos que surgen en espacios con participación de las personas que son consumidoras de esos alimentos y las productoras.

Precisa que en la zona Confluencia, entre El Chañar y Senillosa, identificaron doce casos que están produciendo en esa modalidad, en forma de transición o ya estabilizada hace varias temporadas con manejo agroecológico. También en Picún Leufú existen predios que están volcándose a esa forma productiva. “De alguna manera sistemas campesinos trashumante del norte y centro neuquino parten de esta modalidad de la priorización del uso de los distintos tipos de

campo, la adecuación a los ciclos estacionales, la optimización del uso del agua. Son todas cuestiones que se pueden asimilar a la agroecología”, afirma.

Mónica Zapata es agricultora y produce junto a su compañero en Vista Alegre Sur: “Comenzamos el camino a la agroecología por diferentes motivos, por nuestra salud, la de los consumidores y el ambiente que nos rodea, por una vida más tranquila y armónica”. Martín se ocupa de la parte productiva y ella de la parte comercial, administración y redes sociales del emprendimiento “Buena Vida”, aunque “por supuesto que todos nos ayudamos, es un emprendimiento familiar”. Indica que la principal dificultad es la falta de mano de obra por la desvalorización de los oficios agrícolas y la inestabilidad económica dificulta las inversiones a largo plazo, tan necesarias en la producción agrícola.

“En una gran asimetría, conviven los dos modelos, el que depende de insumos externos completamente y ajustado a determinados estándares de calidad cosmética y de consumos, y otro que tiene que ver con alimentos para las propias familias”, explica Miguel Sheridan, de la Red de Agroecología.

Cuenta también que muchos productores van haciendo la transición poco a poco, con algunas variedades y siempre para mercados de proximidad.

Sheridan propone una “re-educación de todos nosotros como consumidores”, en términos de aceptar la oferta estacional y el agregado de valor local a los productos para estirar su consumo a lo largo del año, pero no pretender en pleno invierno un tomate fresco.

“El consejo es el de producir soberanía alimentaria desde la agricultura familiar, para que no dependa del medio, y poder vivir de la venta de sus excedentes y sin contaminar, generando alimentos sanos y saltando intermediarios, para que el precio de los alimentos sean accesibles, un derecho. **Que comer una fruta no sea un privilegio**”, propone Eduardo Siliquini. Y señala como fundamental que las luchas de los territorios también incluyan generar vínculos entre los consumidores y los productores de alimentos. Reconoce que es un desafío. “En las góndolas no están los alimentos que producen los productores familiares y les cuesta llegar. Pero también empieza a haber un resurgimiento de nodos de comercialización que un poco hace al empoderamiento del productor. Eso es algo que recién está comenzando en la provincia”, advierte.

Marina Sánchez es activista del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y participa de un proyecto de extensión con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue. Cuenta que se sumaron a la actividad por la necesidad de alimentos y la falta de tierras.

“El proyecto de extensión lo formaron los compañeros despedidos de la Secre-

taría de Agricultura Familiar y desde 2022 estamos participando como cooperativa agroecológica, pero hay vecinos en general, jubilados y estudiantes, es una articulación que viene generando reproducción de semillas que se entregan en hospitales de Neuquén. Y en el Centro de Salud de Centenario tienen el plantinero para repartir después en distintas ferias, intercambios de semillas, como objetivo del proyecto”, detalla.

En la región se realizan con frecuencia ferias de intercambio de semillas y de plantines. También hay espacios que venden bolsones de alimentos agroecológicos y orgánicos, que van teniendo cada vez más salida comercial, como Flor Dorada, Buena Vida Verduras Agroecológicas, Pachamama y Le Jardinere. Muchas de las producciones llegan tanto a Neuquén como Río Negro.

07



ENTRE RÍOS: AGROECOLOGÍA PARA RECUPERAR BIODIVERSIDAD ENTRE AVÍCOLAS, AGROTÓXICOS E INCENDIOS

Recursos hídricos y tierras fértiles son la base de una provincia con producción variada de alimentos. Líder nacional en el sector avícola y citrícola; el modelo agrotóxico avanzó en el territorio inundando de soja el 20 por ciento de las hectáreas agropecuarias, concentrando tierras y empujando la frontera al Delta, que registra incendios récords. Productores, asambleas y municipios impulsan la agroecología.



Entre Ríos posee una rica biodiversidad en donde se combinan ecosistemas acuáticos y terrestres y climas que propician las actividades agrícola-ganaderas. Ubicada en el centro-este de Argentina, la provincia tiene una superficie de 78.781 kilómetros cuadrados (7.878.100 hectáreas): 77 por ciento de tierra firme, 20 por ciento de islas, delta, predelta y anegadizos; tres por ciento agua, rodeada por los ríos Paraná y Uruguay, y atravesada por ríos y arroyos. Junto a Misiones y Corrientes conforma la región geográfica de la Mesopotamia, junto a las provincias de Córdoba y Santa Fe es parte de un bloque de integración política denominado **Región Centro**, y las ricas tierras del sur provincial se incorporan a la región pampeana, corazón del agronegocio.

La producción y exportación de alimentos es la principal fuente de ingresos en una provincia que lidera la producción citrícola y avícola del país, y es la segunda productora de arroz y miel. Sin embargo, la soja se expandió más allá de las tierras agrícolas del sur, de la mano del modelo atado a los agrotóxicos, y —en los últimos 30 años— pasó de ocupar 50 mil hectáreas (ha) a 1.000.000, en promedio, un 20 por ciento del área destinada al sector agropecuario provincial. En paralelo, Entre Ríos vivió un proceso de concentración de tierras: entre el Censo Nacional Agropecuario de 2002 y el último realizado en 2018 las únicas unidades productivas agropecuarias que crecieron fueron las del estrato más alto (7500 a 20.000 ha o más) y lo hicieron en un 140 por ciento, avanzando sobre los productores más pequeños.

La expansión de la frontera agropecuaria sobre el Delta del Paraná agrava el impacto de las consecuencias del cambio climático con los incendios récords registrados desde 2020 como símbolo más mediatizado. También el modelo agrotóxico enciende alarmas sobre el impacto en la salud: Entre Ríos registra una tasa de mortalidad por cáncer que supera la media nacional. En ese contexto, los productores agroecológicos empujan en minoría y sin respaldo de políticas públicas un modelo de producción de alimentos sanos, mientras asambleas y organizaciones sociales luchan contra las fumigaciones. La organización desde abajo empujó la prohibición del glifosato y Plan de Alimentación Sana Segura y Soberana (Passs) en el municipio de Gualeguaychú.

Delta, puertos y una tierra de producción de alimentos

La geografía entrerriana posee numerosos humedales, ecosistemas vitales para garantizar calidad y abundancia de agua. El Delta del Paraná —la mayor parte de la cuenca se encuentra en territorio entrerriano— es el mayor exponente de este ecosistema, que abastece a ciudades y actividades productivas en una de las zonas más densamente pobladas del país.

Los importantes cursos de agua propician la actividad agropecuaria e industrial, así como las vías navegables y puertos, entre los que se destacan el de Con-



cepción del Uruguay e Ibicuy, que permiten el transporte de mercaderías desde un punto logístico estratégico.

Entre Ríos **exporta a más de 130 mercados**, según cifras del gobierno provincial. Los principales productos son **pollo, arroz, maíz, trigo, soja y miel**. China es el principal país comprador y concentra el 26,02 por ciento; seguido por Brasil (10,64), Chile con (6,73), Estados Unidos (4,68), Vietnam (4,18) y Uruguay (3,27), Argelia (3,08), Indonesia (2,41) y Arabia Saudita (2,38). **La producción y exportación de alimentos es la principal fuente de ingresos de la provincia.**

En enero de 2023, el gobierno provincial anunció que la Administración General

de Puertos estaba avanzando para incorporar a Entre Ríos a la vía navegable troncal de la [Hidrovía Paraná-Paraguay](#), a través del canal Ibicuy-Guazú-Talavera, con salida por el canal Martín García. La intención, según declaran los funcionarios entrerrianos, es lograr que la provincia pueda desarrollar terminales portuarias análogas a las del polo oleaginoso del puerto de Rosario, [protagonista central en la comercialización del agronegocio](#).

La provincia integra la región pampeana en la franja sur del margen del Río Paraná. Allí comparte la fertilidad de sus tierras para la actividad agrícola. No obstante, la incorporación del paquete tecnológico desde la década de 1990 —el **modelo agrícola dominante basado en semillas transgénicas con aplicación de agrotóxicos**—, ha permitido el desarrollo de los cultivos, sobre todo de la soja, en casi toda la provincia. Significó el avance de la frontera agrícola sobre superficies que antes eran dedicadas a la ganadería, con el costo ambiental que ello conlleva, una pérdida de biodiversidad irreversible.

Según el último [Censo Nacional Agropecuario](#) (CNA), las actividades agropecuarias ocupan el 66 por ciento del territorio entrerriano (5.203.285 ha). Durante la campaña 2020/2021, unas 2,3 millones de hectáreas de la provincia fueron sembradas con los principales cultivos: soja, sorgo, maíz, trigo, girasol y lino, según [datos de Bolsa de Cereales entrerriana](#).

La soja presenta una evolución ascendente en los últimos 30 años: pasando de un promedio de 50 mil hectáreas a 1.000.000 en la actualidad, según datos del CNA.

82

Más allá de la pampeanización y el avance de la soja transgénica —ocupó el 46 por ciento del total implantado en la campaña 2020/2021—, Entre Ríos continúa siendo la [segunda productora nacional de arroz](#), detrás de Corrientes, y ocupa el **primer lugar del país como exportador de dicho cereal**. Unas 54.850 hectáreas fueron sembradas con arroz en Entre Ríos en la campaña agrícola 2022/23, lo que determinó una producción total final de 389.700 toneladas. Las exportaciones argentinas tienen como destino a Brasil (46,7 por ciento) y a mercados como Chile, Irán, España, Haití, Cuba y Senegal.

Otro cultivo de importancia de la producción agrícola entrerriana son los cítricos. Según datos provinciales, **Entre Ríos es la primera productora nacional de naranjas (35,70 por ciento), de mandarinas (44,15 por ciento) y de arándanos**. Según el último [Censo Nacional Agropecuario](#) (CNA), la industria forestal también tiene un desarrollo destacado en el modelo productivo entrerriano. La **implantación de árboles, mayormente eucalipto, ocupa más de 100 mil hectáreas**, de las 900 mil que ocupan los "bosques implantados" a nivel nacional, lo que la convierte en la **tercera provincia en importancia para esta actividad extractiva**, detrás de [Corrientes](#) y [Misiones](#).

Entre ríos, galpones, gallinas y huevos

En cuanto a la producción de carne animal, según el Ministerio de Economía provincial, la avicultura ocupa un lugar destacado: **Entre Ríos es la principal productora de carne aviar del país, con el 51,6 por ciento de la producción**, seguida por Buenos Aires (35,5 por ciento). En tanto, en la producción de **ganado bovino, la provincia es la cuarta productora a nivel nacional**. Según el CNA 2018, hay más de 10.000 predios dedicados a la cría de bovinos —con unas 2.866.264 cabezas—, mientras que existen 604 tambos, un ocho por ciento del total a nivel país.

En cría de ovinos son más de 2.000 unidades productivas con unas 200.969 cabezas, mientras que 928 establecimientos se dedican a la cría de porcinos con unas 312.895 cabezas y una faena que alcanza solo el 3,8 por ciento del total nacional. En ganado caprino, la provincia cuenta con 183 unidades productivas, con 6.262 cabezas.

El lugar destacado es el de la avicultura. A nivel nacional, la provincia concentra **el 63 por ciento de las granjas de engorde y el 29 por ciento de los establecimientos industriales del sector**. La [producción de huevos frescos y exportación de huevos](#) industrializados representa el **23 por ciento del país**.

En mayo de 2023, luego de detectarse **gripe aviar** en una granja comercial de la localidad entrerriana de General Racedo, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la provincia instalaron un [operativo de emergencia para contener el brote](#). A pesar del brote, el modelo industrial de producción avícola basado en el hacinamiento, y otras [condiciones que propician la aparición de ese tipo de virus](#), quedó fuera de cualquier cuestionamiento.

Otro modelo de producción de alimentos, con la vida en el centro

Germán Rearte Uzín es productor agropecuario de cuarta generación y, cómo eligió definirse ante Tierra Viva, un “mili-trabajador” de la tierra. En [Minhoca](#), emprendimiento ubicado en Villa Tabossi, tiene unas 160 hectáreas con ovejas, vacas, cultivos —trigo y pasturas mayormente—, gallinas y huevos. Todo bajo manejos agroecológicos.

“No siento que vayamos a contramano del modelo industrial hegemónico, sino que estamos haciendo las cosas del único modo sostenible. Si queremos seguir vivos y en este planeta todos vamos a tener que producir de este modo”, asegura el productor agroecológico en una provincia en donde la mayoría opta por el modelo tóxico. Según el CNA 2018, **de las más de 13.000 unidades productivas que existen en toda la provincia, solamente 84 explotaciones agropecuarias se identificaron como orgánicas, 26 como biodinámicas y 143 agroecológicas.**

“La principal dificultad es encontrar quienes puedan asesorarte para hacer un **manejo integrado que prescinde completamente de tóxicos**. Hay un montón de cadenas técnicas que requieren asistencia y no hay tantas personas que puedan brindarla”, señala Uzín sobre los problemas para ampliar la transición agroecológica. Pese a eso, la apuesta no se cuestiona: **“O morimos o hacemos agroecología**. El modelo hegemónico, sea por lo económico, por la contaminación, por el cambio climático o por la falta de diversidad, biológica, social y territorial, por cualquier lado que se lo mire, tiene poco tiempo de vida”.

Resistencia a los antibióticos, pandemias, brotes virales, gripe porcina, aviar, son algunos avisos. “Estamos yendo en contra de la naturaleza. Hacia la autodestrucción. **Cuándo entrás a un gallinero no necesitas que haya un brote de gripe aviar para darte cuenta que ahí hay algo que no está bien**. Trece, catorce gallinas poniendo huevos, encerradas en una jaula, dentro de un galpón en dónde no entra la luz, durante un año, hasta que se mueren, es una muestra que existieron un montón de avisos anteriores que no se vieron”, analiza el productor de Minhoca.

Para Uzín el desafío es seguir apostando a la vida. “Aunque tengamos todas esas señales yo no voy a dejar de hacer y caminar hacia ese lugar de construcción de raíces múltiples y combinadas, de defensa de la biodiversidad y el amor. Hay una frase que me gusta mucho que dice: ‘Aunque me digan que mañana el mundo va a terminar yo igual hoy planto un árbol’”.

Propiedad de la tierra y elecciones tóxicas, un modelo en llamas

En Entre Ríos, como indica el CNA 2018, **hay 13.760 unidades productivas, sobre las 5.203.285 hectáreas en producción agropecuaria, pero el reparto de esas tierras queda en pocas manos**.

La concentración de la tierra se evidencia al desagregar la información del último Censo: unos 12.638 emprendimientos productivos desarrollan sus actividades en 2.042.000 hectáreas —acumuladas en extensiones de menos de 5 y hasta 1000 hectáreas—, mientras 1076 unidades productivas —que poseen parcelas de entre 1000 y 7500 hectáreas— ocupan unas 2.412.000 ha. **En el extremo más concentrado, sólo 46 emprendimientos —que poseen predios de 7500 a 20.000 hectáreas o más— explotan unas 750.000 hectáreas**.

“En el análisis de la evolución del número de unidades productivas por estratos, tomando los CNA 2002 y 2018, **se observa una pérdida de unidades en todos ellos, a excepción del estrato de 20.000 hectáreas y más. Este último es el único estrato que se incrementa y lo hace en un 140 por ciento**”, aseguran las investigadoras Isabel Truffer y Daniela Gamboa en *La Argentina Agropecuaria vista desde las provincias: un análisis de los resultados preliminares del CNA 2018*.



En paralelo, el registro provincial de expendedores y aplicadores de plaguicidas, permite describir el [modelo agropecuario que se aplica en esas tierras](#) concentradas. Hay registradas 445 máquinas autopropulsadas para la aplicación de agrotóxicos, 75 de arrastre, 14 aeroaplicadores y 121 comercios de expendio. Es que con el crecimiento y predominio del agronegocio en la provincia, el volumen de utilización de agrotóxicos creció exponencialmente, así como las enfermedades, entre ellas, el cáncer.

Con datos alarmantes cómo los relevados por un [trabajo financiado por el Instituto Nacional del Cáncer \(INC\) y la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNR](#), que concluyó que mientras la tasa nacional de mortalidad por cáncer en hombres

fue de 152 casos cada cien mil habitantes, **la tasa de mortalidad de los hombres residentes en Entre Ríos fue de 185,9. O sea, superior a la media nacional.**

Entre Ríos tampoco escapa de las afectaciones que produce el modelo extractivo: sequías, incendios y contaminación. Según la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, en el cierre de la campaña gruesa 2022/2023, los registros pluviales en Entre Ríos se posicionaron entre los más bajos de los últimos 60 años en gran parte de la provincia. **Ese escenario de pocas precipitaciones y temperaturas por encima de lo normal se completó con incendios récords registrados, cada año, desde 2020.**

Sólo en los primeros ocho meses de 2022, según un relevamiento realizado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) casi 100 mil hectáreas se quemaron en el Delta del Paraná entrerriano y santafesino. Desde los incendios registrados en 2008, la cartera nacional de Ambiente coordina el llamado Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas-DP), que también integra a Buenos Aires, aunque Entre Ríos posee el 80 por ciento de la jurisdicción.

En todo 2022, **la provincia informó 365 mil hectáreas arrasadas por el fuego.** El reporte diario de incendios del Ministerio de Ambiente dejó de informar las hectáreas acumuladas que se pierden bajo el fuego en febrero de 2022. Mientras, **la Ley de Humedales sigue sin ser aprobada en el Congreso**, dejando en claro las prioridades del poder político. Este año no fue la excepción, el 2023 comenzó con incendios en Ibicuy y Gualeguay.

Dulce rebeldía, apicultura y producción agroecológica

La producción apícola en Entre Ríos es considerada una de las principales cadenas de valor agropecuaria, siendo la **segunda provincia productora de miel a nivel nacional**, luego de Buenos Aires, tanto por sus volúmenes de producción como así también por la cantidad de productores que involucra esta actividad. **En tierras entrerrianas se produce el 21 por ciento de la miel de Argentina.** La provincia cuenta con alrededor de 3.350 productores que poseen unas 840.000 colmenas distribuidas en 11.080 apiarios, que **en la campaña 2022-23 generaron 5.000 toneladas.**

En minoría, produciendo de modo sustentable para el ambiente, con dificultades y sin políticas que apoyen a quienes producen alimentos sanos y nutritivos, los emprendimientos que eligen disputarle terreno al modelo hegemónico florecen y avanzan. Victoria Veronesi es madre, docente, cuidadora de abejas y productora de miel. “Estamos en un pequeño campito que arriendo en Pueblo Belgrano, pegado a Gualeguaychú. Tengo unas 40 colmenas y el trabajo se realiza con lo que denomino **apicultura natural regenerativa**”.

“Del suelo al cielo”, aclara sobre su modo de trabajo que es a la vez un modo de vida, que busca el cuidado de los polinizadores sin los cuáles no habría vida ni alimentos posibles. **“Creo en la posibilidad urgente de aprender modos de trabajo en los apiarios, que sean armoniosos con las colmenas en tanto seres vitales. Modos justos y honestos también entre las personas que eligen producir ese alimento y quienes eligen consumirlo, en senderos de intercambio o comercialización que hagan posible el encuentro entre personas en torno a una alimentación sana.”**

En su emprendimiento, [La Loma de los Quinotos](#) también se realizan pasturas para las abejas, trigo y lino agroecológico. Para cada tipo de producción, siempre en sociedad con familia y amigos y a pequeña escala. Allí también se dan cursos productivos y se amadrinan colmenas de otros apicultores. **“En un tiempo mundano en el que prevalecen modos vinculares dañinos, necesitamos recrear la posibilidad de mutualidades que conspiran para la sobrevivencia de la vida”, afirma.**

Amarantos, resistencia y planes para la alimentación sana

Aunque la agricultura se desarrolló en las últimas décadas hacia un modelo agrotóxico, **Entre Ríos es también el lugar de resistencias históricas para detener ese avance y denunciar los daños provocados por los agrotóxicos.** “No es fácil ser la sombra del éxito sojero”, decía el entrerriano [Fabián Tomasi](#), un emblema nacional e internacional de la lucha contra las fumigaciones. Él se denominaba a sí mismo como Amaranto, por la planta que posee resistencia al herbicida glifosato. Fabián fue un peón víctima del modelo para el que trabajaba. Oriundo de Basavilbaso, falleció en septiembre de 2018 consecuencia del daño de los agrotóxicos que manipulaba y a los que hasta sus últimos días se encargó de denunciar, con su cuerpo envenenado y su voz que se convirtió en semilla de las luchas contra el agronegocio.

Unidos en ese mismo grito, con un recorrido de años de resistencia, la [Coordinadora Basta es Basta](#) nuclea a las asambleas socioambientales de la provincia, se encarga de visibilizar los daños del actual modelo productivo y de trabajar para alejar los agrotóxicos de escuelas y hogares. En mayo de 2019, la [coordinadora consiguió un fallo del Supremo Tribunal de Justicia \(STJ\)](#) provincial que declaró nulo un decreto del **gobernador Gustavo Bordet, que permite fumigar a sólo 100 metros de las escuelas y a 500 de modo aéreo.** Cinco meses después, con otra conformación del STJ entrerriano, [el fallo se revirtió basado en informes empresariales](#), desconociendo estudios de universidades públicas y con presión de las organizaciones de la Mesa de Enlace.

El caso llegó hasta la **Corte Suprema. En marzo pasado, el máximo tribunal avaló la decisión del STJ provincial sin siquiera tratar el tema,** apoyada en un artículo de forma, el 280 del Código Procesal, que dice “cuando las cuestiones

planteadas resulten insustanciales o carentes de trascendencia”. El pedido de la Coordinadora buscaba su intervención para frenar el ecocidio en curso.

“Lo terrible de la decisión es que la Corte Suprema se lava las manos ante un tema tan grave. Pero además lo hizo después de cuatro años de demora”, expresó a Tierra Viva Daniela Verzeñassi, integrante de la Coordinadora. **“Nunca me imaginé eso. Fue muy doloroso porque en ese tiempo la gente siguió enfermando y muriendo.** Mientras dilataban respuestas seguíamos recibiendo noticias tremendas. Por ejemplo, nos enteramos de una niña más fallecida y de otra niña internada con un cuadro oncológico en el Hospital Garrahan”, recuerda.

A contramano de esa política tóxica, la anfitriona del “Carnaval del País”, uno de los festejos más conocidos entre la amplia oferta turística entrerriana, la ciudad de **Gualedguaychú** se volvió reconocida **por prohibir completamente el herbicida glifosato —Ordenanza Municipal 12216/18— y cambiar el rumbo de las políticas productivas**, apostando a un cambio de modelo que prioriza la salud y potencia la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos.

En ese sentido, desde el gobierno municipal lleva adelante el **Plan de Alimentación Sana Segura y Soberana (PASS)** cuyo objetivo es lograr “progresivamente una soberanía alimentaria local mediante la promoción, estímulo, fomento y acompañamiento de la producción sustentable; la disponibilidad, accesibilidad física y económica, adecuación y sustentabilidad para toda la población de Gualedguaychú y la economía social y solidaria para el fortalecimiento del tejido comunitario rural y urbano del Municipio”.

“Todo lo que hacemos desde la resistencia se carga de sentido cuando vemos casos como ese, y también cuándo nos enteramos de la multiplicidad de experiencias agroecológicas que aparecen. Cada vez son más, algunas en red, algunas en solitario, que apuestan a la producción sin utilizar venenos, a la cultura del contacto con la tierra, a la agricultura que produce alimentos sanos”, grafica Verzeñassi la esperanza entre tanto campo fumigado.

08



JUJUY: INGENIOS AZUCAREROS, AGROECOLOGÍA Y DISPUTA POR LOS TERRITORIOS

Puna, Quebrada, Valles Meridionales y Orientales. Son las cuatro regiones en las que se divide la provincia. En todas hay presencia de agroecología y, también, del modelo empresario, cuyo símbolo es el denunciado Grupo Ledesma. La producción campesina e indígena es notoria, con sus cultivos de alimentos sanos. La disputa por la tierra, el agua y los peligros de la megaminería.



Las prácticas agroecológicas de Jujuy coexisten con las que demanda el mercado: sea la agricultura que responde al agronegocio (paquete transgénico con agrotóxicos) o la orgánica de exportación bajo control de la Unión Europea. En el campesinado, familiar e indígena, los distintos modelos conviven: sostienen un manejo ecológico en la producción de los alimentos que destinan para autoconsumo y, al mismo tiempo, comercian en mercados, ferias y negocios de los pueblos. La transición agroecológica avanza pero el cuello de botella es la tenencia de la tierra. Radiografía de una trama que complejiza aún más el proceso político jujeño.

La provincia limita al norte con el Estado Plurinacional de Bolivia y en los restantes puntos cardinales la rodea completamente la provincia de Salta. Según datos oficiales, Jujuy tiene 53.219 kilómetros cuadrados de superficie que, transformados, se convierten en casi cinco millones y medio de hectáreas. Las productivas para agricultura o explotaciones agropecuarias, con y sin límites definidos, se extienden sobre 1.543.945 hectáreas, según indican Damián y Laura Alcoba en su [análisis del Censo Nacional Agropecuario 2018](#) enfocado en Jujuy. Es decir, el 29 por ciento o casi la tercera parte de su superficie.

Por otro lado, por su fitogeografía, **Jujuy se divide genéricamente en cuatro regiones.** La **Puna** (también altiplano andino) que engloba a todo el relieve de altura, montañoso y árido con su biodiversidad, cuencas y humedales, que abarca los departamentos de Yavi, Santa Catalina, Rinconada, Cochinoca y Susques. Le sigue la **Quebrada**, nombre que deviene del gran tajo de Humahuaca, columna vertebral para toda cañada o cañadón anexo que tribute aguas al Río Grande. Abarca los departamentos de Humahuaca, Tilcara y Tumbaya.



Luego sigue la región de **Valles Meridionales**, al sur de la gran Quebrada. Persiguiendo imaginariamente las rutas nacionales 9, 66 y 34, se extiende desde la localidad de Lozano hasta el río De Las Pavas, límite natural con la provincia de Salta. Incluye los departamentos de El Carmen, San Antonio, Palpalá y Manuel Belgrano.

Por último, los **Valles Orientales** situados al este de las serranías de Zapla, Zenta, Cresta del Gallo y Maíz Gordo. Está compuesta por valles de pie de monte en la fitogeografía de las yungas y que se pierden en las llanuras bajas y cálidas, corazón de la histórica producción azucarera. Incluye los departamentos de Valle Grande, Ledesma, San Pedro y Santa Bárbara.

Dos modelos muy distintos

“En Argentina, la agricultura familiar copió el modelo norteamericano”, respondió David Galián a Tierra Viva, en alusión a la idea de gestión estatal de la granja familiar. Integra la Agencia Experimental de Hornillos, que en Quebrada de Humahuaca depende de la Estación Experimental INTA Abra Pampa, y trabaja en talleres con productores del territorio. Situado en su contexto, englobó la agroecología que se practica superpuesta con las otras que hegemoniza el mercado.

91

Explicó que sobre la ruta nacional 9 el campesinado destina casi toda la tierra productiva de sus parcelas a generar alimentos frescos según las exigencias de la demanda, que son fundamentalmente "estéticas", porque la producción se destina a grandes cadenas de supermercados



o comercios que se abastecen directamente del Mercado Central de Buenos Aires. Por lo tanto, esos productos frescos (acelgas, puerros, zanahorias, remolachas, lechugas, tomates, ajo; papa, habas, arvejas, choclos, zuchini, espinaca, brócoli) deben tener un tamaño uniforme para la presentación cuidada y un color tan regular como llamativo.

“Se produce contra estación, cuatro meses al año, cuando en otras regiones por el calor hace imposible la producción”, continuó. Ese período abarca de diciembre a marzo. La territorialidad productiva está asociada directamente a la auto-vía nacional, y es dependiente del paquete tecnológico compuesto por semillas y agroquímicos sintéticos. El modelo deteriora los suelos, pero el factor influye aún más cuando la tierra no está en manos de quienes la trabajan.

En su análisis, Damián y Laura Alcoba marcaron que en Jujuy los arrendamientos crecieron un 74 por ciento entre 2002 y 2018, según información que se desprende de los Censos Agropecuarios (CNA) de esos años. Pero la ocupación de hecho constituyó la condición de tenencia que mayor expansión experimentó, con un crecimiento del 540 por ciento. “Esta superficie representa el 12,4 por ciento del total, de la cual 77 por ciento son fiscales”, mencionaron. La Quebrada de Humahuaca, en la lectura de los dos analistas, presenta una contradicción: “Experimentó un proceso de expansión de horticultura a partir de una corriente migratoria de origen boliviano, pero paradójicamente es la horticultura una de las actividades que desciende en superficie”.

Una explicación plausible o un argumento ante la paradoja es la extranjerización de tierras en la región de Quebrada. No se puede olvidar que los procesos de patrimonialización y que ese gran tajo en el relieve jujeño es Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 2003. Hasta abril de 2022, de la información que proporciona el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la sección Tierras Rurales, se desprende que **el departamento Humahuaca está primero en el ranking de hectáreas extranjerizadas en la provincia, con el 26 por ciento de su territorio** (98.518 hectáreas de las 379.200 que corresponden a esa jurisdicción departamental).

Javier Méndez, integrante del [Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra \(MNCI-ST\)](#) en la Quebrada y Valles (meridionales y orientales) jujeños, afirmó que son las organizaciones de la agricultura familiar las protagonistas de la producción agroecológica. Además, pospandemia, la demanda de alimentos sanos creció sostenidamente. “Las comunidades alejadas de la ruta (nacional) 9 cumplen hace mucho tiempo con la producción sana y agroecológica. Y muchas instituciones quieren llegar a ellos”, explicó Méndez en alusión a los pequeños productores del campesinado familiar e indígena.

Señaló que, como Red Puna, buscan intermediar para que las familias puedan

comerciar sus productos. La Red, que integra el MNCI-ST, organiza expo-ferias agroecológicas en San Salvador de Jujuy una vez por mes. “De esa manera los productores tienen un rédito económico con su producción”, mencionó Méndez, quien también los apoya con transporte y empaquetado de la carga.

Señaló que otras organizaciones agrícolas se unieron a la iniciativa, como Cauqueva de Maimará y la Unión de Pequeños Productores Agricultores de Jujuy (UPAJ). Con la Red Puna y el MNCI-ST conforman la trama de organizaciones que desde octubre de 2022 integran el Nodo Agroecológico Jujuy, que promueve la [Dirección de Agroecología de Nación](#).

En el transcurso de las entrevistas de Tierra Viva aparecieron críticas hacia niveles de gestión estatal. Sobre todo, porque la integración entre organizaciones, campesinado y comunidades que permite generar redes y espacios para los subsidios y la comercialización, llega al norte con años de retraso y con la carga del papeleo que se diseña desde la centralidad del puerto.

Como contracara, el impulso actual sobre la práctica agroecológica en la producción alimentos (ancestral en Jujuy) proviene por la demanda de consumidores que habitan en grandes centros urbanos. Avanza desde nichos del buen vivir y se agiganta por la concientización sobre la calidad de los productos que alimentan la mesa nacional.

93

En el contexto, David Galián, del INTA Hornillos, destacó la sanción de la Ley de Agricultura Familiar (27.118), aprobada en 2015, que declaró la práctica de interés público por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria de la población. La norma fue reglamentada el 6 de junio de 2023 por el decreto presidencial 292, [muy cuestionada en su forma \(con pocos artículos reglamentados\) por las organizaciones campesinas](#).

“¿Por qué cuesta reconocer al campesinado como actor relevante para la producción de alimentos?”, preguntó Tierra Viva a Antonela Geronazzo, agrónoma de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, que integra la cátedra "Agroecología".

“Los papines de La Quiaca —citó como ejemplo el caso de la capital del departamento Santa Catalina— circulan en ese mercado interno, pero no se los reconocen como un alimento que abastece a los quiaqueños. Los campesinos y comunidades que la producen, quedan fuera del mapa de los actores importantes y fuera de toda propuesta de desarrollo.”

Destaca que en la pandemia “la población no murió de hambre en cada uno de esos lugares (por las poblaciones dispersas por rincones de la puna y el altiplano andino jujeños) porque los bolsones de los productores

familiares, campesinos e indígenas abastecieron a la cercanía. Fue muy claro y, pese a todo, todavía hoy no se los considera productores agrícolas”.

En ese análisis, la agrónoma describió el **cuello de botella que comparten todas las regiones y todas las familias campesinas e indígenas de Jujuy: la disponibilidad de tierra y de agua**. El primer ítem es el que más impacta en términos agroecológicos. Los productores no pueden planificar mejoras en los suelos donde producen por la simple razón que no son propietarios de parcelas, sea como titulares registrales o como colectivos indígenas. Su descripción se complementa con datos que proporcionan Damián y Laura Alcoba desde la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Giberti. En el capítulo jujeño describieron que **la estructura agraria provincial “se compone en su gran mayoría por pequeños productores (85 por ciento) que ocupan un tercio de la superficie agropecuaria**. Este sector, agricultores familiares mayoritariamente transicionales, combinan características de subsistencia y de integración al mercado, produciendo alimentos y el grueso del empleo rural, con escasa disponibilidad de recursos productivos”.

Semillas, arriendos y millones de pesos

Alicia Vega es delegada de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) en Jujuy y productora de verduras (tomates, pimientos y zapallitos) en la localidad de Fraile Pintado (departamento de Ledesma, en la región de los Valles Orientales). Explicó que desde hace seis años la organización aplica métodos agroecológicos en su producción, principalmente a partir de bioinsumos que producen en los Consultorios Técnicos Populares (Cotepo). Sin embargo, al ser las y los productores mayoritariamente arrenderos, la transición agroecológica es lenta.

“Necesitamos que la tierra sea propia porque para hacer agroecología tenés que hacer un mejoramiento de suelos. Nosotros alquilamos dos hectáreas y las preparamos, pero cuando viene el terrateniente y debemos irnos, todo lo que invertimos se pierde”, detalló el algoritmo maniqueo con el que conviven: velocidad de producción que imprime la demanda, demanda que solicita calidad en los alimentos que consume, terratenientes que arriendan parcelas sin contemplar otros tiempos para el cuidado de los suelos.

Para la delegada de la UTT, los beneficios de la agroecología son muchos porque los desancla paulatinamente del consumo productivo dolarizado al que los conduce la utilización del paquete tecnológico de semillas y agrotóxicos. Otro lazo difícil de quebrar aún son las semillas. “Las 12.500 semillas de tomate tienen un costo cercano a los 900 mil pesos”, contó la productora. La suma se ensancha en ceros con el arriendo de lotes. “El arriendo de una hectárea por seis meses

en Fraile Pintado tiene un costo de medio millón de pesos. Es un precio que se puede tomar como testigo porque se mantiene en todas las localidades donde está la UTT”, señaló.

La delegada contó que la organización en Jujuy le pidió formalmente al INTA que se reúnan con los grandes propietarios de tierras aptas para la producción en los departamentos donde la organización tiene asociados. “Necesitamos que hablen con ellos sobre nuestras necesidades de tierras, para mejorar los suelos y extender la producción agroecológica”, planteó.

Las familias productoras de la UTT en Jujuy se distribuyen por localidades de los valles meridionales y orientales principalmente. En la región de los Valles Orientales, además de la UTT en Fraile Pintado en el departamento Ledesma, se distribuyen por Normenta y Chalicán; también por El Acheral en el departamento San Pedro; y otros por Vinalito, Santa Clara, Villa Montes y Palma Sola, dentro del departamento Santa Clara.

En la región de Valles Orientales abarcan pequeñas parcelas en Perico, El Pongo, Puesto Viejo, El Milagro y Monterrico, todos dentro del departamento El Carmen; y finalmente en San Antonio dentro del departamento homónimo.

Esa realidad del campesinado pequeño, familiar e indígena en los valles templados de Jujuy convive con las gigantes agroindustriales como Ledesma. **La desproporción en la distribución de la tierra y la desigualdad en la tenencia entre grandes con mucha tierra y pequeños casi sin ella se puede profundizar tras la reforma de la Carta Magna impulsada por el gobierno de Gerardo Morales (que se aprobó entre el 19 y 20 de junio pasados).**

La conceptualización productivista de la tierra influye sobre las tierras fiscales y la titularización de las tierras comunitarias del campesinado, que en su gran mayoría es también originario. Ellos partieron desde Abra Pampa a mediados de junio con el **Tercer Malón de la Paz** levantando el reclamo “Arriba las whipalas, abajo la reforma” contra el extractivismo minero que utiliza el agua indiscriminadamente y en reclamo por la propiedad de los territorios comunitarios.

No fueron escuchados por el gobernador jujeño durante el proceso de aprobación y jura de la nueva Constitución jujeña, y finalmente llegaron a Ciudad Autónoma de Buenos Aires (el 1 de agosto) donde tampoco logran la intervención federal de Jujuy ni la anulación de la Carta Magna reformada.

Un relevamiento realizado desde **Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf)** entre 2009 y 2017, abre otra línea de análisis sobre la tenencia de la tierra comunitaria entre la población originaria en Jujuy antes de la pandemia. Puna y Quebrada fueron las regiones con mayor cantidad de agricultores familiares

declarados. En Yavi, departamento puneño, 183 núcleos de agricultura familiar se incluyeron como “integrantes”. Quiere decir, personas o familias que pertenecen a alguna comunidad indígena y recibieron tierras por medio de alguna ley o decreto. Le sigue Cochínoca, departamento de esa misma región de altura, con 153 núcleos declarados también “integrantes”. El departamento de Humahuaca, en la región Quebrada, se declararon 112 núcleos como originarios. Lejos, en cuarto lugar, se ubicó el departamento Ledesma en los Valles Orientales, con 39 núcleos declarados como comunitarios indígenas.

En esa base de datos, entre 2009 y 2017, discriminados por región y departamentos que la integran, y según cantidad de núcleos de agricultores familiares (NAFs), los pequeños propietarios de parcelas de tierra fueron mayoría en la Puna con 588 NAFs. En orden decreciente, 192 en la región Quebrada, 147 en Valles Orientales, y 74 en Valles Meridionales. En el mismo período, quienes producen en tierras que no son propias (tenedores que no declara tierra con límites u otra condición) solo en la región Puna ascendieron a 858 NAFs, 331 en Quebrada, 382 en los departamentos de los Valles Meridionales y 473 en la región de los Valles Orientales.

Agroecología en el Censo Agropecuario

“No hay un concepto acabado de agroecología”, fue lo primero que aclaró Antonella Geronazzo durante el diálogo con Tierra Viva. Describió al paradigma como una construcción holística asociada a “lo ambientalmente sostenible”,



que en lo social busca ser un espacio libre de violencia, que tiene presente “cuestiones de género”, que en lo económico trabaja en la comercialización del precio justo sin intermediarios y se enfoca en comerciar productos en cercanía.

Contó que entre los productores y productoras que se acercan a los talleres que brinda la universidad, el primer imaginario que aparece asocia la agroecología a una práctica sin químicos. “No es una percepción errada, pero sí muy limitada. Es una de las patas por las que se enganchan a pensar proyectos agroecológicos”, agregó.

Además de los Cotepo de la UTT, Javier Méndez de Red Puna contó que en Angosto de Perchel ya funciona una fábrica de bioinsumos que abastece a los pequeños productores de la Quebrada y busca cambiar la mirada sobre la producción de alimentos frescos.

Un vistazo al Censo Nacional Agropecuario 2018 permite elaborar otro paneo sobre la composición agroecológica en Jujuy, al menos, pocos años antes de la pandemia. La foto del año 2018 abarca relevamientos realizados entre julio de 2017 y junio de ese año. Uno de los cuadros elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos identificó cuantitativamente las explotaciones agropecuarias con prácticas de agricultura orgánica, biodinámica y agroecológica. **En total 209 se reconocieron como agroecológicas. La ficha se completó con 377 establecimientos que se declararon orgánicos, mientras que 14 optaron por declararse biodinámicos.**



Al desgranar por departamentos jujeños, el Indec identificó en Yavi (en el altiplano andino y vecino a Bolivia) 140 establecimientos orgánicos, mientras que en el departamento Humahuaca (en la región de quebradas) el número descendió a 108. Entre los biodinámicos, El Carmen (región de Valles Meridionales) concentraba el mayor número con seis establecimientos. Finalmente, los establecimientos agroecológicos se repartieron esos años con Yavi a la cabeza con 72 EAPs agroecológicas; Humahuaca con 45, Tilcara con 25, Tumbaya con 15. El resto de EAPs agroecológicas, distribuidos entre las regiones de los valles meridionales y orientales, fueron El Carmen con 14, Santa Catalina con siete, San Pedro con cuatro, y Manuel Belgrano (donde se encuentra la capital San Salvador) con tres. Cerraron Palpalá, Ledesma y Santa Bárbara con un solo establecimiento.

En Yavi, Luis Gerónimo es productor de la comunidad originaria Escobar de Tres Cerritos y miembro de la Mesa Quinuera Agroecológica de la Puna. Entre los productores se entremezclan originarios de comunidades que Gerónimo mencionó como partícipes de la Mesa Quinuera. Enumeró algunas como la comunidad originaria Yavi, Suripugio, San José, Ancasti, Escobar de Tres Cerritos, El Cóndor, y Azul Kasa, todas en el departamento Yavi, y Pumahuasi del departamento Cochinocha. En las estadísticas del CNA 2018, por ejemplo, Cochinocha no registró presencia de producción agroecológica.

Los grandes competidores quineros son los productores del Estado Plurinacional de Bolivia. Del lado argentino del altiplano andino los productores de la Mesa Quinuera se diferencian de sus vecinos por el manejo agroecológico de cultivos y suelos. Crearon una marca, "Kiuna", y comercian el cereal por grano entero en paquetes de kilo, medio y cuarto kilo. Lo consumen en La Quiaca, pero también en pueblos de la quebrada de Humahuaca, y llegan hasta la ciudad de Buenos Aires por medio de intermediarios.

“Somos agroecológicos porque no usamos agroquímicos”, alza su bandera el productor puneño. “Entre los remedios caseros utilizamos cenizas y ajo fermentado para combatir algunos hongos, y con el súper magro —fermentos de leche, yogurt y ajo— le damos vitalidad a las plantas. Mejoramos la tierra, el tamaño de la panoja, por la espiga que aloja el cereal, y también el grano. Rotamos con habas y dejamos los rastrojos para fertilizar. Ahora algunos productores tienen máquinas sembradoras, para evitar los surcos”.

Las **ferias andinas** son **espacios** de comercio e intercambio, sobre todo, de semillas. Para esa cercanía producen habas y papines de consumo interno, los intercambian entre comunidades o comercian no más lejos que La Quiaca, capital del departamento.

Otra característica que los emparenta con la agroecología es el manejo de variedades de semillas. “Guardamos la mejor panoja, la seleccionamos manualmen-

te. Luego hacemos análisis del poder germinativo, colocando un puñado en tela para que germinen y saber si están vivas o no. Y nos da la pauta de qué cantidad vamos a necesitar en la siguiente siembra”, explicó.

Los promedios de cosecha oscilan entre las doce y quince toneladas. Por gestiones encaradas como colectivo productor agroecológico desde la Mesa Quinuera lograron acceder a cañerías para el riego por goteo, aunque todavía el sistema no llega a todos los productores. Muchos continúan con las acequias y el sistema de turnos de riego.

“Cultivamos en tierra comunitaria, pero quedan remanentes (de ese territorio) que a varias comunidades todavía no entregaron”, reclamó en alusión a las fallencias y demoras en la adjudicación de sus territorios a comunidades originarias por parte del gobierno provincial y del gobierno nacional, según los períodos desde la década del noventa.

Muchas comunidades del departamento Yavi iniciaron los trámites entre 1996 y el 2000 con el Programa de Regularización y Adjudicación de Tierras para la Población Aborigen de Jujuy (resumido en las siglas PRAT-PAJ). Años más tarde, se retomaron los pedidos de adjudicación (2008) con el Programa de Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena (Pripici).

Y los títulos comunitarios aún no se entregan.

99

Reforma de la Constitución y las tierras para quiénes

La reforma de la Carta Magna jujeña pretende tirar al cesto del olvido la entrega de los territorios ancestrales. Florencia Gómez, directora de relaciones públicas en el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Cepas), [explicó la cuestión de las tierras fiscales y los territorios que reclaman las comunidades originarias](#) (muchas de ellas, pequeñas productoras campesinas) tras las modificaciones en la Constitución de Jujuy: “Respecto a las tierras fiscales, la reforma impone un claro sesgo productivista, tal como lo hacía la norma original (de 1986). Sin embargo, deja abierto a una ley posterior (que ingresó en septiembre último a la Legislatura de Jujuy) los criterios de adjudicación y titulación de tierras fiscales, conforme al interés socioeconómico de la provincia, y elimina la previsión acerca de la necesidad del interés social de una Ley de Fomento”.

Por otro lado, Gómez recordó que la nueva Constitución, “elimina criterios objetivos de distribución de la tierra y requisitos en la tramitación, que hacen a la transparencia y gobernanza de la tierra” pública.

Comparó el futuro mediato con un estudio del Centro de Estudios Sociales Nel-

son Mandela de Chaco, que denunció que, entre 1995 y 2007, los gobiernos radicales de Ángel Rozas y Roy Nikisch entregaron de manera fraudulenta y/o hicieron la vista gorda ante saqueos o desalojos de 2.600.000 hectáreas de tierras estatales a privados.

En 2017, todas las comunidades originarias de Argentina le reclamaron al Estado el tres por ciento del territorio, poco más de ocho millones de hectáreas. Según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INA), en 2017 las 824 comunidades relevadas (o en proceso de relevamiento) ya reclamaban 8.414.124 millones de hectáreas consideradas por ellas “territorios de ocupación tradicional”.

La [investigadora Natalia Borghini](#) detalló, en una investigación académica del año 2010, el proceso que inició el Estado jujeño en 1997. Ese año, mediante la Ley 5030, se comprometió a “regularizar la situación dominial de las comunidades aborígenes de la provincia que habitaban ancestralmente sus territorios en 1.238.300 hectáreas fiscales rurales y 15.583 parcelas fiscales urbanas de los departamentos de la Puna, Quebrada y los de Valle (por los Meridionales) y Santa Bárbara”. Representa la quinta parte de la superficie provincial (5.321.900 hectáreas).

Producir sin agua ni electricidad

Por el Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2018, los departamentos con la menor cantidad de establecimientos agroecológicos declarados fueron Ledesma, Santa Bárbara y Palpalá. Amanda Ramos, de la comunidad campesina indígena Tusca Pachaen Palpalá, contó las penurias que atraviesan cien familias que integran el colectivo originario que produce cerca de los límites del ejido urbano palpalense. “No tenemos agua disponible. Sembramos desde la primera semana de diciembre cuando comienza la temporada de lluvia. Tenemos que esperar, no nos queda otra”, lamentó. Explicó que, si tuvieran agua, sembrarían todo el año, pero desde el Gobierno no realizaron las represas necesarias. Y tampoco les brindaron el servicio de electricidad con el pretexto de "peligro" por los desbordes del río Los Alisos.

En realidad, desde 2020 la comunidad pelea contra el gobierno jujeño de Gerardo Morales empeñado en extender la superficie del Parque Industrial Carlos Snoppek. El predio es vecino al territorio comunitario y a la Casa Campesina, lugar de reunión de todas las familias de la comunidad campesina e indígena, al sur del Barrio Antártida de Palpalá.

“Sembramos maní, variedades de maíz como pisingallo y forrajero que usamos para darle de comer a los animales, como las gallinas, y otros usamos para hacer mote (un plato tradicional andino), humitas y tamales. También producimos hortalizas, zapallos, anco (zapallos

calabaza) y cayote. Vendemos nuestros productos en las ferias”, explicó. Se distribuyen por Palpalá y el sur de San Salvador, la capital jujeña.

Sobre el proceso agrícola, Ramos contó el ciclo productivo, desde cómo fertilizan las parcelas (con guano de oveja seco) y abren los surcos con caballos guardando distancia entre semillas. Por marzo o abril cosechan, para autoconsumo y comercio en las ferias de Alto Comedero en Palpalá. “Esperamos hasta junio para cosechar las semillas, que guardamos, no compramos”, resaltó. Así sustentan el próximo ciclo productivo del centenar de familias que producen sobre 80 hectáreas. “Algunas tienen dos hectáreas, otras una, otras un cuarto. Tres tienen criaderos de animales, como vacas, ovejas y cabras”, mapeó de memoria.

Desigualdad y desproporción

La estructura agraria jujeña en las regiones de Valles Meridionales y Orientales también muestran desigualdad y desproporción. “En El Ramal Jujeño hay una concentración de productores empresariales, capitalizados, que se mezclan con los productores campesinos e indígenas”, detalló Geronazzo comparando casos los pequeños productores sin tierra propia que producen en parcelas que no superan las dos hectáreas, a la todopoderosa empresa Ledesma.

Desde la Cátedra Libre Horacio Giberti, ese análisis se complementa con el que brindó la docente de la universidad pública jujeña. “El sector agropecuario de Jujuy se caracteriza por la persistencia de numerosas explotaciones agropecuarias de pequeña escala, con una marcada atomización de la producción y (...) la producción hortícola intensiva en pequeños oasis bajo riego”, detallaron.

“En contraste, se observa un conjunto de actividades productivas con un alto nivel de tecnificación e inversión, ocupando las zonas más aptas, centradas en los valles templados y el pedemonte (...) cultivos industriales, expresados principalmente por el sector productor de caña de azúcar y tabaco, seguidos por la producción de legumbres y cereales”, sostuvieron.

Grupo Ledesma, mucha tierra y dictadura cívico-militar

El Ingenio Ledesma registra 40.000 hectáreas dedicadas al cultivo de caña de azúcar, que representan entre el 70 y 80 por ciento de la superficie cultivada con caña en Jujuy. En el reporte de mayo de 2023, Ledesma también reportó 3000 hectáreas de citrus en la provincia, por lo que el total cultivado asciende a 43.000.

El 85 por ciento de la superficie en producción la riega dejando correr agua por surcos, gracias a la disponibilidad del río Ledesma, que atraviesa prácticamente

al medio de las 157.000 hectáreas que posee. El 15 por ciento restante lo hace con métodos de riego a presión (mecanizado, por aspersión y por goteo).

Ledesma donó 76.000 hectáreas para la creación del Parque Nacional Calilegua en 1976. De esta forma, se aseguró agua por el río que desciende desde las serranías del Zenta, ubicadas al oeste del ingenio azucarero. Según el reporte de 2023, preservan como reserva 100.000 hectáreas de las 157.000 que controlan.

El departamento Ledesma tiene una superficie total de 324.900 hectáreas. Casi la mitad están en manos del ingenio azucarero.

Carlos Pedro Blaquier fue el dueño del imperio azucarero, que se ramificó por Salta, Mendoza, San Luis y Buenos Aires. Murió sin ser juzgado por la [Noche del Apagón](#): una serie de secuestros en la localidad de Libertador General San Martín, muchos de ellos realizados con vehículos de la empresa. Queda pendiente el juicio a Alberto Lemos, el administrador general de la empresa en la etapa en que se cometieron las violaciones a los derechos humanos.

Tierra, producciones y modelos

Por los datos de tenencia de la tierra relevados por el Registro Nacional de Agricultura Familiar, entre 2009/20017, se desprende que los propietarios en el departamento de Ledesma suman 42, mientras que los núcleos de agricultura familiar que declaran producir bajo “tenencia” (no son propietarios) ascendieron a 153. El relevamiento también ofrece información sobre la diversidad de alimentos frescos (frutas, verduras, hortalizas) que, dentro de la jurisdicción de Ledesma, producen los pequeños para venta y autoconsumo en parcelas que oscilan entre una y treinta hectáreas: tomates, chauchas, berenjenas, zapallos, ají, pimientos; choclos, zapallitos, papa, zanahoria, lechugas; sandías, habas, remolacha, acelga, batata, brócoli; cebolla de verdeo, coreanitos, frutilla, palta; mandarinas, papayas, limones, higos; tomate cherry, maní, mango, y duraznos.

Alicia Vega, de la UTT en Fraile Pintado (uno de los cinco municipios del departamento Ledesma), resaltó que la transición agroecológica es lenta, por lo que la organización todavía algunos producen alimentos con aspectos del modelo convencional, de semillas híbridas y agroquímicos.

“Los productores con certificación orgánica son dos. Los productores agroecológicos son muchos más, pero no tenemos registro de la producción agroecológica”, aportó Carina Armella, agrónoma de la Estación Experimental del INTA en Yuto, otro municipio del departamento Ledesma. “Es un proceso a mitad de camino. Hay una tendencia hacia la agroecología, hay uso de compost, otro manejo de los suelos. Desde el INTA recomendamos el cambio de modelo y les deci-

mos (a los y las productoras) que podemos ayudarlos a planificar la producción con otras estrategias que sustituya el costo del agroquímico”, señaló.

La inversión productiva de los pequeños y medianos en moneda extranjera se convierte en inmanejable. Los productores no saben cuánto tendrán que pagar al final del ciclo.

En la Quebrada de Humahuaca también se da el fenómeno de convivencia entre modelos de producción agrícola entre pequeños productores, que se repite como en todo Jujuy, y que se cruza con la renta agrícola debido a la horticultura comercial sobre la ruta nacional 9.

Javier Méndez, de [Red Puna](#), lo explicó: “Algunos propietarios que son herederos de productores, hoy arriendan. Es un negocio leonino, donde el Estado tiene que participar regulando. Hay una demanda fuerte y un circuito de producción y comercialización sobre la ruta. Lo más alto que escuché por una hectárea de arriendo, fue un millón de pesos por seis meses. Muy pocos arriendan por un año”.

La lista de hortalizas y verduras que se producen en las inmediaciones de la ruta nacional 9 —y que demandan desde mercados mayoristas desde Perico hasta el Central de Buenos Aires — incluye acelgas, espinacas, lechugas, puerros, remolachas; también zanahoria, cebolla, tomate, pimiento, perejil y apio. El tren impulsado con baterías de litio, que el gobierno jujeño prometió inaugurar entre octubre y fines de 2023, seguramente generará más presión sobre el alquiler de la tierra agrícola.



Vino agroecológico jujeño

Otro de los casos de manejo agroecológico en Jujuy es la vid. La Asociación de Vitivinicultores de la Quebrada de Humahuaca nuclea a 40 productores, muchos de ellos campesinos e indígenas. “En realidad, son productores hortícolas del cinturón sobre la ruta nacional 9, que se dedican a producir vinos de manera agroecológica”, explicó Lourdes Ávalos, técnica de la Asociación y agrónoma de la Facultad de Ciencias Agrarias de la universidad pública jujeña. “Trabajan en los dos mundos, pero cuidan la producción de vid bajo el patrón agroecológico. Hace 15 años que incorporaron esa producción, con apoyo de programas como el Prosap (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales) de Nación”, señaló. También tuvo y tiene el apoyo del laboratorio de la Universidad Nacional de Jujuy, que analiza bromatológicamente los vinos de la Asociación antes de ser distribuidos en el circuito interno.

Los hongos se controlan con minerales y la nutrición de suelo se realiza con abonos orgánicos que ya conocen, como abonos de bosta de cabra, gallinas, llamas. También preparan bioinsumos que luego comparten entre ellos. Desde el principio se plantearon producir en un sistema agroecológico y no depender de insumos (agroquímicos). “Se adaptaron muy bien porque culturalmente (las y los productores) son andinos y siempre tienen un poquito de todo: algo de ganadería algunos, algo de turismo otros, verduras y productos andinos”, graficó.

A las malezas, que denominan “plantas espontáneas”; las manejan para que convivan con los cultivos y contribuyan a frenar la erosión por agua y viento.

Sobre la tenencia de la tierra, también hay una coexistencia entre los miembros de la Asociación: “Hay quienes ya tienen sus títulos, también hay títulos comunitarios”. Otro grupo cultiva en tierras fiscales, el gran problema de la reciente reforma de la Constitución jujeña. La privatización de las tierras fiscales y el avance de la vitivinicultura.

Existen proyectos sobre tierras fiscales entregados por el gobierno de Gerardo Morales a empresarios. “Esa vid va a competir por el uso del agua”, advirtió la agrónoma. Recordó que la sequía del último año fue notoria e hizo sentir más la falta de obras de canalización y para reservas de agua durante las lluvias del verano.

Por otro lado, explicó que promueven que los productores transiten el proceso de la vid desde el cultivo hasta el producto final. Los vinos no se comercializan fuera de la Quebrada de Humahuaca por el papeleo que requiere el trámite de las habilitaciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura. “Solicitan registros de AFIP, habilitaciones de las bodegas y culturalmente los productores no están acostumbrados”, precisó. Y contó que la Asociación cuenta con bodegas móviles para la producción de vinos.

Los vinos agroecológicos se venden en los negocios andinos, en las ferias de los pueblos, pasan de mano en mano entre vecinos ¿Marcas? El Hornocal, Masy, Doña Roger, Tumbaya Grande. Se comercializan en los negocios de los pueblos en la Quebrada de Humahuaca, en ferias y en festivales. Al mosto de las uvas, los productores lo deshidratan y producen una harina para mejorar la calidad del pan.

Cultivar de todo un poco

Desde la [Cátedra Horacio Giberti](#) de la Universidad de Buenos Aires observaron, en el análisis por provincias en base al Censo Nacional Agropecuario de 2018, que en Jujuy el crecimiento de establecimientos agrícolas con límites definidos da cuenta de un proceso sostenido de precarización en la titularidad de la tierra.

En 1998 el relevamiento del sector agrícola contabilizó en la provincia 4286 Explotaciones Agropecuarias (EAPs) con límites. La cifra descendió en 2002 a 4061 y creció en la década que media entre 2008 y 2018 de 4820 a 5204. Damián y Laura Alcoba mencionaron además “un crecimiento del arrendamiento y uno muy significativo en la ocupación de hecho, principalmente sobre terrenos fiscales”.

En el último caso, la reforma de la Constitución jujeña puede complicar en lo mediano al campesinado familiar e indígena que produce sin ser propietarios en pequeñas parcelas. En los valles meridionales, José Luis Fuentes —agricultor familiar en Finca el Pongo, presidente de la cooperativa de alimentos y referente del Movimiento Campesino Indígena Vía Campesina— relató la situación de la tenencia de la tierra de los arrenderos históricos dentro del legado de 11.800 hectáreas que [Plinio Zavala](#) donó al Hospital de Perico. “No renovaron los arriendos, hay varios productores que los desalojaron. A otros los están intimando a desalojar”, denunció.

Por otro lado, detalló que son 300 las familias que producen frutas y hortalizas en parcelas de pocas hectáreas dentro de esa finca donde el gobierno jujeño desarrolla cannabis medicinal con la empresa [Cannava](#). “Presionan a los pequeños y suben los arriendos”, cuestionó.

La agroecología jujeña se desarrolla incentivada más que nada por los cambios en los hábitos de consumo de alimentos frescos y la sustitución de agroquímicos por bioinsumos, muchos de ellos creados por la UTT con sus [Consultorios Técnicos Populares \(Cotepo\)](#), novedosa iniciativa de fábrica de bioinsumos.

Recientemente se sumó una de esas iniciativas en la localidad de Angosto del Perchel, que comienza a abastecer a los productores del corredor de verduras y hortalizas sobre la ruta nacional 9 en la Quebrada de Humahuaca.

Argentina, desde su nacimiento como república, no tomó al campesinado como base social, expulsó a los originarios de sus territorios e implantó la inmigración. Ese dato histórico reaparece en el contexto de las prácticas agroecológicas en Jujuy, donde el campesinado que cultiva en pequeñas parcelas y se organiza en familias, es también originario. Sobre ellos y ellas pesa aún en Jujuy la mirada fuertemente colonial, que incluso circula por los pasillos de los organismos estatales y ralentiza la construcción de soberanía alimentaria en esa provincia. Pese a que la práctica agroecológica es ancestral y pervive en la frase “cultivan de todo un poco”.

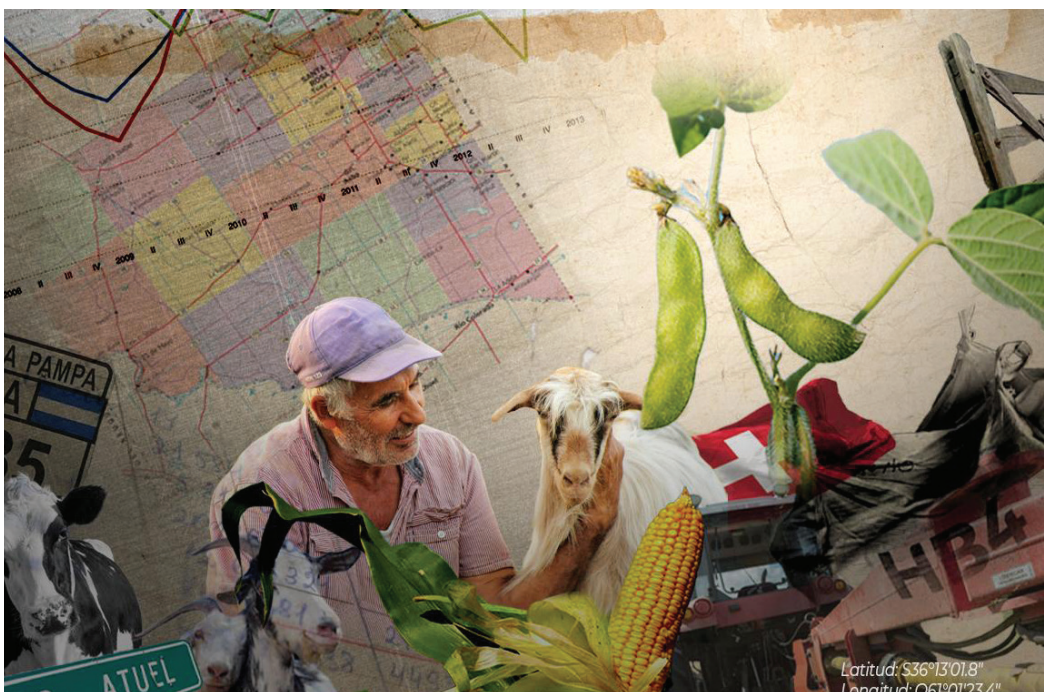
— Por Mariángeles Guerrero —

09



LA PAMPA: MÁS TRANSGÉNICOS, EL DESPOJO DEL AGUA, LOS CAMPESINOS Y LA AGROECOLOGÍA

En territorio pampeano conviven la realidad del este agropecuario, donde el avance del modelo agroquímico desplaza a la ganadería, y del oeste semiárido dañado por el secuestro de los ríos por parte de Mendoza y San Juan. Las familias campesinas, de histórica producción caprina, padecen esa falta de agua. El Gobierno no ayuda, pero los productores avanzan hacia la agroecología.



La Pampa tiene una extensión de 143.440 kilómetros cuadrados, el 3,8 por ciento de la superficie nacional. Debido al avance de la frontera agrícola, con la producción de oleaginosas y cereales, la matriz productiva de ese territorio comenzó a modificarse. Mientras que en el este convivieron por muchos años la ganadería y la agricultura, el oeste era zona de cría de caprinos. A la expansión del agronegocio se suman la escasez de lluvias y el saqueo de dos ríos (Atuel y Salado-Chadileuvú), lo que expone cada vez más a la producción local a una lenta desaparición y a la desertificación de los suelos.

Las características geográficas y climáticas de la provincia explican las condiciones de su actividad agropecuaria. El este reviste características similares a la pampa húmeda, el sector central es un área de transición de tipo semiárido hacia un sector oeste árido semidesértico. En todo el territorio llueve en promedio unos 800 milímetros al año, pero esa tendencia desciende un milímetro en la medida en que se avanza un kilómetro hacia el oeste. Marcelo Mackenzie, productor ganadero del este pampeano grafica: “En la mayoría del territorio de la provincia llueve poco y, donde llueve menos, la distribución es más errática, se da una escala descompensada de humedad donde a veces tenés lluvias muy grandes con muchos milímetros pero después tenés tiempos prolongados sin otras lluvias”.

La provincia cuenta con 7063 establecimientos agropecuarios de los 249.663 que existen en el país, según el Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2018. Son 10.852.993,9 hectáreas de las 154.811.826,8 hectáreas trabajadas a nivel nacional. Asimismo, cuenta con 2.480.885 cabezas de ganado bovino de las 38.523.342 que existen en el país. Del total de la hacienda pampeana, solo 40.770 animales están destinados al tambo. El censo registró en La Pampa 5711 productores. De ese total, solo 1741 afirmó vivir en el campo, mientras que 4736 contestaron que trabajan en el establecimiento productivo.

Agriculturización y corrimiento de la producción ganadera

Oriundo de General Pico, Marcelo Mackenzie es ingeniero agrónomo y productor en el departamento Quemú Quemú, en el este pampeano. Afirma que “en este último tiempo es notorio el proceso de agriculturización y la pérdida de suelos. Lo que logró la siembra directa es extender el área agrícola sobre zonas destinadas a la ganadería, por lo que se agravó el panorama general”. El cultivo de oleaginosas (como el maíz o la soja) y de cereales (como el trigo) ganó las tierras tradicionalmente dedicadas a la ganadería.

Mackenzie cuenta que el este pampeano y el oeste de Buenos Aires es lo que le dio al país la fama mundial de la buena carne. “La clásica invernada de hace cuarenta o cincuenta años se hacía acá. El grano acá era muy riesgoso, y sigue siendo muy riesgoso, pero con las mejoras genéticas y los eventos transgénicos

lograron correr la frontera y en zonas donde hubo por 30 o 40 años 'pasto llorón', porque eran lomas peligrosas, en todo eso se pasó glifosato y siembra directa. Se están usando las lomas igual que los bajos, que son lo mejor del campo”, cuenta. Pero asegura que no funcionó antes, no funciona ahora y nunca va a funcionar. Cuestiona que “manejamos los ambientes como si fueran homogéneos y es una de las cosas más importantes que debiéramos entender: que cada ambiente tiene su manejo más ‘correcto’ de acuerdo a las posibilidades que nos brinda”.

En el noreste pampeano, comenta Mackenzie, durante años fue habitual la rotación de cuatro años de pasturas por otros cuatro años de agricultura, pero dentro de esa agricultura había verdeos de invierno, maíces para las vacas. “Era un 70 por ciento del campo dedicado a ganadería y cuanto mucho un 20 o un 30 por ciento dedicado a la agricultura. Hoy muchos campos están al cien por ciento de agricultura continua”, señala.

Explica que la producción ganadera se extendió hacia el oeste y la que quedó en la zona este se intensificó en espacios reducidos y con alimentación a base de maíz. Es decir, se abandonó la tradición del pastoreo vacuno. “Ahora ves en invierno que los animales no están en el campo, están encerrados recriándose”, grafica Mackenzie.

De la superficie implantada relevada en el CNA 2018 que alcanza a 1.699.105 hectáreas, el 45,6 por ciento (774.686) corresponde a cultivos anuales de cereales y oleaginosas.



Según un trabajo de Juan José Torrado, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ese grupo de cultivos en el CNA 2002 representaba el 33,2 por ciento de la superficie cultivada. El estudio marca un aumento aproximado de 12 puntos porcentuales sobre el total relevado de cultivos, lo que da cuenta del incremento de las tierras destinadas a la agricultura de cosecha.

Por otro lado, entre los censos agropecuarios de 2002 y 2018 el stock medio de bovinos se redujo de 530 cabezas por establecimiento agropecuario (EAP) a 445, lo que significa una caída en la dotación animal por establecimiento. “Esta caída puede ser reconocido como un indicador del grado de capitalización de los establecimientos censados e implicaría una pérdida hacienda. Acerca del número de EAP con existencia bovina, en el CNA 2018 alcanza en la provincia un total de 5977 lo cual implica una reducción del 14 por ciento respecto del CNA 2002”, asegura Torrado.

El impacto ambiental del cambio de modelo productivo

Un estudio del investigador del Conicet Ernesto Viglizzo, citado en la publicación [“La problemática de la Tierra en Argentina”](#) del Ministerio de Agricultura de la Nación, analiza que en la región pampeana “el proceso de agriculturización sustituyó un sistema dual (de ganadería y agricultura) por un sistema de especialización de alta productividad, que afecta en forma negativa al suelo y el ambiente en general debido al uso de insumos contaminantes —fertilizantes, plaguicidas, combustibles fósiles— además de una mayor propensión a la erosión de muchas áreas marginales de la región”.

A esto hay que sumarle la deforestación del bosque pampeano para avanzar con la frontera agropecuaria. La situación se evidencia en la zona conocida como Monte Caldenal, que cruza la provincia en sentido sudeste, desde la frontera con San Luis hasta el límite con Buenos Aires. Según el Inventario Nacional de Bosques Nativos, la superficie original del bosque era de 3.500.000 hectáreas en La Pampa. En 2018 quedaban menos de 1.600.000 hectáreas.

Por otra parte, reconoce el citado informe del Ministerio de Agricultura, el cambio en el uso de suelos destinados a la ganadería por la agricultura extensiva afecta en forma potencial al ciclo de inundaciones y sequías. Al reducirse las pasturas en detrimento de los cultivos anuales (con poco aporte de materia orgánica) se reduce la capacidad del ecosistema para amortiguar los ciclos climáticos y reducir sus efectos perjudiciales (inundaciones y sequías extremas). Esto generó, en La Pampa, procesos erosivos y de desertificación.

Así como la agricultura extensiva de cereales y oleaginosas ganó la tierra de las vacas, el ganado bovino fue trasladado progresivamente hacia el oeste de la provincia. María Eugenia Comerci, investigadora y docente de la Universidad

Nacional de La Pampa, indica que fue a partir de 2002 que comenzó a darse este proceso: “Los productores trasladan el ganado para la cría a la zona centro de la provincia y hacia la zona más árida, que es el Monte de Jarilla para la cría. El ganado vacuno empieza entonces a competir con el ganado tradicional de la zona, que es el caprino”.

Una tierra sin agua

La Pampa fue creada oficialmente como provincia en 1951. Previamente era "territorio nacional". En 1917 se produjo un corte en uno de los brazos del río Atuel en la localidad pampeana de Santa Isabel, lo que ocasionó el despoblamiento de una colonia agrícola emplazada en las cercanías, llamada Colonia Butaló. En 1930 se cortó otro brazo del río llamado Arroyo Butaló. En 1946 las y los habitantes de Santa Isabel pidieron por un canal de riego para la zona, pero fue desestimado por la construcción de la represa Los Nihuales (en Mendoza), que finalizó en 1947.

Ese mismo año, el presidente Juan Domingo Perón dictó la resolución 50/49 de Entrega Periódica del río Atuel a La Pampa, donde se estipulaban tres sueltas anuales de siete días cada uno (en enero, mayo y septiembre), con un caudal de 15 metros cúbicos por segundo (m³/s). Pero Mendoza nunca cumplió esa normativa, alegando que el río nacía en su territorio y por ende era la única provincia con jurisdicción sobre él.

En 1987, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó el carácter interprovincial de la Cuenca del Atuel. Tras este fallo se creó la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior, con representantes de las provincias de La Pampa, Mendoza y de Nación.

Tal como señala [el informe de Florencia Srur](#), ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente, en 2020, [la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenció](#) que, en el inicio de La Pampa, desde Mendoza, debe ingresar por el Arroyo de La Barda (único brazo activo del Atuel) un caudal mínimo, permanente e interino de 3,2 m³/s. Este caudal “mínimo” es considerado como la cantidad indispensable para que la flora y la fauna autóctona puedan prosperar luego de 100 años de desastre ambiental. Sin embargo, ese agua sigue sin llegar a La Pampa.

Al conflicto con Mendoza se suma otro con San Juan, por el río Salado-Chadileuvú. Mirta Viola, integrante de la Coordinadora Pampeana en Defensa de los Ríos y el Ambiente (Copaderia), señala que “con los diques que se hicieron en el Salado desde San Juan nos dejaron sin agua. Solo corre algo cuando hay períodos de lluvias grandes y se hacen sueltas o cuando hacen limpieza de las acequias y largan el agua que no tiene calidad. Eso corre por el Atuel, pero un tramo nada más”. La zona está dentro de la diagonal árida sudamericana, con precipitacio-

nes inferiores a los 400 milímetros. La problemática del río generó desertificación y procesos migratorios internos por la falta de agua.

En 2022 se presentó el Informe Técnico de Avance del Estudio del Caudal Ambiental del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, realizado por la Universidad Nacional de La Pampa. Allí se evaluaron los daños ambientales resultantes de la nula escorrentía fluvial que afectan a la porción pampeana de la cuenca. Este impacto, [señala el análisis](#), se traduce en el deterioro de las funciones ecológicas del ecosistema fluvial, en la pérdida de la conectividad hídrica y biológica del mismo, en el deterioro de las actividades productivas y en el empobrecimiento de las poblaciones ribereñas y el menoscabo de sus rasgos culturales.

Desde el oeste pampeano, la productora de caprinos Alejandra Domínguez, integrante de la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) resume: “El problema acá es que si querés trabajar la tierra, no llueve. Nosotros vivimos sobre el río Atuel y todo es salitre; al no venir el río, el salitre se levanta más. Tenemos el jagüel, que es el pozo donde toman agua los animales y, si el río no corre, el agua se pone muy salada”. La situación se agudiza más si se tiene en cuenta que en la zona llueven 400 milímetros anuales. La productora concluye: “Si no tenés agua, no tenés nada”.

Los puestos del oeste, en resistencia frente al agronegocio

En el oeste de La Pampa viven familias campesinas que se autodenominan puesteras. Históricamente —cuenta María Eugenia Comerci— se dedicaron a la cría de cabras y de ovejas, aunque algunas también tienen huertas, aves de corral y caballos. La clave de su práctica productiva es el uso conjunto del terreno pastoril. Al respecto, Comerci brinda un ejemplo: “En Paso Maroma y en Chos Malal, en el límite con Mendoza, las familias ejercen la posesión sobre tierras privadas o fiscales y desarrollaron acuerdos para el uso compartido del espacio de pastoreo”.

En la zona se estima la existencia de 500 puestos. Este sector, dominado por el monte occidental, abarca cinco departamentos, más de un tercio de la superficie provincial y cuenta con sólo el 4,6 por ciento del total de los habitantes. En su estudio titulado “[Territorialidades campesinas. Los “puestos” en el oeste de La Pampa \(Argentina\)](#)”, Comerci señala que “la fuerte demanda de tierras valorizadas especialmente para la ganadería vacuna, relocalizada del sector oriental donde avanzó la sojización, promovió el interés inmobiliario por los campos, acciones de compra-venta, el cercado perimetral de los predios, y con ello, una nueva configuración regional y en la dinámica interna de los puestos”.

Comerci agrega, en diálogo con Tierra Viva: “El cercado de los campos condiciona las prácticas de pastoreo e implica una apropiación de los bienes comunes, dificultades para circular porque los caminos se cierran, dificultades en el acceso a ciertos recursos y otras problemáticas producto del avance del capitalismo en estos espacios donde resisten familias campesinas”.

También hay otros procesos asociados, cuenta la investigadora, como la actividad hidrocarburífera en el departamento Puelén o los cotos de caza —promovidos por el Estado— en la zona del Monte Calel.

La productora del MTE-Rural y presidenta de la cooperativa Agropecuaria Regional de la que participan 50 puesteros de Chicalcó y Algarrobo, Alejandra Domínguez, cuenta que de abril a agosto es el período más complicado porque no hay alimentos para los animales y no hay agua por la falta de lluvias. “Las cabras tienen cabritos una vez al año pero como pequeños productores tenemos que hacerlo dos veces por año. Si tenés buena alimentación lo podés hacer, si tenés buen pasto”, relata. Añade que comprar fardos y rollos no sirve: “La chiva siempre tiene que comer algo verde, cosa que no hay porque no llueve”.

La puestera cuestiona que el gobierno provincial no se haga eco de estos problemas. “Podría ayudar con alimentos, con pastos, con maíz pero no sucede. Te dan cinco bolsas de alimentos de 25 kilos y con eso no hacés nada. Te alcanza para 15 días”, lamenta. Una bolsa de 35 kilos de maíz tiene un precio de 2000 pesos. En promedio, al mes y sin llover, se necesitan unas cincuenta bolsas por puesto. “También tenemos gallinas, patos y pavos para autoconsumo. Esos animales también comen maíz”, dice Domínguez.



La organización en forma de cooperativa —explica Domínguez— se originó para poder acceder a créditos para la compra de alimentos. Pero al poco tiempo vieron que, colectivamente, podían lograr más cosas. Hasta el momento pudieron abrir una planta de alimentos balanceados en Santa Isabel y comprar un camión refrigerado para trasladar la producción. “Compramos el camión para traer maíz de General Pico y llevar los cabritos ya faenados. Es decir: una venta directa, sin intermediarios, desde el productor al consumidor”, reivindica la presidenta de la cooperativa.

Territorio pampeano en manos extranjeras

Respecto al régimen de tenencia de la tierra, los resultados definitivos del CNA 2018 arrojan que el 69 por ciento de la superficie de las parcelas corresponde a propiedad. Le siguen la modalidad de arrendamiento, con el 19 por ciento. En La Pampa el porcentaje de arrendamiento de los establecimientos agropecuarios delimitados es de 2.243.853 hectáreas sobre un total de 10.852.993, mientras que el régimen de propiedad es 7368.932.

Según [datos del Registro Nacional de Tierras Rurales de 2018](#), capitales suizos compraron tierras en la zona norte y noreste de La Pampa por un total de 13.723 hectáreas. Era el total que, entonces, informaba el organismo nacional que se encontraba en manos extranjeras en la provincia. Las empresas Fiduza, Oleaginosa Moreno y Fértilo Agropecuaria (todas suizas) se distribuían la tenencia de esas tierras en las localidades de Carro Quemado, General Pico, y Lonquimay.

Tres años después, en 2021, [según el director del mencionado registro, Miguel Unamuno](#), el número de hectáreas en manos foráneas aumentó a 340.780 hectáreas. El funcionario expuso que el departamento Atréucó está en el primer lugar con el 7,44 por ciento de sus tierras en manos extranjeras, le sigue el departamento Loventué con el 5,77 por ciento y en tercer lugar, con el 3,59 por ciento, se encuentra Quemú Quemú. Los tres departamentos con mayor cantidad de tierras en manos extranjeras se encuentran en el noreste pampeano, donde avanza el proceso de agriculturización.



En alerta por el trigo transgénico

La Copaderia se conformó originalmente en defensa de los ríos pampeanos, pero “los ríos no están solos sino que hacen al ambiente y a la calidad de vida de los pampeanos”, sostiene Mirta Viola, integrante de la coordinadora y enfermera. En 2019, [el Instituto Nacional del Cáncer informó que La Pampa es la tercera provincia con mayor porcentaje de casos de cáncer](#), después de Santa Fe y Córdoba. En el mismo sentido que los testimonios de los productores, Viola hace hincapié en el cambio de la matriz productiva por la agriculturización y denuncia el uso de agrotóxicos.

“Esto significa problemas de salud respiratorios, de piel, tumores. Pero hay una connivencia desde el Estado para no investigar e informar públicamente sobre los problemas de salud que esto está trayendo”, denuncia. En 2020, gracias a la presión de las asambleas pampeanas, se sancionó una ley que establece 500 metros de protección para casas y escuelas rurales respecto a las fumigaciones terrestres y 1000 metros para las aéreas. Pero la normativa aún no fue reglamentada. Mientras tanto, la Copaderia sigue reclamando al Estado los controles del cumplimiento de esa Ley.

A la falta de implementación de la normativa vigente se suma la amenaza del cultivo del trigo transgénico HB4 (de la empresa Bioceres-Indear), publicitado como resistente a la sequía, lo que lo haría "ideal" para las condiciones climáticas pampeanas. Según [un informe del Ministerio de Agricultura de la Nación](#), de las 52.755 hectáreas sembradas en 2021 con este evento transgénico, 4366 (8,3 por ciento) corresponden a La Pampa. Sin embargo, desde el Estado provincial parecen desconocer esta situación.

“Desde la Copaderia tuvimos una reunión con el Subsecretario de Ambiente al respecto, pero nos dijo que no tenía conocimiento de que se estuviera cultivando”, denuncia Viola. El encuentro fue a fines de 2021. “El trigo transgénico nos parece altamente peligroso, mucho más que los cultivos que usan glifosato, porque el glufosinato de amonio es 15 veces más tóxico”, advierte.

La agroecología, un movimiento creciente

La Pampa cuenta desde 2020 con la [Ley 3298](#) de la promoción de la agroecología, que aún no fue reglamentada, pese al reclamo de una decena de productores pampeanos que ya iniciaron ese proceso. Sin el debido acompañamiento estatal, las experiencias siguen creciendo. Marcelo Mackenzie cuenta que está “en transición, como mucha gente”. En este momento más del 60 por ciento de su campo Plenilunio, de 621 hectáreas, se trabaja sin químicos.

“Lo primero que me llevó a cuestionarme el modo de producción es que cuando llovía en el campo yo no sentía olor a tierra mojada. Con el tiempo y estudiando,



con los saberes por fuera de la academia, empecé a encontrar respuestas —valora el productor—. El olor a tierra mojada te lo dan los microorganismos. Eso me indicaba que estaba pagando en dólares para esterilizar mi suelo y dejarlo sin microbiología, que es lo que nos aporta los nutrientes”.

En 2016 comenzó el camino de la transición. “Tomé conciencia de que si no tenía un buen suelo era muy difícil tener una planta bien nutrida y en consecuencia animales bien nutridos”. Mackenzie reflexiona: “El paradigma dominante es muy exitoso porque la degradación es un proceso muy lento. Por más que estemos entusiasmados con la agroecología no es tan fácil convencer a la gente porque el proceso inverso también es lento”.

Añade que las consecuencias del paquete tecnológico de siembra directa y agrotóxicos son reversibles, “pero cuanto más se tarda en revertir el proceso, el resultado es más pobre y el tiempo que lleva es mayor”. Por eso el acompañamiento del Estado se vuelve necesario: “Se dice pero no se hace, porque [la reglamentación de la Ley de Agroecología](#) corresponde al Ejecutivo y eso facilitaría más la producción”.

El productor considera que los suelos de La Pampa, exigidos por los cultivos anuales de soja, maíz y trigo, pueden recuperarse mediante la ganadería. Pero no cualquier ganadería: los [animales tienen que ser pastoriles](#). “Hoy los catálogos de inseminación muestran animales para ser terminados con maíz y en feedlot. El ser humano está yendo en contra de la naturaleza”, describe. Por eso destaca: “Quizá por ahora no somos muchos, tomar la decisión no es fácil, pero estamos convencidos de la transición. La agroecología es un movimiento silencioso que hoy no es masivo pero es creciente”.

10



FORMOSA: UN GOBIERNO FEUDAL, DESMONTES Y LA VIDA CAMPESINA-INDÍGENA QUE RESISTE

En la provincia del nordeste son palpables el avance del agronegocio transgénico y de la ganadería, la deforestación masiva y una política de Estado que desoye a productores agroecológicos, campesinos y pueblos originarios. Los establecimientos productivos de menos de 100 hectáreas, que representan el 54 por ciento del total, cuentan con solo el dos por ciento de la tierra.



Formosa, etimológicamente, significa hermosa. En el portal web provincial, desde el logo y a lo largo de sus comunicaciones institucionales, las autoridades resaltan con énfasis ese adjetivo. Los responsables del área productiva se presentan en su página de internet: “Las vacas pastan tranquilas bajo el algarrobal. A unos pocos metros de ellas, una joven de pelo negro y dulces ojos color miel las observa y analiza, toca la tierra, comprueba su humedad y hace una mueca de satisfacción”.

Pero, desde el territorio, las voces campesinas y las estadísticas de afectaciones sobre los bienes naturales comunes señalan otra cosa. Dicen presente la deforestación, la concentración de tierras, el monocultivo, la ganadería industrial y los impactos directos del modelo hegemónico de producción sobre la vida de los pequeños productores y [pueblos indígenas](#). Esta realidad provincial describe un presente que se aleja de la prosa poética que publicitan desde el Gobierno.

Emergencia agropecuaria y pobreza

El Movimiento Campesino de Formosa (Mocafor) resume contundente en [su declaración pública de emergencia](#), el 27 de agosto de 2022. “El campesinado formoseño, los que aún quedan en los puestos, parajes y colonias en el territorio formoseño, viene atravesando varios años de situaciones de emergencia o desastre agropecuario”.

Enumeran como causas del desastre a las reiteradas y prolongadas sequías, las altas temperaturas, los incendios y la inflación; los elevados precios del combustible, los insumos agrícolas y el forraje para la ganadería menor y mayor. “Si el Estado no recurre a rescatar a los pequeños productores los próximos años seguirán desapareciendo colonias, parajes y comunidades rurales. Lo que está en juego es el autoabastecimiento, la seguridad y soberanía alimentaria de los formoseños”, afirman.

Formosa ha sido y es una de las provincias argentinas [con más campesinado organizado](#). Con la creación del Movimiento Rural de Acción Católica (MRAC) y la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas (Ulicaf), se iniciaron en la década del 70 las resistencias campesinas y luchas por reivindicaciones del sector que continúan vivos, pese a los sistemáticos embates para acallarlas. También es pionera en experiencias de comercialización directa, del productor al consumidor, [las ferias francas](#) que se realizan desde fines de los 90, algunas de las cuales fueron apoyadas por el Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (Paippa).

Pero las principales apuestas productivas de la provincia, gobernada con omnipresencia clientelar por Gildo Insfrán desde hace más de 25 años, se centran en

otros actores. La actividad se concentra principalmente en la ganadería extensiva y el desarrollo de cultivos intensivos, algodón, maíz y soja.

La consecuencia de ese modelo hegemónico es la desaparición de montes y biodiversidad, ganancias concentradas en pocas manos y la desaparición de familias campesinas e indígenas, que justamente son quienes pueden contribuir en forma decisiva en la lucha contra el hambre, la creación de fuentes de trabajo y el autoabastecimiento provincial con alimentos sanos y a precio justo.

Mientras, los porcentajes que duelen porque no son números sino personas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec), con base a [datos del primer semestre de 2021](#), en Formosa el 47,4 por ciento de las personas son pobres y el 15 por ciento es indigente. Según el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana ([Isepci](#)), en Formosa solamente el 55 por ciento de las familias logra cubrir las cuatro comidas diarias, mientras que un 26 por ciento completa tres comidas, un 17 por ciento cubre dos platos al día y un dos por ciento consume solo una comida.

Un plan ganadero dominado por grandes empresas

Formosa cuenta con un stock ganadero bovino que representa el tres por ciento del total nacional, manteniéndose relativamente constante en los últimos años. Las razas que predominan son Brangus y Braford, debido a que estas cruza con cebú son las que mejor se adaptan a la zona.

Por las características del suelo históricamente se desarrolló una ganadería orientada hacia la cría, de tipo extensiva con baja adopción de tecnología y escasa utilización de pasturas implantadas. El engorde y faena de los terneros suelen realizarse en provincias vecinas. Salta, Chaco y Santiago del Estero reciben cerca del 50 por ciento de los terneros formoseños para invernada.

El [plan provincial](#) para la actividad prevé Incrementar el stock ganadero provincial a 3.500.000 cabezas de ganado bovino como máxima, 3.000.000 de cabezas como escenario más probable y 2.500.000 cabezas de mínima.

En la provincia predominan los pequeños establecimientos pero la concentración es un dato abrumador. El 64 por ciento tiene menos de 250 cabezas, representando apenas el 26 por ciento del stock provincial. En el otro extremo, el cuatro por ciento de los establecimientos tiene más de 1000 cabezas y concentran [el 44 por ciento del rodeo](#) de Formosa.

La relevancia de la cadena caprina en Formosa está vinculada a su rol social más que a su impacto económico. Es una actividad que está desarrollada por peque-

ños productores, en general como actividad mixta y de subsistencia. También se destaca por extensión territorial: ocupa el 70 por ciento de la superficie de la provincia. La actividad más desarrollada es la cárnica, aunque también hay pequeños desarrollos de producción de leche y queso de cabra.

Agricultura transgénica

La agricultura formoseña comienza su desarrollo a mediados del siglo XX con la expansión del cultivo industrial del algodón, que rápidamente adquiere características de monocultivo, al igual que la banana en la zona noreste.

Históricamente la producción del algodón, para combatir plagas, incorporó la dependencia a agroquímicos biocidas y se desarrolló siempre con andamiajes de políticas públicas que no fueron destinadas a evitar la concentración del sector. Tras [la adquisición de la semillera Mandiyú](#) por parte de Monsanto en los '90, el propio estado provincial se vuelve a constituir en aliado de las empresas de agrotóxicos y se adopta [el algodón transgénico como regla](#).

Actualmente al algodón se le suma la soja y en mayor medida el maíz. También se destaca el cultivo del arroz, los pomelos y frutas tropicales como la papaya. La horticultura ocupa un lugar marginal asociado al autoabastecimiento.

La producción agrícola se dio en un marco de profundas disparidades en la existencia de infraestructura productiva y social, las cuales reforzaron la construcción de un patrón sociodemográfico en el que el rasgo característico fue la tendencia a la concentración de la población en las zonas relativamente más desarrolladas. Patrón que [se traslada hasta la actualidad](#).

El modelo de cultivos intensivos con uso de agrotóxicos es predominante. Los emprendimientos registrados por el [Censo Nacional Agropecuario 2018](#) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en unidades, son solo 22 de agricultura orgánica y diez de agroecología en toda la provincia.

Marisa Fogante está al frente de una de esas chacras desde 2007. Trabaja alrededor de 20 hectáreas, en la zona de Laguna Nainek (Laguna Blanca), casi en el límite con Paraguay. Produce mayormente frutas tropicales y asiáticas, entre otros cultivos. Bananas, mangos, carambola, toronja, lichis, mandioca, batatas y cabuto. Todo de manera agroecológica y biodinámica. “El apoyo a la agricultura que no utiliza agroquímicos biocidas es, a nivel provincial, casi nulo. Hay emprendimientos wichís, por ejemplo, que trabajan la producción de miel de monte, que no reciben ninguna atención. Hay un potencial, en esa producción y también en las hierbas medicinales que no está siendo percibido”, explica.



Fogante certificó en el arranque su producción orgánica e intentó contagiar en la zona. “Quedé como la única productora que apostaba a la agroecología. Me contacté con varios productores, para que hicieran un manejo que no dependa del paquete tecnológico (que incluye agrotóxicos), inclusive con un productor de bananas, pero el modelo está muy instalado. ¡No nos creían que nuestro rinde era bueno sin usar químicos!”, recuerda.

Señala que no hay desde las autoridades políticas un compromiso que apueste a la producción saludable, por el contrario. “La Provincia cuando asiste a los pequeños productores les entrega agroquímicos, ¡todos los que se te ocurran! Hacen una jornada en un campo y te entregan las botellas de agroquímicos para

que apliques”, relata con pesar y asegura: “Formosa tiene el potencial de posicionarse como productor de alimentos orgánicos y con gran diversidad.”

Remarca que hay una pequeña semilla. “La única política pública es un programa del Ministerio de Educación de producción biodinámica y alimentación sana, en escuelas agro técnicas inicialmente y que luego se extendió a todas las escuelas y niveles”, destaca. En muchas de esas escuelas, de la [veintena de establecimientos participantes](#), relata la productora frutícola, el alumnado consume sus propios alimentos saludables. Y sincera el vaso medio lleno y el medio vacío: “Eso está generando un movimiento muy lindo para la agroecología, pero el Ministerio de Producción ni lo registra”.

Propiedad de la tierra

Es de destacar la gran concentración de las tierras en Formosa. Muchas hectáreas en pocas manos. Desde el inicio de la actividad, “la suerte estaba echada en cuanto a lo que se refiere a distribución de la tierra”, escribe Pablo Lapegna en su libro “La Argentina Transgénica”. “Desde su creación, e incluso hasta hoy, una estructura agraria social polarizada domina la provincia de Formosa: las pequeñas propiedades de hasta 100 hectáreas, que históricamente representaron alrededor del 70 por ciento de los campos, solo controlan entre el tres y el cuatro por ciento de la tierra. **Las grandes extensiones de 1000 hectáreas (o más), por su parte, conforman entre el 10 y el 15 por ciento de los campos, pero suman alrededor del 80 por ciento de la tierra cultivable**”.



Los datos se estiman en base a los censos agropecuarios de 1940, 1947, 1960, 1969, 1974, 1988 y datos de 2002. Por su parte, el [Censo Nacional Agropecuario 2018](#), refleja que esa brutal concentración continúa. Formosa, al 31 de diciembre de 2017, contaba con 7419 Explotaciones Agropecuarias (EAP) que involucran la ocupación de una superficie de 4.434.917 hectáreas.

Los campos de hasta 100 hectáreas, que representan el 54,35 por ciento de las unidades productivas de la provincia (4032 EAP), ocupan el 2,15 por ciento de las tierras. En el otro extremo, el de los grandes terratenientes y empresas, solo 51 campos de 10.000 hectáreas (o más) concentran un millón de hectáreas.

Desmontes Sociedad Anónima

Argentina se ubica entre los diez países que más desmontan en el mundo. Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, en Argentina se arrasaron 3.367.308 hectáreas de bosques nativos desde la aprobación de la Ley de Bosques (fines de 2007) hasta diciembre del año 2021.

El 75 por ciento de [la deforestación se produjo en cuatro provincias](#): 936.125 hectáreas en Santiago del Estero, 694.834 en Salta, 449.646 hectáreas en Formosa y 444.651 hectáreas en Chaco.

123

Las 449.646 hectáreas desmontadas entre enero 2008 y diciembre 2021 en Formosa implican unas 32.000 hectáreas por año.



“Formosa tiene una ley provincial tan permisiva que actualmente se desmonta cuatro veces más que antes de la sanción de la Ley Nacional de Bosques. La deforestación es un verdadero ecocidio, que genera cambio climático, inundaciones, enfermedades, desalojos de campesinos e indígenas, pérdida de alimentos, maderas y medicinas, y desaparición de especies en peligro de extinción, como el yaguararé”, afirma Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Según la organización, casi la mitad de las hectáreas desmontadas en Formosa son ilegales porque se hizo en zonas que, según la normativa vigente, debían protegerse. Mediante la comparación de imágenes satelitales, Greenpeace estimó que, entre enero y junio de 2022, la deforestación en Formosa alcanzó las 10.056 hectáreas.

El monte es vida

La desaparición de montes por el corrimiento de la frontera agrícola ganadera destruye la biodiversidad y el modo de vivir de las comunidades señalan desde la [Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo](#) (APCD).

Los wichí, qom, [pilagá](#), y [nivaê](#) sufren de ese despojo en una de las provincias argentinas con más presencia de pueblos indígenas. ¿Cuántas comunidades viven en Formosa? ¿Cuántos son? El Estado, incumpliendo largamente la Ley Nacional 26.160, no lo sabe.

Pablo Chianetta, médico veterinario, integrante de APCD ilustra categórico: “Sobre las 180 comunidades efectivamente registradas en el INAI —de unas 200 que habitan la provincia— sólo se terminó el relevamiento de una”.

Desde la ciudad de Las Lomitas, con sus más de tres décadas de trabajo junto a pueblos wichí y nivaê y pequeños productores ganaderos criollos, Chianetta explica la relación de esas comunidades con la actividad agrícola y el ambiente. “Su cultura productiva tiene que ver con la recolección de frutos y miel, la pesca, la silvicultura, la caza de animales salvajes del monte. Por lo tanto la desaparición de éste afecta sensiblemente al circuito económico socio cultural de la comunidad”.

Ya sea por el [formato clásico de conquista](#), que implica la reducción de tierras acotadas a reservas, la relocalizaciones que los alejan de los montes o ríos, o la destrucción de los montes y también de la biodiversidad: todo repercute negativamente en la capacidad de proveer alimentos (como tenían en décadas pasadas) y los pueblos indígenas han tenido que reinventar su territorialidad.

“¿Cómo voy a educar a mi hijo cuando mi cultura pasa por la relación con el monte y ya no lo tengo?”, explica el responsable de APCD. “El monte es la tierra con historia en donde se proyectaba ese pueblo para vivir. Allí además se enseñaba cómo relacionarse. Si no está, se produce un quiebre. Cuando fue el boom de la soja, hace unos 15 años, y con la expansión de la ganadería de escala, la pérdida se incrementó”, recuerda.

Y reflexiona: “El modelo hegemónico prácticamente hizo desaparecer el 70 por ciento de los bosques en menos de 100 años. Las comunidades vivieron de su entorno miles de años, conviviendo con el monte, respetando sus tiempos y los ciclos, sin alterar la naturaleza. Algo nos pueden decir estos pueblos, y sin embargo siguen sin escucharlos”.

“Los conocimientos ancestrales fueron modificados por otros saberes que han modificado el hábitat”, dice Osvaldo Segovia, docente wichí y formador de educadores, de la comunidad de El Potrillo, un pueblo a 100 kilómetros de Ingeniero Juárez. “Nosotros, al contrario que la ciencia occidental, basamos la construcción de saberes en la relación que tenemos con el ambiente. Arraigada con el lugar. Tenemos palabras, formas, expresiones relacionadas con eso”, afirma.

Con tristeza evoca el entorno que ya no está. Los pastizales originales que contaban los antiguos, que desaparecieron con la llegada del ganado de engorde, el río Pilcomayo que se quedó sin vida. “Gran parte de la naturaleza está destruida y con eso desaparece el escenario del conocimiento”, relata Segovia, con voz pausada y grave.



“Hoy los niños no saben cuántos peces hay en el río. Se lo contamos con nuestro conocimiento del pasado pero ellos ya no lo viven. Los elementos no están y esos nombres van desapareciendo también porque ahora son conceptos abstractos. Lo mismo pasa con los animalitos del monte que han sido destruidos”, lamenta.

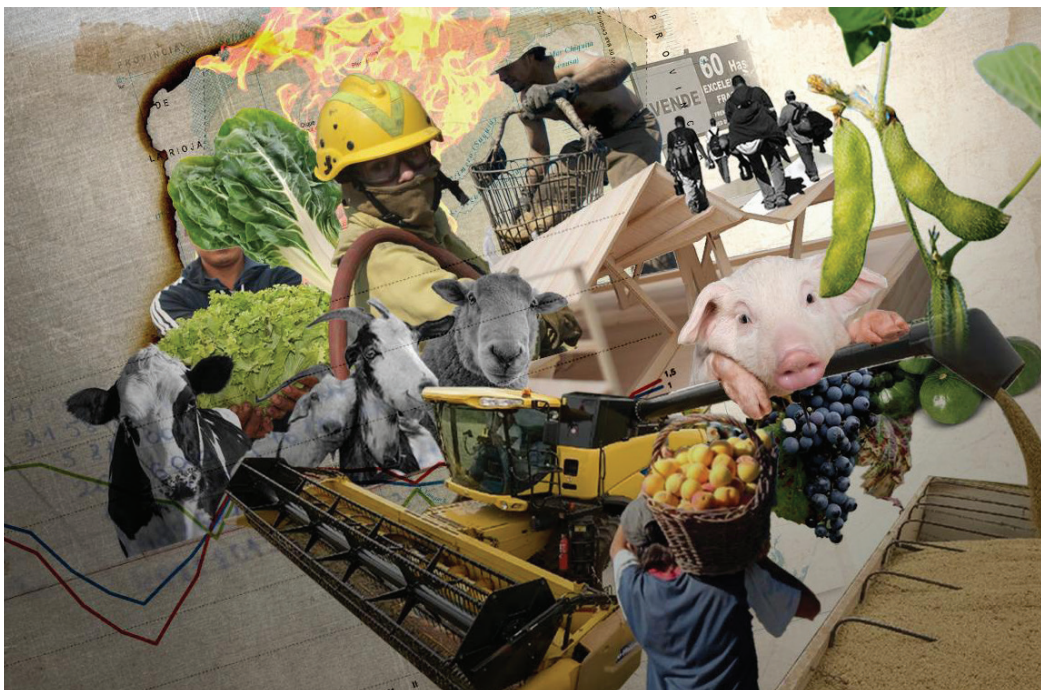
El docente wichí remarca que “este problema es muy serio” y que no afecta solo a su comunidad, sino a todos. “A través de los años hemos vivido y sobrevivido con la naturaleza, en donde están nuestros saberes y se construye nuestra cultura. A los no indígenas, que lideran o son autoridades del Estado, les decimos que nos consideren, que tenemos derecho a seguir manteniéndonos como pueblos wichís, a mantener nuestra identidad”, concluye.

11



CÓRDOBA DE SUR A NORTE: EL AVANCE DEL MODELO SOJERO SOBRE LOS ALIMENTOS Y EL MONTE NATIVO

La provincia mediterránea tiene más de ocho millones de hectáreas en producción agropecuaria. Es la mayor productora de granos per cápita y líder en producción láctea. Pero el modelo del agronegocio provocó la reducción del 44 por ciento de las tierras de pequeños productores y la pérdida del 95 por ciento del bosque autóctono. En ese panorama, las poblaciones campesinas proponen una economía que respeta la vida.



El sistema productivo de Córdoba es tan complejo como diverso. Con una superficie de 165.321 kilómetros cuadrados —sexta provincia a nivel nacional— tiene más de 8 millones de hectáreas destinadas a la producción agropecuaria. Aunque pueda verse a Córdoba como un modelo exitoso de producción y crecimiento, el escenario y las conclusiones pueden cambiar rotundamente en función de dónde tengamos nuestros pies: sierra, pampa o monte.

A tan solo media hora de la ciudad capital, Colonia Caroya es la localidad que ha pasado a la fama nacional por sus quesos y salames, pero hoy sirve de muestra para ejemplificar la situación productiva y ambiental de la provincia. La colonia se encuentra en un punto clave de la geografía provincial: en el centro norte, allí donde la sierra baja para darle lugar a la llanura y la amplitud térmica favorece la producción. Es **un territorio en disputa que, a simple vista, parece tomado por el modelo agroexportador de cereales y oleaginosas**. Sin embargo, resisten las producciones frutícolas y vinícolas fundacionales de la mano de productores familiares. También resurge la horticultura con los nuevos caroyenses: productores argentinos y otros llegados de Bolivia que ven en esta tierra un escenario perfecto para producir sus verduras.

Por su cercanía a Córdoba Capital, Colonia Caroya es receptora de **los productores de verduras expulsados del cinturón verde capitalino, en retroceso por la presión inmobiliaria y la nula planificación urbana**. La tierra caroyense también es codiciada por productores del norte provincial, que acompañan el avance de la frontera agropecuaria, desde la depresión de la Laguna Mar Chiquita, y buscan espacio y revalorizan tierras que cotizan en dólares sin importar si arriba hay vides, duraznos o verduras. La competencia son los granos en esa tierra donde, solo una generación atrás, se veían vides y duraznos.



Luego de los jesuitas fueron los friulanos arribados a fines del siglo XIX de Italia los que continuaron con la tradición vinícola local. Así lo cuenta Don Amadeo Tabbia, productor caroyense vitivinícola. Su abuelo comenzó el cultivo en la zona por encontrar el clima del lugar y su cercanía a las sierras, semejante al de su provincia natal, Friuli, en el Pedemonte italiano. Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) al 2021, Córdoba registraba 135 viñedos (unidades productivas registradas), en un total de 280 hectáreas de vid en producción. Esto representa el 0,6 por ciento del total de viñedos de Argentina y el 0,1 por ciento de la superficie cultivada nacional. En 2010 había 195 unidades en un poco más de 300 hectáreas. Muchas son las familias que como las de Amadeo, resisten. Pero la retracción no cede.

La producción de alimentos frescos en crisis

La problemática caroyense atraviesa toda la geografía provincial, pero la cuestión se complejiza aún más cuando nos acercamos a lo que el Observatorio de la Agricultura Urbana, Periurbana y de la Agroecología (O-AUPA) de Córdoba estudió en la denominada **Región Alimentaria de Córdoba**, que incluye las **producciones ubicadas en el periurbano de la ciudad Capital como las circundantes de Colonia Caroya, Río Primero, Río Segundo y Pilar**. El O-AUPA publicó recientemente un informe con una exhaustiva [caracterización y mapeo de la producción frutihortícola la Región Alimentaria de Córdoba 2018-2020](#), que da cuenta de este fenómeno de retracción y reconversión que viene sufriendo la producción de alimentos frescos.

El estudio confirmó que **la superficie hortícola de la provincia de Córdoba se**



redujo un 33,5 por ciento entre 2002 y 2018, según lo indican los últimos dos Censos Nacionales Agropecuarios (CNA). Pero el panorama es más crítico en un análisis retrospectivo: los últimos trabajos de teledetección del observatorio confirmaron una **pérdida del 74 por ciento de la superficie desde 1988**, momento en que las mediciones contabilizaban alrededor de 37.222 hectáreas de superficie con regadío.

El proyecto liderado por la arquitecta Beatriz Giobellina (INTA) relevó un total de 354 unidades productivas abarcando casi 10 mil hectáreas en producción, de las cuales 1.600 hectáreas fueron solo hortícolas; 290 hectáreas solo frutícolas y 7.638 hectáreas dedicadas a la producción de papa en la zona sur de la ciudad.

Un dato no menor que corrobora el trabajo tiene que ver con la **propiedad de la tierra**. En la Región Alimentaria **más del 60 por ciento de las familias productoras trabajan en la franja de 1 a 10 hectáreas**. Tres de cada cuatro de las unidades productivas son de lote o quinta única y **están explotadas bajo la modalidad de arriendo en el 44 por ciento de los casos**. El 39 por ciento son tierras heredadas o en situación de propiedad familiar indivisa y un 14 por ciento han sido compradas recientemente.

Distinta es la situación si se mira el caso de la producción papera: el 67 por ciento de los lotes son propiedad de las familias productoras y la modalidad más común de acceso a la tierra fue la herencia de la propiedad familiar. “Los paperos somos los grandes de los chicos”, dice un productor de los pocos que quedan al sur de la ciudad capital.

De todas maneras, el 32 por ciento de los lotes paperos están arrendados lo cual no deja de ser preocupante porque **las tierras cotizan a un solo valor: el quintal de soja**. Es decir, **los productores de hojas, hortalizas o frutas que alquilan lo hacen a precios referenciados en la *commoditie* que cotiza en dólares**.

Si se hace foco en las quintas hortícolas diversificadas (alrededor de 2000 hectáreas) podemos ver que las variedades más cultivadas son acelga (87,5 por ciento), lechuga (85,9), zapallito (82,1), espinaca (80,54), remolacha (79,7) y rúcula (78,9). Mientras que entre los productores paperos solo el 12 por ciento de las unidades alternan su producción con zanahoria o batata. **El 88 por ciento de los productores paperos hacen rotaciones —según sea papa temprana o tardía— con soja o maíz** como cultivos de verano o con trigo como cultivo de invierno. Los alquileres no se pagan solos.

Otra de las certezas que arroja el relevamiento es que las unidades productivas **se encuentran administradas mayoritariamente por varones (91 por ciento) de edad adulta —46 años promedio—** en su mayoría nacidos en Argentina

(69 por ciento). De igual manera, y tal como se observa en todo el país, **existe una presencia significativa de productores de origen boliviano, representando el 30 por ciento del total** relevado para las quintas hortícolas. Mientras que para las producciones paperas la situación cambia levemente: el promedio de edad baja a 38 años y todos de nacionalidad argentina.

De las unidades productivas relevadas por el O-AUPA, el 13 por ciento fueron producciones paperas, el 11 por ciento se dedicó exclusivamente a la producción de frutícola, mientras que el 70 por ciento de horticultura liviana. En ese sentido, no es menor la confirmación de que la Región Agroalimentaria de Córdoba ha perdido su capacidad de proveer frutas frescas de mesa a escala de la demanda local.

El resultado de esta situación alrededor de la **ciudad capital, donde antes existía un amplio cinturón verde** de quintas es el éxodo a ciudades cercanas como las colonias al norte o los municipios de Pilar y Río Segundo al sureste. “Aquel cinturón tenía sus sistemas de riego, su paisaje, su distribución de quintas, caminos y equipamientos. Fue evolucionando en un siglo de gestación. Esta zona es nueva para la producción frutihortícola. **Los productores están sujetos al mercado de arrendamiento, que no es para nada benévolo con ellos. No tienen infraestructura, no tienen sistemas de riego, tampoco asesoramiento.** Los mismos municipios están sorprendidos por esta actividad”, describe el fenómeno la directora de la investigación de la O-AUPA, Beatriz Giobellina.

131

Parte del trabajo del O-UAPA acaba de ser tomado como fuente para, por primera vez, legislar sobre el asunto. El **Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba aprobó la protección de 144 kilómetros cuadrados del cinturón verde para resguardarlos para la producción de alimentos.** A partir de ahora, el fraccionamiento permitido en esos sectores anexos a la ciudad tendrá un mínimo de 50 mil metros cuadrados. Hasta ahora, era de cinco mil metros cuadrados. El proyecto modificó la ordenanza 8060 de ordenamiento del suelo urbano.

Desigualdad y frontera agropecuaria

Córdoba es más que sierras y mucho más que la zona centro. En concreto, el sector serrano abarca solo un tercio de la superficie provincial con tres cordones principales de este a oeste: Sierra Chica, Sierra Grande o Sierra de Comechingones y las Sierras de Pocho-Guasapampa. La geografía provincial se completa con dos zonas que resumen **la foto clásica del sistema agropecuario argentino y el avance de la frontera agrícola** de los últimos 30 años: las depresiones que integran **la pampa húmeda nacional al sur y sureste provincial —integrándose a la zona núcleo productiva del país—** y el monte chaqueño al norte y el noroeste de la provincia.

La división geográfica que distingue de manera amplia entre “pampa” y “monte chaqueño” es crucial para entender el sistema productivo y alimentario cordobés. **Si trazamos una línea vertical desde el nor-noreste hacia el sur-sureste del territorio cordobés veremos la foto de una Córdoba dividida y desigual.**

Esta geografía se explica mejor si sumamos el análisis de la serie histórica del Censo Nacional Agropecuario realizada por Gustavo Soto, Diego Cabrol, Stefan Seifert y Alexander Aguila Wharton en *La Argentina Agropecuaria vista desde las provincias: un análisis de los resultados preliminares del CNA 2018* de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Giberti. La comparativa intercensal explica el proceso de agriculturización de la tierra cordobesa como fenómeno social, económico, productivo y político con una introducción clara: “Existen dos áreas geográficas bien diferentes desde el punto de vista ambiental, social y económico. El sur-sureste y nor-noroeste. El sudeste provincial forma parte de la zona núcleo de Argentina que constituye una de las regiones más fértiles del planeta (...) Una situación diametralmente opuesta presenta el norte y el noroeste provincial. Un ambiente natural menos propicio para los cultivos anuales con una estructura agraria caracterizada por un ‘mar’ de grandes estancias ganaderas salpicadas por ‘islas’ de pequeños productores y comunidades campesinas”

En el norte provincial se encuentran dos ecorregiones: **el Gran Chaco Americano y el Chaco Seco**. Hablamos no sólo de las zonas más vulnerables de la provincia, sino también de **las más presionadas por la expansión de la frontera agropecuaria, el desmonte y los incendios** como consecuencias de los procesos de agriculturización y concentración de la tierra. **En la actualidad, la provincia cuenta con menos del 4 por ciento de la superficie boscosa original.**

La pampa húmeda cordobesa, corazón del agronegocio

Córdoba representó el **29,4 por ciento de la producción de granos a nivel nacional**, según datos del Sistema Integrado de Información Agropecuaria (UM-SIIA), del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para la campaña 2019/2020. En esa temporada, Córdoba registró la segunda mejor cosecha de la historia con 42 millones de toneladas de granos, sobre 141.500.000 toneladas totales en el país.

Según la última estimación realizada por la **Bolsa de Cereales de Córdoba (BCC-BA)**, la campaña 2021/2022 la cosecha de granos —trigo, garbanzo, girasol, sorgo, maní, soja y maíz— alcanzaría los 36,97 millones de toneladas, 10 por ciento menos que en la campaña pasada. Para el caso de la soja la retracción finalmente fue del 13 por ciento y el maíz un retroceso de 14 por ciento, a pesar de haber sido la campaña con mayor superficie sembrada de los últimos años (3.292.400 hectáreas sembradas).

A esta vasta producción de cereales y oleaginosas se le suma una poderosa **industria láctea y cárnica**. La provincia ocupa el primero o segundo lugar en totales producidos en estos rubros, según las cifras que se tomen. Si miramos las publicaciones de la Asociación de Criadores del Holando Argentino para el 2020, la producción promedio se ubicó en el orden de los 28,27 litros/vaca/día, destacándose la media de los tambos de la provincia de Córdoba con 31,7 litros, seguida de Santa Fe con 29,16 litros diarios por vaca. En 2021, según lo indica SENASA y el **Observatorio de la Cadena Láctea**, **Córdoba se mantenía como líder en producción láctea y segunda en existencia de animales**, también seguida por Santa Fe que tiene más tambos en actividad.

Otra vez, dibujemos la oblicua línea divisoria de la provincia que arranca en la Laguna Mar Chiquita y se incrusta en el departamento de Río Cuarto. Los números récord que se mencionaron arriba son producidos en la mitad sureña de la provincia, dónde la producción se volcó al paquete tecnológico del modelo dominante en el agronegocio alentado por los precios internacionales de la soja, pero fundamentalmente facilitada por las condiciones más húmedas.

Esta situación podemos verificarla también en el **Mapa de Coberturas y Uso del Suelo de la Provincia de Córdoba**, que publica el programa de Infraestructuras de Datos Espaciales de Córdoba. Allí se señala que **la mitad del territorio provincial se encuentra dedicado a la producción agrícola** y con mayor preponderancia en la zona núcleo. Por ejemplo, en el departamento Río Cuarto la actividad agropecuaria ocupa el 75 por ciento de la superficie.

En el análisis intercensal de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Giberti, los investigadores constatan que **la superficie ocupada con granos (cereales y oleaginosas) aumentó un 26,77 por ciento entre el censo del 2002 y el 2018**. También se observa, por ejemplo, una mayor preponderancia del maíz por sobre la soja sobre todo al norte de la provincia, donde la frontera agropecuaria se extendió sobre el bosque nativo en los últimos 20 años en función de las aptitudes agronómicas, la demanda de alimentos para el ganado y la **tendencia a la baja de la rentabilidad de la soja en las últimas campañas**.

Como consecuencia de este mismo fenómeno de agriculturización, **el ganado bovino provincial disminuyó un 41,1 por ciento; el caprino** —característico de las estrategias de reproducción social campesina— **un 40 por ciento y el ovino** disminuyó a nivel provincial **un 15 por ciento**. Esta caída ganadera se contrarresta con el **significativo aumento de la producción porcina, que saltó un 80 por ciento** entre 2002 y 2018, ubicando a la provincia como líder nacional en ese sector.

“Cada habitante de Córdoba produce 3,5 veces más granos que el promedio nacional per cápita”, reza cual slogan de éxito la página de “Córdoba Produce” y destaca que “cada hectárea de este suelo tiene un rendimiento 23 por ciento

superior al promedio nacional”. Con dos frases **el gobierno no solo deja de lado las diferencias regionales de la provincia, sino que invisibiliza los contrastes en materia de ingresos** —en una provincia que hoy tiene el desempleo más alto del país— y de acceso a recursos, infraestructura, servicios y prestaciones —incluso las brindadas por el mismo Estado— que tienen los productores del norte frente a los del sur.

Agronegocio y concentración de la tierra

El proceso de agriculturización no sólo extendió la frontera agropecuaria sobre los montes, sino que tendió a generar procesos de concentración en la tenencia de los recursos. Desde la década del noventa en adelante, **Córdoba fue un claro exponente de la "Revolución Verde" y de la fuerte tecnificación del modelo agroexportador**, con políticas públicas de [Buenas Prácticas Agrícolas](#) incluidas.

El crecimiento de la productividad trajo consigo cambios estructurales en el uso y la tenencia de la tierra: se consolidaron los productores medianos y grandes, capitalizados, con fuerte inversión tecnológica, mientras que el sector de los productores familiares tendió a disminuir y desarrollarse como una actividad de subsistencia.

El análisis de los registros intercensales hecho por la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Giberti vuelve a echar luz sobre el proceso: **los establecimientos con menos de 1.000 hectáreas fueron los más afectados** —con reducciones de 44 por ciento en las explotaciones de 5 a 10 hectáreas y de 14 por ciento en las de 500 a 1000 hectáreas—, aun cuando en Córdoba siguen representando una proporción mayoritaria en términos del total de superficie y el total de establecimientos.

El rango de establecimientos agropecuarios de entre 50 y 1000 ha representa el 77 por ciento del total y **ocupan el 50 por ciento de la superficie del total provincial, mientras que a nivel nacional esta franja solo ostenta el 25 por ciento de la superficie.**

El monte y la vida campesina

“El proceso de agriculturización genera ganadores y perdedores, ocasionando graves consecuencias ambientales y sociales. Desde el punto de vista ambiental se avanza sobre el último relictos de bosque nativo provincial —que en la actualidad es de menos del 4 por ciento de la superficie boscosa original—, genera pérdida de fertilidad de los suelos, contaminación masiva y fuerte disminución de la biodiversidad”, señalan los autores del capítulo cordobés del libro

La Argentina Agropecuaria vista desde las provincias: un análisis de los resultados preliminares del CNA 2018.

Y agregan: “Desde el punto de vista social se produce la **exclusión de pequeños (y en menor proporción medianos) productores y comunidades campesinas**, concentrando –aún más– la propiedad de la tierra y dando como resultado la migración de población rural hacia centros urbanos cercanos o lejanos”

Si uno de los problemas de la agriculturización es el avance sobre los bosques, la legislación provincial de **Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN)**, sancionada en agosto de 2010, es la mejor manifestación del conflicto del modelo agropecuario en la provincia. Según lo analiza el doctor en Geografía, Esteban Salizzi, en un artículo reciente publicado en la [revista científica Territorios](#), luego de la puesta en marcha del OTBN se observó una concentración del proceso de deforestación en el sector de montes bajos en la depresión de Mar Chiquita (departamentos Río Seco y Tulumba) por haber sido excluidos como zonas de protección en la legislación.

Para Mauricio Muchiutti, miembro del [Movimiento Campesino de Córdoba](#) (MCC) y referente de la asociación de Pequeños Productores del Noreste de Córdoba, el avance sojero y la expulsión del ganado dio de hecho origen a los conflictos por la tierra, que fueron en parte “el origen fundacional” del movimiento en la provincia. “Esa lógica, esa matriz de producción, extractivista agropecuaria sigue intacta, las luchas campesinas de los pequeños agricultores, y de toda la diversidad rural pobre de Córdoba han ido arrancando algunas pequeñas concesiones” dice en referencia a la legislación del OTBN.

Tanto el integrante del MCC, como Salizzi, coinciden en el diagnóstico: **desde 2003 se empezó a registrar un retroceso en el nivel de desmonte** tanto por la presión social como por el propio agotamiento de los recursos forestales. Sin embargo, Salizzi advierte que efectivamente **la tendencia de retroceso se revirtió en 2016, año en el que se venció el plazo de cinco años que establece la Ley de Bosques** para la actualización de los ordenamientos provinciales.

“Lo que tuvo positivo el proceso de ordenamiento territorial es que aprobó un mapa y, a partir de ahí, se pudo trabajar en la defensa del bosque y el reordenamiento territorial”, valora Muchiutti y contrapone: “Cada tanto, la provincia y la voz del gobernador y el agronegocio lo ponen en discusión e intentan avanzar con algunas argucias legales o administrativas”. Hasta el momento, [la provincia no actualiza los mapas del OTBN](#) y continúa avanzando sobre el bosque nativo con ese proceso vencido.

Rocío Loza Serra es abogada e integrante de la Asamblea del Monte en Unquillo (AMU). Explica que **hay efectivamente una omisión y un incumplimiento**

por parte de los funcionarios públicos cordobeses de actualizar actualizar el OTBN. “La provincia ha presentado una especie de mapa provisorio, que fue modificando en función de lo que la Dirección de Bosques de Nación solicita. Actualmente hay una aceptación provisorio que permite que Córdoba reciba los fondos de bosques nacionales. Como asamblea exigimos conocer esa información y avanzar con la actualización del mapa”, explica la abogada.

“Del lado del pueblo, del lado del campesinado resistimos y seguimos estableciendo sistemas productivos que hagan frente al modelo extractivo y que demuestran la enorme potencialidad del bosque nativo para la producción agropecuaria. Dependemos del monte, que nos protege y nos da el sustento” afirma el integrante del MCC.

Pero la producción no se lleva todos los árboles puestos. O no lo hace sola. Entre las causas también se suman la explotación forestal no sostenible, las urbanizaciones sin planificación y los incendios forestales descontrolados. **Tan solo en 2020, según el reporte de incendios del Ministerio de Ambiente, 331.676 hectáreas quedaron bajo el fuego.**

Córdoba ha perdido el 95 por ciento de su reserva de bosque y monte según el relevamiento del colectivo [Montes de Córdoba](#). Río Primero, Río Seco, Ischilín, Roque Sáenz Peña y Unión son todos departamentos ubicados al norte provincial, donde se reportan la mayoría de las pérdidas en los últimos veinte años. No es que el sur provincial no perdió bosque nativo sino que fue arrasado mayormente en el siglo anterior.

Córdoba agroecológica para “un mundo más amable”

“La producción de alimentos no puede estar salpicada en medio de los campos de soja. Los municipios deberían definir zonas de producción ecológica, aplicar figuras de ordenamiento donde concentrar producción hortícola y, al mismo tiempo, centralizar los servicios que estas requieren”, dice enfática Beatriz Giobellina, la técnica del INTA e investigadora del cinturón verde de la región metropolitana cordobesa.

En territorio cordobés ya son muchas las experiencias en este sentido. **Según el CNA 2018, en Córdoba, existen 108 establecimientos agropecuarios de agricultura orgánica, 30 de agricultura biodinámica y 114 de agroecología.** Aunque, de las provincias de la zona núcleo, que comparte con [Buenos Aires](#) y Santa Fe, Córdoba es la que menos experiencias alternativas al modelo dominante registra.

El movimiento agroecológico está presente y comienzan a institucionalizarse espacios como el que reúne a los organismos públicos como INTA y Senasa junto



a la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba en una red de técnicos que investigan y acompañan las diversas experiencias cordobesas. Incluso en el sur provincial, allí donde el modelo agroexportador hace pie firme, surgió también en plena pandemia la recopilación de *Córdoba agroecológica* del agrónomo y docente, Claudio Rubén Sarmiento y el periodista e investigador del Conicet, Leonardo Rossi.

“Huertas, chacras mixtas, campos ganaderos, cultivos extensivos, todos bajo modalidades agroecológicas, se combinan en el territorio para demostrar que otro modo de producir alimentos ya habita nuestra geografía y nos aguarda para que seamos parte”, reza el libro.

De nuevo en Colonia Caroya. Un grupo de cinco familias migrantes de Bolivia, los “hortícolas tarijeños” ya arraigados en tierras caroyenses, son parte de estas recientes experiencias agroecológicas. Ellos iniciaron la transición agroecológica al tiempo que se instalaba el confinamiento obligatorio con la pandemia por la Covid-19. Empezaron repartiendo treinta bolsones de cinco kilos con ocho variedades de frutas y verduras por semana a consumidores del pueblo. Para finales de 2021 ya les demandaban 250 bolsones semanales.

Estas familias son parte de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y abastecen quince nodos de distribución en la zona serrana y centro de la provincia. Ya fueron a encuentros de biopreparados, asambleas y reuniones de género. “Ahora todo es agroecológico”, valora Cristina Tapia, oriunda de Tarija, Bolivia, cuando le consultamos por la achicoria que está embalando. Ella se sumó sola al principio ya que su marido “no creía”. Hasta hace unos meses seguían utilizando agroquímicos ya que no lograban darle en la tecla con las lechugas. Hoy sí. Otro de los productores, Florentino Castro ya piensa en el próximo paso, quiere hacer papa agroecológica. “Es dar el salto”, dice entusiasmado.

"Yo creo en esto. La agroecología no es sólo disputar el modelo técnico de cómo producir, aunque lo hace y es importante. Sino también definir precios en acuerdos. Con respeto por el trabajo de cada productor y productora. **Tenemos que poder armar un mundo más amable y eso también es parte del camino agroecológico**", dice Emilia Solfanelli, integrante de UTT Córdoba y coordinadora de este espacio productivo que contiene a veinte familias de Caroya, Río Primero y Villa Retiro.

12



SANTA CRUZ: GRANDES ESTANCIEROS, PRODUCCIÓN OVINA, MEGAMINERÍA Y LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS

La radiografía del campo santacruceño da cuenta de la concentración de tierras en muy pocas manos, la ausencia del fomento a producciones diversificadas y políticas de Estado para la explotación petrolera, minera y grandes represas. De los primeros intentos de asentar poblaciones hasta la matanza de obreros, de los pueblos originarios al extractivismo actual.



El campo santacruceño ha atravesado la historia del poblamiento de la Patagonia Sur. De alguna manera también es el reflejo del auge y la caída de la ganadería intensiva. Actualmente, según cifras del Gobierno de Santa Cruz, se asientan alrededor de 5.000 establecimientos agropecuarios, cuya principal actividad económica es la ganadería ovina. Una provincia caracterizada por un clima árido y seco, de escasas precipitaciones, donde se hace muy difícil llevar adelante la agricultura tradicional. Sin políticas públicas que fomenten el arraigo y producciones sustentables, los distintos gobiernos abrieron paso a la megaminería, la explotación petrolera y las megarepresas.

Los intentos de poblamiento y el avance capitalista

En Santa Cruz hubo tres intentos de poblar por parte de colonos: la ciudad del Nombre de Jesús (1580), la Nueva Colonia y Fuerte Floridablanca (1780) y la Real Compañía Marítima de Puerto Deseado (1789). Todas ellas en el sector costero.

Ninguna de esas experiencias prosperó y hubo que esperar mucho tiempo para el desembarco definitivo de población foránea en estas tierras, en la que reinaban los Ahonikenk, pueblo originario de la Patagonia Austral, que vivían de la caza de especies nativas tales como el guanaco y la recolección.

El poblamiento definitivo, con los colonos, se dio de la mano de llegada de la producción de ovejas a partir de 1880. Comenzaría entonces una etapa marcada por décadas de preponderancia de la ganadería ovina, para lana y carne como actividad económica.

La ocupación de la tierra fue dándose por etapas, tal como señala la investigadora santacruceña Elsa Barbería, en la imprescindible obra “Los dueños de la Patagonia Austral”, que distingue dos momentos de ocupación de la tierra por parte la actividad rural. La primera de 1880 a 1920, caracterizada como “el auge ovino” y, la segunda, hasta la década del 1940, cuando la ganadería comienza a estancarse y posteriormente a declinar, combinándose con las actividades extractivas de minerales.

Barbería señala que el poblamiento definitivo se da en 1880. Primero de la mano



de la búsqueda de oro en Cabo Vírgenes, en el extremo sur de la provincia. Por esa época también el Estado Nacional, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, comienza a promover el poblamiento de la región. Esto se dio de sur a norte, y de este a oeste.

“El proceso de expansión del capitalismo —motivado por el interés de incorporar nuevos mercados, de asegurar materias primas a bajo costo y obtener mayores beneficios en las inversiones— y el rol asignado a la Argentina exportadora de productos agrícola ganaderos, condujeron a la necesidad de integrar nuevas tierras y redefinir el uso de las ya incorporadas, para aumentar la producción, y al desplazamiento del ovino a las áreas más alejadas del puerto de Buenos Aires; campos que convenían al vacuno y a los cereales”, narra la historiadora, sobre el rol de Santa Cruz en el modelo de país impulsado por la generación del '80.

El poblamiento se dará así con motivos de expandir la soberanía pero también por la extensión de la frontera ovina de capitales que ya operaban en Chile y en las Islas Malvinas. De hecho, una particularidad de la historia es la gran cantidad de inmigrantes provenientes del archipiélago hacia Santa Cruz, con descendientes que llevan generaciones en el lugar.

De la mano de grandes hacendados, en su mayoría de origen europeo, fue conformándose la sociedad santacruceña.

Épocas no exentas de polémica, como la vista en la acumulación original de la tierra, tal como lo señala Alfonso Marchante en la obra “Menéndez, Rey de la Patagonia”, crítica al latifundio, tradicional esquema productivo que dio origen a la explotación económica en Santa Cruz.

También hubo un gran auge de la ganadería ovina en los años de la primera guerra mundial. Aunque finalizado el conflicto, y con la apertura del canal de Panamá, marcó cierta debacle en las exportaciones.

Otro hecho que marcó a la región se dio en 1920 y 1921, con las huelgas rurales y fusilamientos de obreros, hecho histórico documentado y contado luego por Osvaldo Bayer en “Los Vengadores de la Patagonia Trágica” y llevado al cine luego en “La Patagonia Rebelde”. Un ejemplo paradigmático de la conflictividad social asociada al trabajo rural. Esto marcó también el fin de un intento de agremiación de los trabajadores del campo, volviendo incipientemente los sindicatos en la década siguiente con los intentos de conformar la CGT local, relacionada a lugares estratégicos de la producción rural como los frigoríficos de la multinacional Swift.

Durante todo el siglo XX la ganadería intensiva tuvo un papel importante en el



desarrollo de las comunidades, las relaciones sociales e incluso la política. No se puede desconocer el poder e influencia de instituciones como la Sociedad Rural, nucleando a grandes productores y con influencia (del lado patronal) en los conflictos obreros de la mano de figuras como el hacendado y político Edelmiro Correa Falcón, que llegó a ser gobernador de 1919 a 1921. Otro caso emblemático fue Jorge Cepernic, gobernador electo en 1973 por el justicialismo.

La declinación de la producción ovina

No se puede hablar de “un solo campo” en Santa Cruz. Son distintos el sur (el área mayormente productiva), la meseta central, la zona cordillerana y el norte. Sin embargo hay procesos generales que han afectado el rubro: la declinación del campo se profundizó a través del tiempo, con los vaivenes económicos y políticos.

La década del 1990 fue el tiro de gracia de la mano de la política económica de la Convertibilidad menemista y la erupción del Volcán Hudson (1991). Tal como lo indica el primer capítulo de “La era del oro y sus incertidumbres”, del investigador Larry Andrade, “el vertido de miles de toneladas de cenizas a partir de la [erupción del Volcán Hudson](#) agravó el ya serio problema de la desertificación en la meseta central santacruceña y la costa atlántica. Ambos fenómenos se conjugaron con la política económica del gobierno nacional del presidente Carlos Menem, que afectó severamente las posibilidades de inversión y los ya menguados márgenes de ganancia”.

Hacia 1988, según el informe “La erupción del volcán Hudson y sus consecuencias sobre el Ambiente” (de Guillermo Clifton), en los departamentos más afectados el número de cabezas de ganado era de 2,1 millones. En 1992 fue de solo 1.082.420.

Distribuidos por departamentos, entre 1988 y 1992, la producción descendió drásticamente:

- Deseado: de 971.794 a 583.076

- Lago Buenos Aires: de 371.007 a 166.953

- Magallanes: de 388.209 a 112.580

- Río Chico: de 388.172 a 219.811

Posteriormente vendría el último golpe para el campo y gran cantidad de productores: murieron casi 600 mil animales (según número del INTA) por las fuertes nevadas en 1994 y 1995 (esta última conocida como "la nevada del siglo").

Según [cifras del 2022 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria](#) (Senasa), existen hoy 2,7 millones de cabezas. De esta forma, se registra un repunte respecto a décadas atrás, pero siempre muy lejos de los números de mediados de siglo XX (entre las décadas del 30 y 60), con picos de hasta siete millones de cabezas.

Santa Cruz y la megaminería

La provincia experimenta desde hace décadas el auge la extracción mineral, explotación petrolera y minera en diversos puntos de la provincia. Puerto San Julián es un caso paradigmático, con la extracción de oro y plata a partir de 1996 en Cerro Vanguardia, hoy con la presencia de la Multinacional Anglo Gold Ashanti, en sociedad con Fomicruz, empresa del Estado santacruceño.

La avanzada minera es palpable con emprendimientos activos o en exploración avanzada: Mina San José (Minera Santa Cruz y Hochschild Mining Newmont), proyecto La Paloma-Lomada De Leiva (Patagonia Gold) y Cerro Negro (Goldcorp) en la zona de Perito Moreno y Los Antiguos. También figuran Cerro Moro en Puerto Deseado (Yamana Gold) y Minera Don Nicolás, en cercanía de Fitz Roy.

A ellas se suman el ya tradicional complejo minero de Yacimientos Carboníferos Fiscales, en Río Turbio, que se dedica exclusivamente al carbón desde 1950.



Una pregunta que ronda a la comunidad santacruceña es qué sucederá una vez que estos emprendimientos, de recursos no renovables, agoten su producción. Y asoma allí el caso de la mina Manantial Espejo, cercana a Gobernador Gregores (Minera Triton y Pan American Silver), con [fuerte conflictividad en 2023 por despidos ante el cierre de mina](#).

De lo productivo a lo social

“La situación de los establecimientos ganaderos en Santa Cruz para el año 2021”, publicado en 2022, es un [informe elaborado por el Senasa](#), la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), el Instituto de Promoción de la Ganadería de Santa Cruz (IPG), el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).

Señala que, según el Censo Nacional Agropecuario de 2018, de las 19,7 millones de hectáreas relevadas en Santa Cruz, el 65,13 por ciento correspondió a uso agropecuario. “En comparación con el CNA 2002, la cantidad de Explotaciones Agropecuarias (EAP) ha disminuido en un 37 por ciento entre ambos censos”, indica.

Existen 592 EAP. Se divide a los campos según su nivel de ocupación. Los ocupados con producción animal son 17,2 millones de hectáreas (el 74 por ciento de la superficie total); los ocupados sin producción ganadera de 4,2 millones de hectáreas (el 18 por ciento de la superficie) y casi 650 mil hectáreas (tres por ciento de la superficie total) se encuentran desocupados.

La mayoría de los establecimientos de los últimos dos tipos sin producción se concentran en el área de la Meseta Central “lo cual refleja lo expresado para esta zona respecto a problemas de erosión, baja productividad primaria y paulatino abandono de campos”.

La concentración de la tierra puede verse en la dimensión de los establecimientos.

En Santa Cruz existen:



- 16 Explotaciones Agropecuarias (EAPS) de hasta 500 hectáreas (ha).

- 6 de 1001 a 1500 (ha).

- 9 de 2001 a 2500 (ha).

- 22 de 2501 a 5000 (ha).

- 33 de 5001 a 7500 (ha).

- 45 de 7500 a 10.000 (ha).

Sobresalen **211 establecimientos de entre 10.001 a 20.000 hectáreas y 181 fincas con más de 20.000 hectáreas**. Es decir que la mitad de los campos que producen se encuentran las categorías más altas de extensión de tierra que estableció el censo.

Siempre según el último censo, 429 establecimientos están en manos de personas humanas y el resto (154) son empresas (sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, entre otras). Al contrario de lo que sucede en otras provincias, el modelo cooperativo no tiene representación. **No hay ninguna cooperativa registrada como propietaria de la tierra agrícola en Santa Cruz.**

145

En cuanto a las actividades, dentro de la ganadería sigue predominando lo ovino, aunque ha crecido lo bovino (que predomina en la zona andina y mallines) de la mano de que “en los últimos años se ha incrementado la superficie con pasturas implantadas, así como la utilización de técnicas de suplementación estratégica y engorde, generando un cambio en el esquema productivo”, según se indica el libro “La Argentina Agropecuaria vista desde las provincias”, de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Giberti de la UBA.

La actividad bovina incluso se ha abierto paso a los procesos de “engorde” y experiencias de feedlot (engorde de corral), de 24 hectáreas, como el inaugurado en 2023 por el Sindicato de Petroleros en la zona de Cañadón Seco.

El biólogo Gabriel Oliva es investigador del INTA y se ha desempeñado como diputado provincial, presentando proyectos relacionados al campo y al ambiente. Señala que el campo santacruceño no es ajeno a la complicada situación económica que afecta al país, “con costos y precios de los productos en un modelo que castiga la exportación”.

“Creo que la ganadería ha llegado a una estabilización dentro de una macroeconomía muy desquiciada. Llegó a un equilibrio de producción, que a su vez es un techo, de un commodity como la lana, con un precio internacional moderada-



mente bueno”, indica y añade como dificultades al aumento de la temperatura y la sequía, que amenazan principalmente a los humedales. También señala el sobrepastoreo, que estima sigue siendo un problema que va degradando los recursos.

Lo ambiental también ha marcado fuertemente la actualidad, con una sequía que afectó diversas zonas y que llevó al gobierno provincial a decretar “**emergencia agropecuaria**” durante el 2023. Lo que implicó el otorgamiento de beneficios impositivos y financieros de acuerdo a la Ley 26.509 de situaciones extremas para el sector.

Sobre esto ha trabajado, por parte de la representación de productores, Miguel O'Byrne, con una amplia trayectoria en diferentes asociaciones tales como la Sociedad Rural de Río Gallegos, FIAS y en el Instituto de Promoción Ganadera provincial. Señala que las consecuencias del cambio climático y la degradación del suelo ha tenido un fuerte impacto, haciendo imposible la vuelta a un escenario de ganadería intensiva, en la dimensión en la que se la conoció históricamente.

O'Byrne señala que, según mediciones de organismos como el INTA, desde hace ocho años, la cantidad de raciones disponibles para alimentación de animales ha disminuido y señala que está claro que hay un deterioro en el suelo santacruceño. “Estamos fomentando un gran desierto. Cuando estemos hablando en 2050 de los objetivos internacionales de las mitigaciones del carbono, con este frágil territorio vamos a estar en condiciones de ser suelo emisor y no de capturar carbono, vamos a estar en el lado negativo del ciclo biológico, lo que va a generar una pérdida de mercados internacionales. Si somos emisores de carbono vamos a perder mercados de carne y lana”, indica con preocupación.

El despoblamiento

La caída de la actividad agropecuaria tiene relación con el éxodo del campo a la ciudad. “Hay dificultad para radicar mujeres, jóvenes y familias en general en los ambientes rurales. Hay problemas de conectividad, de calefacción, de educación a distancia y de asistencia sanitaria”, manifiesta Gabriel Oliva, investigador del INTA.

Según datos censales del Indec, en 1980 Santa Cruz tenía 114.941 habitantes y la población rural era de 15.165, es decir el 13 por ciento. En 2010 se registraron 273.964 habitantes y solo 10.721 vivían en el campo, el cuatro por ciento del total.

Alex Vallega, docente e investigador, uno de los creadores del Programa de Investigación Geográfico Político Patagónico (Pipgpp) de la Universidad Católica (UCA). Durante 2022 recorrió más de 60 establecimientos agropecuarios junto al equipo de la ex senadora nacional Belén Tapia y el realizador audiovisual Pablo Walker.

De allí surgió el libro “Santa Cruz tierra adentro” y la serie “[Radiografía del campo santacruceño](#)”. Esta última en el marco de la Productora Audiovisual de la UNPA dirigida por Walker.

Vallega señala la importancia de que las familias puedan poblar el campo para el desarrollo, pero dicho escenario hoy está lejano. “El despoblamiento rural es mundial, pero en el caso argentino es particular porque gran parte de la economía es rural, esto en Santa Cruz se agrava un poco más”, indica y coincide con el diagnóstico de la caída de la producción. Señala que la falta masiva de oferta educativa ha sido un factor muy fuerte para hijos de productores y peones.

“La producción está ligada a la gente que vive de ella. Le doy importancia a lo económico pero también a otras condiciones, como las rutas, que no fueron acordes y esto influye en la comunicación. Otro tema ha sido la educación, que ha sido un factor que ha llevado a desarraigo forzoso. Desde los comienzos no hubo muchas escuelas rurales como en otras provincias. La falta de escuelas rurales ha hecho que muy tempranamente muchos hayan tenido que enviar a los chicos a colegios pupilos”, dice.

“Las familias rurales son pocas”, remarca Vallega y señala que puede haber producción pero se pierde la cultura y la “vida rural”. Recuerda que hasta los



obreros de las huelgas (del inicio del siglo XX) marcaban entre sus peticiones la permanencia de la familia en el campo.

Entre la producción y las energías

Santa Cruz declaró en 2023 la “emergencia agropecuaria”. La medida fue tomada por las autoridades ante la inusual sequía que afectó a gran parte de la región. Otra de las noticias, en este caso positiva, fue la declaración de zona libre de sarna ovina.

Pero ¿cuál será el futuro del campo y qué puede esperarse en cuanto a alternativas? Hay diversas lecturas de lo que espera un campo que evidentemente tiene problemas en cuanto a su producción y el estado del suelo.

Por fuera de la ganadería, con menor peso económico pero diversificando la matriz, hay productos agrícolas en localidades pequeñas como Los Antiguos, Perito Moreno y Lago Posadas con cultivos hortícolas, forrajeros y de frutas (en gran parte para exportación) donde —según indica el Consejo Agrario Provincial— hay sistematizados canales de riego (algo que no sucede en la mayoría de la provincia).

Se destaca la cereza, que en 2023 logró la denominación por parte de La Secretaría de Agricultura de Nación que le otorgó el sello “[Cereza del Valle de Los Antiguos-Patagonia](#)”.

En cuanto a lo extractivo, la megaminería y el [petróleo](#) aparecen como las principales actividades económicas, aunque también asoman las energías alternativas, tales como la experimentación con lo eólico o la novedad del “hidrógeno verde”, combustible que se obtiene mediante electrólisis en agua (se habla de la marítima), con energía solar y eólica. Sobre esto último, se planifica en Puerto Deseado la planta del proyecto Orkeke, de Nordex-Acciona.

Las [represas sobre el río Santa Cruz](#) (“Jorge Cepernic” y “Néstor Kirchner” —también llamadas “Condor Cliff” y “La Barrancosa”—, ubicadas en la zona de Lago Argentino), son llevadas adelante por la empresa Represas Patagonia, [financiadas por capitales chinos](#). Con ellas se busca incrementar casi en un 15 por ciento la energía hidroeléctrica en el país, bajar el consumo de combustibles fósiles y la generación de empleo. Sin embargo no han estado exentas de polémicas en cuanto a su construcción y al impacto ambiental.

Los [pueblos originarios también han cuestionado las obras](#) por la falta de consulta libre, previa e informada, derecho amparado por tratados internacionales. Durante el último tiempo han mantenido una mesa de diálogo con la empresa y el Estado, pero manifiestan que no se ha avanzado de manera positiva. En [abril de 2023 brindaron una conferencia de prensa](#) Celia Rañil (Comunidad Lof Will

Mapu), Mónica Piutrillan (Los Piutrullan) y Mirta Pocón (Camusu Aike).

“La situación siempre nos lleva a repasar todo este proceso, como juegan todo el tiempo a tratar de debilitarnos y en realidad nos hacen todo lo contrario”, señaló Rañil, indicando la importancia del artículo 17 de la Constitución Nacional (que reconoce la propiedad comunitaria) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que también protege sus derechos.

Las comunidades indígenas remarcan, además de sus derechos, que en su cosmovisión y cultura “el río tiene vida”, y es un fuente de espiritualidad en el territorio.

Las obras han tenido objeciones también desde lo técnico. Respecto a la falta de estudios de impacto, Guillermo Tamburini —doctor en Ingeniería, geógrafo, glaciólogo y cartógrafo— ha estudiado el área donde se emplazan las represas y señala que no se han analizado en profundidad los efectos que el derretimiento acelerado de glaciares en la zona. “No está clara cuál va a ser la dinámica hídrica en este proceso de calentamiento global y deshielo acelerado. Tampoco qué eventos catastróficos pueden llegar a ocurrir”, indicó recientemente en declaraciones públicas. Y lo detalla en su investigación “[Deconstruyendo a las megarepresas en el río Santa Cruz de la Patagonia argentina: cara y cruz del discurso oficial](#)”, publicado en 2023 en el libro “Territorios de acumulación del siglo XXI. Los Andes meridionales. Patagonia en el espacio global”.

149

También desde el punto de vista legal ha existido un intenso trabajo de organizaciones ambientales, que han [recurrido al Poder Judicial](#).

Noel Miranda, integrante de [Fundación por El Mar](#), manifiesta que las represas representan un daño irreversible. Señala la importancia de proteger el recurso del agua y los glaciares, difundir la información pública y que la ciudadanía tome conciencia sobre la matriz energética.

“El compromiso ciudadano debe ser permanente. Podemos diseñar las comunidades que queremos y eso requiere un compromiso y un despertar que nos pueda reencontrar con la naturaleza desde un lugar más sabio y equilibrado”, indica. Y remarca que, ante la crisis hídrica, “proteger las fuentes de agua debería ser nuestra prioridad y no generar energía que se va a llevar las grandes urbes y no va a quedar para las comunidades locales”.

— Por Sergio Alvez —

13



CHACO: LA AGROECOLOGÍA QUE ASOMA ENTRE LA SOJIZACIÓN, LA GANADERÍA Y LOS DESMONTES

La radiografía agropecuaria de Chaco muestra tres décadas de agronegocio como política de Estado, con desmontes, desalojos e impactos sanitarios por los agrotóxicos. Las experiencias agroecológicas dan cuenta de un paradigma diferente, con producción de alimentos sanos y con protagonismo de comunidades campesinas e indígenas.



"La tierra del Chaco, quebrachera y montaraz" a la que le cantó Ramón Ayala, en su inmortal "El cosechero", ya no existe. El quebracho colorado, emblema identitario de los bosques chaqueños, quedó reducido a su mínima expresión, tras sucumbir bajo el hacha implacable de la explotación forestal, ya durante las primeras décadas del siglo XX. Y el monte, herido por topadoras, cede al avance voraz de un modelo productivo basado principalmente en la exportación de soja y la ganadería.

En esta dinámica, el cultivo tradicional de algodón, que hasta principios de la década del noventa representó el principal motor de la actividad económica en la provincia, fue quedando relegado dentro de un esquema agrario atravesado por la fuerte predominancia de cultivos de cereales y oleaginosas (fundamentalmente soja, girasol, maíz y trigo) hacia el centro occidental; un desarrollo pecuario que se afianza especialmente en el este provincial; y la expansión de la producción arrocerá (que pasó de 174 mil a 217 mil hectáreas en los últimos tres años), junto a la cría de pacú como actividad combinada en el noreste chaqueño.

El entramado actual, con el continuo avance de las fronteras agrícolas, encuentra a las poblaciones indígenas, a los pequeños productores y al campesinado en una encrucijada contra el modelo de economía capitalista neoliberal, mientras las experiencias agroecológicas intentan ganar terreno y afianzar sus redes de organización y comercialización.

El gobierno de Chaco informa la existencia aproximada de 1,8 millón de hectáreas sembradas, que generan 4,5 millones de toneladas de once cultivos diferentes: soja, maíz, algodón, sorgo, trigo, girasol, cártamo, tártago, garbanzo, arroz y centeno.

En el mapa productivo irrumpe además la ganadería, con 1.870.000 de cabezas distribuidas en 9.254 explotaciones, de acuerdo a datos del último Censo Nacional Agropecuario realizado por el Indec.

En su más reciente actualización, el informe estadístico elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, presentado bajo el título "Estimaciones agrícolas", da cuenta de un total de 646.350 hectáreas sembradas de soja durante el período 2021/2022, lo que implica un cuatro por ciento del área sembrada de soja en todo el país. La cosecha se vio reflejada, en la producción de 1.649.432 toneladas de soja. Siempre en el mismo período, Chaco alcanzó las 306.400 hectáreas sembradas de maíz. En cuanto al algodón, con 200.270 hectáreas sembradas, la provincia se sitúa como la productora del 40 por ciento del total del cultivo de esta fibra vegetal en Argentina.

Tres décadas de avance de la soja

La eclosión de la soja en la provincia se vincula directamente al fenómeno tec-

nológico basado en el uso de semillas transgénicas y agroquímicos. Su desarrollo se tornó relevante en Chaco a partir del periodo 1996/97, en el seno de un proceso que llevó a la provincia a transformarse en la de mayor superficie cultivada con cereales y oleaginosas fuera del área pampeana.

Alejandra Torre Geraldí es doctora en geografía de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y docente en el Profesorado en Geografía en la Cátedra Geografía Urbana y Agraria. Además, integra equipos de Investigación de Conicet. Su área de interés involucra a la Geografía Agraria y Rural, a partir del estudio de la expansión territorial de oleaginosas y su impacto socioeconómico y ambiental en el sector agrario de Chaco.

“Desde fines del siglo XX, ante la crisis del textil, se ha expandido territorialmente el cultivo de soja acompañando al proceso de ampliación de la frontera agraria que se había iniciado en el centro del país y que luego se replicó en nuestro espacio geográfico con aporte de capital extrarregional. Esta oleaginosa inicialmente ocupó los ambientes algodoneros abandonados por los pequeños productores locales, luego reemplazó a la actividad ganadera y, posteriormente, su desarrollo territorial se fue dando a partir del proceso de desmonte del bosque y monte nativo, situación que aún se sigue produciendo”, explica Torre Geraldí a Agencia Tierra Viva.

El cultivo de soja, desde hace más de 30 años, evidencia un crecimiento que paulatinamente fue transformando a Chaco en una especie de satélite proveedor de materia prima al área pampeana, aprovechando los puntos de inflexión críticos manifestados por el algodón, y alcanzando en sus campañas más fructíferas las 800.000 hectáreas implantadas.

“Las consecuencias que trae aparejado este proceso se dividen en dos perspectivas, la social y ambiental. Dentro del contexto social, se produjo la desaparición del estrato productivo más pequeño (especialmente algodonero) que no se ha podido insertar en el mercado sojero por los costos elevados para el acceso a semillas genéticamente modificadas y a tecnologías mecánicas y aditivas que acompañan al manejo del cultivo; esto **derivó en un incremento marcado de la pobreza rural, a lo que se suma el desplazamiento de los pueblos originarios que van perdiendo sus tierras**”, aporta Torre Geraldí.

Dentro la problemática ambiental se contabiliza la degradación y contaminación de los suelos, el deterioro de las aguas subterráneas y superficiales, la **deforestación** y la desaparición de especies vegetales y animales autóctonas, siempre según Torre Geraldí.

El quebracho, especie que actualmente posee una baja importancia comercial en la provincia, se sigue utilizando como materia prima principal de las dos em-

presas tanineras chaqueñas. Una se encuentra en la localidad de La Escondida y la otra en Puerto Tirol. En cualquiera de sus variedades, concluye Geraldí, el quebracho —como el algarrobo, urunday, espina corona y palo borracho, entre otras— se ven seriamente afectadas por el mismo proceso de expansión de la frontera agraria o cambios de uso de suelo para el cultivo de soja.

Desmontes como política de Estado

[Datos de la Dirección de Bosques](#) dependiente del Ministerio de Producción de la Provincia sostienen que entre enero y diciembre de 2022 se registraron 28.297 hectáreas de “bosques afectados por el cambio de uso de suelo sin la autorización” (léase desmontes), lo que corresponde al 0,61 por ciento del total de la superficie de bosques que la provincia ostenta actualmente.

Mirando hacia atrás, según el informe Monitoreo de la superficie de bosque nativo de la República Argentina (Ministerio de Ambiente de la Nación), **entre 2006 y 2015 en la provincia de Chaco se deforestaron 323.976 hectáreas**. Y en el periodo 2015-2019, esta vez de acuerdo al relevamiento Deforestación en el norte de Argentina/ Informe Anual 2019 de la organización Greenpeace, en Chaco se desmontaron 130.177 hectáreas de bosque.

En este contexto, ante una presentación judicial de la organización Conciencia Solidaria, el Poder Judicial emitió en noviembre de 2021 un fallo, que luego confirmó el Superior Tribunal de Justicia, prohibiendo el otorgamiento de permisos de cambio de uso de suelo en todo el territorio chaqueño hasta tanto el Gobierno procediera a la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques establecido por ley.



Con la sanción del decreto 2157/22 firmado por el gobernador Jorge Capitanich, la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa dio por cumplida la sentencia y cerró la causa.

“Más allá del pulido discurso ambientalista, los datos oficiales no dejan lugar a duda: estos últimos tres años de gestión Capitanich han sido la peor gestión de la historia del Chaco en materia de bosques. Los desmontes ilegales se duplicaron en 2021 y se cuadruplicaron en 2022”, denunció en marzo de 2023, el colectivo [Somos Monte Chaco](#), a través de un documento coincidente con el Día Mundial del Agua y convocando a una marcha hacia la Casa de Gobierno, que se realizó el 22 de marzo.

“El Gobierno ha ignorado hasta la sentencia del Superior Tribunal que exigía poner un freno a los desmontes, llegando a autorizar la extracción de madera de los desmontes ilegales. Este desprecio por nuestro hermoso monte ha quedado plasmado de puño y letra del Gobernador, quien firmó el vergonzoso decreto 2157/22, que pretende legalizar desmontes efectuados ilegalmente y entregar áreas del Impenetrable que hoy se encuentran protegidas”, añade el documento de Somos Monte.

Riccardo “Dardo” Tiddi es físico y técnico en imágenes satelitales e integra el colectivo Somos Monte Chaco. Desde sus redes sociales, Tiddi explica que tras cada desmonte se instaura la producción de soja o el ganado industrial, en el marco de un círculo que tiene su razón de ser en el negocio inmobiliario. “El desmonte se realiza con dos topadoras similares a las que se utilizan para demoler edificios, enormes máquinas a las que se les ata una cadena con eslabones como las de los barcos de carga, eslabones grandes como la cara de una per-



sona, las cuales vienen siendo arrastradas por el piso por estas dos topadoras, que arrasan con todo lo que encuentran. Y hablamos de miles de hectáreas. No se utilizan las motosierras o cosas parecidas. Con esta técnica **son capaces de destruir un bosque grande como la Ciudad de Buenos Aires en apenas días o semanas**. Y esto es lo que está permitido por la Ley de Bosques en la categoría verde”, indica el activista.

Actualmente, de acuerdo a [información oficial de la Dirección de Bosques](#) de la provincia, la producción forestal primaria de Chaco en 2022 fue de 1.046.654 toneladas, destinadas en un 58,7 por ciento a leña, en un 31 por ciento a rollos y el restante porcentaje a rollizos y en menor medida postes.

Agroecología: en busca de un nuevo horizonte

El último Censo Nacional Agropecuario, cuyos resultados definitivos se difundieron en abril de 2021, determinó la presencia de 49 explotaciones agropecuarias “con prácticas de agricultura orgánica, biodinámica y agroecológica” en Chaco.

Jorge Frías, propietario de la granja "[La tierra sin mal](#)", ubicada en la localidad de Puerto Tirol, y coordinador de [Proyecto Cultiva](#), una red que nuclea las experiencias agroecológicas en diferentes pueblos de la zona, asevera que “la principal característica del modelo productivo que está vigente acá en Chaco, tiene que ver con la extracción, es un modelo productivo extractivo y esto es histórico”.

El Proyecto Cultiva se esparce territorialmente en pequeñas parcelas, produ-



ciendo principalmente “hojas verdes” (rúcula, lechuga, acelga), mandioca, zapallo, batata, tomate de invernadero, ganadería a baja escala y en menor medida otros cultivos que, en sumatoria, contabilizan cerca de sesenta hectáreas.

“Esta producción se comercializa en verdulerías al por mayor, pero también estamos llevando a cabo la experiencia de bolsones populares en Resistencia. La idea es avanzar hacia el valor agregado. Y en Resistencia estamos planeando la apertura de una boca de venta fija”, cuenta Frías.

“El agronegocio tiene un impacto directo en el mundo campesino e indígena, en términos de acceso a la tierra, porque para la implantación de soja y maíz se va metiendo mucha presión a las comunidades campesinas e indígenas para que abandonen sus territorios. Otra consecuencia directa tiene que ver con las contaminaciones y los envenenamientos, sobre todo en lo que es producción primaria de vegetales y en los cultivos industriales extensivos”, aclara.

A pesar de la predominancia del extractivismo y sus dañinas formas, emergen en la provincia experiencias de producción agroecológica que pugna por afianzarse comercialmente y abrirse camino hacia nuevos mercados. Frías observa que, si bien están creciendo, aún no tienen peso en lo que hace a la economía de la provincia, ni siquiera en las economías regionales. “Son experiencias agroecológicas pequeñas y que no tienen apoyo real del Estado. **Hay todo un discurso y todo un planteo estatal respecto de la agroecología, pero en la práctica todo eso no se ve, no se visualiza ni en políticas públicas que faciliten la producción agroecológica, ni en recursos para desarrollarla**” afirma.

La Huerta Comunitaria del Frente Darío Santillán (FPDS) es un proyecto que se



gestó en 2020 en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, a partir de una articulación entre el municipio y la organización social, con la premisa de generar producción de hortalizas para el autoconsumo de las familias involucradas, con excedentes para la venta. Hoy, a partir de la asistencia de la Agencia de Extensión Rural del INTA Sáenz Peña, este espacio se vuelca íntegramente a la producción agroecológica.

Marisa Varela, integrante del Frente Darío Santillán, cuenta que “en 2020 esto era una pequeña huerta, y hoy trabajamos y nos abastecemos 120 familias. El trabajo principalmente lo realizamos mujeres. Fuimos aprendiendo, mejorando el sistema de riego, y así logramos ampliarnos hasta lo que hoy son dos hectáreas de cultivo agroecológico. Sostenemos la huerta con las ventas que hacemos directamente a los vecinos y verdulerías de la zona”.

En el idioma qom, el término **No'Oxonec** significa ‘tejido’. Así se denomina también, el proyecto que desde 2017 sostienen familias productoras y originarias de las localidades de Pampa del Indio, Castelli, Campo Medina, La Sirena y Presidencia Roca que consiste en la producción de algodón agroecológico. La experiencia es apoyada por la **Red de Salud Popular Ramón Carrillo**, y por la Asociación de Pequeños Productores del Chaco (Appch).

En abril de 2023, No'Oxonec presentó la primera edición de una colección textil basada en tres tipos de telas obtenidas de algodón agroecológico, con un rendimiento de 4,5 metros de tela por cada kilo de algodón. La meta para 2023 es superar las tres toneladas de algodón en bruto.

“Es una esperanza, es mostrar que se puede producir sin venenos, junto a otros, de forma cooperativa y sin dejar de luchar por la tierra y por una vida digna”, explica Reina Gómez, productora de Las Palmas.

Regino Altamirano, también productor agroecológico, enfatiza que “el algodón es una producción familiar, poder incorporarlo es una alegría, es volver a reivindicar la tradición, es muy importante, es poder transmitir a las futuras generaciones cuáles fueron las bases y cuál fue nuestro sistema mucho tiempo atrás. El algodón era la base principal de nuestra producción y de nuestro sustento hace 20 o 25 años atrás y hoy vuelve a serlo, de manera agroecológica”.

Abogada especializada en derecho ambiental y presidenta de la Fundación Ramón Carrillo de Chaco, Alejandra Gómez señala que la iniciativa construye una cadena desde la producción del algodón sin agrotóxicos hasta la confección y el diseño de prendas con un sistema que no solo no contamina, sino que posibilita el trabajo de las familias campesinas e indígenas garantizando su arraigo al territorio y conformando una cadena de valor agregado para este “sistema agroecológico 100 por ciento local”.

Venenos en el aire

La consolidación del modelo del agronegocio en Chaco trajo consigo no solo mayores niveles de concentración de la tierra, sino que profundizó la problemática sanitaria ocasionada por el uso intensivo de agrotóxicos. La Red de Salud Popular Ramón Carrillo trabaja desde 1989 junto con las poblaciones afectadas por la fumigación con agrotóxicos en distintas localidades. “Lamentablemente las empresas priorizan las ganancias por sobre la salud de las personas. Es muy triste e indignante saber cómo este problema histórico no se resuelve. Cómo la vida y territorios de los habitantes parece no valerles nada. El sistema de los agronegocios y su paquete tecnológico avanza sin medir consecuencias en los territorios y la vida humana. Hace años los pobladores de Chaco vienen denunciando esto, pero los acuerdos y normativas vigentes son incumplidos sistemáticamente”, denuncian desde la Red.

Uno de los episodios de mayor trascendencia en cuanto a las fumigaciones con agrotóxicos en la provincia tuvo lugar en 2021, cuando **casi setecientas personas sufrieron la intoxicación por los agrotóxicos** usados en campos pertenecientes al Grupo Eurnekian en Presidencia Roca, situación que motivó la intervención judicial y suspendió las fumigaciones en esos campos.

14



LA RIOJA: AVANCE DEL AGRONEGOCIO, CONFLICTOS SOCIOTERRITORIALES Y TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA

Las principales cultivos de la provincia son olivo, vid y nogal, que producen tanto campesinos como empresarios del agronegocio. Solo 42 explotaciones agropecuarias concentran el 33 por ciento de la tierra cultivada (850.000 hectáreas). En tanto, 3728 chacras acceden a menos del 10 por ciento. Mientras disputan el acceso al agua, crecen 136 experiencias agroecológicas.



Cuando en 1591 Juan Ramírez de Velasco fundó en tierra diaguita una nueva ciudad para la corona española la bautizó con el nombre de su patria chica. “Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja” se llamó aquel fuerte, hoy ciudad capital que, junto con otros 17 departamentos, conforma la provincia de La Rioja.

Montañas, valles y mesetas se dibujan en el noroeste, y sierras pampeanas en el resto de esta provincia, que se extiende a lo largo de 89.680 kilómetros cuadrados atravesados por la llamada “diagonal árida”. Pese a las escasas lluvias y a las reducidas áreas que favorecen los ríos, la producción agropecuaria ocupa más de un cuarto de la superficie provincial. Según los datos del último Censo Nacional Agropecuario (CNA), de 2018, son 2.596.976 las hectáreas que se destinan a la actividad, aunque menos del dos por ciento corresponde a superficies implantadas. Estos números reflejan una disminución de casi medio millón de hectáreas para la actividad agrícola ganadera, desde el CNA de 2002.

Los datos oficiales apuntan que el sector contribuye con **el 3,5 por ciento del PBG (Producto Bruto Geográfico)** y cerca del 15 por ciento de los puestos de trabajo formales privados, números que crecen si se considera que la industria manufacturera —en la que tiene un rol importante la elaboración industrial a base de aceitunas y uvas— representa casi una cuarta parte del PBG y cerca de un tercio de los puestos de trabajo formales privados.

El reparto de la tierra

La Rioja suma 4870 explotaciones agropecuarias (EAP), 982 menos que en 2002. Del total, apenas 42 —de más de 10.000 hectáreas cada una— concentran un tercio de la tierra destinada a la actividad. Desde 2002, sin embargo, ha disminuido la cantidad de unidades de esta magnitud, que alcanzaban entonces las 48, y también la superficie ocupada se redujo poco más del 26 por ciento.

En el otro extremo, 3728 EAP de menos de 500 hectáreas se distribuyen en menos del diez por ciento de la superficie destinada a la actividad. Tres cuartas partes de este total de unidades productivas poseen hasta 50 hectáreas cada una y casi la mitad (45 por ciento), menos de cinco hectáreas. Con respecto al CNA de 2002, las EAP de hasta 500 hectáreas disminuyeron en un 26 por ciento y perdieron más de 22.000 hectáreas de superficie. La pérdida más grande se dio en las EAP de hasta cinco hectáreas, que evidencian una disminución superior al 40 por ciento en unidades y al 32 por ciento en superficie.

Pedro Tsakoumagkos y Daniel Lazarte, en un análisis sobre el periodo intercensal 2002-2018 —de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Giberti— señalan el avance de la urbanización, el abandono de pequeñas fincas y la transferencia de propiedades como fenómenos congruentes con esta disminución.

Cultivos de oasis

Entre 2002 y 2018 la superficie implantada se redujo en un 21 por ciento. Las disminuciones más notables se dieron en los cultivos anuales (avena, maíz forrajero y soja) y perennes (la pastura buffel grass), que perdieron terreno en un 69 y 60 por ciento, respectivamente. A contracorriente, el cultivo de frutales ganó casi un diez por ciento de superficie y representa el 71 por ciento del área implantada en La Rioja.

En este último grupo se cuentan nogales, olivos y vides, denominados “cultivos de oasis”, que se desarrollan mediante riego artificial en los valles riojanos. Constituyen actividades productivas tradicionales con gran relevancia actual, ya que representan más del 95 por ciento del PBG agropecuario, según indican Tsakoumagkos y Lazarte.

Olivares: entre el orgullo y el conflicto

El cultivo del olivo tiene larga historia en La Rioja. Arauco, el departamento con más superficie cultivada, le dio nombre a la única variedad autóctona del país y conserva el olivo más antiguo del territorio nacional: tendría ya 400 años y habría pertenecido a la plantación original, que diseminó la olivicultura en Argentina, Perú y Chile. Por esto, fue declarado “Monumento histórico nacional”.

Actualmente La Rioja es la provincia con más superficie olivarera: casi 26.000 hectáreas, es decir, la mitad de la superficie provincial implantada, distribuidas en 592 EAP que se concentran en los departamentos Arauco, Chilecito y Capital.



Según [un informe del Centro de Estudios para América Latina \(Cepal\)](#), La Rioja encabeza la lista de provincias exportadoras de aceite de oliva, con un tercio del total nacional, y es la segunda en exportación de aceitunas de mesa.

Según explica Pablo Montilla, licenciado en Ciencias Ambientales y magíster en Ordenamiento Territorial, este cultivo se vio beneficiado con diferimientos impositivos a partir de la Ley 22.021, que promovió “la llegada de grandes capitales nacionales”, a la vez que generó conflictos con los pobladores locales. “Por ejemplo, en Vichigasta, desde el año 90 a 2018 aproximadamente, aumentó un 700 por ciento la superficie productiva del monocultivo del olivo y eso generó un montón de resistencias territoriales, porque el avance del monocultivo está comenzando a competir por el agua”, explicó. Ante esto, los pequeños productores del lugar se unieron y lograron la sanción de la Ley 8790 que reserva un área para usos múltiples: proveer pasturas para el ganado y preservar acuíferos para consumo humano, a la vez que prohíbe la tala.

Vid y nogales en el oeste

También la vid ocupa un lugar destacado en la provincia, aunque no gravitante a nivel nacional, donde abarca menos del cuatro por ciento de la superficie plantada con este frutal. En el amplio abanico de variedades que se cultivan se



destaca el Torrontés riojano, única variedad autóctona argentina. Chilecito concentra el 80 por ciento de la producción provincial, la cual se destina en un 90 por ciento a la elaboración de vinos, según Cepal.

Otra producción destacada en la economía regional es la nogalera. La Rioja posee poco más del 20 por ciento de las hectáreas a nivel nacional, cuenta con un clúster y con la empresa más grande de Argentina (Coralino Sociedad Anónima), que aporta el diez por ciento de la producción total, según indican Tsakoumargos y Lazarte

Costos sociales del agronegocio

En los sectores olivícolas, vitivinícolas y nogaleros conviven minifundios locales con medianos y grandes productores tecnificados. Mientras los primeros abastecen al mercado local o venden sus cosechas a empresas más grandes, los segundos exportan productos con valor agregado. La diferencia es más que económica.

Según grafica Soledad Vogliano, de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), en las últimas décadas, caracterizadas por la tecnologización y una creciente especialización, los pequeños productores que solían proveer materia prima



fueron siendo expulsados del circuito porque “las grandes empresas fueron comprando tierras y desarrollando sus propias plantaciones, con aplicación de tecnología”. Así, los pequeños y medianos productores, que antes eran los únicos proveedores de materia prima, fueron quedando relegados y "el eje de disputa que antes era el precio, empieza a perder peso específico, porque ya no existe esa discusión", explica Vogliano.

Por su parte, Montilla señala que, históricamente, La Rioja se caracterizó porque las producciones estaban en manos de comunidades campesinas, que fueron “absolutamente invisibilizadas y relegadas”. El advenimiento de los grandes capitales y una producción basada en el modelo del agronegocio afectó la relación con la tierra y el trabajo. Según el investigador, el campesinado entabla “relaciones de base comunitaria, muy importantes para mantener la vida rural, la gente en el campo y que no migre, pero con el avance del monocultivo se fueron rompiendo esos lazos o fueron avanzando en territorios que eran campos comuneros”.

Justamente, La Rioja es la provincia con mayor superficie bajo esta forma jurídica, en la que suelen predominar las EAP sin límites definidos. Entre 2002 y 2018, este tipo de explotaciones disminuyeron en un 84 por ciento. Aunque Tsakoumagkos y Lazarte desconfían de los datos, señalan que esto podría deberse al saneamiento de títulos de propiedad, pero también al abandono de la cría de cabritos. De acuerdo con estos autores, las existencias caprinas —igual que las bovinas— se redujeron casi a la mitad en ese periodo intercensal.

Agricultura familiar y soberanía alimentaria



Menos del dos por ciento de la superficie implantada (unas 900 hectáreas) se destina al cultivo de hortalizas. Según Maricel Ormeño y Sergio Vignato, ingenieros del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) de La Rioja, la pandemia “desnudó la fragilidad del actual sistema de provisión” y evidenció que, por ejemplo, en el caso de Chilecito (segundo departamento más poblado), el 70 por ciento de las frutas y verduras provenían de Mendoza, San Juan, Tucumán y Córdoba, y los agricultores locales sólo proveían el 20 por ciento.

Son los agricultores familiares quienes tienen en sus manos, principalmente, la producción de alimentos agrícolas. Tales son los casos de los productores nucleados en la Colonia Frutihortícola de La Rioja (Cofrular) —una cooperativa ubicada en el área periurbana de la Capital— y la asociación civil Agricultores Familiares de Chilecito.

Tomate, pimiento, berenjena, zanahoria, variedad de zapallos, pepino, verduras de hoja, melones, sandías, frutillas y cítricos forman parte de las producciones de estas organizaciones.

Para Vogliano, La Rioja podría alcanzar la soberanía alimentaria a partir del fomento de la producción hortícola, lo que implica “pensar, básicamente, el acceso al agua y la distribución de la tierra, no porque esté necesariamente concentrada, sino porque hay una gran irregularidad en la tenencia”.

Según ejemplifica Maximiliano Giannini, presidente de Cofrular, la entidad no posee un terreno comunitario, sino que “las superficies de producción son de los socios que la integran, incluso, hay socios que no tienen tierra”. Ormeño y Vignato señalan que, en el caso de Chilecito, “los agricultores familiares producen en tierras de terceros mediante mediería, sistema de arrendamiento donde los campesinos aportan su trabajo, los insumos necesarios e incluso se encargan de la venta, usualmente dividiéndose las ganancias” con los propietarios de la tierra.

Esto limita sus decisiones, ya que los cultivos y las cantidades dependen muchas veces “del patrón”, y les impide “emprender procesos de capitalización para mejorar su rentabilidad”, agregan los ingenieros, quienes trabajan con los productores de la zona en un proyecto conjunto con la Universidad Nacional de Chilecito.

Agua, insumos y transporte

Siempre presente el problema del agua, Giannini señala que durante los meses más cálidos, solamente se trabaja en 20 de las 43 hectáreas disponibles. Para

Vogliano, esta es una de las principales limitaciones: “A pesar de que tiene un agroecosistema muy similar al de provincias como Mendoza, La Rioja es ínfimamente productiva en comparación”, ya que “nunca se hicieron las obras hídricas que hubiesen permitido poner en producción muchísimas hectáreas de tierra que hoy son improductivas”.

No es el único problema que enfrentan los agricultores: a la falta de medios de producción y de tierra, Giannini suma la complicación para acceder a insumos — como frascos, cajones, bombas de agua, ya que todo se trae de otras ciudades—, y la lejanía de los principales mercados, Mendoza y Buenos Aires. También Vogliano destaca el problema que implican “los costos elevadísimos en el transporte y la logística”. Así, “la potencialidad de producir grandes cantidades de productos que se consumen en el mercado nacional como en el exterior” choca con la falta de una logística que les permita poder intercambiar productos en condiciones más beneficiosas. Las redes de comercialización de la economía social y de ferias de productores intentan paliar, en parte, esta problemática, a nivel local.

La inestabilidad de precios es otra variable que, según grafica Giannini, afecta la producción, ya que los retornos por las inversiones muchas veces no alcanzan a cubrir los costos de producción o (los bienes) tienen precios de mercado que son muy bajos. Por eso, la industrialización de los excedentes es una apuesta para el agregado de valor. Así, el último CNA relevó 173 EAP que realizan deshidratado de frutas y verduras y 70 que elaboran jugos y extractos.

Agronegocio y el desembarco del trigo transgénico HB4

En la década que va de 2007 —año en que se sancionó la Ley Nacional de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo— a 2017, y [de acuerdo con un informe oficial](#), La Rioja perdió casi 82.000 hectáreas de sus ecosistemas naturales, aunque más del 90 por ciento no estaban categorizadas. [Según un informe de la fundación Vida Silvestre](#), el 11 por ciento de la superficie provincial aún es bosque y monte nativo, que se encuentre amenazado, principalmente, por la agricultura, la ganadería intensiva y los incendios.

Otra cara del agronegocio es el uso de químicos en los cultivos. Según el último CNA, los olivares son las plantaciones más tratadas con estas sustancias en la provincia, principalmente con herbicidas, fertilizantes e insecticidas. No obstante, la superficie relevada en esta categoría es menor a la superficie cultivada. Esto indicaría que gran parte de los cultivos se desarrollan sin agrotóxicos.

Sin embargo, estos números podrían revertirse con la incursión de La Rioja en la siembra de trigo y soja con tecnología HB4, que se promociona como resistente a la sequía y esconde su tolerancia al glufosinato de amonio. “Cuando viene la

soja viene también una carga de plaguicidas importante, que si bien se están aplicando en nogal y olivo, no implican una carga tan fuerte como sí lo tiene este tipo de cultivos”, explica Montilla, quien también es integrante de RAP-AL (Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina).

Aunque no hay información actualizada, [de acuerdo con declaraciones oficiales](#), a través de un convenio entre el gobierno provincial y la empresa Bioceres, la siembra de soja ya se habría iniciado y en otoño comenzaría la de trigo. Como prueba piloto, se planean sembrar 100 hectáreas con cada cultivo, en los departamentos Capital y Ulapes.

Como en el caso de otros monocultivos, Montilla afirma que muchas de las empresas que se inscriben en este tipo de iniciativas son extraprovinciales, de grandes capitales y con emprendimientos en otros territorios, que compran tierras o las arriendan, hasta que el monocultivo deja de ser rentable. Con estos cultivos “no solamente se exportan y generan divisas, sino que se exporta agua, nutrientes, se exportan un montón de cosas”, enumera. Cuestiona así los costos que tienen este tipo de proyectos y señala la necesidad de preguntarse: “Quién se apropia de eso, a quién beneficia, si se hace con la comunidad o a sus espaldas, promoviendo qué, qué sentido tiene la soja acá cuando podemos hacer otros cultivos que no estamos haciendo porque no hay financiamiento o apoyo”.

Experiencias agroecológicas

El último CNA registró 82 explotaciones agropecuarias que cultivan orgánicamente, 23 que practican la agricultura biodinámica y 31 que ponen en práctica los principios de la agroecología.

Entre estas últimas se cuenta la cooperativa Cuchiyaco, nombre original del pueblo Santa Vera Cruz, en el departamento Castro Barros, donde está ubicada. Creada en 2014, actualmente cuenta con una quincena de socias y socios, y además favorece a otros productores de la zona, que cultivan sin pesticidas y venden a la cooperativa sus cosechas.

Clara Larisgoitia, productora y tesorera de Cuchiyaco, cuenta que la asociación nació con el objetivo de “poner de vuelta en valor el trabajo con la tierra, producir alimentos saludables, trabajar en el lugar donde vivimos y generar alimento para nuestras propias familias y amigos”. Nueve años después, la cooperativa creció tanto que las propias cosechas no alcanzan y deben comprar a otros productores, para elaborar las mermeladas, dulces, confituras, café de algarroba, alimentos gourmet a base de aceitunas y vinos, que se venden a través de ferias, comercializadoras de la economía social, espacios de venta de alimentos saludables y nodos de consumidores en ciudades de todo el país.

Una transición hacia este modelo es también el que encararon, en 2021, más de 50 familias reunidas en Agricultores Familiares de Chilecito. Según refieren Ormeño y Vignato, “los elevados costos del paquete tecnológico, insumos y agroquímicos dolarizados, semillas híbridas que obligan a los campesinos a adquirirlas todos los años”, sumados al “agotamiento y contaminación del agua y la pérdida de biodiversidad y su ineficiencia energética” que genera el sistema hegemónico de producción industrial, fueron causa de la reflexión y análisis que llevaron a los agricultores a optar por un cambio de paradigma.

Explorando el mismo camino de la agroecología, Giannini cuenta que en la colonia se están ensayando algunos cultivos, por ahora en una hectárea de tierra, con asesoramiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Safci). Entre los cambios se ponen a prueba algunos biopreparados “para empezar a sustituir los productos de síntesis química”, señala Giannini. Mientras, los cultivos se someten a constante evaluación, porque los asociados necesitan tener “la seguridad de que ese sistema no solamente sea más sano, más seguro, sino que sea más rentable, porque las familias viven de eso”, agrega.

Sin desconocer la ayuda y asesoramiento que el Estado brindó a la cooperativa en su búsqueda agroecológica, Larisgoitia opina que las políticas públicas son contradictorias: “Por un lado, hay espacios concretos e instituciones concretas que apoyan (la agroecología), pero después vemos la contradicción con el apoyo y el fomento al agronegocio, a que se sigan ampliando y extendiendo las fronteras”.

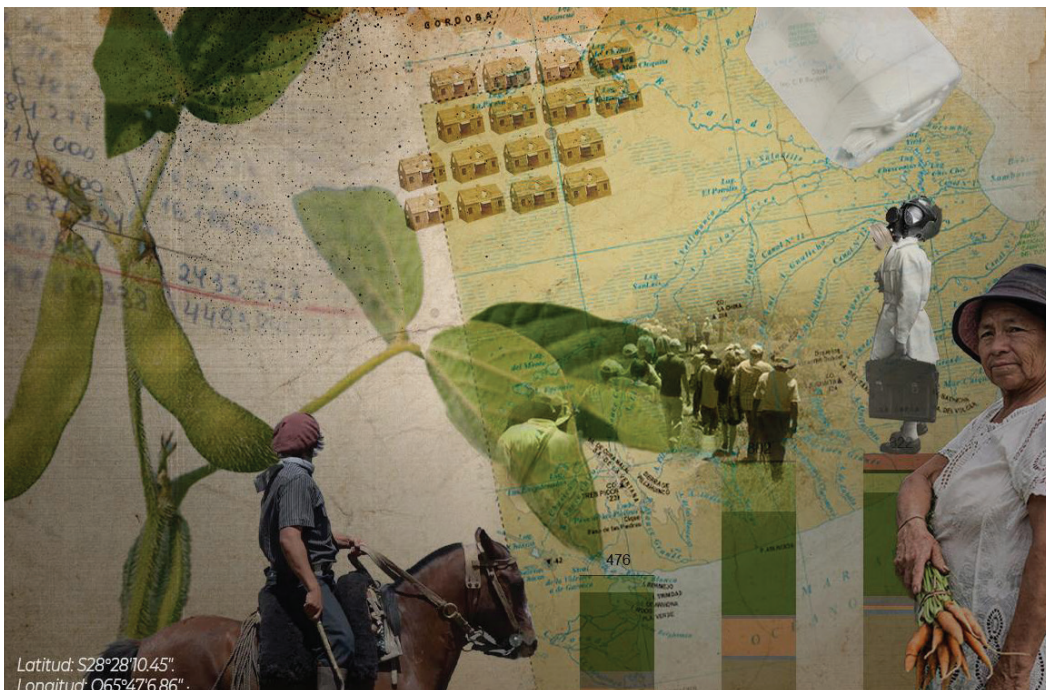
En coincidencia, Ormeño y Vignato apuntan que “la producción de commodities como la soja y el maíz no compiten por el mercado interno en la producción de alimentos sino por el uso y ocupación del agua y las tierras”. Para los ingenieros, la agricultura familiar “responde a lógicas de producción que se vinculan con la identidad y la cultura de la tierra” y, por tanto, chocan con el agronegocio, que suscita “la silenciosa expulsión del sistema de los agricultores familiares y campesinos”. Por eso, son modelos que no pueden convivir. Como sentencia Larisgoitia: “Una cosa es directamente excluyente de la otra”.

15



BUENOS AIRES: PILAR DEL AGRONEGOCIO, CONCENTRACIÓN DE TIERRAS Y OTRO MODELO POSIBLE

Desde soja transgénica hasta trigo agroecológico, desde uso masivo de agrotóxicos hasta agricultura biodinámica. En la provincia de Buenos Aires el 16 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla el 66 por ciento de la tierra. Y también se multiplican las alternativas: más de 5000 experiencias que muestran que otro modelo agropecuario está en marcha.



Latitud: S28°28'10.45"
Longitud: O65°47'6.86"

La provincia de Buenos Aires es el principal territorio agropecuario del país. En su extensión de 30.757.100 hectáreas, 23,7 millones son parte de la superficie rural en la que se distribuyen 36.700 Explotaciones Agropecuarias (EAP). De sus 135 municipios, 110 son de perfil rural: al norte la denominada “zona núcleo” del agronegocio con la soja como protagonista, el sureste triguero con porciones hortícolas y papa, la zona centro y serranías del oeste dominadas por las pasturas para el ganado bovino; y el “cinturón verde” hortícola –de La Plata a Campana– rodeando el Conurbano.

Según el Censo Agropecuario 2018, diez millones de hectáreas estaban destinadas a cultivos y trece millones a la ganadería. En territorio bonaerense el modelo sojero transgénico y su paquete agroquímico avanzó sin parar desde 1996, con la mirada puesta en commodities y exportación, pero comenzó a construirse desde los campos y huertas una respuesta: la agroecología. El registro voluntario de productores agroecológicos, abierto en 2020 por el Ministerio de Desarrollo Agrario, cuenta con 321 productores que representan 23.000 hectáreas agroecológicas.

Las estadísticas agropecuarias padecen de cierta orfandad por los dispares relevamientos de los últimos cinco Censos Nacionales Agropecuarios (CNA) –1969, 1988, 2002, 2008 y 2018–. Como explica el investigador Carlos Alberto Rossi en su apartado sobre Buenos Aires en el libro *"La Argentina Agropecuaria vista desde las provincias: un análisis de los resultados preliminares del CNA 2018"*, las 23,7 millones de hectáreas censadas en 2018 significaron dos millones menos que las relevadas en el CNA 2002 y 3,5 millones menos que en el CNA 1988, algo “poco creíble” en “un contexto expansivo de la agricultura y la ganadería, impulsado por la agricultura industrial y el llamado ‘agronegocio’”.

Sin embargo, a partir de la comparación del Censo 2018 y las cifras obtenidas en los censos anteriores no quedan dudas de las consecuencias del modelo agropecuario aplicado en los últimos 50 años:

- Concentración de las tierras: el 16 por ciento de las EAP controlan el 66,5 por ciento de la superficie, todas con más de 1000 hectáreas.
- En otro extremo, con menos de 100 hectáreas, aparecen el 30 por ciento de las EAP que posee sólo el 1,8 por ciento de la superficie.
- Reducción drástica de las explotaciones agropecuarias: se pasó de 75.531 en 1988 a 51.116 en 2002 y se llegó a 36.700 en 2018.
- Expulsión de pobladores rurales: en 1988 había una persona cada 141 hectáreas y en 2018 una cada 258 hectáreas.

- Reducción del trabajo rural: el CNA 2018 registró un 18,5 por ciento menos de trabajadores permanentes, incluyendo a productores y socios, que en el CNA 2008.

Las cifras también permiten confirmar que la soja es la estrella del modelo del agronegocio: la superficie cultivada con oleaginosas —soja y girasol, principalmente— representaba el 19,4 por ciento de la superficie cultivada en 1988 y llegó al 39,8 por ciento en 2018, año en el que la soja representó el 86,5 por ciento de las hectáreas sembradas con oleaginosas en Buenos Aires. En cifras totales, fueron 3,9 millones de hectáreas de soja frente a 1,8 millones de maíz y 1,6 millones de trigo. Algo que [se modificó en las últimas campañas](#), pero está lejos de revertirse.

De la soja y los agrotóxicos a la agroecología

Junto a la soja transgénica —aprobada en 1996 por el entonces secretario de Agricultura, el bonaerense Felipe Solá— Buenos Aires también es en la actualidad el reflejo de los efectos contaminantes del modelo basado en el paquete de agrotóxicos, como demostró el detallado informe *"Relevamiento de la utilización de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires"* publicado en 2013 por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata, con la coordinación del ingeniero agrónomo [Santiago Sarandón](#).

173

Según el informe, solo el cultivo de soja demandaba el 46 por ciento del total de plaguicidas utilizados por los agricultores. Y el glifosato fue el agroquímico más empleado. “Tanto el barbecho químico de los cultivos bajo siembra directa,



como el mantenimiento de los cultivos transgénicos RR. Es importante destacar que no es el cultivo en sí, la especie elegida: maíz, sorgo, soja o trigo, entre otros, el que se asocia a la liberación de agroquímicos, sino el modelo productivo elegido”, apunta el informe.

Sin [información oficial disponible sobre el uso e impacto de los agrotóxicos](#), los estudios impulsados por asambleas de pueblos fumigados y organizaciones de la sociedad civil –a partir de los informes de las propias cámaras empresarias de agroquímicos– determinaron que la Argentina registra la tasa promedio más alta del mundo en uso plaguicidas: 12 litros por habitante, por año, como denunció la [campaña nacional Basta de Venenos](#).

La contaminación del agua, el aire y el suelo está siendo demostrada por las poblaciones afectadas –ante la [falta de regulación](#) también a nivel provincial– como ocurrió recientemente con los estudios realizados en localidades del agro bonaerense como [Lobos](#) o [Baradero](#), donde los ciudadanos impulsan ordenanzas locales para protegerse de las fumigaciones con agrotóxicos.

Según un [relevamiento del Observatorio Técnico de Agroquímicos \(OTA\)](#) --dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense--, la legislación local respecto del uso de agroquímico en los 135 municipios bonaerense era la siguiente:

- 71 municipios cuentan con ordenanzas que regulan distancias de aplicación.

- 6 municipios cuentan con ordenanzas relativas al uso y aplicación de agroquímicos, pero no regulan distancias de aplicación.

- 5 municipios cuentan con ordenanzas que prohíben la aplicación de productos específicos.

- 4 municipios cuentan con ordenanzas que adhieren a la [Ley 10.699](#) y a su decreto reglamentario 499/91. Dos de ellos, también regulan distancias de aplicación.

- 28 no poseen regulación específica relativa al uso y aplicación de agroquímicos.

- 21 municipios aún no se dispone de información.

Mientras en casos como [Exaltación de la Cruz](#) o [Pergamino](#) se logró un límite a las fumigaciones través de fallos judiciales, localidades como [Ayacucho](#) avanzaron

con ordenanzas luego de que la sociedad se movilizara para demostrar el daño y contaminación que producen los agroquímicos. Los límites a las fumigaciones se traducen en las denominadas "zonas de exclusión" –en torno a cascos urbanos, escuelas rurales y cursos de agua–, que podrían significar un impulso significativo a otro modelo de producción que respete la salud del ambiente y la de los habitantes cercanos a las explotaciones agropecuarias, y que priorice el abastecimiento local de alimentos sanos. El modelo propuesto por la agroecología.

“En 2012 empezamos a discutir el modelo agropecuario por la salud y el cuidado del ambiente, por el aire que respiramos y el agua que tomamos. No sabíamos cómo salir, pero esa inquietud nos llevó a buscar en la agroecología”, cuenta desde **Guaminí** –en el centro-oeste provincial, al límite con La Pampa– Marcelo Schwerdt, presidente de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (**Renama**), organización que reúne a 200 productores con más de 100 mil hectáreas en 40 municipios del país.

Según el Censo Nacional Agropecuario más reciente (2018), existen unos 5000 establecimientos en el país con producción de tipo orgánica, agroecológica o biodinámica. El mismo censo marca una escasa participación de la producción hortícola “a campo” o en invernáculo de solo el 0,2 por ciento de la superficie cultivada en la provincia, a pesar de ser la que aporta los alimentos frescos a las mesas de las grandes ciudades.

175

En ese modelo “a campo” e intensivo –particularmente en los invernáculos del “**cinturón verde**” del Conurbano con gran uso de agroquímicos– también crece la agroecología. “Lo planteamos como un modo de producción superador para que el campesino y la campesina mejoren su producción, bajen los costos y nadie se envenene con lo que come”, sintetiza Agustín Suárez, referente nacional de UTT. En Buenos Aires, la UTT cuenta con 100 hectáreas agroecológicas y representa a 9000 familias productoras y productores en los cordones hortícolas en los partidos del Conurbano, General Pueyrredón, Villarino y Bahía Blanca.

El peso de la Buenos Aires agropecuaria: ¿producir para quién?

En los distintos censos realizados desde 1969, según detalla el investigador Carlos Rossi, la superficie relevada en la Buenos Aires osciló entre el 14 y el 15 por ciento de la registrada en el total del país. Pero la participación es más relevante en la producción agropecuaria nacional. Medido por decenios, la provincia produjo, en promedio, entre las campañas 2009/10 y 2018/19, el 93,1 por ciento de cebada para grano, el 56 por ciento del girasol, el 49,5 por ciento del trigo, el 33,1 de la soja y el 28,9 por ciento del maíz, respecto del total nacional.

En 2021, según información del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, la

participación de las exportaciones de Buenos Aires en el total exportado por el país, en los tres primeros trimestres del año, representaron el 29,2 por ciento de los productos primarios agropecuarios y el 30,2 por ciento de las Manufacturas de Origen Agropecuario –malta, subproductos del maíz, pellets, harina de trigo, aceite de soja, subproductos de soja y girasol, aceite de girasol y biodiesel–.

A junio de 2022, según el informe de “Coyuntura del comercio externo agroindustrial” elaborado también por el ministerio bonaerense, el acumulado de exportaciones agroindustriales desde la PBA alcanzaban los 6412 millones de dólares, 39 por ciento más que el mismo periodo del 2021 y el mayor valor en el lustro analizado 2017-2022.

Por el lado de la ganadería, según datos de existencias de ganado bovino de la Dirección Nacional de Sanidad Animal (DNSA) del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa, 2020), en promedio para el decenio 2010/19, la provincia de Buenos Aires participó con el 36,7 por ciento del stock total del país, estimado al 31 de diciembre de cada año.

Según un dossier sobre “rodeo de tambo y razas bovinas” publicado por el Indec, en base al CNA 2018, Buenos Aires es la tercera provincia productora de leche con el 21 por ciento del total de tambos del país, detrás de Córdoba (27 por ciento) y Santa Fe (30 por ciento). De las 2.540.000 cabezas de ganado bovino destinadas a tambo, el 90 por ciento se encontraban en estas tres provincias. En Buenos Aires se censaron 690.806 cabezas de ganado destinadas a tambo.

Esas cifras se registran en una provincia que en el segundo semestre de 2021, según el Indec, registra el 42,3 por ciento de pobreza y el 10,5 por ciento de indigencia.

Para producir alimentos sanos se precisan políticas públicas

La agroecología muestra la otra cara de un modelo agropecuario. “En 2021 hubo sobreproducción de trigo agroecológico”, cuenta Yesica Corvino, ingeniera agrónoma, docente de la Escuela Agropecuaria N°1 Martín Fierro y promotora asesora de un grupo de [Cambio Rural](#) del INTA en la localidad de Arrecifes, en el norte bonaerense. Allí, en plena zona núcleo, productores se unieron en una [red de trigo agroecológico](#) que cultiva sin agroquímicos y pensando en el abastecimiento local.

“Aunque un productor se dedique a la agroecología aún está condicionado por las políticas macro. En el caso de la sobreproducción de trigo de 2021, en Arrecifes, no contábamos con molinos y es limitada la capacidad de comercialización.

En lo cotidiano falta acceso a servicios de maquinaria que no trabaje con agroquímicos, faltan recursos para generar biofábricas, faltan políticas públicas que permitan aumentar el volumen de los productos agroecológicos”, sostiene Corvino, quien también acompañó a una red de productores hortícolas que sostienen la feria agroecológica de la localidad.

“Las políticas públicas que aplica el Estado para ‘el campo’ están destinadas a la producción de commodities para la exportación, puertas adentro del país las políticas son de libre mercado y concentración de las cadenas productivas. Se gestiona como si los alimentos salieron de las góndolas de los supermercados: necesitamos un Ministerio de la Alimentación para planificar cómo producimos comida”, apunta Suárez, de la UTT.

En 2018, la Renama impulsó la presentación de una Ley de Agroecología provincial con la participación de diputados de todos los sectores políticos que se comprometieron a tratarla. La norma no fue tratada pero varios de sus ejes como la creación de un registro de productores agroecológicos y el fomento de mercados locales son parte de las políticas actuales del Ministerio de Desarrollo Agrario. “Una ley nos permitiría estar seguros de no depender de la voluntad del gobierno de turno”, señala Schwerdt.



Un modelo concentrado sin gente en el campo

Las explotaciones agropecuarias relevadas en cada Censo Agropecuario cuentan con tres estratos: hasta 100 hectáreas, de 100,1 a 1.000 y de más de 1.000,1 hectáreas. El primer estrato, que representa a los campesinos y pequeños productores, representaba el 59 por ciento de las EAP en 1969 y pasó a tener solo 30,1 por ciento de las EAP en 2018. El segundo estrato –de 100,1 ha hasta 1000 ha– representaban el 35,8 por ciento de las EAP en 1969 y creció hasta el 54 por ciento en el CNA 2018, pero redujo su participación en la superficie total de 43,3 por ciento al 31,7 por ciento en el mismo periodo.

En paralelo, el suelo bonaerense evidenció un cambio en la tenencia de la tierra: la propiedad llegó a un máximo del 78 por ciento en 1988 y comenzó a caer hasta un mínimo del 59,7 por ciento en 2018. A la par se incrementó el arrendamiento desde su piso de 13,6 por ciento en 1988 hasta el 34,7 por ciento del último censo. La foto se completa con el relevamiento de las explotaciones de más de 1000 hectáreas, la de los grandes terratenientes, que pasaron del 5,2 por ciento del total de explotaciones en 1969 al 16 por ciento de las explotaciones con el 66,5 por ciento de la tierra censada en 2018.

Mientras crecieron las tierras en pocas manos y los arrendamientos, la gente comenzó a irse del campo. En lo que Rossi califica como “un cambio radical” señala que entre los censos 2008–2018, sólo 8778 productores o productoras residían en sus campos, un 50 por ciento menos en comparación con el censo realizado 20 años antes.

“En el censo agropecuario es muy patente la tendencia a la concentración. En esta coyuntura, lo que hay que plantear es el modelo agropecuario ¿para quién? Desde 2012, la Renama creció con el lema ‘la salud, el campo y la vida’ y hemos demostrado que la agroecología es viable, en la agricultura extensiva, en fruticultura, en modelos de monte y sierra con rodeos ovinos, en la ganadería y con tambos pastoriles. Ante la pregunta de un campo para quién, en el cómo hacer que la gente vuelva al campo, la agroecología tiene muchas respuestas”, asegura el referente de la Renama, biólogo y director del Centro de Educación Agraria N°30 de Guaminí.

Corvino señala que el modelo de arrendamiento se evidencia en Arrecifes, donde al andar por los caminos rurales se ven campos uniformes, sin alambrados y con los típicos cultivos de rotación para la exportación: soja, maíz y trigo. En medio de explotaciones arrendadas en contratos por año donde los suelos no se rotan ni se cuidan, la ingeniera agrónoma resalta la experiencia que vive en el grupo de Cambio Rural local: “Hay nuevas generaciones de productores que quieren realizar cultivos sustentables, que comienzan a ver la producción desde el reciclado de nutrientes, los bioinsumos, el intercambio de semillas, los cultivos de cobertura y la rotación de tierras”.

En las pequeñas extensiones donde se producen frutas y verduras la lógica no varía. La falta de propiedad de la tierra es una constante. Según la UTT, el 75 por ciento de los y las productoras hortícolas no son dueñas de las tierras en las que trabajan. Para contrarrestar esta realidad la organización de pequeños y pequeñas productores presentó en el Congreso y a nivel provincial la [Ley de Acceso a la Tierra](#). Este febrero, la iniciativa perdió estado parlamentario por tercera vez.

¿Qué trabajo genera el campo en Buenos Aires?

“La agricultura dominante busca reducir al mínimo el empleo directo en las Explotaciones Agropecuarias (EAP) y los requerimientos de trabajo son reemplazados por prestadores de servicios, trabajadores sin relación de dependencia e informales”, sostiene Rossi en su investigación y lo pone en cifras: el total de trabajadores y trabajadoras permanentes alcanzó a 79.796 personas en 2018, un 18,5 por ciento menos que el número registrado en el CNA 2008 y un 33 por ciento menos que en el CNA 2002.

Según el [Mapa de Trabajo Agropecuario](#), que presentó el Ministerio de Desarrollo Bonaerense el 1 de mayo de 2022, solo el 32,1 por ciento de los establecimientos agropecuarios declaró contratar a un total de 43.377 personas, entre las cuales dos tercios son trabajadores permanentes, el 22,6 por ciento son temporarios ocupados menos de seis meses y un 13,4 por ciento temporarios de más de seis meses.

En base a ese trabajo, realizado en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el gobernador Axel Kicillof, en una entrevista con el Cohete a



la Luna, sostuvo que “hay que escribir de nuevo y analizar muy bien [la nueva anatomía y sociología de lo que se llama ‘campo argentino’](#)”. Y ejemplifica: cada 1000 hectáreas, los cultivos extensivos del actual modelo producen escaso empleo, como la soja (11 personas), el trigo (8) y el maíz (6), mientras que la producción bajo cubierta asciende a 1209 y la cría de porcinos a 46.

El referente nacional de la UTT confirma esos números y resalta cuánta mano de obra podría generarse en toda la provincia si se ampliara la superficie de tierras destinadas a la horticultura. Suárez indica que en tan solo una hectárea con invernáculo trabajan, al menos, tres personas a las que se suma mano de obra temporal, mientras que los cultivos a campo abierto como la papa y la cebolla también requiere de cuidados diarios y de trabajo de jornaleros en la época de cosecha.

“Es ridículo que en 10.000 hectáreas sólo haya un ingeniero trabajando y que lo visite una vez por mes”, apunta Schwerdt sobre la receta agropecuaria que desplaza a tantos productores en nombre de los rendimientos de maíz y soja para la exportación. El referente de la Renama ejemplifica con el modelo de producción de los tambos pastoriles: donde los paquetes de fertilizantes y agroquímicos se reemplazan por manejos agroecológicos que ofrecen pasturas más diversas y abundantes; y que en 50 hectáreas logran bajar los costos para obtener mejor rentabilidad que un tambo de 600 hectáreas.

“Un establecimiento agroecológico te demanda estar en el campo, porque implica seguir de cerca el cuidado del cultivo, de los animales, entender el sistema para aumentar su biodiversidad”, sentencia la ingeniera agrónoma de Arrecifes.

Cambio de uso del suelo a pedido del mercado

Basado en el Censo Agropecuario 2002 –como indica el investigador Rossi, el más completo de este siglo con 25.788.670 hectáreas censadas–, el *“Relevamiento de la utilización de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires”* presenta un trabajo minucioso mensurando el predominio de la actividad agrícola por cada partido, según superficie rural y actividades desarrolladas, marcando el nivel de “agriculturización” o “ganaderización”.

El resultado es un predominio de los cultivos en el norte de la provincia –dominados por la soja– y en el sur de la zona costera, donde la combinación soja (cultivo de verano) y trigo (cultivo de invierno) prevalece. Sin embargo, a lo largo y ancho de la provincia también se dan otros cultivos: maíz, girasol, avena, cebada cervecera, colza, girasol, sorgo.

En tanto, el centro provincial desde los primeros partidos rurales fuera del Co-

nurbano hasta las sierras del oeste y los partidos del sur en la región patagónica predomina la ganadería bovina con pastizales naturales o los forrajes anuales implantados, conocidos como “verdeos de invierno” o “verdeos de verano”, o forrajes perennes.

El análisis de Rossi indica una intensificación del uso del suelo en Buenos Aires con el crecimiento de los cultivos anuales de cereales y oleaginosas, ampliando los usos de primera y segunda ocupación de los mismo lotes: combinando cultivos de invierno con cultivos de verano —la proporción de la superficie cultivada en segunda ocupación se incrementó de 5,1 de 1988 a 10,8 en 2018— y una contracción de las forrajeras perennes, cultivos para la ganadería.

Mientras en el Censo 2002 los cultivos anuales representaron el 60 por ciento de la superficie cultivada total y las forrajeras perennes el 26,9 por ciento, en el CNA 2018 los primeros pasaron a constituir el 73,5 por ciento del total y las segundas apenas el 10 por ciento. En particular, los cereales y oleaginosas representaban el 50,5 por ciento de la superficie cultivada en 1988 y continuaron en ascenso: 62,3 por ciento (2002), 71,6 por ciento (2008) y 74,3 (2018).

A pesar del avance de los cereales y oleaginosas, la ganadería continuó ocupando la mayor parte del territorio bonaerense con 13 millones de hectáreas —diez millones con pastizales naturales y 605 mil de bosques y montes—. Sin embargo se registró una caída tanto de EAP dedicadas a la ganadería como la cantidad de cabezas: en 2002 unas 39.113 explotaciones agropecuarias contaban con 16.612.170 cabezas, mientras que (en 2018) 24.754 explotaciones tenían 15 millones de cabezas. Eso señala un nuevo proceso de concentración también en la explotación ganadera: la cantidad de bovinos por EAP creció el 110,4 por ciento entre 1974 y 2018 (de 288 cabezas promedio a 606).

En cuanto al ganado porcino y ovino la cantidad de cabezas cayeron estrepitosamente. La cantidad de porcinos bajó de 1.201.840 en 1974 a 814.392 en 2018 y los ovinos descendieron de 10.849.237 a 938.288 en el mismo periodo. Esos dos procesos hablan de un proceso de concentración en la cría de cerdos donde la cantidad de cabezas por establecimiento productivo creció 676,3 por ciento y un cambio de uso en la producción ovina que liberó de dos millones de hectáreas para otros usos ganaderos y agrícolas.

Todos los cambios advertidos en las estadísticas confirman la imposición de un modelo de negocio y no de un modelo de producción de alimentos. “Siempre se está hablando de los precios, pero hacia adentro del campo cada productor puede replantear sus costos cambiando la forma de producir”, invita a repensar el modelo el presidente de la Renama.

“La agroecología baja los costos de producción de un 40 a un 50 por ciento. El

INTA lo tiene estudiado, pero nosotros lo veíamos en la cara de los productores cuando se les iba el nerviosismo de estar con pánico, endeudados hasta la cabeza por los insumos”, señala Schwerdt y pone como ejemplo el caso de un productor de la Renama: “En el primer año con planteo agroecológico, en 2015, bajó medio millón de pesos de costos –de insumos y fertilizantes–, después de siete años de transición está obteniendo un maíz de 10.000 kilos por hectárea a muy bajo costo. Antes hacía solo maíz y soja, ahora rota los lotes y hace maíz, soja, cebada, centeno, avena y el campo mejora”.

Verduras y frutas o barrios privados

Si en las miles de hectáreas de la extensa pampa bonaerense el cambio del uso del suelo está atado a lo que demanda el mercado: más hectáreas para oleaginosas y cereales, y el ganado concentrado en menos hectáreas y en los bovinos; en los “cinturones verdes” que rodean al Conurbano bonaerense las producciones hortícolas (que ponen en las mesas el 60 por ciento de los alimentos) deben competir con la especulación inmobiliaria para los barrios privados.

A pesar de la relevancia que tiene para el abastecimiento del mercado interno, según el CNA 2018, la horticultura estaba en su nivel histórico más bajo representando solo el 0,2 por ciento del total del área cultivada en la provincia (con un total de 28.335 hectáreas). Esto significó un tercio menos que en 1988, cuando contaba con 67.911 hectáreas.

Según el Censo hortiflorícola de 2005 realizado por el gobierno de Buenos Aires, el área cultivada estaba en 31.765 hectáreas. Más allá de las cifras totales, el análisis sirve para tener un panorama del mapa hortícola provincial. Los principales cultivos son papa, cebolla, lechuga, batata, acelga, zapallo anco, tomate, choclo y espinaca.

El cinturón hortícola platense –de parcelas más chicas e invernáculos– era el segundo en importancia por su superficie luego de General Pueyrredón, donde predomina el cultivo “a campo”. En tanto, la superficie frutícola bonaerense contaba con 14.784 hectáreas y los principales cultivos: durazno, naranja, olivo, ciruela y mandarina.

“Como los núcleos de producción hortícola están alrededor de las ciudades, el centro urbano crece y empuja hacia afuera. Los terrenos hortícolas se encuentran en plena competencia con los countrys desde La Plata hasta Campana”, analiza Suárez a la luz de la reducción de hectáreas hortícolas y marca un ejemplo: “La ruta 36 era la zona hortícola por excelencia en La Plata, pero se han comenzado a correr hacia al sur a Punta Indio y hacia el norte a San Vicente, donde hay campos más económicos con tierras de menor calidad que se utilizaban para ganadería”.

La agroecología y la soberanía alimentaria bonaerense

Agustín Suárez, de la UTT, relaciona la reducción de hectáreas de la horticultura a una perspectiva desde la soberanía alimentaria: “La Argentina está en la mitad de los valores que la FAO recomienda en frutas y verduras por habitante por año, por lo que si la política pública fuera que todos los habitantes comen lo necesario, la producción debería duplicarse”. Ese análisis se podría ampliar a toda la producción.

Según la Dirección Nacional de Agroecología, a las cantidades y los valores promedio de rendimiento de producciones agroecológicas a nivel nacional, se precisa una superficie de 196 hectáreas para abastecer una población de 1000 habitantes, de acuerdo los valores de la dieta diaria propuesta por la Guía Alimentaria Nacional –500 gramos de leche y yogurt, 30 gramos de queso, 25 gramos de huevos, 70 de carne vacuna, 400 de verduras, 300 de frutas, 250 de legumbres y cereales, 120 gramos de pan y 30 gramos de aceite–. Toda esa producción puede realizarse en la provincia de Buenos Aires.

¿De dónde obtener esas hectáreas para producir alimentos para el mercado interno? “Tenemos que ir hacia un plan de reducción de agroquímicos. No ir de hoy para mañana a cero. Pero tenemos experiencias concretas de que se puede hacer a corto plazo”, sostiene el presidente de la Renama. La producción de ali-

183

Foto: Prensa UTT



mentos sanos podría tener directa relación con las zonas de exclusión para la ampliación de la frontera agroecológica.

En Arrecifes esa legislación se consiguió en 2016, con el impulso de organizaciones locales como Arrecifes Necesita Saber. La ordenanza local impone una zona de exclusión al uso de agroquímicos de 300 metros. Sin embargo, hasta el momento las hectáreas afectadas no recibieron incentivos para iniciar la transición a la agroecología. Ese proceso sí ocurre en las cinco hectáreas de la escuela agraria local con un módulo demostrativo en el que ya cuentan con un tambo que podría comenzar a abastecer localmente. “No hay vuelta atrás con el avance de la agroecología, pero hay que seguir trabajando en el desarrollo de las experiencias locales y la autonomía de los servicios e insumos”, apunta Corvino.

En la localidad bonaerense de Baradero, otro municipio de la “zona núcleo”, aún no cuentan con una ordenanza que limite el uso de agrotóxicos y el gobierno local propone limitar las fumigaciones terrestres a solo 250 metros. Según la Red Local de Estudios Agroecológicos Baradero-San Pedro (Relea), ese límite mínimo habilitaría para la puesta en marcha de la agroecología entre el tres y cinco por ciento del total de la zona productiva del partido, entre 3000 y 5000 hectáreas de las 100.000 hectáreas productivas, de acuerdo al CNA 2018. Siguiendo los cálculos de la Dirección de Agroecología, sería suficiente para abastecer a la población de 28.000 habitantes de la localidad.

--

16



SANTIAGO DEL ESTERO: CONFLICTOS POR LA TIERRA, AGROTÓXICOS Y UN MONTE QUE RESISTE

Movimientos campesinos y chacarera son sinónimos de Santiago del Estero. Como también lo son, desde hace tres décadas, el corrimiento de la frontera agropecuaria, el desmonte y la violencia —para robarles la tierra— contra las familias campesinas. Soja, ganadería caprina, falta de agua, vulneración de derechos y agroecología, elementos del agro provincial.



Santiago del Estero tiene una superficie de 136.351 kilómetros cuadrados, que equivalen a 13.635.100 hectáreas. Es una de las más afectadas del país por la expansión del agronegocio, lo que se evidencia en los altos índices de deforestación y en la afectación de las poblaciones del lugar por los desalojos y el uso de agrotóxicos. Como los alimentos agroecológicos y los árboles nativos, en el monte santiagueño crecen experiencias organizativas que permiten defender la vida ante el avance del agronegocio.

Según datos del Ministerio de Economía, a nivel nacional, la provincia tiene un importante peso en la cadena caprina, donde ocupa la primera posición nacional, con el 23,1 por ciento del valor agregado bruto (cálculo del valor del producto menos los costos de producción) en el país en ese sector. También ocupa la tercera posición en el valor agregado bruto de legumbres, con un aporte del 9,9 por ciento y es la cuarta provincia en valor agregado bruto de maíz, con el 6,5 por ciento.

La investigadora Virginia Toledo, en su artículo [“Conflictos por el agua y el uso de agroquímicos en Salta y Santiago del Estero: un análisis desde la ecología política”](#), asegura: “Las tierras se encuentran degradadas, son insuficientes en extensión y las poblaciones han quedado arrinconadas entre grandes extensiones cultivadas. El monte, una de las principales fuentes de recursos cotidianos para la recolección, caza, producción artesanal y provisión de leña, se encuentra cada vez más degradado”.

Santiago del Estero es una muestra de cómo el modelo sojero avanza con violencia sobre cuerpos y territorios, en un escenario de escasez de agua y de imposición de cultivos que naturalmente no son aptos para esos suelos. Pero también es un ejemplo de cómo la recuperación de saberes ancestrales puede generar otras lógicas de organización y de producción agroecológica.

Territorios en disputa

“El Movimiento Campesino de Santiago del Estero está constituido formalmente desde el 4 de agosto de 1990, a raíz de la problemática de tierras para las comunidades campesinas e indígenas que de forma ancestral vivían en ellas. El corrimiento de la sojización ha afectado con mucha fuerza las formas de vida campesina. Este sistema de sojización requiere y ha requerido enormes cantidades de masa boscosa y ha afectado no solamente a la agricultura familiar, campesina e indígena, sino a todos los seres que coexisten en esa zona que es muy frágil: el semiárido del Chaco americano”. Así relata Deolinda Carrizo los orígenes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase Vía Campesina) —una de las vertientes de la organización nacida en 1990—.

La incorporación de tecnologías como la soja transgénica y el aumento del pre-

cio de los commodities en el mercado internacional generó en Argentina un proceso de expansión de la frontera agropecuaria más allá de la zona pampeana. Este avance se basó en la desposesión de campos comuneros campesinos e indígenas, con diversas formas de violencia.

En el Censo Nacional Agropecuario (CNA) esos espacios, que conservan formas de posesión ancestrales de la tierra, son contabilizados como “explotaciones agropecuarias sin límites definidos”. En ellos, las familias cuidan sus animales de manera comunitaria y comparten los frutos del bosque y el agua. Esos usos colectivos hicieron que no fueran necesarios los “límites definidos”. Es decir: los alambrados.

Según un estudio de Rubén de Dios, Raúl Paz y Carlos Rossi, entre el CNA 2002 y el CNA 2018 se perdieron 5.600 explotaciones agropecuarias sin límites definidos (pasaron de 10.119 a 4.519). La cantidad de explotaciones agropecuarias con límites definidos se mantuvo estable, en torno a las 11.000 explotaciones.

Si bien la cantidad de explotaciones cercadas se mantuvo, este tipo de propiedades aumentó significativamente en relación a la superficie total ocupada en la provincia. Los campos con límites definidos pasaron de ocupar 5.393.633 hectáreas en 2002 a 7.286.179 en 2018. Este aumento, de un 35 por ciento de la superficie, se registró mayormente en las explotaciones de más de 2500 hectáreas y coloca a Santiago del Estero como la provincia de mayor expansión relativa de la frontera agropecuaria en el noroeste argentino.

187

En general, las explotaciones agropecuarias (EAPs) totales en Santiago del Estero se redujeron a la mitad entre 1969 y 2018 (de 30.416 EAP a 15.531 EAP), lo que también muestra un fuerte proceso de concentración de la propiedad.



Los números evidencian el despojo: hay cada vez menos de esos campos comuneros porque hay un avasallamiento de las formas de vida que ancestralmente perviven en el monte. Sergio Raffaelli es el párroco de la iglesia La Merced, en el departamento Jiménez (al oeste de Santiago del Estero) y remite a sus propias memorias para contar cómo la soja modificó el paisaje que conoció en sus primeras visitas misioneras, en el año 1992.

“He visto con mis propios ojos la transformación de la zona, de los montes vírgenes donde las comunidades campesinas vivían tranquilas, tenían su modo de vida en armonía con la naturaleza, criando animales, haciendo carbón, postes o vendiendo leña, hasta esta realidad de hoy donde las comunidades quedaron rodeadas por mares de soja”, relata.

Y grafica: “En la monotonía de la soja no hay pájaros que canten, no hay animales dando vueltas, no hay sombra, no hay nada. Lo único que hay es avaricia, dinero y todo para afuera. Los empresarios que tienen campos acá no gastan ni en comprarse una coca cola en el kiosquito del pueblo. Cuando levantan la cosecha salen las caravanas de camiones, por caminos internos para evadir los controles interprovinciales, haciendo pedazos los caminos que usa la gente todos los días”.

Otra vez, las cifras: la superficie cultivada total aumentó un 602 por ciento en treinta años. Pasó de 401.537 hectáreas en el CNA de 1988, a 1.089.624 en el CNA 2002, a 1.298.021 en el CNA 2008 y finalmente a 2.818.796 en el CNA 2018. En 1988 la soja, el maíz, el trigo, el algodón, el girasol, el sorgo granífero y los porotos ocupaban 232.698 hectáreas, que pasaron a ser 1.674.745 en 2018. Es decir: un aumento del 619,7 por ciento en cantidad de tierra destinada a esos cultivos.

La contracara de esta situación es el decrecimiento de la superficie dedicada a las hortalizas. Según el CNA 1988, en esa época se cultivaban 22.815 hectáreas de alimentos, en el CNA 2002 se registraron 15.370, en el CNA 2008 pasó a 9.043 y en el CNA 2018 apenas 6.690 hectáreas.

La modificación de un esquema de producción familiar a otro industrial para las exportaciones también influyó en el clima. Así lo relata Victoria Escobar, productora de 25 años perteneciente a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT): “Nuestras abuelas tenían un calendario de lluvias y de heladas, y eso año a año no variaba tanto. Pero ahora hay un desequilibrio tremendo. Hay heladas en octubre, calores en junio. Hay lluvias en octubre, cuando la temporada de lluvias debería ser de febrero a abril. Son muchas variaciones que, año tras año, dificultan aún más la planificación de la producción”.

Escobar vive en la localidad de San Pedro (departamento Capital), en la zona hortícola santiagueña, cercana a la capital provincial. Allí elabora productos

con valor agregado como dulces y arropes de chañar o de tuna, o derivados de la algarroba. “Cuando vas por la ruta se ve un paisaje marrón, salitroso. Antes te sentabas en cualquier lado y tenías una sombra para pasar la siesta, ahora tenés que andar kilómetros para encontrar un árbol y pararte bajo su sombra”, comenta.

Y recuerda las especies de plantas y animales que dejaron de verse en los campos: el quebracho blanco y colorado, el cacuy, el crespín, el zorzal y el oso hormiguero.

Un modelo que se impone con armas y topadoras

En Santiago del Estero existen 7.108.203 hectáreas de monte nativo, cuyas especies autóctonas son el quebracho colorado, el quebracho blanco, el algarrobo y el vinal. Este bosque conforma la zona que sufrió el mayor desmonte en el país: el Parque Chaqueño, donde se observó el 87 por ciento de la pérdida de bosque nativo a nivel nacional entre 2007 y 2018. Las provincias más afectadas fueron Santiago del Estero (28 por ciento), Salta (21), Chaco (14) y Formosa (13).

Según datos del [Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible](#), entre 2012 y 2018, la pérdida de bosque nativo en Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero fue de un millón de hectáreas, de las cuales un 28 por ciento corresponden a la modificación de uso de la tierra con fines agropecuarios. En el contexto sudamericano el Parque Chaqueño es el segundo foco de deforestación después del Amazonas.

Los departamentos de Alberdi, Copo, Juan F. Ibarra, Pellegrini y Moreno (norte y este provincial) fueron los más afectados en Santiago del Estero. En el contexto



ambiental de la provincia, la deforestación disminuye la capacidad productiva de los suelos por salinización y aumenta la incertidumbre sobre la ocurrencia de inundaciones luego de las lluvias.

Es precisamente en esos departamentos que, luego de las topadoras, crecieron la agricultura y la ganadería extensiva. “Nos han metido en la cabeza que la soja iba a ser la salvación para el país, que iba a dar trabajo a todo el mundo. Pero la realidad es que las familias que vivían en el campo ahora viven en un lotecito de 20 metros por 20. Perdieron sus tierras, no tienen trabajo y viven de la ayuda del Estado. Los únicos que se beneficiaron fueron los grandes empresarios. Y las familias que quedaron en el monte y que siguen produciendo animales tuvieron que disminuir la cantidad de vacas, de cabras y de chanchos porque se los envenenan. Los encargados tienen órdenes de matar los animales de las familias campesinas”, relata Raffaelli.

Los efectos sociosanitarios de esta expansión son múltiples. En diálogo con Tierra Viva, Virginia Toledo enumera: “Contaminación del agua, enfermedades, violencia”. Y explicita: “Cuando hablamos de apropiación de las tierras, hablamos de armas, de violencia y de muerte”.

Las familias que viven desde hace generaciones en las zonas donde se expandió la frontera agropecuaria no cuentan con papeles que certifiquen su posesión veinteañal (de más de dos décadas) y su consiguiente derecho de propiedad. Esta precaria situación genera conflictos armados entre los grandes empresarios y las familias.

La situación afecta a la mayoría de los 23 departamentos de la provincia. No es el caso de la zona de riego (departamentos Capital, Banda, Robles, Silípica y Río Hondo), donde hubo un proceso de colonización impulsado por el Estado en los años 70, y se otorgó a los colonos títulos de propiedad por 20 hectáreas; y de otros casos (departamentos Moreno y Rivadavia) donde los dueños cuentan con papeles que comprueban que compraron las tierras.

Deolinda Carrizo señala: “En Santiago del Estero predominan los conflictos por la tenencia de la tierra y un sistema judicial acorde a la lógica del colonialismo y de los patrones que han querido y pretenden seguir imponiendo su lógica, desconociendo los derechos a la tierra y al territorio de las familias que viven en la ruralidad”.

La integrante del Mocase Vía Campesina comenta que muchos empresarios en los últimos años han recurrido al mecanismo de contratar personas con situaciones problemáticas, de entregar armas y llevarlos a donde pretenden amedrentar a las familias, robando animales y amenazando con armas de fuego.

Historias emblemáticas de la violencia contra los campesinos son las de Sandra

Ely Juárez (2010), [Cristian Ferreyra](#) (2011) y Miguel Galván (2011), asesinados por defender el territorio del avance del agronegocio. Ferreyra y Galván integraban el Mocase-VC. En ningún caso hubo condena para los empresarios ni los funcionarios que, por acción u omisión, permitieron sus muertes.

En septiembre pasado, familias campesinas del departamento Figueroa (en el este santiagueño) [se vieron envueltas en un tiroteo debido al accionar de las empresas y sus intermediarios](#).

El Pueblo Tonokoté de Santiago del Estero comenzó en 2009 los trámites para el reconocimiento de su propiedad ancestral de los territorios. “Soy nacida y criada en este territorio. Nuestra comunidad es del Pueblo Tonokoté, cuyo nombre ancestral es Yaku Muchuna, que se identifica con la zona de escasez del agua. El Yaku Muchuna es la lengua ancestral de nuestro pueblo y la llevamos a la práctica para que no se pierda”, se presenta Angélica Serrano, camache (líder) de la comunidad tonokoté de San Felipe (departamento Figueroa).

Explica: “Mis abuelos son nacidos y criados en este lugar. Ellos me transmitieron la lengua, la cultura y la identidad. Quiero morir en mi comunidad produciendo y transmitiendo nuestras luchas cotidianas, haciendo tomar conciencia a otros hermanos y hermanas que la tierra donde vivimos es para cuidarla, para resguardarla y para producir en ella”.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció a este pueblo unas 10.000 hectáreas. Pero en 2016 la firma Netti –vinculada al poder político santiagueño– quiso apropiarse de 5.000. “Con un proceso de defensa permanente y organizados como comunidad, logramos sacar las topadoras. Hoy sabemos que está latente la presencia de grandes empresarios en nuestras tierras y por eso seguimos resguardando el territorio”, afirma.

Serrano apunta a las responsabilidades políticas: “Estas empresas vienen avalladas por el Gobierno, que no se pone a pensar si en esos lugares habrá un asentamiento de pueblos originarios. [En 2022 hicimos una marcha por un hermano preso por un conflicto de tierras y el gobierno de Santiago del Estero nos mandó a reprimir](#). Esa es la respuesta que tenemos: apoyar a las grandes empresas y ser ajeno a los problemas de las organizaciones”.

En 2005 el entonces (y actual) gobernador, Gerardo Zamora, propuso una instancia de diálogo: la Mesa Provincial de Tierras, para abordar los conflictos territoriales. Esta Mesa impulsó la creación de una Mesa Tripartita integrada por representantes del gobierno nacional, por la Jefatura de Gabinete de la provincia y por la propia Mesa Provincial de Tierras. En este ámbito se abrió un registro para las familias poseedoras y un Comité de Emergencia para abordar las problemáticas asociadas a la disputa por la tierra.

Toledo comenta: “La Mesa Provincial de Tierras no se volvió a reunir después de la pandemia. En relación a las fumigaciones, la respuesta dominante viene siendo el discurso de las buenas prácticas agrícolas. Y en cuanto a los conflictos de tierra, la respuesta más recurrente tiene que ver con la presencia policial”.

Luego de treinta años de deforestar para la soja, ahora la disputa es por los llamados bonos verdes. Las empresas presentan proyectos al Gobierno para reforestar y pretenden generar nuevos desalojos para plantar árboles que, denuncian las comunidades, ni siquiera son autóctonos. “Uno los conoce, son los productores que han hecho bolsa el monte y ahora el Estado les da plata para que cuiden el monte. Yo pienso: ¿no es más fácil darle la plata a las comunidades campesinas que cuidan el monte gratis toda la vida?”, se pregunta Raffaelli. Y reflexiona: “Cuando uno mira el mapa de Santiago del Estero ve que donde hay monte es donde hay comunidades originarias o campesinas que toda su vida cuidaron el monte porque entienden que ahí está su vida”.

Soja, maíz, algodón y leña

Santiago del Estero y Chaco son las provincias extrapampeanas con mayor superficie cultivada con cereales y oleaginosas. [Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Hacienda](#), en Santiago, el maíz, el trigo y la soja representan el 83,3 por ciento de la superficie cultivada de la provincia (1,8 millones de hectáreas ubicadas predominantemente en el este provincial). El mayor destino de estos cultivos es la exportación. La producción de cereales se compone, fundamentalmente, por el cultivo de maíz (74,1 por ciento en 2018) y de trigo (22,6 por ciento). La producción de oleaginosas, por su parte, se explica por el cultivo de soja (98 por ciento en 2018). El poroto de soja es procesado fuera de la provincia o exportado como grano.

Los principales destinos del maíz son Vietnam (18,5 por ciento), Argelia (14,1) y Egipto (11,2). El trigo se destina mayormente a Brasil (52,5 por ciento) y, en menor medida, a Argelia (9,9) e Indonesia (6,9). El 90,3 por ciento de los porotos de soja se destina a China. La mayor parte de los productores no son oriundos de Santiago del Estero.



El cultivo del algodón es tradicional en la provincia y se realiza tanto bajo riego como en las zonas secas (de secano). La cadena textil-algodonera comprende el cultivo de algodón, el desmotado para la obtención de la fibra de algodón y la elaboración de textiles y confecciones. Además de la primaria, la etapa más desarrollada de la cadena es la de desmotado, que es el primer eslabón industrial.

En el período 2006-2018, la producción promedio de algodón fue de 222 mil toneladas. En 2018 la producción alcanzó a 395 mil toneladas, lo que implicó una participación de 49 por ciento en el total nacional. Ese año, en la provincia se destinaron 130.080 hectáreas a este cultivo. Geográficamente, se distinguen dos zonas algodoneras: al este, la zona de secano donde se encuentran los grandes productores; y las áreas de regadío del centro y oeste provincial.

La producción es comercializada como algodón (bruto), fibra o semilla. La semilla se destina a la elaboración de aceites o para la siembra. Los residuos se utilizan para la producción de papel y la fibra para la industria textil (mercado interno y externo). La elaboración de hilados, tejidos y confecciones se encuentra presente en las cercanías de la capital provincial.

La mayor parte de la producción de algodón se destina al mercado interno. En el período 2006-2018, las exportaciones explicaron sólo el ocho por ciento del total del algodón producido en la provincia. Pese a esto, en 2018 (último dato disponible) Santiago del Estero aportó el 48 por ciento del algodón exportado por el país. La fibra de algodón fue el principal rubro de exportación. Los principales destinos fueron Indonesia, Paquistán, Vietnam, Turquía y Tailandia.

La producción de carbón es la principal actividad forestal en la provincia, siendo la segunda productora, después de Chaco, con el 25,7 por ciento del total nacional de carbón. La mayor parte de producción se destina a centros urbanos de otras provincias.

En tanto, afirma Escobar, la zona hortícola de la provincia está integrada por los departamentos Banda, Capital, Río Hondo y Silípica (en el centro-oeste). Allí se produce sandía, melón, zapallo, cebolla, zanahoria, hortalizas de hoja y remolacha. En esa región destaca también la producción de alfalfa en establecimientos pequeños (hasta cinco hectáreas) y medianos (hasta 25).

Vacas y cabras

La producción de vacas se hace bajo sistemas de secano, en los que las actividades de cría y re cría se realizan mayormente sobre pastizales naturales con monte, aunque también hay pasturas implantadas. Esta actividad se concentra en la zona este por las condiciones climáticas, principalmente en los departa-



mentos Moreno y Alberdi, con una concentración del 30 por ciento del stock de la provincia. La faena se realiza en mayor medida en los departamentos de Robles y Banda, cerca de la capital.

Santiago del Estero cuenta con un stock bovino de 1,6 millones de cabezas, cifra que representa el tres por ciento del total nacional y el 44 por ciento del NOA. Al igual que ocurre con los cultivos, los datos oficiales observan un crecimiento de esta actividad en los últimos años: entre marzo de 2015 y 2019 el rodeo creció un 18 por ciento, superando la media nacional de crecimiento de ese período (cinco por ciento).

La actividad ganadera vacuna se caracteriza por una fuerte presencia de pequeños productores, según el [Ministerio de Hacienda](#). El 72 por ciento de los establecimientos tiene menos de 100 cabezas, y en conjunto concentran solo el once por ciento del stock.

En cuanto a la actividad caprina, Santiago del Estero representa el doce por ciento del stock nacional de cabras, posicionándose en el cuarto lugar (luego de Mendoza, Neuquén y Chaco) y en el primero a nivel regional en lo que respecta a cantidad de animales. Sin embargo, entre 2015 y 2019 el stock descendió un siete por ciento. La provincia posee 3.960 establecimientos (último dato a marzo de 2017), de los cuales el 46 por ciento posee majadas que no superan las 100 cabezas.

La cría para consumo de carne, realizada de forma extensiva, se lleva a cabo en la zona de secano (en el este). Los departamentos que concentran el mayor porcentaje de stock ganadero son Moreno y Alberdi, que conjuntamente representan el 30 por ciento del stock, seguidos de Aguirre y Rivadavia (seis por ciento cada uno). En el departamento Ojo de Agua, al sur provincial, se encuentra el único frigorífico autorizado para faena de cabras. Esta producción se orienta fundamentalmente al mercado interno. Por otro lado, en la zona de riego del río Dulce (que cruza la provincia de norte a sur) se ubica una de las cuencas lecheras caprina más importantes del país.

Sin agua para producir ni para beber

La cobertura de red pública provincial de agua corriente es del 75,2 por ciento, incluso con departamentos que tienen porcentajes menores (Jiménez 63,4; Rivadavia 43,07 y Juan Ibarra 52,8). El dato, proporcionado por el trabajo de investigación de Toledo, muestra que una buena parte de la población requiere bombas para extraer agua de las napas, almacenar agua de lluvia con aljibes y cisternas o acarrear desde alguna vertiente cercana. La situación se vuelve peligrosa para la salud, consigna la autora, si se tiene en cuenta la contaminación del agua por las sustancias utilizadas en la agricultura industrial, que afecta los suelos y las napas de agua.

Karen Díaz es productora avícola de la UTT y vive en Cardón Esquina (departamento Figueroa). Además de dedicarse a la cría de pollos, junto a otras compañeras, elabora dulces, mermeladas, escabeches y productos de cosmética natural con hierbas y plantas medicinales de la zona. Figueroa está ubicado en el este provincial, en la zona seca. En 2011, el actual gobernador Gerardo Zamora inauguró allí el Dique Figueroa, para tratar el problema del acceso al agua. Sin embargo hoy está prácticamente seco.

“Cuando vamos a Recursos Hídricos no tenemos respuesta. Nos dicen que el agua es desviada hacia otras provincias para el riego de las grandes empresas que producen arroz. El dique está seco prácticamente todo el año. Nosotros recolectamos agua de lluvia en aljibes y cisternas, y con eso tiramos la mayoría de los meses del año, y también buscamos agua en una de las vertientes. Pero ese agua no sirve para beber porque allí beben los animales y algunos, por las altas temperaturas, caen y mueren ahí y ese agua no tiene corriente. Ahí donde mueren los animales queda el agua que traemos a la casa”, relata Díaz.

Escobar contextualiza: “El acceso al agua siempre fue un problema en Santiago”. Y cuestiona que, en un contexto de escasez, hay “prácticamente una privatización”. Ejemplifica: “En la zona de riego, los agricultores pagan una cuota mensual a la Comisión de Riego en función de las hectáreas que tienen declaradas. Para los turnos, tiene prioridad un productor de 500 a 1000 hectáreas y queda para lo último un productor de cinco hectáreas”.

La productora de San Pedro resume: “El agua es un bien común escaso al que, hasta el día de hoy, no todos los santiagueños podemos acceder. Ni siquiera hablamos de la producción: no podemos acceder para el uso cotidiano, para cocinar y para beber”.

[El gobierno santiagueño anunció en febrero una reunión con la empresa israelí Mekorot](#), de cara a un acuerdo para la administración del agua en la provincia. “La noticia nos llegó por los costados, no hay información clara de nada en los diarios”, advierte Escobar. Y con estas palabras afirma lo que también señala Toledo: “Los problemas ambientales ameritan una participación social, derecho a la información y que las comunidades puedan participar en la toma de decisiones, pero no la hay”.

Agrotóxicos y un Estado que no controla

La Ley 6.312, sancionada en 1996, rige el uso de plaguicidas en Santiago del Estero. La norma prohíbe la aplicación aérea a una distancia inferior a 3.000 metros de las zonas urbanas y suburbanas, mientras que la aplicación terrestre queda prohibida dentro del radio de los 500 metros. Pero el decreto reglamenta-

rio avala el otorgamiento de excepciones, salvo cuando en las inmediaciones existan centros educativos, de salud, recreativos o habitacionales. Asimismo, en los municipios de Selva (departamento Rivadavia, en el sur) y Bandera Bajada (Figueroa) se avanzó en ordenanzas propias para limitar las aplicaciones.

Selva se ubica en el límite con Santa Fe y, por ser zona fronteriza, se vio ampliamente perjudicada por la expansión de los límites territoriales del agronegocio. Allí vive, desde hace 43 años, Ana María Santiago, que es apicultora y fue una de las impulsoras de la ordenanza que estableció 500 metros de resguardo para las fumigaciones. Sin embargo, hoy siguen fumigando a 20 metros de su casa.

“Acá hay mucha gente con problemas respiratorios, que perdió chiquitos, hay malformaciones, cáncer de cabeza. Hay vecinos que no pueden sembrar porque las tierras ya no son productivas o gente que no puede tener hijos. Y nosotros vemos que las abejas se siguen muriendo. Pero se oculta todo”, denuncia. Y explica que la ordenanza no se cumple y que nadie quiere asumir el cargo de Secretario de Ambiente del municipio porque se sabe “la presión que ejercen los agricultores”.

A los desalojos se suma el envenenamiento de la población y el achicamiento de las producciones locales. “Los cambios empezaron con la soja”, subraya Santiago. Y recuerda: “Antes teníamos la floración del senecio, que es la flor amarilla, en agosto-septiembre. Y la abeja empezaba a levantar el polen. Había nabos, entonces cosechábamos polen de nabos. Pero desde que está la soja se terminó con esos yuyos, que para los demás son inservibles pero para la vegetación y para las abejas son importantes. De cien kilos que se cosechaba de miel en la zona por mes, ahora si se cosechan 10 o 15 kilos es mucho. Y el que se dedica a la apicultura lo siente”.

El cura Raffaelli coincide. “A pesar de que hay una ley de agrotóxicos en la provincia, **nadie la cumple y nadie controla**. Hasta hace cinco años el problema fundamental era defender los territorios. Hoy es el tema de las fumigaciones”, lamenta. Mientras tanto, las comunidades se organizaron y hoy tienen protocolos para denunciar las fumigaciones por las redes sociales y ante el Poder Judicial.

Carrizo denuncia además que quienes fumigan “no brindan la información a las comunidades cuando se la solicitan y no entregan las recetas agronómicas”. Trae al presente nombres emblemáticos de mujeres campesinas e indígenas que murieron por la exposición a los agrotóxicos: Valeria Araya, del Pueblo Guaycurú, y Alicia Cisneros, del **Pueblo Sanavirón**. Araya, **quien falleció en 2021**, fue una de las voces del Mocase en la resistencia que el movimiento campesino opuso ante los intentos de desalojo de Orlando Canido, dueño de la empresa de bebidas Manaos, en 4.000 hectáreas ubicadas en cercanías de Quimilí (departamento Moreno).

A la memoria, Carrizo le suma la necesidad de la lucha. Añade: “Hay que seguir difundiendo y concientizando sobre las consecuencias de los agrotóxicos para

la salud, el ambiente y las generaciones futuras. Y seguir promoviendo la producción agroecológica, el bioinsumo y otras formas que no sean agresivas para nuestra casa común”.

La organización campesina reverdece el monte

Santiago del Estero expresa un modelo productivo que trajo divisas al país pero que los territorios rurales pagan con la expulsión y el saqueo. En este marco, la provincia produjo también una importante movilización campesina e indígena, con diversas organizaciones que la expresan. Hay varios procesos organizativos, como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (en sus distintas vertientes), la Unión de Trabajadores de la Tierra y las Mesas de Tierra que se autoconvocan en distintos puntos de la provincia.

Raffaelli también celebra que haya “cada vez más” prácticas agroecológicas. Según el Censo Nacional Agropecuario, en toda la provincia hay 146 establecimientos de producción orgánica, 31 que practican la agroecología y ocho que hacen cultivos biodinámicos. El párroco remite a la experiencia de la zona de Jiménez: “Hace como diez años surgió la idea de seguir defendiéndonos y cuidando que no nos maltraten, pero también comenzamos a visibilizar la vida campesina, indígena y afrodescendiente”, rememora.

197

La clave es producir para defender. Así lo entiende Díaz: “Nuestra forma de proteger el monte es organizarnos por bases en las comunidades y reivindicar los saberes ancestrales para que no se pierdan y no se pierda la producción. La organización le cambió la vida a muchos compañeros que antes hacían trabajo gollondrina y hoy se quedan en sus casas a producir”.

Cristina Sánchez vive en Cachico (departamento Jiménez) y en 2021 comenzó, junto a su familia, la fabricación de panificados y café de algarroba que lleva el nombre “Delicias Cashiqueñas”. “Es un emprendimiento que surgió de la familia a través de la iniciativa que nos daba el padre Sergio Raffaelli como una forma de tomar conciencia del valor de las cosas”, cuenta la entrevistada. Y agrega: “Primero compramos la harina de algarroba para probar. Lo veíamos imposible porque no es fácil unirla, es un producto muy especial”. Tiempo después de ese intento, la pequeña empresa familiar fabrica y comercializa alfajores, budines y tortas de algarroba que comercializa, por ejemplo, en las ferias quincenales de las Termas de Río Hondo.

La harina y el café de algarroba se obtiene a partir de la molienda de las vainas que desprende el algarrobo, especie típica del monte santiagueño. “En este tiempo aprendimos que la algarroba es algo sano, que tiene muchas proteínas y vitaminas y a la vez trabajar con algarroba es una forma de cuidar nuestros árboles,

nuestros montes”, dice Sánchez. Agrega: “Aquí vivimos rodeados de fincas donde cultivan soja, maíz, poroto y trigo. Y fumigan con mosquitos y avionetas”.

Las vainas aparecen en diciembre y la recolección puede extenderse hasta enero. En la última cosecha, dice Sánchez, levantaron 1500 kilos de vainas. Las chanchas se muelen completas, no se separan las semillas de las fibras. El resultado que se obtiene se utiliza para hacer los panificados y el café, sin el agregado de ningún conservante.

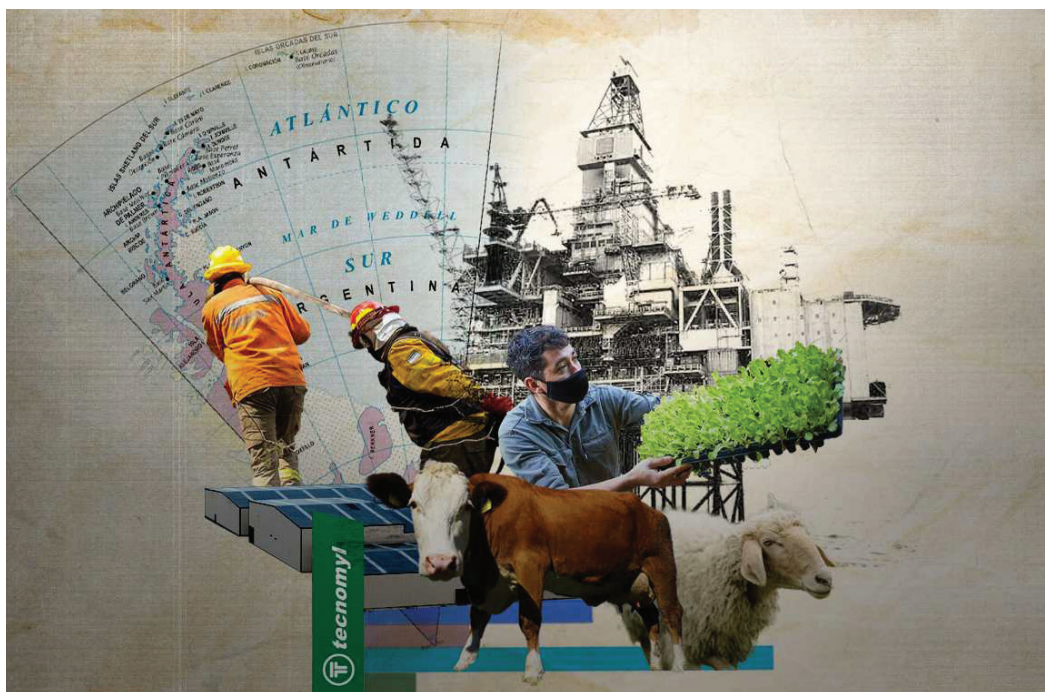
Para la entrevistada, la experiencia productiva es una muestra concreta de las bondades del bosque nativo: “El monte es nuestra fuente de trabajo, es donde nacimos y donde tenemos libertad. Antes teníamos una vida sana, con nuestros animales libres y hoy los animales mueren cuando fumigan y hay personas con problemas de salud. Uniéndonos como comunidades, más allá de cuidar nuestro pedacito de tierra, también estamos cuidando la casa común”.

17



TIERRA DEL FUEGO: PARAÍSO TURÍSTICO, GANADERÍA Y LUCHA SOCIOAMBIENTAL

La provincia más austral del país no escapa a la lógica nacional: disputa por la tierra, políticas extractivas y comunidades locales que plantean otras formas de desarrollo. De la producción vacuna y ovina a la incipiente agroecología; de la explotación petrolera y los agrotóxicos a la defensa del mar y la vida.



Tierra del Fuego es la más joven de las provincias argentinas. Tiene ese estatus desde 1991. En ese corto tiempo, las diferentes gestiones hicieron todo lo posible para repetir y en algunos casos multiplicar los problemas e inconvenientes que tienen las provincias del territorio continental: el extractivismo, los agrotóxicos, el descuido del medioambiente y otros males de estos tiempos no están ausentes en debates, preocupaciones y proyecciones de fueguinos y fueguinas a la hora de pensar en el futuro de la isla.

También crecen en número y organización quienes defienden el ambiente en esta parte del planeta y aparecen intentos por cambiar la lógica de producción de alimentos, comprometiéndose con la soberanía alimentaria y la producción local. Los usos y costumbres del sector productivo también fueron mutando en este tiempo. Luces y sombras de un territorio que parece lejano, pero que está muy cerca.

Del arraigo al cuidado

A Tierra del Fuego la separan unos tres mil kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transitando por la Ruta Nacional 3, pero “la isla” tiene la particularidad de ser la única provincia argentina que no está conectada con el resto del país de manera directa. Para llegar hasta el territorio continental, o para ir desde cualquier otro punto de la Argentina hasta el territorio fueguino, se deben cruzar cuatro fronteras, ingresar y salir de Chile, cruzar el estrecho de Magallanes en barcaza y encomendarse a los buenos vientos para no quedar varados por ráfagas que, muchas veces, superan la intensidad máxima indicada para la navegación.

Esa distancia, el clima particular de la provincia, su condición insular y las políticas decididas desde aquella lejana “capital federal” —tan unitaria las más de las veces— condicionaron siempre la producción, el consumo y la vida misma de fueguinos y fueguinas, quienes fueron poblando el territorio llegando muchas veces desde lejanas latitudes, en búsqueda de un mejor pasar económico.

Décadas atrás, la inmigración se dio gracias a la Ley de Promoción Industrial, que sirvió para multiplicar las plantas fabriles y las posibilidades de conseguir trabajo, sumado esto a los salarios más generosos, que servían para afrontar el costo de vida más alto que se tiene en la zona y alcanzaban para algún ahorro con la perspectiva de, luego de unos años, “volverse al norte”.

Pero desde hace ya un buen tiempo el arraigo le va ganando al desarraigo y las familias fueron encontrando su “lugar en el mundo” en esta gélida, ventosa, pero contenedora isla de cielos grandes, amplias mareas y enormes desafíos. Así, los niños tienen abuelas y abuelos en la provincia, las casas tienen árboles y la gente identificación, amor y compromiso por este suelo, que ya sienten como muy propio. Tal vez por esa nueva relación entre algunos sectores de la comuni-

dad con su suelo, con el mar, con las montañas, los amaneceres y los atardeceres que tiene esta parte del planeta, fueron surgiendo organizaciones y grupos de personas que se organizan para defender el territorio que eligieron para permanecer y proyectarse. En ese trayecto también hubo transformaciones en el sector agropecuario, atendiendo a veces a las necesidades y otras veces condicionados por las circunstancias.

De las ovejas a las vacas

La provincia tiene una población que ronda los 250 mil habitantes, repartidos casi por mitades entre las ciudades de Ushuaia y Río Grande, ésta última supera a la capital fueguina por algunos miles, y unos 10.000 restantes se encuentran radicados en la localidad mediterránea de Tolhuin.

Sin embargo, a pesar de las grandes extensiones de territorio despoblado y de las tierras pertenecientes a diferentes estancias, cercanas sobre todo a la ciudad de Río Grande y que se encuentran improductivas, el costo de los terrenos arranca en los 10.000 dólares y un alquiler promedio tiene un valor mínimo de 450 mil pesos para una familia tipo, con precios mucho más altos en la ciudad de Ushuaia.

Las estancias que ocupan un gran porcentaje del territorio en la provincia se dedican casi exclusivamente a la cría de ganado, en mayor porcentaje bovino que ovino, sin avanzar en otro tipo de producción como podría ser la frutihortícola a través de la producción en viveros u otras modalidades que sí utilizan los pequeños productores.

Según datos sistematizados en el libro "[La Argentina agropecuaria vista desde las provincias](#)" (de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Giberti), en Tierra del Fuego el 40 por ciento de las explotaciones agropecuarias cuentan con bovinos, 36 por ciento con equinos, 29 por ciento con ovinos y 23 por ciento con porcinos.

En cabezas de ganado, se destaca la participación de los ovinos con 87 por ciento del total de animales, seguido por los vacunos. En base a los censos agropecuarios, a principios del siglo XX se contaba con 1.400.000 ovinos, pero desde la década de 1990 se mantiene en un valor cercano a los 800 mil. Sin embargo, lo que ha ido cambiando es la participación de las especies: los ovinos han decrecido y han aumentado los bovinos.

De acuerdo a los datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la mayor cantidad de los ovinos (89 por ciento) se encuentra en manos del 21 por ciento de los establecimientos (los más grandes).



La actividad ovina ha perdido presencia tanto en cabezas como en cantidad de explotaciones en las que se encuentran. Al observar los resultados por región, se evidencia que prácticamente desaparecieron de la región de cordillera durante el período 1986-2010, con una reducción del 91 por ciento del stock. Mientras que en la región de Ecotono (zona de transición de estepa y bosque) fue del 48 por ciento. La caída se relaciona en la primera región con el aislamiento de los establecimientos, la ausencia de un servicio marítimo que asista a los ubicados a lo largo de la costa atlántica, la baja progresiva en la rentabilidad de la lana y, finalmente, la problemática de los perros asilvestrados (que perdieron su estado doméstico y atacan a los animales de cría). Por ello, se optó por reemplazar a esta especie con bovinos, en búsqueda de otras alternativas productivas.

Superficie, regiones y características

La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se encuentra situada en el extremo más austral del continente americano y tiene una superficie total de 1.002.445 kilómetros cuadrados. El ambiente evidencia cambios significativos en distancias relativamente cortas, en relación al relieve, vegetación, suelos y clima. Las precipitaciones aumentan de norte a sur, desde 280 milímetros anuales (en Cabo Espíritu Santo) a 550 (en Ushuaia). La altura sobre el nivel del mar aumenta en el mismo sentido y levemente de este a oeste. Las temperaturas descienden de norte a sur, con excepción de las áreas cercanas al

Mar Argentino y Canal Beagle, con una media anual de 9,4 grados centígrados y 1,9 de mínima.

El libro de la Cátedra Giberti —el capítulo sobre la provincia fue realizado por Enrique Livraghi, Emiliano Spontón, Graciela Preda, Marcelo Pérez Centeno y Mercedes Ejarque— señala que se reconocen tres áreas agroecológicas principales: la Estepa Magallánica Fueguina, el Ecotono y la Cordillera o Complejo Andino Fueguino, cada una de ellas con características y posibilidades de producción particulares.

Aproximadamente la mitad de la superficie total de la isla grande es la que ocupan los establecimientos ganaderos en su conjunto, mientras que el otro porcentaje lo conforman áreas improductivas desde el punto de vista pecuario, es decir montañas, ríos, lagos, lagunas y turbales.

Según el último Censo Agropecuario (2018), la superficie destinada a la producción agropecuaria es de 1.080.729 de hectáreas, con una reducción en 91.018 (ocho por ciento) con respecto al censo de 2002. En parte dicha reducción podría explicarse por la creación del Área Natural Protegida, denominada Reserva Corazón de la Isla, en la zona centro de la provincia que antiguamente incluía varios establecimientos dedicados a la ganadería.

203

Río Grande y la cuestión alimentaria

Hasta no hace mucho tiempo atrás era impensado conseguir carne vacuna en Tierra del Fuego que no fuera congelada (por la falta de producción en la zona) y mucho menos verduras. La producción bovina se fue desarrollando por la decisión de algunos estancieros de reemplazar ovejas por vacas, a raíz del ataque de perros asilvestrados a ovejas y corderos, un flagelo que se fue desarrollando en los últimos años, y luego algunos esforzados productores locales, mediante la construcción de pequeños viveros, se animaron con las primeras producciones de vegetales.

Los últimos datos registrados señalan que, en el año 2002, según el censo realizado en ese momento, la provincia contaba con 522.276 cabezas de ovinos. En tanto el registro de 2018 arrojó una cifra de 339.877; con una reducción del 35 por ciento. En el caso de los bovinos, en 2002 se contabilizaron 29.038 cabezas, mientras en el año 2018 la suma llegó a 36.060, un crecimiento del 24 por ciento.

Francisco “Pancho” Barría es uno de los 300 productores que cultivan en las numerosas chacras instaladas en la margen sur del río, en un terreno de 5000 metros cuadrados. Contó que inició su tarea con siembra al aire libre “como hacían los que nos precedieron, los pioneros”.



“No soy el primero que estoy trabajando en esto. Los pioneros de acá todo el tiempo manejaron su huerta de una forma espectacular. Si bien, es cierto, las semillas por ahí no las ponían muy en práctica, pero sí trabajaban con la huerta, con los recursos que tenían, porque no había invernadero”, repasó.

Hoy produce 24 variedades de papas, acelgas “de tamaños espectaculares”, rui-barbo para producir dulce, coliflores, distintas aromáticas, albahaca y una gran variedad de flores y frutas; en una tarea que asombra a quienes se acercan hasta su chacra; donde además cría porcinos.

Barría se enorgullece de tener una producción “totalmente ecológica que ayuda a una alimentación saludable para nuestros vecinos y vecinas, algo que cada día se valora más como también se destaca la importancia del compre local”.

Con el tiempo, el Estado fue echando una mirada a los esforzados agricultores. El municipio de Río Grande, desde hace cuatro años, desarrolla políticas que intentan incentivar a los productores locales de alimentos y promueve la “soberanía alimentaria” en la zona. En ese marco, se viene acompañando a los productores con financiamiento, con la instalación de ferias periódicas y con puntos de ventas sostenidos por el Municipio.

Según el subsecretario de Desarrollo Productivo y Planificación de Río Grande, Facundo Armas, en el último tiempo 50.000 pollos fueron faenados y comercia-

lizados con el Programa RGA Alimentos. También comentó el funcionario que “la temporada pasada se entregaron miles de plantines de 20 variedades de verduras y frutos, a 230 productores de la zona sur de la ciudad”.

Por otra parte, el Municipio asiste a 300 productores con sus programas de fomento productivo, en los sectores frutihortícola, porcino, avícola y pesca artesanal. Según el funcionario, con la incorporación de tecnología y en un trabajo en conjunto con el INTA, se lograron pariciones de animales en época invernal. Señaló que esta temporada se implementará, junto con el INTA y el Senasa, el “sello avícola” que va a permitir que todos los productores de huevos de Río Grande cumplan con requisitos sanitarios y productivos básicos para la comercialización de este producto en las distintas ferias. Y destacó la decisión de impulsar un mercado dedicado a la venta de productos locales en el centro de la ciudad, denominado “Mercado Municipal de Productores Locales Fénix”.

Pesca artesanal

La pesca es todavía una materia pendiente para la comunidad fueguina, más allá del esfuerzo de algunos pescadores artesanales que ofrecen róbalo o pejerrey en la zona norte de la provincia, como así también capturan centolla en la zona sur. Es una actividad que debería tener un mayor acompañamiento, tanto financiero como de capacitación y asistencia, para aquellos que lo realizan gracias al propio esfuerzo.

Mientras las fotografías de grandes pesqueros de distintas banderas se ven invadiendo y [saqueando el Mar Argentino](#) en horarios nocturnos, la provincia no termina de desarrollar una actividad que podría ser rentable para los emprendedores locales y generar puestos de empleo.

Petróleo, agrotóxicos e incendios

Entre los grupos humanos que defienden el ambiente se encuentra la [organización socioambiental Manekenk](#). Su referenta, Nancy Fernández, evaluó que Tierra del Fuego está “bastante mejor” en términos ambientales que otras provincias, dado que tiene “una comunidad bastante movilizada y hay un Poder Ejecutivo, en este momento, que es receptivo a los reclamos”.

Aunque señaló que hay iniciativas con las que no acuerdan: “Por ejemplo, el programa de [hidrógeno verde](#). Es un proyecto que tiene que ver con el modelo extractivista”. Por otra parte, refiriéndose al proyecto que tiene el Grupo Mirgor, de construir un puerto al norte de la ciudad de Río Grande, advirtió que se trata de “una zona de área protegida, preocupa”.

Respecto al incremento de las [exploraciones offshore](#) y el sostenimiento de la industria petrolera en Tierra del Fuego, afirmó que se trata de “una industria que está bastante arraigada”, pero a la vez dijo que “la comunidad es un tanto indiferente acerca de las consecuencias ambientales que acarrea”. En ese mismo sentido, remarcó que la provincia recibe muchos beneficios de la industria petrolera y “quizás por eso no se ha cuestionado mucho su producción”.

En otro pilar del modelo extractivo, destacó también la planta de agrotóxicos que existe en el ingreso a Río Grande: Tecnomyl, que produce [glifosato](#) y [atrazina](#). “Venimos analizando la posibilidad que la provincia prohíba la fabricación de agroquímicos, que son productos altamente dañinos para los pueblos del norte y que se fabrican en Río Grande”, señaló.

De la planta de agroquímicos, poco se sabe en la comunidad fueguina, de los controles sobre ella, menos aún.

Otro aspecto relevante son los incendios forestales. “Son de los problemas más riesgosos que tiene nuestra provincia, por la extensión y la importancia de nuestros bosques”, graficó. Después de casi diez años de no padecer ningún incendio forestal de gran envergadura, Tierra del Fuego sufrió [uno de los incendios más grandes en la historia](#) durante el verano pasado (2022-2023), con más de 10.000 hectáreas arrasadas.

Fernández denunció el “escaso apoyo que las causas ambientales reciben del Poder Judicial”. Aseguró que hubo “numerosas acciones judiciales que se han llevado a cabo, denuncias civiles, denuncias penales, amparos por intereses difusos, amparos por protección de los bienes comunes y la justicia nunca ha respondido a la altura de las circunstancias y no ha actuado con la celeridad que debería actuar”.

A modo de ejemplo señala que, sobre el incendio de hace más de un año, ni siquiera hay imputados.

La comunidad costera más sureña

En pleno crecimiento se encuentra la [Asociación Comunidad Costera de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur \(AeIAS\)](#). La organización es parte de la Red de Comunidades Costeras, nació en Ushuaia y todos los días 4 de cada mes se manifiestan tanto en la capital fueguina como en Río Grande en rechazo a la explotación petrolera offshore que se implementa desde hace más de tres décadas en la provincia y que se profundizará con la concreción del denominado “Proyecto Fénix”, que encarnan la petrolera francesa Total, la alemana Winterhall y la local Pan American Energy.

Se trata de un proyecto de explotación, por la vía de perforar tres pozos, construir una plataforma y tender un gasoducto a otra plataforma. Tiene relación con una ampliación de los permisos que tiene la compañía y en 2022 le extendieron las concesiones de la formación hasta el 2041.

En medios nacionales y prensa especializada la iniciativa siempre aparece relacionada con una inversión de unos 750 millones de dólares. Pero existen grandes dudas respecto de la mano de obra efectiva que pueda generar la puesta en funcionamiento de la plataforma, que por estos días ya llegó a la provincia. Sobre todo mano de obra local, que por lo general se ocupa en un porcentaje mínimo y es uno de los grandes reclamos que tiene el sector.

Carla Wichmann, integrante de la Asociación Comunidad Costera de Tierra del Fuego, indicó que por la adecuación a las nuevas reglamentaciones, hubo una convocatoria a una audiencia pública muy limitada, donde solo se pudo dejar comentarios “y no mucho más”. Pareció solo un paso burocrático para intentar evitar una posterior judicialización.

Señaló que cuando hablan de la lucha contra el extractivismo en la provincia rápidamente acude el recuerdo de lo que fue, hace veinte años, la resistencia y el triunfo contra la empresa norteamericana Trillium Corporation (hoy Lengua Patagónica Sociedad Anónima), que pretendía explotar más de 77.000 hectáreas de bosque subantártico para convertirlo en aserrín. Wichmann recordó que también se trataba de una autopista que atravesaba bosques milenarios, mientras arrasaba con sitios arqueológicos y ecosistemas irrecuperables.

El triunfo más reciente se dio contra las [salmoneras durante el 2021](#). La sociedad salió al cruce del intento de instalar una salmonera en la costa del Canal Beagle y se logró el pronunciamiento de figuras del ámbito internacional, inclusive de muchos reconocidos chefs. “La comunidad dijo sí a estas peleas y el ambientalismo en la provincia no es una novedad, no es una moda, tampoco es ecofascista, como algunos funcionarios quieren hacer creer. El ambientalismo en la provincia es parte de la identidad fueguina”, aseguró la integrante de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego (AeIAS).

“Esta comunidad tiene identidad y tiene memoria. Esta comunidad no acepta la fragmentación impuesta por este modelo en donde el mar es una cuadrícula y la montaña una conquista”, graficó.

Debates y encrucijadas

Una de las primeras imágenes que reciben los viajeros cuando ingresan a la provincia por tierra es la de la planta de Tecnomyl, la firma productora de agrotó-

xicos que está muy cerca de la ciudad de Río Grande. La imagen que se llevan quienes llegan al extremo sur de la isla es la de Península Mitre, una zona de maravillosos paisajes, con bosques prístinos y que fue declarada área protegida recientemente. Una dicotomía similar parece atravesar el futuro de la isla y sus habitantes.

El gobernador Gustavo Melella impulsa proyectos que son cuestionados por buena parte de la población: el nuevo puerto de Río Grande, la plataforma Fénix (que viene a profundizar y desarrollar la cuestionada explotación petrolera offshore), una planta petroquímica y otra de hidrógeno verde.

La provincia es joven, pero el territorio tiene una historia mucho más larga; donde los pueblos ancestrales de la región —como los Selk' Nam, Haush y Yaganes— supieron convivir, disfrutar y honrar esta parte del planeta, en la cual la hostilidad del clima y la insularidad no fueron impedimento para ser felices y perdurar en esos fuegos que hoy encienden aquellas y aquellos que se van multiplicando alrededor de la necesidad de defender el ambiente en esta maravillosa isla fueguina. No hace mucho tiempo se le pudo poner un freno a las salmoneras, un buen precedente que incentiva para lo que se viene.

Margarita Maldonado, integrante de la comunidad Selk' Nam, explicó que por estas cuestiones vienen siguiendo “una huella, sin parar un día, porque siempre estamos trabajando por la cultura y la identidad de nuestro pueblo, ya que los derechos se ejercen, no se mendigan”.

Advirtió que “se habla mucho de extinción, de que somos un pueblo extinto” y rechazó ese concepto. “Muchas cosas fuimos recuperando, fuimos reconstruyendo y las seguimos transmitiendo. No somos los dueños de la verdad, pero es nuestra historia. Sabemos que estamos invisibilizados, pero tenemos gente y docentes que nos están acompañando; también hay otros a los que les molesta que queramos ocupar nuestros espacios y apuestan al etnocidio. Sin embargo, acá estamos”, aseveró la integrante del Pueblo Selk' Nam. En ese camino, el debate acerca de las formas de producción que deben implementarse en la provincia también deben tener un espacio importante en la agenda.

Tal vez sumando organización al optimismo, al compromiso, a la fuerza y la perseverancia esté la clave para comenzar a recuperar saberes ancestrales y construir otras realidades desde abajo, en estos tiempos en los cuales desde arriba llueven complicaciones y perjuicios para los que menos tienen. En esta encrucijada que se presenta en el país, Tierra del Fuego tampoco es una isla.

18



CORRIENTES: MONOCULTIVO DE ÁRBOLES, PÉRDIDA DE HÁBITATS NATURALES Y LA APUESTA POR LA AGROECOLOGÍA

Ganadería, monocultivo de árboles y cultivo de arroz son algunas de las producciones características de Corrientes, una provincia donde lagunas y humedales abarcan el 35 por ciento del territorio. Y también es notoria la injusta distribución de la tierra: el 13 por ciento de las grandes estancias ocupan el 82 por ciento de la superficie agropecuaria.



Escoltada por los ríos Paraná, al norte y oeste, y el Uruguay al este, la provincia de Corrientes se despliega a lo largo de 88.199 kilómetros cuadrados. El agua es una constante del paisaje correntino y se presenta en forma de ríos, lagunas y esteros, que ocupan alrededor del 35 por ciento del terreno y alimentan una sorprendente biodiversidad. Tal es el caso de los Esteros del Iberá, un tejido de humedales ubicado en el corazón de la provincia: segundo en extensión a nivel mundial y declarado [sitio Ramsar](#) por su importancia internacional para la conservación.

Este ecosistema, además, es un punto de referencia que divide a la provincia en dos grandes regiones: oriental y occidental. Al este, se ubican los departamentos con mayor superficie dedicada a la actividad agropecuaria, sobre todo a la ganadería y al cultivo de arroz, como Mercedes y Curuzú Cuatiá. Según datos del último Censo Nacional Agropecuario (CNA) —realizado en 2018 y publicado en 2021— el 69 por ciento de la superficie provincial está ocupado por la actividad agropecuaria y, de esta fracción, menos del ocho por ciento (unas 479.576 hectáreas) corresponde a implantaciones (principalmente monocultivos de pinos y eucaliptos). El resto del terreno se distribuye en otros usos, de los cuales el 80 por ciento se caracteriza por la presencia de pastizales, destinados al pastoreo.

Justamente, la ganadería ha sido, desde que se introdujo hace 400 años —según apunta la bióloga Renata Nicora Chequin—, una de las principales actividades económicas en la provincia. Poco más de tres millones de cabezas de ganado vacuno se distribuyen en 8.495 de las 10.945 explotaciones agropecuarias (EAP) registradas en el último censo. Le siguen en importancia, muy por debajo, el ganado ovino (con 488.723 cabezas) y equino (con 109.646 animales): el primero como fuente de carne y lana, principalmente, y el segundo como fuerza de trabajo y uso exclusivo de las chacras y estancias.

En cuanto a la superficie implantada, el 63 por ciento (322.801 hectáreas) corresponde a monocultivos de pinos y eucaliptos. Esta cifra contrasta significativamente con la relevada por el Consejo Federal de Inversiones en [un informe](#) presentado en 2018, donde señala que, ya para entonces, ascendían a 516.711 las hectáreas con monocultivos forestales.

Después de Misiones, Corrientes es la provincia con mayor superficie de “bosques” artificiales. El 37 por ciento restante se distribuye en otros cultivos, predominando el de arroz, con poco más de 71.000 hectáreas, que la convierten en la principal productora de este cereal a nivel país.

También se destaca el cultivo de forrajeras perennes como la brachiaria y la setaria (unas 31.000 hectáreas), la yerba mate (18.000 hectáreas localizadas en el noreste provincial) y el raigrás, una forrajera anual (más de 10.000 hectáreas). En la lista, siguen los frutales con una superficie que supera las 20.000 hectáreas, de las cuales poco más de la mitad corresponde al cultivo de naranjas.

Menos manos en la tierra

La actividad agropecuaria perdió más de 700 mil hectáreas entre 2002 y 2018, según indican los respectivos censos. En ese mismo lapso, las EAP descendieron de 15.244 (2002) a 10.945 (2018). En contraste, se observa un significativo aumento de las EAP sin límites definidos, que pasaron de 571 en 2002 (lo cual representó una abrupta caída desde 1988), a 1254 en el año 2018.

Los datos van a contramano del total país, donde este tipo de explotaciones descendieron en más del 37 por ciento en el mismo periodo, según refieren Eduardo Azcuy Ameghino y Diego Fernández en [su análisis de los resultados del CNA 2018](#). Este tipo de explotaciones marcarían, según los autores, las unidades de producción asociadas con el campesinado tradicional y los pueblos originarios.

Al mismo tiempo, se observa una marcada concentración de las tierras: el 82 por ciento de la superficie total destinada a la actividad agropecuaria se distribuye en 1.233 EAP (con límites definidos) de más de 1.000 hectáreas cada una. A medida que crece el tamaño de las posesiones, decrece la cantidad de propietarios: 64 EAP de entre 10.000 y 20.000 hectáreas se reparten el 14 por ciento de las tierras y 23 fincas de más de 20.000 hectáreas ocupan el 15 por ciento del mapa. El 18 por ciento que resta de la superficie total se divide en 8.458 EAP de menos de 1.000 hectáreas y, de éstas, el 68 por ciento ocupa menos de 100 hectáreas cada una.

211

En síntesis: menos del 13 por ciento de las propiedades abarcan el 82 por ciento de la superficie total dedicada a la actividad, mientras más del 87 por ciento de las EAP se dividen el 18 por ciento restante de los suelos. En otras palabras: mucha tierra en pocas manos y muchas manos en poca tierra.

Pastizales y humedales versus monocultivos

Pese a la marcada predominancia de los pastizales, entre 2002 y 2018 se perdieron más de 1.300.000 hectáreas de estos ambientes. Esta merma de superficie se debe, según apunta Renata Nicora Chequin —quien además integra la organización Defensores del Pastizal—, a “un proceso transicional de la ganadería extensiva al monocultivo forestal” y agrega que “cada vez son más los campos ganaderos arrendados o vendidos para ese fin”.

Favorecidos por condiciones agronómicas aptas, un paquete legislativo afín (como las leyes nacional [25.080](#) y [26432](#) o provincial [6496](#)) y exenciones impositivas, los clústeres forestales han irrumpido en la zona del río Uruguay y el borde más occidental de los Esteros del Iberá. Según apunta Emilio Spataro —licenciado en gestión ambiental y miembro de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu)—, la promoción y desarrollo del sector forestoindustrial en Sudamérica es

parte del diseño de políticas neoliberales, vinculadas con organismos bilaterales. Su impulso estuvo pensado como parte de la cadena de producción de papel, pero en general la madera sale de la provincia con “bajísimo valor agregado”, puntualiza.

No obstante, los monocultivos de árboles continúan expandiéndose y le ganan terreno a humedales y pastizales. Esto pone en riesgo el hábitat natural de muchas especies amenazadas y patrimonio cultural correntino, porque el pastizal, por ejemplo, “está fuertemente ligado a nuestras costumbres laborales, etnofarmacológicas, de vivienda, artesanales” y también a leyendas y personajes del lugar, según enumera Nicora Chequin.

Y lo mismo sucede con los humedales, que a falta de una ley que los proteja corren grave peligro. Contra una legislación de este tipo se expresó la Coordinadora de Entidades Productivas de Corrientes (que nuclea a sociedades rurales y asociaciones arroceras, forestales y citrícolas de la provincia). Fue en una declaración publicada en el marco del Plenario de Comisiones convocado en el Congreso de la Nación para tratar los proyectos de ley. Francisco Velar, productor ganadero y miembro de la Sociedad Rural de Corrientes —una de las firmantes— [defendió su oposición a la ley](#) y opinó que “va a ser paralizante de la actividad económica del país y el acta de defunción de nuestras economías regionales” .

Desde la organización socioambiental [Guardianes del Y'verá](#) salieron al cruce de estas declaraciones, al señalar que “lo único que mata a la producción es el deterioro de los ecosistemas, el cambio climático y la falta de gestión ambiental”.

“También la oposición de las cámaras empresarias forestales, representadas por AFOA (Asociación Forestal Argentina), a la ley de humedales, ha sido explícita desde el primer proyecto de ley, en el año 2011”, apunta Spataro y explica que este sector “tiene una clara conciencia de que una ley que llame al ordenamiento territorial de humedales, a priorizar sus servicios ecosistémicos, va en contra de los intereses económicos que ven solamente al humedad como un área vacante a llenar de pinos, eucaliptos o álamos”.

Además de las consecuencias que el modelo forestal tiene para el ambiente —al sustituir la diversidad por un monocultivo— “ha implicado un fuerte desplazamiento de comunidades rurales, con muchísimas situaciones de conflicto”, afirma Spataro y señala el departamento San Miguel como un caso testigo.

Por su parte, Nicora Chequin apunta que, en todos los tramos de la cadena forestal, los trabajadores se encuentran mayormente precarizados y enumera 461 casos (informados por los medios de comunicación entre noviembre de 2019 y octubre de 2021) de personas, incluyendo niños y adolescentes, que no estaban registradas o eran sometidas a regímenes de esclavitud.



Pese a los daños ambientales y sociales, la baja rentabilidad y la precarización laboral que denuncian desde ReNaHu y Defensores del Pastizal, la silvicultura cuenta con respaldo oficial. Como grafica Spataro: “Hay un fuerte acompañamiento y decisión del Estado de impulsar un modelo que es negativo para el ambiente y negativo para las comunidades”.

Agrotóxicos y muertes

Según los datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2018, la superficie tratada con agroquímicos (entre fertilizantes, fungicidas, herbicidas e insecticidas) asciende a poco más de 275.448 hectáreas en total, en el lapso de un año. Los frutales, según el registro, son las plantaciones más tratadas con estos preparados y, en el otro extremo, están las legumbres. Sin embargo, los datos no reflejan el uso de agroquímicos en cultivos industriales (como la yerba mate) o en los “bosques” implantados.

Más allá de los números, existe una realidad que no muestran los censos: las vidas afectadas y las muertes que producen los agrotóxicos. Corrientes sabe de eso. En 2011, Nicolás Arévalo y su prima Celeste Estévez se intoxicaron con endosulfán, en la localidad de Lavalle. Nicolás murió cinco días después. Tenía 4 años. Celeste, de 7, sufrió lesiones graves. Por estos hechos, el productor hortícola Ricardo Prietto fue enjuiciado y finalmente [condenado por homicidio culposo en 2020](#). José Carlos “Kily” Rivero también tenía 4 años cuando murió, en diciembre de 2012. La autopsia reveló presencia de un compuesto que se utiliza para tratar las plantas de tomate que se cultivan en Puerto Viejo (Lavalle), donde vivía. En septiembre de 2017, en Mbucuruyá, la vida de Rocío Pared, de 12 años, se interrumpió cuando comió una mandarina contaminada con carbofurán. El 29 de abril de 2021, [Antonella Sánchez, de 16 años, media hermana de “Kily”, falleció en su casa de Puerto Viejo](#), a raíz de un cáncer originado, presuntamente, por los agrotóxicos.

Luego de las muertes de Nicolás y Rocío, el endosulfán y el carbofurán fueron prohibidos, pero se siguen empleando otros agroquímicos sobre cuyos daños alertan [estudios científicos](#) y asambleas socioambientales.

Volver al pasado para reinventar el futuro

De alguna manera, las muertes de Nicolás y “Kily” hicieron nacer la cooperativa Yvy Maraney (“Tierra sin mal”, en guaraní) en 2015, al plantear la necesidad de pensar y trabajar alternativas al uso de agrotóxicos. En el inicio fueron capacitaciones que se llevaron a la práctica en un comedor. Desde entonces, no paró de crecer.



Hoy la cooperativa —ubicada en la capital provincial— cuenta con 100 miembros, muchos de ellos campesinos forzados a emigrar desde el interior correntino, que trabajan en terrenos periurbanos, aplicando los principios de la agroecología a huertas, viveros y granjas, según cuenta Sergio Mendez, cofundador y coordinador.

Yvy Maraney es una de las cuatro cooperativas que integran la Federación Campesina Guaraní (Fecagua), fundada en 2016, que además nuclea a siete comunidades guaraníes. Esto representa a casi 600 familias que habitan en 22 pueblos y parajes de la provincia, afirma Cristian Piriz, coordinador de la Federación. Esta construcción asamblearia permite a las cooperativas trabajar en el desarrollo de una agricultura y ganadería sustentables, mercados populares y ferias. Además de la producción primaria, se elaboran artesanías, quesos y chacinados, apicultura y se realizan compras conjuntas de insumos para abaratar costos, entre otras actividades.

No son los únicos casos: en el último Censo Agropecuario fueron registradas 62 Explotaciones Agropecuarias (EAP) que aplican la agroecología, 25 la agricultura orgánica y cinco la biodinámica. Este modelo ya está inaugurado y, desde la experiencia, Piriz afirma y subraya: “La agroecología no solo es el camino más potable para generar un cambio en las condiciones en las cuales vivimos, sino que **dejó de ser una alternativa para pasar a ser la opción principal que debemos tomar y apoyar**”. En igual sentido se pronuncia Mendez: “Más que posible, la agroecología es un modelo de desarrollo necesario, un saber ancestral que es preciso recuperar para un mundo más sustentable, sano y biodiverso”.

Además de los beneficios ambientales, la agroecología se plantea como “una forma más rentable”, dice Mendez, ya que los productores ahorran los altísimos costos que tienen los agroquímicos, a la vez que fomenta una mejor distribución de la tierra y el capital, beneficiando a más familias. “Es la antítesis del agonegocio, que además de afectar el ambiente y concentrar la tierra y el capital, contamina la salud de los productores y de los consumidores”, afirma Mendez.

Desde la producción ganadera, Nicora Chequin también considera necesario revisar las prácticas en el manejo de los pastizales para preservarlos. “Creemos que la ganadería es un tipo de producción que llevada a cabo de cierta forma puede no sólo convivir con los pastizales naturales, sino también con la fauna local”, opina.

19



SAN LUIS: MODELO TRANSGÉNICO, DISPUTA POR EL AGUA Y LA AGROECOLOGÍA COMO RESPUESTA

El Grupo IRSA, Aceitera General Deheza, Bayer-Monsanto, Syngenta y Paladini son algunas de las empresas que irrumpieron en el agro puntano modificando la histórica producción campesina. La política estatal favoreció al agronegocio y al turismo, que concentró las tierras y el agua en pocas manos. La agroecología y un plan ganadero campesino, alternativas para recuperar soberanía alimentaria.



San Luis ocupa poco más del tres por ciento del territorio nacional, con una superficie de 7,7 millones de hectáreas, de las cuales el 75 por ciento (5,8 millones de hectáreas) están dedicadas a la actividad agropecuaria, con gran predominio de la actividad ganadera. En sus 460 kilómetros de norte a sur y 200 de este a oeste contiene una amplia diversidad de climas y relieves. El norte provincial, atravesado por las sierras, cuenta con el valle de Conlara, un oasis de producción agrícola gracias a los suelos fértiles y la capacidad de riego con aguas subterráneas.

Grandes corporaciones: Cresud y Aceitera General Deheza

Al otro lado de las sierras, las localidades de Quines y Candelaria, marcadas por el riego y el agronegocio, son la puerta hacia el noroeste provincial, donde el clima se vuelve más seco y toma las características de las vecinas provincias de Mendoza y San Juan. Como parte de la región de Cuyo, en San Luis el agua es un recurso en disputa. Desde el centro de la provincia al sur, las sierras quedan atrás y se extiende la llanura más arenosa hacia al oeste y con mejores condiciones en la parte oriental, donde limita con zonas del agro cordobés. El límite sur es con La Pampa, provincia con la que comparte el bosque de El Caldenal. Por su parte, Villa Mercedes, además de ser una de las ciudades más pobladas de la provincia, también es una zona de importante producción agrícola.

Esa diversidad de climas y relieves marca el panorama agropecuario. El noreste de producción de cultivos extensivos de verano —maíz y soja, como cultivos dominantes—, e intensivos de hortalizas —papa, cebolla y verdura de hoja—, que tuvo una época hasta principios de la década de 1980, con sistemas de riego por acequias y agricultura de secano —con agua de lluvia— y mano de obra volcada al campo; con presencia marcada de chacras mixtas con caprinos, cerdos y frutales para la venta local o el autoconsumo.

Ese escenario se vio modificado por el avance de los sistemas de riego de pivot —que extraen aguas subterráneas del acuífero Conlara, con perforaciones de 200 metros de profundidad y equipos de bombeo— y cambió el modelo con el avance de la producción de grandes superficies, desmonte mediante.

Ese cambio en el noreste provincial tiene un actor central: la empresa agrícola Cresud —parte del Grupo IRSA de [Eduardo Elsztain](#)— que cuenta con alrededor de 12.000 hectáreas, según las organizaciones campesinas y académicos locales. La empresa reconoce en [su portfolio](#) 7.010 hectáreas en sus estancias La Gramilla y Santa Bárbara en las cercanías de Merlo. Son solo una pequeña porción de las más de 500 mil que posee en todo el país.

De la mano del agronegocio, la presión ejercida por el turismo y el cambio climático, la pérdida de bosque también avanza en tierras puntanas. Según [un in-](#)

forme del Ministerio de Ambiente, en 2022, las provincias que más pérdida de bosque registraron fueron Santiago del Estero seguida por Chaco, Formosa y San Luis. “La suma de las hectáreas desmontadas entre 2006 y 2013 son más de 135.000”, según datos de la Secretaría de Ambiente de la Nación.

Al otro lado de las Sierras de San Luis, la producción también está marcada por el cambio que significó la construcción de riego por pivot por parte de grandes empresas como Aceitera General Deheza o propietarios que invirtieron en las perforaciones y equipos de extracción para alquilar sus campos. Sobre la ruta 79, desde la localidad de Quines, siguiendo por Candelaria y hasta el límite con San Juan, en el pueblo El Hormiguero, la vista satelital del departamento de Ayacucho es de grandes círculos perfectos en medio del campo, la señal de la presencia de los pivots de riego, que se utilizan en la producción de maíz, soja, papa y algodón. Alejándose de las sierras rumbo al noroeste el relieve cambia, aparecen las salinas y el monte, donde la producción caprina marca la tradición campesina que la une con su vecina Mendoza.

Aceitera General Deheza posee además un complejo de producción de aderezos y procesamiento de maní —otro de los cultivos provinciales— en el centro de la provincia, en Villa Mercedes. Otro gigante de la alimentación está ubicado en San Luis capital: Arcor posee una planta de chocolates y golosinas. En la capital y Villa Mercedes, departamento de General Pedernera, se concentran la población provincial: de los 540.905 puntanos registrados en los resultados preliminares del Censo 2023, las proyecciones de población estimada del INDEC ubican a 252.625 en la primera y 150.152 en la segunda.

Es que en esas dos ciudades se concentra también la actividad industrial, producto del marco regulatorio impulsado en la década de 1980, con regímenes de beneficio para la instalación de industrias, en particular con la Ley 22.702/1982. El régimen generó un cambio en la estructura productiva provincial, como se marca en el capítulo de análisis comparativo de los resultados provisorios del Censo Nacional Agropecuario 2018 y el CNA 2002 en San Luis del informe *La Argentina agropecuaria vista desde las provincias* de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Giberti.

“Si bien, hasta mediados de la década del ’80, el sector agropecuario había constituido la base productiva de la provincia representando más del 30 por ciento del Producto Bruto Geográfico (PBG), la peculiar composición del PBG, con preponderante participación del sector manufacturero, se explica por el impacto de políticas nacionales y provinciales de promoción al sector que comenzaron hacia fines de 1982”, indica el informe.

Según cifras de la Cepal, en 2018, las manufacturas eran el rubro de mayor participación en el PBG con un 37 por ciento, mientras que un informe de cadenas

de valor del Ministerio del Interior indica que la Industria manufacturera, en el tercer trimestre de 2022, empleó un 30 por ciento del total del empleo registrado de la provincia con el subrubro “Alimentos” a la cabeza.

De la capital provincial hacia el sur, al límite con [La Pampa](#), hay 350 kilómetros de llanura, o sea, tres cuartos del largo de la provincia, que continúan como ha ocurrido históricamente dedicados a la ganadería con pasturas naturales. El norte es agrícola y campesino, y el sur de las estancias ganaderas. Sin embargo, en el margen oriental sur de la provincia, donde continúa compartiendo límite con [Córdoba](#), la frontera del agronegocio se extendió con cultivos extensivos en secano y con la expansión de la superficie bajo riego. El maíz y la soja también se extienden en las tierras del sur y, en menor medida, lo hace el trigo.

La dimensión ganadera se puede marcar con las [cifras de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, sobre la base del CNA 2018](#). De la superficie total destinada a la actividad agropecuaria, sólo el 15,8 por ciento (919.245 hectáreas) están destinadas a la actividad agrícola, o sea tierras implantadas con cultivos, mientras que el 84,2 por ciento (4.889.328 ha) están destinadas a la actividad pecuaria. El sur provincial está ligado a la ganadería, naturalmente, por el relieve de llanura, pero la actividad domina en toda la provincia.

Un modelo de desarrollo que no asegura el alimento

Según las [estadísticas provinciales](#) y, a pesar del perfil industrial que se buscó impulsar desde la década del '80, las exportaciones de origen provincial, al primer semestre de 2023, eran lideradas por los productos primarios (40,3 por ciento), encabezados por el maíz y la carne. Los primeros cuatro países de destinos de esas exportaciones fueron Chile, China, Brasil y Paraguay.

¿Redunda el desarrollo del agronegocio en la provincia en alimento para los puntanos? Según el Indec, el [índice de pobreza](#) en el país alcanzaba al 29,6 por ciento de hogares y al 40,1 por ciento de la población en el primer semestre de 2023. En el Gran San Luis esas cifras se elevaban al 36,9 por ciento de los hogares y al 47,3 por ciento de las personas. Las cifras más altas de la región de Cuyo, superiores a las registradas en el Conurbano bonaerense y sólo superada a nivel nacional por Gran Resistencia ([Chaco](#)) y Concordia ([Entre Ríos](#)), donde las mediciones superan el 50 por ciento.

En términos de modelo de desarrollo, la provincia dominada históricamente por la familia Rodríguez Saá cuenta con el relato de ser “otro país”, sin pobreza, pero los datos dicen otra cosa. “El modelo de desarrollo industrial de los '80 viene fallando desde hace tiempo, con trabajo precario y planes de asistencia social”, apunta Fernando Frank, ingeniero agrónomo, integrante de la Cátedra

Libre de Soberanía Alimentaria ([Calisa](#)) de la Universidad de San Luis, trabajador del Inafci (Instituto Nacional de Agricultura Familiar) y autor de numerosos informes sobre [agronegocio](#) y [agroecología](#).

Leonardo Janjetic, también técnico del Inafci y asistente de la Unión de Productores y Productoras Caprinos, señala que entre los campesinos no está presente ese quiebre del modelo de la San Luis rural a la industrial, pero sí el avance del agronegocio y el turismo como amenazas a un modelo de agricultura de pequeños campesinos, al avance sobre sus territorios y el acceso al agua para la producción.

Desde el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), organización que cuenta con hectáreas de producción agroecológica en el valle del noreste provincial y también en el Valle de Traslasierra (Córdoba), el ingeniero agrónomo Federico Vázquez marca otro punto crítico del modelo provincial respecto de su soberanía alimentaria: “No se puede seguir con el modelo de traer verdura y fruta de Córdoba y Mendoza. Quedó claro durante la pandemia, cuando era muy difícil abastecerse desde otras provincias y fue muy importante la producción agroecológica, de los pequeños productores. La agroecología tiene capacidad de abastecer sin insumos dolarizados que encarecen los precios”, asegura.

Modelo Cresud: monocultivos, agrotóxicos y desmonte

221

La tierra es un recurso natural muy rico en Argentina, pero el modelo del agronegocio lo explota y degrada. Como indica el técnico del INTA-Villa Dolores e integrante de la Red de Agroecología del INTA, [César Gramaglia](#), la “agricultura de insumos químicos ha causado la degradación, erosión, compactación y empobrecimiento de los suelos de la región pampeana como consecuencia de una especialización productiva, lo que ha generado un balance negativo de la materia orgánica y de los macro y micronutrientes afectando la sustentabilidad de los agroecosistemas”.

Este es el modelo de siembra directa, intensificado en el país desde la aprobación de la primera soja transgénica en 1996. Un modelo industrial que se apoya en el paquete agroquímico en constante dependencia. A inicios de la década del ‘90 se utilizaban 50 kilos/litros por años y, en la actualidad, se encuentra en 500 millones de kilos/litros por año, con un fuerte predominio de los herbicidas.

Frank pone como ícono de ese modelo en las tierras puntanas a Cresud, la empresa del multimillonario Elsztain, que tiene como uno de sus lemas “nuestro valor es la tierra” y presenta como sus principales negocios la compra y venta de predios rurales y la producción de granos. Eso es lo que hace en San Luis desde 1997, cuando según su [historia institucional](#) compró la empresa Agroriego San

Luis. El mismo año se transformó en la primera compañía agropecuaria argentina en cotizar en la bolsa estadounidense Nasdaq.

La empresa de Elsztain se instaló entre las localidades de Concarán y Santa Rosa del Conlara. En esos campos crecieron los círculos de sus pivots de riego, donde alquila los campos a las gigantes del agronegocio Monsanto y Syngenta para la producción de semillas híbridas de maíz. “Eran como siete topadoras. Voltearon 7.000 hectáreas en dos meses. Se escuchaba el ruido las 24 horas”, es la [memoria de los campesinos puntanos](#) sobre la llegada del grupo empresario para instalarse en sus estancias Santa Bárbara y La Gramilla.

La Ley de Bosques en San Luis fue sancionada en 2009, con posterioridad a la llegada de Cresud y Monsanto. El debate para alcanzar la sanción de la norma y el ordenamiento territorial en las zonas roja, amarilla y verde de preservación no estuvieron ajenas a los habituales problemas de participación de las organizaciones socioambientales y campesinas. En todas las provincias se suele dejar afuera a estos sectores y, de ese modo, se habilitan desmontes para beneficiar a grandes inmobiliarias y empresas del agronegocio, como precisa el [Informe Anual sobre la Situación de la Soberanía Alimentaria en la Argentina 2022](#).

En 2017, según los informes de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, San Luis contaba con 3.152.630 hectáreas de bosque nativo, superada por Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa —que conforman la Región Chaqueña la mayor área de bosque nativo de país— y por La Pampa (3.343.376), provincia con la que comparte el bosque de espinal El Candenal. Según un [informe del Ministerio de Ambiente, que analiza el periodo 1998-2018](#), San Luis también se ubicó como la primera provincia en pérdida de bosque nativo detrás de las cuatro de



la Región Chaqueña, afectadas directamente por el avance de la frontera agrícola-ganadera (donde la empresa Cresud avanzó sobre más de 120 mil hectáreas en Salta). La pérdida de bosque en tierras puntanas durante ese período rondó el seis por ciento del total nacional.

El informe marcaba como hito los incendios forestales en el bosque de espinal, que en el período 2017-2018 arrasaron con cerca del 95 por ciento de los bosques perdidos; pero no dejaba de lado el impacto del agronegocio: “Un ejemplo de erosión a gran escala lo representa el aumento del escurrimiento superficial y subsuperficial asociado a la deforestación y reemplazo del bosque nativo por cultivos en San Luis, que acarrea erosión de suelos generando grandes cárcavas con grandes flujos de agua del tamaño de ríos”. Según el [“Monitoreo de la superficie de bosque nativo en la República Argentina”](#), realizado por el Ministerio de Ambiente, durante el año 2022, la situación no se modificó: las provincias que más pérdida de bosque registraron fueron Santiago del Estero seguida por Chaco, Formosa y San Luis.

El informe de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Giberti permite contraponer otra punta relevante respecto del avance de la frontera agrícola: “La producción agrícola ha sufrido cambios profundos durante el período intercensal. El CNA 2018 arrojó por resultado un incremento de 283.932 hectáreas en la superficie destinada a cultivos anuales. Sin embargo, de acuerdo con los monitoreos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, entre las campañas 2001/2 y 2017/8 el aumento ha sido de 684.040 hectáreas”.

Frank amplía el número de hectáreas controladas por el grupo de Elsztain en el valle de Conlara y vuelve sobre las raíces del modelo del agronegocio: “Son 12.000



hectáreas en las que no producen alimentos, 12.000 hectáreas para producir un insumo de la agroindustria, 12.000 hectáreas bajo riego que si se dedicaran a la producción de alimentos alcanzarían para abastecer la zona y mucho más”, sintetiza.

Los campos que alquila a Monsanto y Syngenta son donde se realizan los entrecruzamientos para obtener las semillas híbridas que las multinacionales comercializan para regar la zona núcleo. La [recordada lucha de la población de Malvinas Argentinas](#), Córdoba, para evitar la instalación de una planta de tratamiento de semillas de Monsanto, estaba relacionado directamente con los campos que Cresud le alquila a la multinacional. Tras no poder abrir la planta en suelo cordobés, las semillas viajan 250 kilómetros más hasta otra ubicada en la localidad de Rojas, en [Buenos Aires](#).

Tomando el modelo aplicado por Cresud, con sus socios, el paquete de agrotóxicos y sus impactos ambientales también salen a escena. “La producción bajo riego tiene sus propias características de humedad, lo que implica un uso ‘preventivo’ para evitar la proliferación de hongos, que se le suman otros usos ‘preventivos’. Si se compara el valor de un kilo de semilla, contra un kilo de grano cosechado, está varias veces por encima, por lo que les es rentable usar agrotóxicos de forma excesiva”, advierte Frank.

En 2013, organizaciones socioambientales de San Luis realizaron estudios ambientales, en el marco de una amparo judicial, para el que tomaron muestras en los ríos Conlara y Claro, y de suelo y agua de pozo del valle de Conlara. Los estudios los llevó adelante el científico químico de la Universidad de La Plata y el Conicet [Damián Marino](#) y relevaron la presencia de los herbicidas atrazina en agua de pozo y en suelos, y de glifosato en sedimentos de los ríos.



“La presencia de atrazina fue lo más alarmante porque es un herbicida muy tóxico, muy móvil a aguas superficiales y subterráneas, y que actúa en muy bajas dosis sobre la fauna. Está muy estudiado en trabajos de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y en otros países sobre cómo genera disrupción endocrina y genera malformaciones”, repasa el ingeniero agrónomo y apunta que el uso de este herbicida está directamente ligado a la producción de maíz. A partir de esas denuncias, en 2016, se consiguió la sanción de La Ley 0958 de “Distancias mínimas para la aplicación de glifosato, herbicidas equiparables y/o agroquímicos en todo tipo de cultivos productivos”.

Más de 25 años de monocultivos

Los monocultivos de soja y maíz transgénicos se extendieron de forma exponencial en San Luis, tanto en cultivos de secano como bajo riego. En base al CNA 2018, el informe de la Cátedra Giberti precisa que “el maíz y la soja representan casi el mismo porcentaje de la superficie implantada que, en 2002, cubrían los cuatro cultivos más importantes: maíz, centeno, sorgo y girasol”.

Los datos de las [estimaciones agrícolas de la Secretaría de Agricultura](#) permiten actualizar el fenómeno y no deja dudas de que en las últimas 15 campañas la soja y el maíz acapararon la producción de cereales y oleaginosas en San Luis. En la campaña 2007/2008, la soja cubrió 105.000 hectáreas de siembra, el girasol 107.000, el maíz 113.000. Por su parte, el trigo abarcó 4.200 y la cebada apenas 175 hectáreas.

Ya para la campaña 2012/2013 la soja marcó su pico con 398.790 hectáreas para



iniciar un declive pronunciado hasta el año de la pandemia y un leve repunte que la dejó con 222.400 hectáreas sembradas en la campaña 2022/2023.

En la actualidad, el maíz es el cultivo más sembrado en la provincia. Desde 2014 no dejó de crecer y llegó en la campaña 2021/2022 a 440.000 hectáreas, que **coincidió con una avanzada del maíz sobre la soja en todo el país.**

A pesar del marcado crecimiento de la siembra de maíz en San Luis, la provincia sólo representa el **cuatro por ciento de la superficie sembrada** en el país en la campaña 2021/2022, la de mayor extensión del cultivo. Mientras que para la **soja representa solo el uno por ciento** del área sembrada en el país. El girasol perdió terreno en San Luis, sin embargo, representa también el **cuatro por ciento a nivel país.**

El modelo Cresud, y sus socias Bayer-Monsanto y Syngenta, se impuso de tal manera que, según **cifras provinciales en base al CNA 2018**, de la superficie de cereales cultivados el maíz para grano ocupó el 95,2 por ciento de la superficie sembrada en San Luis. Mientras que de las hectáreas destinadas a las oleaginosas, la soja ocupó el 88,35 por ciento. Los porcentajes son casi idénticos en la implementación de la modalidad de siembra directa y el informe provincial da cuenta de la relación con los agroquímicos: de 238.495 hectáreas de oleaginosas, 225.387 contaban con registros de aplicación de herbicidas. Por su parte, de 277.585 hectáreas de cereales, 252.939 también habían aplicado agrotóxicos.

Con ese nivel de avance del maíz y la soja, San Luis relegó el resto de los cultivos. Se destaca el centeno, con seis por ciento a nivel país, con 59.700 hectáreas sembradas en 2021/2022, lejos del máximo de 135.300 de la campaña 2019/2020 (cuando representó el 19 por ciento a nivel nacional).

Otra producción destacada es el maní. Lo producido en tierra puntana representa el cinco por ciento del volumen nacional, detrás de Córdoba (78 por ciento) y Buenos Aires (nueve por ciento). El máximo de área sembrada de maní se alcanzó en 2017/2018 con 28.250 hectáreas, cuando fue la segunda provincia productora con el seis por ciento del total nacional, detrás de Córdoba (87 por ciento).

En la zona de Quines y Candelaria, Bayer-Monsanto también produce semillas de algodón. Esta producción hace que el departamento de Ayacucho sea una rara excepción donde otro cultivo cuenta con un área de siembra similar a la soja y el maíz, los tres cultivos con aproximadamente 5.000 hectáreas. El cultivo de algodón en tierras puntanas comenzó hace una década por las buenas condiciones agroecológicas para el cultivo, que la hacen rentable y cuentan con una ventaja extra: el estatus sanitario de la provincia, libre de la principal plaga del cultivo, el picudo del algodonero

Concentración de la tierra y del agua

El modelo del monocultivo no solo amplió la frontera agropecuaria e introdujo la problemática ambiental de los agrotóxicos, también fue en paralelo con la concentración de tierras. El informe *La Argentina agropecuaria vista desde las provincias* marca qué ocurrió con la evolución de la Explotación Agropecuarias (EAP), según los censos 1988, 2002, 2018. En ese periodo de 20 años, San Luis registró una reducción de 5.974 EAP (1988) a 3.806 (2018: una baja del 63 por ciento de las unidades productivas).

Para evitar errores comparativos por diferencias intercensales respecto de los alcances de la muestra tomada, el informe es más prudente al marcar la reducción del número total de EAP con límite definido de 4.216 en el año 2002 a 3.806 en el 2018. Y toma la variación del 29 por ciento registrada entre 2002-1988. Lejos de ser significativa, dentro de un proceso nacional de similares características, el informe precisa el registro de la concentración de tierras.

El censo 2018 arroja una superficie total en explotación de 5.867.060 hectáreas —diferencias de cobertura censal mediante—, un incremento del cinco por ciento en la superficie relevada. Y marca que, más allá de las cifras totales, “el avance de la frontera agrícola que ocasionó el desplazamiento de la actividad ganadera hacia zonas marginales, incrementando la fragmentación de la superficie no apta para cultivo (bosque nativo, bajo salino, sierra) y aumentando el número de parcelas por EAP”.

“La disminución en el período intercensal 2002-2018 del casi el diez por ciento de las EAP con límites definidos, junto al aumento de la superficie en explotación y el aumento de la tierra bajo arrendamiento (16 por ciento en 2018), estarían indicando un proceso de concentración en la producción agropecuaria provincial”, sentencia el informe.

La foto se completa al analizar los cambios en la distribución de EAP y superficie explotada de acuerdo con la superficie: en 2018, la superficie cubierta por EAP con menos de 1.000 hectáreas disminuyó en 106.098 ha, mientras que las EAP que superan las 1.000 hectáreas aumentaron la superficie total en 584.770 ha.

En ese marco, el informe indica que el estrato de 25-100 hectáreas representó el 45 por ciento de la disminución en cantidad de EAP; mientras que los mayores incrementos de explotaciones se dan en los segmentos de 1.000-2.500 ha (42 por ciento) y 10.000-20.000 ha (28 por ciento), último estrato que representa el 66 por ciento del incremento en superficie.

En paralelo al incremento de las grandes explotaciones agropecuarias, el CNA 2018 identificó 22.506 predios sin límites definidos, los cuales suelen estar liga-

dos a la presencia de unidades de producción de subsistencia, ligadas al campesinado tradicional y los pueblos originarios.

Las tierras puntanas son territorio de los pueblos Huarpe, Comechingón y Ranquel. Además de la afectación directa que tiene el avance del desmonte sobre los pueblos originarios —según el Registro Nacional de Comunidades Indígenas el **65,5 por ciento de las comunidades relevadas habitan bosque nativo**—, San Luis tiene un caso simbólico: el del **Municipio Ranquel**. Un predio de 60.000 hectáreas creado en 2009 para restituir tierras a las comunidades Lonko Guayqui Gnerr y Manuel Baigorria, que está intervenido por el gobierno provincial desde 2019.

En cuanto al impacto de la concentración de tierras sobre parcelas campesinas, el técnico del Inafci y asistente de la Unión de Productores y Productoras Caprinos describe el proceso ocurrido: “La producción caprina fue históricamente fuerte en la zona serrana, donde la producción extensiva no es posible, y en el oeste provincial, donde el clima pasa de semiárido tirando a árido como Mendoza o San Juan. En esas zonas al agronegocio de cultivos no le es rentable instalarse, pero sí les interesan a las estancias ganaderas debido al corrimiento de la frontera agropecuaria. Las estancias se expanden comprando tierra a los productores campesinos, los campos se cierran con alambrado, cambia la lógica de funcionamiento de las comunidades, el pastoreo, toda la lógica productiva campesina”.

Agua, divino tesoro

228

La producción campesina intensiva hortícola se ubica principalmente en el valle de Conlara. Allí, según el integrante del Frente Popular Darío Santillán, la disputa por la tierra queda relegada a un factor constitutivo: el agua. “Si vos no tenés agua, si vos no tenés posibilidad de acceso al agua, la tierra no vale nada”, sentencia Vázquez.

El agua es palabra santa en Cuyo, aunque San Luis se ve más privilegiada que sus vecinas. De oeste a este las precipitaciones se incrementan de 100 a 600 milímetros anuales y la zona serrana puede recibir algo más. De todas maneras, los oasis de regadío, cubren menos del tres por ciento del territorio provincial y dependen principalmente del deshielo y el régimen de los ríos San Juan y Jáchal. En el valle de Conlara el riego está relacionado al ciclo hidrológico de las sierras y sus aguas superficiales y subterráneas.

En esa zona aún puede observarse, a través de las imágenes satelitales, los sistemas de riego por acequia que abastecían otro modelo del agro puntano con pequeños productores y campesinos, chacras mixtas de animales de corral, cabras sin alambres y producción de hortalizas y frutales —según la Dirección de Estadísticas Provincial, en 2018, sólo 351 hectáreas estaban destinadas a la produc-

ción de fruta—. “Pero el que desmonta cierra y no va a dejar que las cabras y los vecinos entren”, grafica Janjetic. Los sistemas por acequia, que fueron abandonados por el Estado y dejado en manos de comisiones de riego privadas desde la década de 1990, estaban preparados para abastecer parcelas de hasta 20 hectáreas, con el desmonte llegó el riego por pivot que puede abastecer hasta 100 hectáreas. “El sistema de riego marca quién produce”, define el técnico del Inafci.

“Para hacer una perforación necesitás millones de pesos”, explica Vázquez. Por eso marca el quiebre que significó la aparición del sistema por pivot de la mano de grandes empresas como Cresud. “En la sierra llueve, filtra y se mete en el acuífero Conlara. De allí ellos bombean con equipos inmensos, que demandan también mucho consumo de electricidad. El agua que extraen compite, por ejemplo, con la que el Municipio de Merlo utiliza para el consumo humano. La disputa es, principalmente, por el agua, no tanto por las tierras”, considera el referente del Frente Popular Darío Santillán.

“El reclamo principal que tenemos con el municipio de Merlo, a partir de la experiencia de abastecimiento local que dimos en la pandemia de Covid-19, es el acceso a tierras con sistema de riego. Nosotros tenemos la capacidad de producir alimentos, necesitamos la tierra y el agua”, exige Vázquez. El Frente Popular Darío Santillán cuenta con un polo productivo en la localidad de Piedra Blanco Abajo.

Turismo como actividad extractiva

Al nombrar Merlo, principal destino turístico de la provincia, aparece otro punto de conflicto en el modelo productivo y en la disputa por el bien común: el turismo. La hotelería compite por las tierras antes productivas y también surge como fuente laboral alternativa frente a un campesinado sin políticas públicas, lo que impulsa a dejar las tierras en manos de los monocultivos.

La pandemia también impulsó un éxodo interno en búsqueda de un modo de vida más cercano a la naturaleza para los trabajadores asalariados o independientes con capacidad de teletrabajar. Esa puja inmobiliaria también resulta en un negocio que se suma a la disputa de recursos. Según los datos preliminares del Censo 2023, el departamento provincial con mayor crecimiento poblacional (41,5 por ciento) y de viviendas (47,8 por ciento) fue Junín, donde está ubicada Merlo y otras localidades turísticas puntanas.

La agroecología crece entre las sierras

En el departamento de Junín, noreste provincial, es el que contiene al valle de Conlara y la villa turística de Merlo (vecina del reconocido valle de Traslasierra,

del lado cordobés). Está allí también el municipio de Carpintería, donde el Frente Popular Darío Santillán sí consiguió acceder a una hectárea de tierra con acceso a agua de riego —por encontrarse dentro del periurbano y poder conectar a la red local— para producir alimentos sanos.

En tanto, en el polo productivo de Piedra Blanca Abajo cuentan con media hectárea en producción, con invernaderos, un punto de abastecimiento del Mercado de Consumo Popular ([MeCoPo](#)) —canal de comercialización de productos campesinos de la organización en todo el país—, maquinaria para la producción y un polo textil.

En esa localidad arriendan otra hectárea para la producción de papa y cebolla de verdeo, con un sistema de riego por goteo a partir de una perforación que pudieron financiar a través de la Secretaría de Agricultura Familiar. En los invernaderos de los terrenos propios cultivan verdura de hoja, rúcula, radicheta, cebolla y espinaca, principalmente. Son cerca de 100 personas las que trabajan en ambos emprendimientos en San Luis y mantienen una relación constante con otras tierras en producción del lado cordobés, a solo diez kilómetros, en las localidades de Los Mates, La Guarida y Villa Dolores.

Con cinco hectáreas en producción, la organización abastece de alimentos sanos a través de una red de comercialización de bolsones agroecológicos, que se entregan cada semana a domicilio en toda la costa de la sierra: Merlo, Carpintería, Los Molles y Cortaderas. También abastecen la feria agroecológica que se monta en la plaza central de Merlo, a los habitantes que se acercan a comprar directamente a los campos y, en temporada, llegan a comercializar en las verdulerías cercanas.

“En la verdulería la entrega es por cajón como proveedor directo. Pero se desdibuja el trabajo como organización, se mezcla la agroecológico con la convencional y el precio al productor es mucho menor. Cuando hay mucha lechuga, hay mucha lechuga en todos lados, y no te pagan nada”, explica Vázquez sobre la realidad que se repite para las organizaciones campesinas en todo el país. La propuesta para llegar directo de productor a consumidor fue la construcción de un Mercado de la Economía Popular en Merlo, que se planificó con la ex secretaria de [Mercados de Cercanía](#), pero quedó inconcluso con el cambio de gobierno.

La papa está en el cambio de modelo

Por fuera de los monocultivos transgénicos, la papa es el otro cultivo que en la provincia se practica de forma extensiva [bajo el modelo convencional](#) —con gran cantidad de agrotóxicos—. En Argentina se producen, aproximadamente, tres millones de toneladas, destinando entre 75 a 80 mil hectáreas, gran parte de ellas bajo riego y en distintas épocas del año, que permite mantener un



231

Foto: Edgar Starszy

abastecimiento constante de la que es la hortaliza más consumida en el país. Las principales regiones productoras de papa, según la superficie cultivada en 2019/2020 relevada por la [Secretaría de Agricultura](#), son: Buenos Aires (55 por ciento), Córdoba-San Luis (28,8 por ciento), [Tucumán](#) con un 7,7 (por ciento) y Mendoza (5,3 por ciento).

En Córdoba-San Luis la superficie destinada al cultivo es de entre 25.000 y 29.000 hectáreas. La producción entre ambas provincias está conectada por la ruta 20 de Quines-Candelaria a Villa Dolores. La plantación tardía en esta zona ocurre en febrero para abastecer el gran mercado entre junio y noviembre. Según cifras del portal especializado Argenpapa, en la campaña 2021/2022, San Luis participó del ocho por ciento de la producción interprovincial, concentrada en las dos localidades del departamento de Ayacucho.

El técnico del INTA-Villa Dolores y referente agroecológico César Gramaglia acompaña experiencias de producción de papa agroecológica en ambas provincias. En el valle puntano es parte del equipo técnico que asiste las hectáreas del FPDS, mientras que en suelo cordobés es un [promotor de la agroecología en el valle de Traslasierra](#). En la localidad de Los Cerillos, apoyada sobre el límite entre ambas provincias, Gramaglia realizó un [estudio sobre una parcela demostrativa](#) de 2.500 metros cuadrados, en un campo de pequeños productores, para implementar el manejo agroecológico de un cultivo de papa, sin la utilización de agroquímicos ni fertilizantes artificiales.

El trabajo concluyó con la verificación de que a través de manejos fertilizantes orgánicos del cultivo —con aplicaciones foliares de fertilizantes orgánicos líquidos y microorganismos activados, elaborados en forma artesanal a través de la organización de un taller práctico a campo; y control mecánico de malezas— se lograron rendimientos de 32.120 kilos por hectárea (Kg/ha) a 35.878 kg/ha, con resultados económicos positivos y relativamente altos de márgenes brutos (155.000 pesos/ha), gracias al reemplazo de insumos químicos dolarizados por insumos orgánicos pesificados y elaborados en forma artesanal.

Según el informe del Senasa sobre la [situación de la producción orgánica en Argentina](#), publicado en marzo de 2023, la superficie cosechada de legumbres orgánicas tuvieron un crecimiento del 65 por ciento entre 2022 y 2021, destacándose la cosecha de porotos en Salta y San Luis. El informe indica que en tierras puntanas se registraron nueve establecimientos bajo producción orgánica con un total de 11.438 hectáreas. El 98 por ciento de la superficie dedicada a cultivos orgánicos estaba destinada a las legumbres.

San Luis también tenía 1.255 colmenas bajo seguimiento orgánico. Sin embargo, la producción orgánica provincial sigue lejos de lo que ocurre en su vecina Mendoza, donde existen 312 establecimientos orgánicos, con un total de 36.736 hectáreas, que representan el 22,7 por ciento de todo el país.

Resistencia caprina, estancias ganaderas y feedlots

232

En la localidad de Carpintería se realiza, cada octubre, la tradicional Fiesta del Chivo. En la última edición recibió a más de 15.000 personas. Pero en una provincia de larga tradición caprina, con familias productoras que supieron tener majadas de 200 o 300 cabras, el gobierno local elige traer animales de los frigoríficos de Mendoza y Santiago del Estero, principales provincias productoras junto a Neuquén.

El técnico del Inafci y asistente de la Unión de Productores y Productoras Caprinos sostiene que la percepción de los productores caprinos es que desde hace décadas “no hay políticas serias para el sector. El último plan caprino recordado en los territorios, que contempló mejora genética, infraestructura y sanidad, fue a fines de la década de 1990”. Un símbolo, indica Janjetic, son dos frigoríficos caprinos inaugurados por el gobierno puntano en Quines hace unos diez años y que aún permanecen abandonados.

El avance del agronegocio sobre tierras ganaderas y de los ganaderos sobre campos campesinos fue alambrando las zonas de pastoreo. Sólo en el noreste árido quedan extensiones para 250 o 300 cabras, como las que ya no existen en la zona serrana. Janjetic indica que incluso se registró una transición de la cría caprina a la bovina también en las familias campesinas. “Mientras las estancias siguen

creciendo y comprando campos campesinos, las familias también cambiaron su forma de producir. Se instalaron en el pueblo, donde mantienen changas de albañilería, en el turismo o son policías, y la actividad agropecuaria la mantienen como un ingreso extra. Sin la vida en el campo, es imposible criar cabras. Las vacas las pueden dejar pastando y volver a revisarlas una vez por semana”, explica.

Así, la provincia, de la mano de las estancias y empresas del agronegocio, consolidó la presencia del ganado bovino con un stock de más de un millón de cabezas, según el CNA 2018. El informe *La Argentina agropecuaria vista desde las provincias* marca que eso no ocurrió sin un cambio de modelo, por el incremento en el número de cabezas fue acompañado por una caída del número de EAPs, que alcanzó el doce por ciento entre 2002 y 2018.

“Es claro que el fenómeno de la agriculturización y el desplazamiento de la ganadería a zonas marginales no provocó una disminución del número de cabezas bovinas, sino que la instalación de sistemas de terminación a corral y feedlot de gran escala permitió conservar y hasta aumentar el número de vacunos”, concluye.

Y aquí también aparece Cresud. En el departamento de Pedernera, en la localidad de Villa Mercedes, la empresa de Elsztain entró en el negocio del engorde a corral. El ingreso fue a partir de la [compra de su parte a la empresa estadounidense Cactus Feeders](#) y su asociación con otro gigante norteamericano Tyson Foods —uno de los mayores procesadores y comercializadores de carne y pollo del mundo—. Junto a Tyson, Cresud manejó hasta 2022 el frigorífico Carnes Pampeanas.

Según las cifras del CNA 2018 y Senasa, la producción porcina también aumentó en la provincia entre 2002 y 2018 —de 14.000 cabezas a 223.000— pero bajo el mismo proceso de reducción de EAP, que pasaron de 805 a 663 en el mismo periodo. En ese sector, la provincia cuenta con otro grande del negocio de alimentos: Paladini. En 2010 la empresa inauguró su “Centro de Producción Porcina II”, de 70.000 metros cuadrados para 5.000 madres, con una población total y permanente de 67.000 cerdos; del que obtienen 130.000 cerdos anuales para faena. El centro se abastece con 3.000 hectáreas de cultivos y una Planta de Alimentos Balanceados. En 2013, también en La Toma, inauguró el “Centro de Producción Porcina III”, preparado para 2.000 madres. Una dimensión similar a las [mega-factorías porcinas chinas](#) que se intentaron instalar en 2020.

Las cifras del CNA 2018 y del Senasa son contradictorias respecto de la situación caprina y ovina. “De acuerdo con el censo 2018, tanto para caprinos como para ovinos, habría una disminución de un 65 por ciento en el número de cabezas; mientras que, si comparamos los datos del censo 2002 y los de Senasa 2017, habría un aumento de un 30 por ciento en el número de cabezas”, indica el informe de la Cátedra Giberti. Janjetic confirma que el panorama es de caída, de acuerdo al relato de los propios productores.

Según datos del Servicio de Sanidad Agroalimentaria (Senasa) de 2019, el stock caprino provincial era de aproximadamente 113.000 cabezas distribuidas en 3.500 establecimientos. Eso significa un promedio de 33 cabras por unidad productiva, un tamaño de majada muy inferior a los que pueden aceptar la mayoría de los campos de los núcleos de agricultura familiar existentes.

“El que se queda en el campo, el principal motivo es porque le gusta y ama la producción. Si vos lo mirás desde vender el campo y comprarte un departamento para vivir y otro para alquilar, económicamente te conviene más eso”, se sincera el técnico del Inafci. Pero como respuesta, junto a la Unión de Productores y Productoras Caprinos, diseñaron un programa de “Salario caprino”, que permitiría con la asistencia estatal fortalecer al sector para sostener el arraigo de los jóvenes en el campo, cambiar las dinámicas expulsivas rumbo a la ciudad, y recuperar el nivel productivo.

Soberanía alimentaria a la puntana

“Es una lástima que el chivo sólo se vea como una carne de lujo para consumir en las fiestas o para el turismo. Cambiar esa lógica sería importante desde el punto de vista de la diversificación de los alimentos para los puntanos. El aporte del sector campesino a la provincia podría ser transformar al chivo en una carne de consumo cotidiano. Para eso son necesarios los frigoríficos impulsados desde el Estado, que mantengan la estructura de costos y estén asociados a los productores para asegurar una cuota de faena”, propone Janjetic.

Por su parte, Fernando Frank hace su resumen sobre la situación provincial para ir hacia un modelo de soberanía alimentaria: “Por las características particulares de San Luis, limítrofe con Mendoza, Córdoba y La Pampa, en materia de abastecimiento de carne, hortalizas y frutas la provincia no construyó una autonomía sino que consume lo producido en esas provincias, cuando podría ser autosuficiente”.

Para modificar la situación es necesario un cambio en el ordenamiento territorial y el acceso a la tierra para la producción agroecológica. En ese punto, la vigente ley de distancias mínimas para la aplicación de agrotóxicos marca el rumbo para transicionar en la producción con distancias libres de fumigaciones a 1.500 metros de los cascos urbanos.

Según la Dirección Nacional de Agroecología, a las cantidades y los valores promedio de rendimiento de producciones agroecológicas a nivel nacional, se precisa una superficie de 196 hectáreas para abastecer una población de 1.000 habitantes. En una ecuación simple, las 12.000 hectáreas bajo riego que Cresud alquila a empresas como Bayer-Monsanto y Syngenta, puestas a producir

alimentos podrían abastecer a poco más del diez por ciento de la población puntana.

“Las instituciones y políticas públicas estatales son muy importantes para acceder al financiamiento que permita escalar los sistemas de producción y comercialización. En la Argentina no hay una mano invisible de mercado que regule la producción, sino que está en manos de unos pocos y grandes productores y elaboradores de alimentos que fijan los precios”, sentencia Vázquez, cuya organización —con unas pocas hectáreas agroecológicas— aporta verduras a veinte mil raciones mensuales de comedores populares.

20



MENDOZA: LA TIERRA DEL SOL Y DEL BUEN VINO YA NO ES LO QUE ERA

Entre la concentración empresaria en el agro, la turistificación y los intentos de avanzar con la megaminería, Mendoza publicita una imagen de paisajes de postal, disfrute y progreso. Pero oculta el avance del sector privado, la disputa por el agua y el reparto desigual de la tierra. Las organizaciones campesinas, indígenas y cooperativas construyen soberanía alimentaria.



El agro mendocino se viene transformando aceleradamente al ritmo de la globalización de los sistemas agroalimentarios. Corporaciones dedicadas a la producción y comercialización de papas, tomates, vacas, bananas y —por supuesto— vino, han aterrizado recientemente en la provincia reconfigurando el paisaje agrario y la sociedad. Frente a eso, las luchas por el agua, contra la especulación inmobiliaria y por la producción agroecológica han marcado límites al avance de un modelo de agronegocio que en la “California argentina” no termina de dar respuestas a las crecientes demandas sociales y ambientales.

El “modelo Mendoza” no está listo para el desfile

La imagen de Mendoza se asocia indefectiblemente a la industria vitivinícola que, a lo largo del siglo XX, estructuró buena parte de la sociedad, la economía y el territorio. Sin embargo, en la década de 1980 varias crisis convergieron para provocar el desvanecimiento de ese mundo viñatero que se sigue relatando incansablemente en las Fiestas de la Vendimia, ahora turistificadas al extremo.

Una radiografía actualizada del agro mendocino muestra una imagen bien diferente de aquellas bucólicas mujeres cosechadoras. En las últimas dos décadas se han dado procesos de concentración, junto al abandono de tierras y una notable ausencia de políticas públicas.

De acuerdo a un [estudio](#) realizado por María Eugenia Van den Bosch, se identifica hasta 2016 una reducción sostenida del número de explotaciones, donde las que más desaparecen son las pequeñas y medianas junto con un paulatino aumento de la superficie media de las explotaciones. Además, en algunos de-



partamentos se ha dado un aumento significativo de las explotaciones de más de 10.000 hectáreas. En 2008 había 12.814 Explotaciones Agropecuarias (EAPs) de menos de diez hectáreas que representaba el 50 por ciento del total y ocupaban el 0,7 por ciento de la superficie (56.000 hectáreas). En el otro extremo, las 1.268 explotaciones muy grandes (más 500 hectáreas) representaban sólo el 5,2 por ciento del total pero ocupaban el 94 por ciento de la superficie (7.457.000 hectáreas).

Diez años después, según el CNA 2018, las explotaciones de menos de diez hectáreas se habían reducido en un 20 por ciento, mientras que los estratos medianos y grandes (entre 50 y 500 hectáreas) se habían expandido un diez por ciento (en promedio). Esto último se explica fundamentalmente por la expansión de viñedos asociados al aterrizaje del modelo de agronegocios en el Valle de Uco.

Los ríos que dan vida

La provincia tiene una extensión total 149.069 kilómetros cuadrados, la mitad que la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2018 relevó que poco menos de seis millones de hectáreas —un tercio del total— se destinan al uso agrícola, forestal y ganadero.

En Mendoza el paisaje rural es contrastante y está fragmentado entre los oasis de riego que reciben agua canalizada desde la Cordillera de Los Andes y el seco o “desierto” que recibe en promedio sólo 200 milímetros de lluvia al año. La agricultura es posible entonces únicamente mediante el riego intensivo.



Existen cuatro oasis irrigados por cuatro ríos regulados. El oasis norte se riega por el río Mendoza y abarca los departamentos de Lavalle, Las Heras, Guaymallén, Maipú y Luján de Cuyo. El oasis centro se irriga a través de la cuenca baja del río Tunuyán y está integrado por los departamentos de San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz. El Valle de Uco se irriga gracias a la cuenca superior del río Tunuyán y está integrado por Tupungato, Tunuyán y San Carlos. Finalmente el oasis sur está integrado por San Rafael y General Alvear y se riega con las aguas de los ríos Diamante y Atuel.

Malargüe es el departamento más austral y de mayor superficie en la provincia pero tiene un oasis irrigado muy pequeño alimentado con aguas del río homónimo.

La superficie agrícola implantada de Mendoza alcanzó según el CNA 2018 las 266 mil hectáreas. En términos de superficie, sigue dominando por lejos el cultivo de vid (131.183 hectáreas), seguido de los frutales que están en franco retroceso (60.000 hectáreas) y las hortalizas (32.500) que fluctúan fuertemente en función de los precios, exportaciones y condiciones climáticas.

José Manuel Podadera es productor ganadero y miembro de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra ([UTT](#)). Mientras pastorea sus cabras en Maipú, a unos 40 kilómetros al este de la ciudad capital, comenta: “Para mí la característica del modelo agropecuario ahora es que ponen mucho veneno, fertilizantes, la gente está dejando fortuna en eso y gracias a eso también mucha gente que cultiva queda en el camino”.

La ganadería extensiva ocupa más de 5,5 millones de hectáreas de pastizales, bosques y montes naturales. El CNA también registró en 2018 más de 200 mil hectáreas de tierras “aptas no cultivadas”. Un resabio de la “distribución originaria” de la tierra y del agua en Mendoza ocurrida a fines del siglo XIX y que muchos años después dio origen a organizaciones campesinas que reclaman el acceso a la tierra como la [Unión de Trabajadorxs Rurales Sin Tierra](#) (UST).

Para Silvia Moreno, docente de la Universidad Nacional de Cuyo e investigadora en la temática, el agro de Mendoza “es un modelo sumamente polarizado, de crecimiento, de tamaños, de explotaciones, que lo único que ha hecho en los últimos 20 años es polarizarse todavía más. Hay estudios que sostienen que tenemos la mitad de los productores que había a inicios de los 2000”.

Por su parte Diego Montón, referente de la UST-MNCI ST y coordinador de la [Mesa Agroalimentaria Argentina](#) (MAA) llama la atención sobre el proceso de concentración del agro provincial, fuertemente condicionado por el acceso al suelo irrigado: “Es una concentración en todos los niveles, la tierra, el agua, de

la tecnología, del acceso al mercado y de la exportación y del valor agregado”.

Es que al no producir cereales ni oleaginosas, Mendoza está fuera del modelo pampeano exportador de commodities, sin embargo, agrega Montón “en el caso de la vitivinicultura se ve claramente cómo se viene concentrando sobre todo a nivel de los viñedos más pequeños, pero fundamentalmente cómo está concentrado en las bodegas que exportan y las que dominan el mercado interno”.

Uva, vino y un modelo que excluye

Mendoza es la provincia con mayor cantidad de viñedos y superficie implantada con vid (71 por ciento del total nacional). Un [informe reciente](#) del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) detalla que entre 2022 y 2021 hubo una disminución de 4.051 hectáreas y 188 viñedos menos. Además, la superficie actual es un 4,9 por ciento menor a la registrada en el año 2010 (un descenso de 10.703 hectáreas).

Aunque el 90 por ciento de los viñedos tiene menos de 20 hectáreas (y el 60 por ciento tiene menos de cinco hectáreas), la tendencia indica que las propiedades son cada vez más grandes mientras que las que se abandonan son las más pequeñas. Así, el tamaño medio del viñedo prácticamente se duplicó entre 1990 y 2022 pasando de 5,8 a nueve hectáreas. El mundo de los pequeños viñateros está en serios problemas y contrasta con la industria enoturística de lujo que ha conquistado el Valle de Uco.

Esta nueva vitivinicultura —basada en la identificación varietal y con orientación exportadora— se presentó como la principal respuesta a la crisis estructu-



ral centenaria. Pero fue una solución socio-espacial selectiva que jerarquizó y revalorizó determinados territorios en detrimento de otros.

En un contexto de desregulación y apertura económica, en el Valle de Uco (y principalmente en sus márgenes) emergió el territorio más propicio para la expansión del modelo de agronegocios. Su forma más destacada han sido los proyectos que combinaron la actividad vitivinícola con otros ejes de acumulación, como los complejos agroturísticos e inmobiliarios de lujo.

Este proceso de turistificación, orientado a un público fundamentalmente extranjero, que incluye la territorialización de capitales nacionales e internacionales con inversiones en hoteles, restaurantes, *wine countries*, bodegas y viñedos constituye probablemente el proceso más transformador del espacio rural provincial.

Es que estos “nuevos vecinos” capitalizados e integrados en circuitos agroalimentarios globales se volvieron rápidamente los protagonistas de una redefinición de la ruralidad mendocina y sus paisajes. De este modo, el espacio rural no es sólo un espacio productivo sino que ha sido transformado en un paisaje mercantilizado para ser consumido como un producto más. Se venden “experiencias” y no sólo vino o comida. Esto constituye una clara gentrificación del espacio rural similar a lo que sucede en otras ciudades del mundo, donde vastas zonas son ocupadas y apropiadas por nuevas clases y grupos sociales que desplazan a sus habitantes tradicionales.

Además, al reconfigurarse como nuevos terratenientes (o acuatenedores, a raíz de la explotación individual y privada de agua subterránea) conquistaron los piedemontes y contribuyeron a un creciente cercamiento del espacio rural. Al encerrar sus terrenos, construir portones con guardias imponentes, estos enclaves privados transformaron dramáticamente el paisaje y el control del territorio.

Agua, cambio climático, sequía y ¿megaminería?

Debido a la escasez estructural de agua, la sociedad mendocina se ha organizado en torno a su manipulación intensiva. Bajo el confuso paraguas de la “cultura



del agua” se han construido fuertes marcas de identidad y memoria social asentadas en paisajes hídricos donde se conjugan viñas y surcos en perspectiva con montañas nevadas y acequias y diques colmados del líquido vital.

Tan determinante ha sido aquí el control del agua que la sociedad ha sido caracterizada, siguiendo un concepto del historiador ambiental Donald Worster en *Rivers of Empire* (Ríos del Imperio), como una “sociedad hídrica”. Se trata de una sociedad que se integró y fragmentó a partir del manejo político del agua.

En Mendoza, bajo el lema de la “misión hidráulica” hacia fines del siglo XIX, las aguas de los ríos fueron siendo desviadas y canalizadas a través de una amplia red de distribución superficial que termina en las fincas individuales. A la vez, se consolidó una estructura de derechos de acceso al agua que le otorgaba legalidad a la distribución y control social del mismo a través de las “inspecciones de cauce”, que son las organizaciones de regantes encargadas de la distribución final del agua. Este sistema de distribución superficial de agua (complementado a veces con agua subterránea) establecía afinidades y obligaciones entre regantes. Era un sistema de gestión colectiva y control social relativamente democrático. Pero eso es asunto del pasado.

Hoy, los efectos concretos del calentamiento global se manifiestan en una drástica disminución de la oferta de agua superficial (50 por ciento menos en promedio), lo que sumado a la expansión sobre nuevas tierras irrigadas con agua subterránea, conjura una privatización general del acceso al agua, despojando a los pequeños y habilitando a los grandes.

243

Al respecto, Diego Montón señala que “también se ha podido ver claramente el impacto del cambio climático con la incidencia de los vientos, las heladas y el granizo, que han provocado muchísimo más impacto que otros años”. Y denuncia la falta absoluta de política agropecuaria por parte del Estado provincial, que “no tiene instituciones, ni política, ni recursos orientados a la situación agropecuaria. Hay cero respuesta a todas las emergencias que hemos planteado: heladas, granizos, prácticamente no tiene estructura ni política para afrontar esas emergencias”.

José Manuel Podadera de la UTT confirma: “A la gente le cae piedra este año y le dan unas migajas dos años después cuando ya las cosas no valen lo mismo. No es un Estado presente”.

En diciembre de 2019, el intento del gobierno provincial de flexibilizar la Ley 7722, que restringe la minería metalífera, terminó en **una pueblada histórica** que hizo crujir las estructuras del poder provincial dejando claro que **el agua tiene para los mendocinos un valor simbólico y material que no se debe poner en riesgo**. En este contexto, la minería no parece ser una alternativa real para la pretendida diversificación de la matriz económica de la provincia.



Papas, bananas y vacas, esos raros productos nuevos

En “Las papas de la globalización”, los investigadores Robin Larsimont, Oscar Carballo y Jorge Ivars, analizaron la territorialización en la provincia del complejo agroindustrial de papa prefrita liderado por grandes empresas agroalimentaria como Mc Cain, Farm Frites y Simplot. Estos investigadores del Conicet demuestran las estrategias comerciales y tecnológicas que le permitieron a un puñado de empresas concentrar la producción papera de forma acelerada. Para 2008, el seis por ciento de las explotaciones que cultivaban papa (17) ya concentraban el 59,7 por ciento de las 3.881 hectáreas cultivadas con papa de la provincia.

Este aterrizaje se realizó principalmente sobre tierras ubicadas en el Valle de Uco pero que hasta ese momento no había sido cultivadas, aunque contaban con disponibilidad de agua subterránea y condiciones de temperatura adecuadas. Además, se integraron las etapas “cadena arriba” realizando la limpieza, prefrito y congelado, así como snacks y otros productos que pueden consumirse directamente.

Mendoza tiene seis mercados concentradores de frutas y hortalizas. El Mercado Cooperativo de Guaymallén es el más importante y tiene un movimiento equivalente al 40 por ciento de lo que circula por el Mercado Central de Buenos Aires, uno de los mayores de Sudamérica.

Los registros indican que la banana es el principal producto que circula por allí. El protagonismo de este fruto claramente no es porque se produzca en Mendoza. Se debe a que, por su localización geopolítica, fue elegida por la empresa Argenfruit, aliada principal de Sabrostar y que controla el 50 por ciento del mercado de bananas a nivel nacional. Allí Argenfruit instaló más de 6.000 metros cuadrados de cámaras de maduración de banana. Es también la planta más grande de la región. Pero también fue grande el llamado “tongo de las bananas”, un intento de contrabando y evasión impositiva en el que la empresa se vio envuelta en 2011 junto con el ahora ex-juez federal Walter Bento.

En aquel momento, la AFIP detuvo en la aduana chilena 460 contenedores — más de un millón de kilos de bananas— que representaban un negocio de 60 millones de dólares. Se trataba de ingresar bananas comunes como si fueran de calidad premium que valen mucho más. La “sobrefacturación” le permitía a la empresa lavar 2,4 dólares por cada cajón de bananas.

La otra actividad que se ha expandido en los últimos años es la cría de ganado bovino con engorde a corral, conocido como feedlot. Consiste en mantener los animales encerrados mientras se los alimenta con forraje producido en el lugar. La producción de carne se duplicó entre 2011 y 2020, alcanzando las 15.000 toneladas. En la provincia se producen 140.000 terneros al año que se destinan fundamentalmente al consumo local. En general los feedlots se han instalado en

tierras de la zona sur y este de la provincia como los departamentos de General Alvear y Santa Rosa. Este proceso se ha dado como consecuencia de la sojización de las zonas ganaderas tradicionales y ha contado con cuantiosos subsidios por parte del Estado para un grupo muy concentrado de grandes productores y desvinculado de los más de 4.000 pequeños y medianos ganaderos de la provincia.

Diego Montón afirma: “La ganadería caprina está atravesando los impactos del cambio climático, que además es fuertemente campesina, y está distribuida en la zona del secano. Hay dos mataderos municipales, pero todo el circuito está desorganizado y hemos visto una fuerte presión desde la Policía Rural y el Senasa que complican mucho la subsistencia y la rentabilidad del sector caprino”. Además, Mendoza viene perdiendo también su tradición láctea, que —si bien era pequeña— contaba con un número importante de tambos que se han ido abandonando.

Antipolítica agropecuaria provincial

Aunque Mendoza proyecta una imagen de institucionalidad y eficiencia, sólo queda inercia. Hubo intentos de reindustrializar e incluso diversificar la matriz productiva más allá de la vitivinicultura y hacia la fruticultura y la horticultura pero esos viejos planes fueron cooptados por las mismas élites y sólo reforzaron la “crisis de sobreproducción” de uva y vino.

245

De la década de 1990 se mantienen el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (IscaMEN) y programas como la Lucha Antigranizo. Sin embargo, la dependencia encargada de la política agropecuaria provincial es de cuarto rango y no tiene presupuesto. Montón detalla: “Todos los 'clusters' están abandonados, el Plan Ternero, el Plan de Destete Precoz, que eran programas regulados por una ley provincial, están paralizados; no hay un proceso de ordenamiento territorial ni de planificación y organización de las cuencas de riego y el Estado se mostró más preocupado por [regalar tierras públicas](#) a privados con ideas o señuelos como lo del centro de esquí en el Azúfre, que por pensar cómo abordar la necesidad de tantos productores que no tienen regularizada la situación de la tierra”.

El estado nacional, por su parte, mantiene la red de Estaciones Experimentales y Agencias de Extensión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), aunque ha perdido mucha incidencia en el territorio y los productores toman como referencia a los negocios que venden agroquímicos.

En los últimos años, señala Montón, “han llegado algunos recursos específicos como la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (Diprose) o el Programa de Apoyo para Pequeños Productores Vitivinícolas de Argentina (Proviar) y también la respuesta ante las emergencias (que en general han sido

recursos nacionales), aunque es insuficiente podemos decir que la única presencia del Estado que hay hoy en la ruralidad mendocina tiene que ver con la política pública nacional”.

Alimentos soberanos: las experiencias de transición ecológica

La horticultura es quizás el sector donde el campesinado tiene mayor protagonismo, aunque subordinado a nivel de acceso al mercado y con un alto nivel de informalidad. El caso del ajo es bien ilustrativo: aunque la producción está a cargo en su mayoría de pequeños productores, son los acopiadores y exportadores los que se quedan con la mayor parte de la renta.

Un cuello de botella del sector es el altísimo nivel de inversión económica que se requiere para desarrollar una producción bajo un esquema convencional (utilizando agroquímicos, fertilizantes sintéticos, semillas híbridas). Pero más recientemente se ha hecho evidente que existe una gran diversidad de formas de organizar el trabajo y que algunas de esas estrategias tienen que ver con resistir e incluso escapar del formato del agronegocio hortícola. Esto tiene que ver, en parte, con el origen migrante de muchísimas familias horticultoras.

Silvia Moreno, de la Universidad de Cuyo, afirma: “La migración rural es un componente estructural de esta economía regional. Surge justamente de la mecanización de otra economía regional, en el noroeste de Argentina, con la caña de azúcar, y el traslado hacia el sur de muchos trabajadores de allí y del sur y los valles de Bolivia, que empezaron a armar cadenas y redes migratorias hacia nuestro territorio”.

La cantidad de explotaciones con horticultura cayó abruptamente en Mendoza, pasando de 5.170 en 2002 a 3.172 en 2008. Los datos del CNA 2018 confirman esta tendencia al contabilizar 2.724 explotaciones con cultivos hortícolas, casi una reducción del 50 por ciento entre 2002 y 2018. Sin embargo, esta reducción no fue acompañada por una caída de la superficie hortícola total, que se mantuvo en torno a las 30.000 hectáreas, lo que evidencia un fuerte proceso de concentración de la producción. Entonces, algunos horticultores campesinos comenzaron a revalorizar prácticas ancestrales que conocían en sus lugares de



origen y, al mismo tiempo, organizarse en cooperativas, grupos y movimientos como la UST y la UTT, entre otros que hoy forman parte de la Mesa Agroalimentaria Argentina.

Marcos Cabana nació en Salta, pero llegó a Mendoza muy joven. Ahora vive en El Vergel, departamento de Lavalle. Es productor agroecológico y forma parte de la Federación de Cooperativas Campesinas y de la Agricultura Familiar (FeCoCAF) de la UST. Cuando llegó a Mendoza tuvo que aprender a trabajar con agroquímicos porque era “lo que se usaba”, pero cuando comenzó a participar de la organización pudo recuperar las formas de hacer que había aprendido en su tierra natal.

A partir de un proceso de reconstrucción de saberes y prácticas, empezaron a producir “sin veneno”. Ahora cultivan una diversidad de hortalizas, recuperan y multiplican semillas criollas y realizan métodos de riego más eficientes. Entre las distintas especies se destaca el tomate agroecológico que se destina en parte a la comercialización en fresco y en parte a la elaboración de tomate triturado en la fábrica que la UST tiene en el distrito de Jocolí.

Además comercializan buena parte de su producción en redes y almacenes que son parte de las organizaciones, como el [Almacén Campesino](#). Montón explica que trabajan para el acceso directo al mercado interno y para eso requieren de infraestructura en torno a los circuitos cortos de comercialización, pero también al financiamiento para el agregado de valor y obtener el producto final.

Sin embargo, la transición hacia la agroecología se encuentra, según la experiencia de Marcos Cabana, con dificultades estructurales. Él no tiene tierra propia sino que arrienda hace diez años una finca que en poco tiempo deberá entregar al dueño. Esto hace que todo el trabajo de cuidado y mejora del suelo que hizo se pierda porque tiene que migrar hacia otro lugar y comenzar nuevamente el ciclo. **La soberanía alimentaria para avanzar necesita también de la soberanía sobre la tierra.**

Según Silvia Moreno, el gran desafío son las banderas históricas de tierra y trabajo, pero también programas e intervención del Estado para promover una alimentación sana, segura y soberana. “Promover la transición agroecológica brindando formas de organización del trabajo menos precarizantes”, resume.

Mientras junta la majada para llevarla de vuelta al corral, José Manuel Podadera piensa y confiesa: “Las luchas más importantes son las de la soberanía, de los alimentos, la lucha por las tierras, por el agua ¿no es cierto? Proteger los derechos de los agricultores que se ven tan coartados, esas me parecen las luchas más importantes”.



21



SANTA FE: CAMPOS DE SOJA, PUEBLOS FUMIGADOS Y LA AGROECOLOGÍA QUE ABRE SENDEROS

Del histórico "Grito de Alcorta" a las chacras agroecológicas y la lucha contra las fumigaciones, del extractivismo de La Forestal a los puertos por donde se llevan las cosechas, Santa Fe es sinónimo de agro, de injusta distribución de la riqueza y, también, de organización para otro modelo agropecuario. Radiografía de una provincia tan rica como desigual.



Santa Fe es un territorio significativo en la historia de la ruralidad argentina. En el centro de "la bota" se fundó, en 1861, la primera colonia Agrícola del país: la localidad de Esperanza, adonde acudieron inmigrantes de diferentes países europeos a un proyecto colonizador cuyo principal eje era el trabajo de la tierra. La provincia también fue cuna del [Grito de Alcorta](#), en la localidad homónima en 1912, acontecimiento inicial de la Federación Agraria Argentina. Cuenta con dos de los puertos más importantes del país —Rosario y San Lorenzo—, en las orillas donde hoy se discute el futuro de un río: [la hidrovía del Paraná](#). Contiene, en el oeste, parte de la cuenca lechera más importante del territorio nacional. En el norte de monte chaqueño aparece el fantasma de La Forestal, una de las primeras grandes empresas extractivistas asentadas en el país, con un modelo que persiste como un pasado de voracidad y explotación.

En sus 133.007 kilómetros cuadrados, Santa Fe presenta una diversidad geográfica y productiva donde el agronegocio se expande de sur a norte, pero donde también comienzan a crecer propuestas agroecológicas para servir alimentos a la mesa.

Tierra en pocas manos

El último Censo Nacional Agropecuario indica que en la provincia existen 20.095 establecimientos agropecuarios. Son unas 9.478.912 hectáreas destinadas a la producción. Según el estudio "[Transformaciones fundiarias y en el uso del suelo en la provincia de Santa Fe entre el Censo Nacional Agropecuario 2002 y el Censo Nacional Agropecuario 2018](#)" de Roxana Albanesi y Patricia Propersi, la provincia presenta uno de los mayores índices de reducción de explotaciones a nivel nacional. En 2018 se contabilizaron 8153 empresas agropecuarias, 29 por ciento menos que en 2002. En otras palabras, desaparecieron tres de cada diez establecimientos. Las investigadoras explican esto por "una tendencia hacia la concentración de la tierra y el capital" que perjudica a pequeños y medianos productores.

Tanto el censo de 2002 como [el de 2018](#) muestran que en Santa Fe la mayor cantidad de establecimientos agropecuarios (22,1 por ciento y 22,9 por ciento, respectivamente) se ubican en el rango de extensión de 200 a 500 hectáreas. Sin embargo, cuando se comparan ambos relevamientos, se observa una tendencia a la desaparición de las unidades productivas más pequeñas en favor de las de mayor extensión.

Entre 2002 y 2018 el número de explotaciones de entre 1000 y 5000 hectáreas creció en un 2,2 por ciento y la cantidad de campos productivos de entre cinco y 50 hectáreas se redujeron en un 2,3 por ciento. A principios de este siglo, los establecimientos de entre 1000 y 5000 hectáreas explicaban el 33,9 de las explotaciones en la provincia, cifra que trepó al 37,7 por ciento en el último relevamiento nacional.

En 2002 las explotaciones superiores a las 1000 hectáreas operaban el 54 por ciento de la superficie de la provincia, mientras que en el censo de 2018 esa proporción ascendió al 58,6 por ciento. Esos campos de grandes extensiones conforman apenas el 10,5 por ciento del total de explotaciones, pero utilizan casi el 60 por ciento del total de la superficie de Santa Fe.

Albanesi y Propersi advierten que la agricultura familiar tuvo que enfrentar un modelo productivo que reestructuró radicalmente las condiciones de producción, aumentó la dependencia del capital y la expansión de la producción a escala y afectó fuertemente sus posibilidades de permanecer en el sector agropecuario como actor productivo. Familias poseedoras de menor cantidad de hectáreas terminaron cediéndolas por la falta de recursos para sostener la producción.

El reinado de la soja y el crecimiento de los cereales

A partir de la década del 90 el cultivo de soja se extendió como principal actividad agropecuaria santafesina desde la llanura del sur hacia el monte del norte. Datos del [Ministerio de Agricultura de la Nación](#) señalan que, entre 2016 y 2021, se produjeron 36,5 millones de toneladas de soja, 16,3 millones de trigo y 3,6 millones de toneladas de arroz. También se obtuvieron 232 mil toneladas de cebada, 100 mil de avena y 20.000 de algodón.

251

Entre 2016 y 2020 se cosecharon 24,2 millones de toneladas de maíz; 1,6 de girasol; 1,1 millones de toneladas de sorgo y 58.000 de maní. En cuanto a legumbres, entre 2019 y 2021 se levantaron 73.000 toneladas de arvejas y 41.000 de lentejas.

En cuanto a la extensión de tierra ocupada por cada tipo de cultivo, la soja abarca 2,1 millones de hectáreas, el trigo llega a las 716.000, el maíz a las 615.000 hectáreas y el girasol alcanza las 115.000 hectáreas.

Los datos indican la prevalencia de la soja en una provincia con condiciones ecológicas diversas, que a lo largo del tiempo permitieron la producción de commodities en las pampas del sur; la lechería, la cría de vacas y en menor medida la agricultura en el centro y la existencia de economías regionales ligadas al arroz, el algodón, la caña de azúcar y la actividad forestal en el norte.

En los últimos años se evidencia un crecimiento en la siembra de cereales (maíz, trigo). La Bolsa de Comercio de Rosario estableció una comparación entre el censo de 2018 y el de 2002. En su análisis, explicita que Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires presentaron "una intensificación relativa en la siembra de cereales, mejorando el ratio cereales/oleaginosas de manera notable". La de Santa Fe fue la variación más intensa, creciendo este indicador un 17,8 por ciento respecto al censo anterior.

La producción de commodities para la exportación es preponderante y la actividad está ligada al paquete tecnológico de transgénicos y agrotóxicos. Santa Fe es la cuna del trigo HB4, resultado de un trabajo biotecnológico realizada por la Universidad Nacional del Litoral y la empresa rosarina Bioceres. Se trata del primer evento transgénico de trigo y actualmente [es el centro de la discusión por su potencial contaminante de los cultivos de trigo convencional](#).

La producción hortícola en declive

Santa Fe fue históricamente exportadora de hortalizas, en especial hacia la zona sur del país. Destacaba, por ejemplo, el tomate, del que se cultivaban tres especies hoy desaparecidas. Según el Censo Nacional Agropecuario de 2002, la provincia representaba casi el siete por ciento de la superficie nacional dedicada a esta actividad (donde tiene un peso importante la llamada horticultura pesada: zapallo, papa, batata, zanahoria, calabaza) y contabilizaba unos 1600 establecimientos productivos. Según el último censo, la cantidad de establecimientos se redujo a 403.

El documento [Cadena Frutihortícola Santafesina](#), del Ministerio de la Producción de la provincia, explica que la actividad se localizaba en cinco zonas específicas, ubicadas en el este de la bota: Santa Fe capital, la costa, Coronda, Rosario y la zona norte. El departamento La Capital y el área de la costa representaban un 25 por ciento de la superficie dedicada a esta actividad en la provincia y un 40 por ciento del total de establecimientos. El llamado cordón verde santafesino (por su cercanía con la ciudad homónima) explicaba el 20 por ciento de la superficie en producción y más del 40 por ciento de los registros para la zona.

Hacia la década del 70 inmigrantes bolivianos hicieron conocidas a las tierras ubicadas al norte de la capital provincial como "la zona de los quinteros". Sin embargo, [tal como describen productoras y productores de la Unión de Trabajadores de la Tierra \(UTT\)](#) y de la [Granja Agroecológica La Verdecita](#) el avance y la especulación inmobiliaria atentó contra esa actividad productiva. "Atados por contratos precarios y por relaciones desiguales, los productores y productoras no son propietarios de las tierras y nunca saben cuánto van a durar en el terreno en el que producen. Están sujetos a la lógica de los loteos y a la discrecionalidad de los dueños, que de un día para el otro pueden decirles que se vayan", alertan desde la UTT.

En 2021 el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria realizó [un censo de la producción hortícola en la provincia](#). Con un total de 595 productores, la superficie dedicada a horticultura es de 7221 hectáreas en los cinturones verdes de Reconquista (en el norte), de la ciudad de Santa Fe y de Rosario, siendo la superficie promedio por establecimiento hortícola de 10,8 hectáreas. La mano de

obra es familiar en un 33 por ciento. En cuanto a la modalidad de producción, un 64 por ciento es convencional, un 32 por ciento está “en transición a las buenas prácticas agrícolas” y un 1,1 por ciento se cultiva de forma agroecológica.

El censo determinó que las mayores superficies de cultivos están distribuidas de la siguiente manera: zanahoria el 17,9 por ciento, batata el 13 por ciento, choclo el 12,9 por ciento, papa el 12,3 por ciento, lechuga el 5,6; perejil el 4 por ciento; acelga el 3,8 por ciento y zapallito el 3,7 por ciento.

Los tambos que aún quedan

Albanesi y Propersi señalan que en los últimos 16 años las explotaciones ganaderas bovinas disminuyeron un 39,7 por ciento. Cuando se analiza el número de cabezas la pérdida resulta menor (28 por ciento menos), lo que lleva a la hipótesis de una mayor intensificación de la producción. También se aprecia una disminución del 30 por ciento de las explotaciones porcinas.

En cuanto a la lechería, la provincia comparte con Córdoba la mayor cuenca lechera del país. El epicentro de la producción lechera en Santa Fe es la cuenca central, situada en los departamentos Castellanos, Las Colonias, San Cristóbal y San Martín, aunque también hay tambos en el departamento San Justo o en el departamento La Capital. Entre el 50 y el 60 por ciento de los tambos producen unos 2000 litros de leche diarios; el 25 por ciento entre 3000 y 5000 litros y entre el 15 y el 20 por ciento son más de 5000 litros. En la zona se encuentran tres de las empresas más importantes del país: Williner, Saputo y Sancor.



Actualmente hay entre 3300 y 3400 tambos. "Hace 30 o 40 años en la provincia había casi 20.000", afirma Carlos Calacci, ingeniero agrónomo del INTA Rafaela. Con relación a los tambos, las investigadoras consignan una disminución del 41,6 por ciento de las explotaciones entre 2002 y 2018. Los tradicionales tambos familiares fueron desapareciendo y, en gran medida, reemplazados por tambos intensivos y ligados al paquete tecnológico.

"Cuando la actividad tampera tiene buena rentabilidad puede competir con la soja. Para mí no es culpa de la agricultura que se cierren los tambos. Hay otros factores", afirma Calacci. En ese sentido, atribuye el achicamiento del sector a que "en algunos casos no hay sucesión que quiera continuar con la actividad porque es muy sacrificada, el otro problema es que es una actividad que ha crecido en requerimientos tecnológicos; en diferentes regiones el clima de los últimos años también ha jugado en contra".

Pero en este contexto hay quienes aún apuestan por la lechería agroecológica. Leonardo Alloati, productor lechero de Colonia Tacurales (departamento Castellanos), [es un ejemplo de estas experiencias](#). En su tambo produce 3000 litros diarios con 145 vacas en ordeño. Comenta que quienes se vuelcan a producir lácteos sin depender del paquete tecnológico son las empresas más pequeñas: "Casi en un 80 por ciento".

El apoyo estatal resulta clave. "La espalda económica de un productor lechero más chico es más pequeña y se complica para realizar inversiones necesarias para un sistema agroecológico, desde el manejo de guacheras o la alimentación que tiene que ser netamente pastoril. Para esto se necesita una ayuda financiera y un acompañamiento técnico. Si el Gobierno está verdaderamente interesado se debería apoyar a quienes apuestan por esta vía. Por ejemplo reduciendo impuestos o impulsando la agroecología en las carreras de agronomía", propone Alloati.

Pueblos fumigados y fallos judiciales emblemáticos

El informe "Santa Fe: con la soja al cuello. El modelo agroindustrial: una mirada socioambiental" —escrito en 2020 por el ingeniero agrónomo y activista Carlos Manessi— consigna que en la provincia se utilizan anualmente entre 50 y 60 millones de litros/kilos de agrotóxicos. No obstante, advierte que "no hay información oficial, provincial o nacional de las cantidades de plaguicidas en sus diferentes formulados que se están utilizando en la agricultura de características industriales, que prácticamente cubre todo el territorio, provincial y nacional".

El estudio señala que el cordón industrial del Gran Rosario cuenta con el mayor complejo mundial de molienda de poroto de soja para la elaboración de aceite y subproductos. Sobre el río Paraná existen 17 puertos privados y se despacha más

del 60 por ciento de la cosecha agrícola argentina. Esto implica —afirma Manessi— una situación potencialmente contaminante para la zona. Por su acceso desde el Atlántico, los puertos del sur santafesino son centrales para el extractivismo agropecuario y la salida de commodities al exterior. Allí operan [empresas como Cargill, Cofco, Viterra, Bunge, ADM, LDC y ACA](#).

En la Universidad Nacional de Rosario, desde 2007, el Instituto de Salud Socioambiental (encabezado por médico Damián Verzeñassi) impulsó los "Campamentos Sanitarios", un trabajo llevado a cabo por estudiantes de medicina que generó datos epidemiológicos sobre el impacto de los plaguicidas en la salud humana. La tarea se desarrolló principalmente en pueblos de Santa Fe, aunque también de Córdoba y Entre Ríos. "Cuando empezamos a ver que en los 21 pueblos analizados hasta el momento nos daba incrementos similares de cáncer, de abortos espontáneos, de nacimientos con malformaciones, nos preguntamos qué había en común en todos ellos y es que están en el medio de las áreas de producción agroindustrial con agroquímicos", [contaba Verzeñassi en 2008](#).

Pese a estos estudios, que tuvieron continuidad a lo largo del tiempo, la regulación del uso de agroquímicos es una deuda de la Legislatura santafesina. En la provincia está vigente la Ley 11.273 que data de 1995, un año antes de que Argentina aprobara el uso de la soja transgénica. Establece las distancias para fumigaciones aéreas y terrestres según criterios de peligrosidad de las sustancias tóxicas. "Es una ley totalmente desactualizada. Por eso estamos promoviendo que se modifique. Buscamos que se tengan en cuenta todos los factores nuevos que aparecieron desde entonces", afirma Manessi a Tierra Viva, en referencia a los plaguicidas y a los eventos transgénicos.

El proyecto de reforma está en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de Santa Fe desde julio de 2020. Tuvo media sanción en tres oportunidades, aunque nunca fue tratado por el Senado. "Lo que está en juego es la salud de las personas por la contaminación con agrotóxicos. En este momento están sufriendo impactos muy fuertes. Es tremenda la situación en los pueblos fumigados de Santa Fe", advierte Manessi. "Es una provincia que de punta a punta está cubierta por la soja. Solamente en el corredor de la ruta 1, entre Santa Fe y San Javier, no hay campos de soja. A partir de San Javier comienza lo que es la producción de arroz, donde también se utiliza gran cantidad de agrotóxicos", describe.

En 2009, el llamado "[fallo San Jorge](#)" estableció la protección de un sector de esa localidad del sur provincial: 800 metros de resguardo para el barrio Urquiza. "Fue el primer juez que dijo que los agrotóxicos enferman a los vecinos", recuerda Manessi. Diez años después, una sentencia similar estableció la protección completa sobre la ciudad de Sastre y Ortiz, en un radio de mil metros. A nivel de las ordenanzas municipales, en 2018 la localidad de Ceres —al norte de

"la bota"— estableció una distancia de 700 metros y, en la cercana localidad de Hersilia, determinó en 2011 unos 800 metros de resguardo. En Rosario la Ordenanza 8871/11 regula el uso de productos fitosanitarios y fija la frontera agronómica con un margen de 50 metros para el uso de herbicidas.

Manessi es un referente de la Multisectorial Paren de Fumigarnos, colectivo organizado por grupos de vecinos autoconvocados contra las fumigaciones de 60 pueblos y ciudades santafesinos. El espacio también está integrado por sindicatos como la Asociación del Magisterio de Santa Fe (el sindicato de los docentes públicos), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), entre otras agrupaciones.

"La Campaña nació para defender la salud de los vecinos. En el transcurso del tiempo vimos que los agrotóxicos eran el resultado de una forma de producción, que es el agronegocio, y a partir de ahí se fueron incorporando otros temas, como la agroecología", indica.

Verduras agroecológicas en los periurbanos

En Santa Fe existen diversas experiencias agroecológicas. Entre ellas: la organización de las y los vecinos de Hersilia (en el norte provincial), colectivos como La Verdecita, la UTT y Desvío a la Raíz en la zona del departamento La Capital, las producciones de la zona de Soldini (cerca de Rosario) y la emblemática [Naturaleza Viva](#), granja que produce alimentos sanos desde 1987 en Guadalupe Norte (extremo noreste de la provincia) y que llevan adelante Remo Vénica e Irmina Kleiner.

Según el último censo agropecuario, el territorio cuenta con 63 experiencias orgánicas, 38 biodinámicas y 171 agroecológicas. En términos de producción agroecológica, es la cuarta provincia después de Buenos Aires (312), Salta (282) y Jujuy (209).

A pocos kilómetros de la ciudad de Santa Fe se encuentra el Centro Operativo Experimental "Ángel Gallardo" del Ministerio de la Producción. Se trata de un campo de seis hectáreas en el que se cultiva de forma agroecológica y se producen bioinsumos. El predio es compartido por dos organizaciones de agricultores periurbanos (La Verdecita y la UTT), y fue obtenido en comodato para la producción de hortalizas sin agrotóxicos en 2017. Lo producido allí se vende a través de bolsones o en ferias urbanas de la capital provincial. En septiembre de 2021 la ciudad de Santa Fe [sancionó una ordenanza para promover la producción agroecológica](#) y que el Estado municipal apoye a las familias que transitan estos procesos en la zona periurbana.

En conversación con Tierra Viva, Josefa Aramayo, de Soldini, comenta que su experiencia de transición a la agroecología comenzó hace nueve años. En ese

entonces —recuerda— no era conocida la agroecología y se vendía poco. Luego, con el acompañamiento del INTA, se fueron animando a producir más. “Nosotras no conocíamos el circuito, no teníamos experiencia en ferias. Después de que empezamos a trabajar con la provincia nos pusieron un nombre que es 'Cinturón Verde Rosario'. Ahora estoy produciendo cuatro hectáreas, todo agroecológico, con 25 variedades de cultivos”, relata.

Sin embargo, Josefa señala que aún hay dificultades en la comercialización. “Con la pandemia perdimos clientes, ya no pudimos ir a vender a las ferias. Como no hay un mercado estable de agroecología, nos es imposible como productores seguir vendiendo toda nuestra producción. Falta ese lado del Estado para que podamos tener un mercado útil para los productores agroecológicos”, considera.

Para Evelyn Knutzzen, ingeniera agrónoma que acompaña estos procesos de transición, el Estado tiene que fomentar ese tipo de comercialización y los consumidores tratar de conseguir el alimento directamente de los productores y productoras, sin intermediarios. “De esta manera, apuntás a que el productor reciba realmente el pago que tiene que recibir”, agrega, y destaca la importancia que la organización de las y los productores tiene a la hora de generar circuitos cortos de compra y venta.

El avance de la frontera agropecuaria entre el monte nativo

257

En 2015 la Universidad Nacional de Rosario relevó la cantidad de bosque desmontado en el norte provincial entre 1976 y 2008. En ese periodo, la superficie de bosque se redujo de 790.529 a 404.672 hectáreas, alcanzando entre 2005 y



2008 una tasa de deforestación anual de 19.574 hectáreas. La superficie arrasada equivale a la de la ciudad de Rosario, de 17.800 hectáreas.

En el noroeste provincial aún sobreviven algunas hectáreas de monte chaqueño. Eugenia Tedín, ingeniera agrónoma de la Secretaría de Agricultura Familiar y Campesina acompaña la transición agroecológica de comunidades del departamento 9 de Julio. "Trabajamos con familias campesinas que realizan ganadería vacuna de cría, también caprina, ovina, porcina y aviar. Hacen huertas para autoconsumo", cuenta. El departamento 9 de julio es donde quedan los últimos reductos de bosque nativo. De millones de hectáreas, hoy quedan solo 8000.

"En todo lo que es ganadería siempre hay que cumplir con requerimientos de Senasa, entonces hay determinadas vacunas y antiparasitarios que hay que usar", aclara Tedin. Pero las 300 familias en transición crían su ganado a campo, alimentándolo con pasturas naturales.

Explica que la comunidad apostó a la transición al verse directamente afectada por los agrotóxicos. "Acá el avance de la frontera agrícola ha sido atroz. Son los pequeños productores los que sufren la aplicación de herbicidas y pesticidas que se usan en el algodón y en la soja", agrega.

Las tierras del departamento 9 de Julio sufren las consecuencias del desmonte en Chaco y en Santiago del Estero. En 2019 hubo allí siete meses de inundación, con agua de las provincias limítrofes. La zona es parte de la cuenca de los bajos submeridionales: un humedal con cursos de inundación y clima seco. Pero, debido al avance de las topadoras en las provincias vecinas, las inundaciones son cada vez más agudas y con más cantidad de agua. También se sufre la extrema



sequía porque allí no hay cursos de agua, las aguas subterráneas no son de buena calidad y las lluvias se comportan de forma torrencial pero son escasas.

Como consecuencia de estos desequilibrios ambientales las familias productoras viven permanentes procesos de descapitalización, perdiendo todo lo que tienen por el agua o por la sequía. En el norte se observa el mismo problema que en el sur: la necesidad de mejorar los circuitos de comercialización corta. Tedín sintetiza la demanda: “Se cae en intermediarios que pagan poco y los productores están al límite con sus ingresos”.

259

Fotos: Télam



Santa Fe

22



RADIOGRAFÍA DE SAN JUAN: AGRONEGOCIO Y MEGAMINERÍA FRENTE A EXPERIENCIAS AGROECOLÓGICAS

Mientras la megaminería se transformó en política de Estado, en San Juan desaparecieron 5300 chacras productivas. Aún así, existen numerosos cultivos de vid, olivo, cebolla, tomate y papa. Y nacen fincas agroecológicas con el trabajo de familias campesinas. La disputa por el agua, la tierra en pocas manos y el potencial agropecuario de la provincia.



Nacida en la cordillera de los Andes, la provincia de San Juan abarca 89.651 kilómetros cuadrados y alberga una población de 818.234 habitantes. Su relieve predominantemente montañoso y serrano es interrumpido por valles que, regados por aguas de deshielo, permiten el asiento de las comunidades y el cultivo de la tierra.

Según datos del último Censo Nacional Agropecuario (CNA), de 2018, **San Juan destina poco menos de 800 mil hectáreas a la actividad agrícola ganadera, lo que equivale a menos del nueve por ciento de la superficie provincial.** Esto la convierte en la provincia que, a nivel nacional y en términos cuantitativos, destina menor superficie a esta rama productiva, y la segunda en términos porcentuales, después de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Aunque la poca distribución de tierras para la agricultura y la ganadería parecería explicarse por el tipo de relieve y las escasas precipitaciones (menos de 100 milímetros anuales en la parte oriental), esto no es suficiente. De acuerdo con [datos del CNA](#), en 1988, San Juan destinaba 1.204.185 hectáreas a la actividad. Es decir, **en tres décadas, la superficie dedicada a esta rama productiva se redujo en una tercera parte.** En el mismo lapso de tiempo, disminuyó la cantidad de establecimientos agropecuarios (EAP), que alcanzaba los 11.001 en 1988 y contabilizaba 5667 en 2018. O sea, en 30 años, **la cantidad de unidades productivas se redujo más del 48 por ciento.**

Estos drásticos descensos se registraron en el periodo de estimulación y puesta en marcha de la [megaminería en la provincia](#).

Para Valeria Silva, integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), regional San Juan, a “la situación de la actividad agropecuaria en la provincia hay que entenderla dentro de un contexto megaminero, ya que la minería ocupa el lugar central dentro del desarrollo económico provincial, donde hay una asimetría con respecto a otras actividades económicas”.

Como recuerda Alicia Naveda, doctora en Ciencias Sociales, docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Juan, en la década de 1990 las nuevas leyes de minería “posibilitaron a las grandes corporaciones mineras transnacionales desembarcar en la provincia”, con una serie de beneficios y exenciones impositivas que transformaron el perfil productivo e impactaron la actividad agropecuaria.

Uno de esos impactos se refleja en el alto consumo de agua que exige la megaminería, según denuncian las asambleas socioambientales. “En la peor sequía de los últimos 100 años, reafirmada por la prohibición del gobierno de San Juan de nuevas concesiones de agua para uso agrícola, ¿ustedes consideran que se debe seguir dando concesiones de agua para uso minero en las nacientes de nuestros ríos?”, preguntaron a los candidatos a ocupar cargos públicos, desde la

Asamblea Jáchal No Se Toca. Ahora, el alerta está sobre una ley impulsada por el gobernador Sergio Uñac, que afectaría a los regantes y que, de aprobarse, “**destruirá a los pequeños productores agrícolas**”, advierte la Asamblea.

Sin desconocer que, entre los obstáculos para la actividad agropecuaria se cuentan “las dificultades históricas en el nivel de riego, que actualmente, además, está atravesando una sequía”, Naveda coincide en que “más allá de las contingencias climáticas de la provincia, esto obedece a la lógica de producción del capitalismo, fundamentalmente en países periféricos, donde las grandes corporaciones vienen a extraer, literalmente, lo que les otorga grandes beneficios, en desmedro de la realidad de las poblaciones locales”.

Distribución de la tierra

En apenas el **0,59 por ciento de la superficie destinada a la agroganadería se asienta el 37 por ciento de las unidades productivas, todas con menos de cinco hectáreas**, según el último CNA. Tienen, en promedio, 2,5 hectáreas cada una. El margen se amplía a menos del seis por ciento de la superficie productiva para **contener al 80 por ciento de las EAP existentes, de hasta 50 hectáreas**. En el otro extremo se sitúan las **16 unidades que poseen más de 10 mil hectáreas y que concentran el 34 por ciento de la tierra destinada a la actividad**.

263

Aunque la superficie productiva mostró un leve aumento (de casi un seis por ciento) con respecto al **CNA de 2002**, en ese mismo periodo, las pequeñas unidades (de hasta cinco hectáreas) disminuyeron en un 40 por ciento y perdieron más del 44 por ciento de superficie. En el mismo lapso, las EAP de más de 10.000 hectáreas aumentaron de 12 a 16, pero evidenciaron una reducción del 13 por ciento de la superficie total ocupada.

Silva observa que “en la provincia persiste todavía una forma en la cual los habitantes de las zonas rurales son obreros de las fincas, viven en las casas de las fincas, pero de prestado”. Para subsistir, agrega, cultivan hortalizas y crían animales, “porque los sueldos son muy bajos”. Por eso, opina que “el gran desafío es generar oportunidades y opciones para la gente que vive en el campo, donde no son dueños de la tierra, trabajan de empleados para otros, que no son productores, que viven en las ciudades, dedicándose a otras actividades”.

El uso de la tierra

Menos del nueve por ciento de la superficie total destinada a la actividad agroganadera corresponde a **cultivos, lo cual equivale a menos del uno por ciento de la superficie total de la provincia**. Un análisis comparativo muestra que

más de 6000 hectáreas dejaron de cultivarse desde 1988. Esta disminución de la superficie cultivada va acompañada, sin embargo, del aumento del tamaño de las unidades productivas, lo cual evidencia la concentración de la tierra, según afirma Naveda.

Este proceso, explica, se vio favorecido por la Ley de Diferimientos Impositivos de 1992, que “ponía a San Juan como una de las provincias para la transformación de la producción, en términos de riego por goteo, por aspersión; es decir, un cambio en las lógicas tradicionales de riego a manto, y que tuvo un fuerte impacto en el desembarco de capitales extrarregionales, y la venta de pequeñas y medianas unidades productivas en favor de unidades más grandes”.

En la actualidad, **el 69 por ciento de la superficie cultivada corresponde a cultivos perennes, entre los que se destacan viñedos y olivares.** Con el auge de estos cultivos, favorecidos por “políticas públicas generadas para el fomento de las economías de grandes empresas, la producción de alimentos ha quedado aún más atrás”, señala Silva. De acuerdo con la productora, el cultivo de alimentos se concentra en Médano de Oro (departamento Rawson), pero la poca rentabilidad ha llevado a la división de fincas en parcelas o lotes que se venden para la construcción de casas de descanso, con el consecuente **avance de la frontera inmobiliaria sobre territorio rural.**

La vid al frente

264

Casi el 77 por ciento de la superficie implantada corresponde a frutales y de este porcentaje un 68 por ciento es ocupado por viñedos. El cultivo de la vid está presente en el 38 por ciento de las EAP relevadas en 2018, lo cual da un promedio de 15 hectáreas por unidad productiva, es decir, es cultivada por pequeños y medianos productores. Con más de 34.000 hectáreas destinadas al cultivo de la vid, San Juan es la segunda provincia en superficie vitivinícola, pero se encuentra muy por debajo de Mendoza, que destina casi 100 mil hectáreas más a este cultivo.

Según el [informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura \(INV\) de 2022](#), el 71 por ciento de la superficie implantada con vid corresponde a variedades aptas para la elaboración de vinos y mostos, mientras el 29 por ciento restante es cultivado con variedades para el consumo en fresco o pasas. De acuerdo con el mismo informe, del total de vid para elaboración hay una predominancia de variedades tintas (38 por ciento), seguidas por las rosadas (36 por ciento) y las blancas (26 por ciento).

Más de 2000 explotaciones agropecuarias poseen viñedos en sus tierras, según datos del último CNA. Existen en la provincia 158 bodegas, siete fábricas de



mosto y siete de espumoso. Casi la totalidad de vinos producidos en la provincia (más de un millón de hectolitros en 2021) se destina al mercado interno, en tanto mostos y pasas de uva son las principales exportaciones vitivinícolas.

Como en otras provincias de la región, también en San Juan los procesos de reconversión técnica, territorial y productiva “favorecieron la ampliación de las empresas más concentradas y condicionaron el empobrecimiento, el ajuste de prácticas culturales y comerciales o la exclusión del circuito de los agentes de menor escala”, afirma Pablo Tapella, en su informe para la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Giberti.

Alicia Naveda apunta que **en la década de 1980 se contaban unas 350 bodegas en la provincia y para 2019 sólo sumaban 114** empresas elaboradoras y fraccionadoras. “Esta disminución es una muestra de los procesos de concentración en pocas manos que registra la actividad, al tiempo que desaparecieron pequeños y medianos elaboradores de vino, y se asentaron en el territorio firmas de capitales externos”, expresa la investigadora.

Muchos viñateros se convierten en proveedores de materia prima para bodegas a granel o fábricas que pertenecen a grandes corporaciones, o venden su producción en fresco en los mercados locales.

Escapando a esta lógica, persisten aún pequeños productores que cultivan, fabrican y comercializan vinos. Es el caso de la familia Desgens que, en poco más de media hectárea en la localidad Dos Acequias, departamento San Martín, cultiva y cosecha las uvas con las que produce los [vinos artesanales Kantaka](#). De acuerdo con el INV, San Juan es la provincia con mayor diversificación de variedades y este emprendimiento es una muestra: producen alrededor de 4500 botellas al año, de variedades tintas como Tannat, Ancellotta, Malbec y Montepulciano, y blancas como Pinot gris y Sauvignon Blanc.

Otros cultivos

Los olivos para aceite ocupan el 20 por ciento de la superficie destinada a los frutales, a nivel provincial, y ocupa una porción similar en cuanto a superficie cultivada con esta fruta a nivel nacional. Esto la convierte en la cuarta provincia en cantidad de hectáreas con implantaciones de olivos para aceite.

Otro cultivo que se destaca es el pistacho que, con cerca de 1200 hectáreas ocupadas, concentra el 94 por ciento de la superficie implantada a nivel nacional.

En menor medida, la superficie se destina a las forrajeras perennes (casi un once por ciento del total, dividido en alfalfa y buffel grass), y las hortalizas (casi el

ocho por ciento), entre las que se destacan la cebolla, la papa, el tomate y el ajo. Según el CNA, en la actualidad, unas 878 EAP se dedican al cultivo de estos alimentos en la provincia.

Un caso sobresaliente es el cultivo del tomate como insumo industrial que, [según datos oficiales](#), en los últimos once años aumentó de 75.000 a 272 mil toneladas. Según apunta Silva, este cultivo obedece a las lógicas del agronegocio: “Se invierte en producción de tomate, con capitales que vienen de otros lugares, incluso de empresas mineras, y que tienen un rinde grande, uno de los más altos en el mundo”. Pero, en consonancia con este modelo, utilizan agrotóxicos y producen hasta agotar los suelos.

Experiencias agroecológicas

La [cooperativa Boca del Tigre](#) también cultiva e industrializa tomates, pero lo hace desde un modelo distinto: la agroecología. Según narra Silva, esta cooperativa —que también integra—, toma su nombre de la localidad del departamento San Martín donde nació, para hacer frente al difícil contexto económico de la pandemia. Con “riego y mucha atención humana” reemplazaron los agroquímicos que no podían costear y descubrieron que “la producción tenía otro valor”.

267

Actualmente, la cooperativa cuenta con una sala de elaboración de conservas y alimentos, “donde la vedette es la salsa”, pero también se industrializan otros frutos de estación.

Y la cooperativa se sigue diversificando. “En abril de 2022 empezamos a preparar tierra en una finca alquilada en Pocito e hicimos nuestra primera experiencia de semillas agroecológicas y de polinización abierta”, cuenta orgullosa Silva. Rúcula y zapallito anco son los primeros experimentos que, con esta apuesta, intentan combatir la modificación genética de semillas y su hibridación.

Por el mismo modelo apuesta [Tutuna, un emprendimiento familiar](#) que, en ocho hectáreas de olivar, produce las aceitunas con las que elabora aceite, conservas y productos de fitocosmética, como cremas, ungüentos, shampoo y jabones. “Hemos aprendido que la decisión de cambiar es el primer paso”, afirma el productor e ingeniero agrónomo Esteban Santipolío, miembro de esta finca ubicada también en Pocito. El abandono de los agrotóxicos marcó el inicio de la transición a la agroecología, que continuó con la compostación del orujo (residuo de la molienda), con el que realizan un té de compost para abonar las plantas y, de esta manera, resuelven un pasivo ambiental, explica Santipolío. El control de malezas queda a cargo de los caballos que, al consumirlas, las transforman en “buenezas”, como gusta decir al productor. A esto, se suma la reserva de agua

para su utilización más efectiva, la instalación de paneles solares y el empleo de la bioconstrucción.

Estos emprendimientos son dos de los **61 que utilizan prácticas agroecológicas en la provincia y que, junto con 122 EAP que emplean prácticas orgánicas y 13 biodinámicas**, apuestan por una producción más amigable con el entorno.

Un modelo agotado

“Creo que el sistema de modernización de la agricultura que comenzó hace 80 años, con la incorporación de insumos externos al agrosistema está agotándose, desde todo punto de vista: ambiental, social y, sin dudas, económico”, opina Santipolío y explica que los agrosistemas van creando resistencia, de modo que cada vez se necesita más cantidad de agroquímicos, mientras su efectividad disminuye. “Con este modelo todos nuestros esfuerzos se van en agroinsumos (que están dolarizados), nos ponen en cultivos de alto costo, frágiles hasta económicamente, ya que si hay algún imprevisto —que normalmente en agricultura los hay—, nuestros ingresos no cubren los costos”, argumenta.

Al contrario, la agroecología, además de producir alimentos sanos, es rentable, afirma y ejemplifica con su experiencia: “Al no pagar la energía, los controles de malezas mecánicos o químicos, los abonos, y reducir el impacto de plagas por el origen orgánico de la nutrición, ¡bajamos los costos!, y eso hace rentable también el cultivo primario”. Para Santipolío es importante destacar que la agroecología “es una propuesta técnica”, que se puede aplicar a cualquier escala y no sólo a la huerta familiar.

Pese a los obstáculos que reconocen los productores —como la sequía y el privilegio a las actividades extractivas—, también resaltan las fortalezas. “Aún en este contexto, seguimos resistiendo y seguimos viviendo y habitando el campo”, afirma Silva y enumera a favor de los productores la capacidad de trabajo y la organización colectiva, los conocimientos sobre el suelo y el clima, la posibilidad de producir alimentos y agregarle valor y, sobre todo, la certeza de que “otro modelo es posible”.

— Por Anabel Pomar —

23



SALTA: MATRIZ COLONIAL, AGRONEGOCIO, DESMONTES Y MUCHA TIERRA EN POCAS MANOS

Tabaco, azúcar, soja, vid, agrocombustible y ganadería son algunas de las producciones de Salta. Y también: desmontes, desalojo de campesinos y pueblos indígenas, muertes de niños wichí e injusta distribución del agua y la tierra. Las estancias de más de 10.000 hectáreas, que representan el 1,2 por ciento del total de los campos, controlan el 50 por ciento de la superficie provincial.



Salta tiene una superficie de 15,5 millones de hectáreas, caracterizada por la diversidad de su topografía y la variedad de sus paisajes que la convierten en un importante atractivo turístico. Presenta una marcada heterogeneidad sociocultural, ambiental y productiva, dividida en cinco regiones: Puna, Valles Calchaquíes, Valles Templados, Yungas y Región Chaqueña. La configuración productiva, en un rápido resumen [elaborado por el propio estado nacional](#), presenta una estructura centrada en el sector primario: actividades agropecuarias, hidrocarbúferas y mineras (boratos, litio y oro).

Entre las cadenas de valor agropecuarias presentes se encuentran: tabaco, azúcar, legumbres (poroto), los cereales y oleaginosas (maíz y soja), cítricos (mayormente pomelos), frutas tropicales y la vitivinicultura (vinos de altura).

El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, en su paso por Expo Chacra 2022, [mencionó](#) que el desarrollo productivo provincial seguirá enfocado en las mismas actividades extractivas. “El litio como nave insignia, pero sin dejar de lado minerales como el cobre y el oro, hasta la capacidad que tenemos de generar mucha más actividad ganadera”, resumió.

Al mismo tiempo, en Salta existen “al menos 7543 niñas y niños de entre 0 y 5 años en estado de riesgo nutricional”, según datos oficiales consignados por la [Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia \(ACIJ\)](#). Según datos del Ministerio de Salud Pública salteño, [79 menores de 5 años fallecieron](#) en los primeros tres meses de este 2022. El bajo peso y la malnutrición mayormente afecta a la población infantil wichí.

“Nos están matando con hambre y abandono”, dice Abel Mendoza, presidente de la Unión Autónoma de Comunidades del Pilcomayo (Uacop), que nuclea a unos 18 caciques de la zona. “Cuando cortamos rutas, para el Estado estamos cometiendo un delito. Cuando una criatura muere por falta de agua no lo ven como delito. En nuestras comunidades sufrimos la falta de asistencia de salud y la falta aún de un recurso tan esencial como el acceso al agua”, denuncia.

Con sus 39 años, Mendoza sigue viviendo en el lugar a dónde nació, en Santa Victoria Este. Zona rural, tripartita, en dónde la frontera argentina se junta con Paraguay y Bolivia, en dónde se vive y convive del río. “Hace poco el Gobierno señaló que el Pilcomayo estaba contaminado y después dijo que no había peligro. Nosotros cómo habitantes consumimos peces de ese río, sin saber con certeza si es seguro o no. El Gobierno tiene que evitar la contaminación y también garantizar que sus estudios brinden confianza, cosa que no sucede”, alerta. Y por eso asegura que la resistencia que lleva más de 530 años seguirá firme: “Vamos a seguir alzando nuestra voz, por lo que nos corresponde, para generar políticas que respeten la vida y a quienes más necesitamos, con oportunidades e igualdad”.

Salta experimenta desde hace más de un siglo la expansión de la frontera agropecuaria. Según describe Rodríguez Faraldo en la investigación “Una aproximación a la caracterización de la estructura agraria de Salta”, se pueden identificar tres momentos principales: la etapa de la ganadería mular (época colonial, 1884), el momento de la ganadería bovina (1884-1929) y la etapa de los cultivos industriales, principalmente caña de azúcar y tabaco (desde 1930 hasta la actualidad). A este último momento luego se le sumaron cultivos tales como las legumbres (principalmente poroto) y oleaginosas (soja).

La apuesta productiva de Salta hacia cultivos industriales orientados hacia mercados externos transformó la provincia: de ser autosuficiente en la producción y abastecimiento de sus necesidades alimenticias básicas pasó a ser una región totalmente dependiente de este tipo de bienes, perdiendo su autosuficiencia alimentaria, según consta en el libro "La Argentina agropecuaria vista desde las provincias", de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Giberti.

Desde el punto de vista ambiental, este modelo trajo aparejada la deforestación de grandes áreas boscosas y la aplicación de paquetes tecnológicos con uso intensivo de agroquímicos en ambientes ecológicamente sensibles, generando un crimen histórico sobre un lugar único, el Gran Chaco, [el segundo ecosistema forestal de Sudamérica](#) (después del Amazonas).

271

Pampeanización del Chaco Salteño

A partir de la fuerte devaluación del año 2002, en Argentina se profundizó un proceso de “agriculturización” ligado a la expansión de la frontera agraria, donde el proceso denominado “sojización” avanzó sobre otras áreas consideradas marginales o periféricas hasta ese entonces. En Salta este proceso se ve reflejado en los cambios en el uso del suelo, a través del cultivo de soja en el área del Umbral al Chaco —una franja angosta que recorre la provincia de norte a sur, en el centro-este salteño— y un proceso paralelo llamado “ganaderización” en el Chaco semiárido a partir de la [instalación en grandes superficies de empresas](#) que avanzaron sobre el bosque chaqueño y la introducción de pasturas tropicales.

Las consecuencias son bien conocidas: el desplazamiento de los habitantes tradicionales, los “puesteros criollos” que crían su ganado “a monte” y de las comunidades originarias, las que son despojadas de sus territorios y arrinconadas en la periferia de pueblos y ciudades, alterando sus prácticas tradicionales de reproducción socioeconómica.

“La recolección, la caza y la pesca, nuestros modos de vida, fueron afectados por el avance de los desmontes y el avance de grandes empresas por sobre nuestro

territorio”, relata con voz pausada y grave el cacique Abel Mendoza de la Uacop, resumiendo en primera persona las consecuencias de esa afectación que los golpea sin tregua.

Mucha tierra en muy pocas manos

La configuración productiva de Salta se caracterizó históricamente por una estructura social polarizada, situación reflejada en la desigual distribución de las unidades productivas y de la superficie que le corresponde a cada estrato de la escala.

El proceso de concentración de la tierra presenta cómo característica la compra de grandes extensiones por parte de inversores urbanos y externos al ámbito provincial, el desalojo de campesinos e indígenas de áreas productivas de reciente expansión, destaca el libro "La Argentina agropecuaria vista desde las provincias". “Es a fines de los ‘70 que la región recibe a los nuevos actores empresarios, con perfil corporativo de grandes capitalistas que compran tierras o las reciben del gobierno provincial en base a tratados sospechosos. El promedio de poco más de 100 hectáreas de las explotaciones agrícolas tradicionales cambia a más de 1000 con los primeros grandes desmontes de los nuevos propietarios”, se describe en el libro "Luchas y transformaciones territoriales en Salta", de Alejandra Cebrelli y Víctor Arancibia.

En el 2002 las explotaciones agropecuarias (EAP) con una superficie menor a 50 hectáreas representaban el 63,04 por ciento del total provincial. Sin embargo, sólo sumaban el 0,71 por ciento de la superficie. En el 2018 representan el 64,28 por ciento con sólo el 0,67 por ciento de la superficie provincial.

272

En contraste, las fincas con superficies mayores a 10.000 hectáreas en el año 2002 eran el 1,34 por ciento del total y contaban con un 45,08 por ciento de la superficie total. Para el 2018 la concentración de la tierra se acentuó. Las explotaciones mayores a 10.000 hectáreas representan el 1,20 por ciento de las EAP y ocupan el 50,78 por ciento de la superficie total de la provincia. Los registros del 2018 evidencian un marcado crecimiento en la polarización de la estructura agraria, especialmente debido a la concentración de la tierra en las fincas de más de 20.000 hectáreas.

Según datos de la [Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales](#), de los 1,5 millones de hectáreas rurales de Salta, [el 11,6 por ciento](#) (1,8 millones) está en manos de empresas extranjeras.

En cuanto a los terratenientes locales se pueden encontrar [grandes fincas asociadas a las familias](#) Roggio, Brown Peña, Macri, Brito, Olmedo, Elsztain y las empresas Cresud, Navilli y Desde el Sur, entre otras.



Corrimiento de la frontera ganadera

Consecuencia del proceso de “agriculturización” que se llevó a cabo en el norte, este y sureste de la provincia, se produjo una intensificación de los sistemas ganaderos bovinos. La actividad de cría se expandió a campos de “inferior calidad”, con un desarrollo sustentado en una diversidad de propuestas tecnológicas (implantación de pasturas mega térmicas y desbajado, entre otras), en tanto que la terminación o engorde, en gran medida pasó a realizarse de manera intensiva en sistemas de confinamiento en corrales.

La expansión del engorde a corral pasó a ser un fenómeno de alta significancia en la producción ganadera de Salta. Según datos del Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en 2018 el stock bovino era de 1.324.833 cabezas en 3509 unidades productivas. **Calcula que el 50 por ciento de los animales que llegan a faena lo hacen a través de feedlot (engordes de corral).** Existen en la provincia doce establecimientos de este tipo, entre los que se destacan por su magnitud —figuran entre los cinco establecimientos más grandes del país— el de la firma Desdelsur en Tartagal, con una capacidad instalada de **55.000 novillos**, y el de **Inversora Río Juramento**, en el departamento de Anta, con una capacidad de engorde de 80.000 cabezas anuales.

Oleaginosas y cereales

El sector agropecuario es uno de los de mayor relevancia en la provincia. En el 2012 generaba el 12,4 por ciento del Producto Bruto Geográfico (PBG) y en el 2017 el sector generó el 14 por ciento del Valor Agregado Bruto; destacándose tabaco y



caña de azúcar entre los cultivos industriales. Entre los extensivos predominan la soja, maíz y poroto, cultivo este último que la ubica a Salta como la principal productora a nivel nacional.

Según datos oficiales, Salta aporta a la producción total nacional, **el 2,18 por ciento de la de soja** y el **tres por ciento del maíz**. El departamento Anta acapara el 53,42 por ciento de la producción provincial de los tres principales granos, con 1,4 millones de toneladas.

Entre 2002 y 2018 la superficie implantada se incrementó en un 35,84 por ciento. Luego de haberse incrementado notoriamente desde mediados de la década del 90 (desplazando a cultivos regionales -como el poroto- y avanzando sobre el monte nativo), **el área sojera pasó de 200.000 hectáreas en la campaña 1998/99 a 500.000** en las últimas campañas. La soja pasó a ser el cultivo principal en la provincia.

Considerando sólo los tres cultivos extensivos principales, en 2019/20 la soja representó el 50 por ciento del área provincial, el maíz el 38,9 por ciento y el trigo el 11,1 por ciento. La siembra de cereales gana peso desde 2015/16. Salta lidera la producción de otras dos oleaginosas menores: la chía, con 12.600 hectáreas (98,1 por ciento del área nacional); y el cártamo, con 5700 hectáreas (97,8 por ciento), según el Censo Nacional Agropecuario de 2018.

275

Legumbres y caña de azúcar

Salta lidera la cadena nacional de legumbres con una superficie implantada en la campaña 2019/2020 de 407.000 hectáreas, la que representó el 57,1 por ciento de la superficie cultivada con legumbres en el país. Mayormente, poroto.

Tradicionalmente la actividad se desarrollaba en el sur provincial, destacándose en los años '70 los departamentos de Rosario de la Frontera y Metán. Durante los años '80 la actividad se fue desplazando hacia el norte, conforme se fueron introduciendo otros cultivos (soja, maíz, trigo). En la actualidad, el 80 por ciento de la superficie cosechada se concentra en tres departamentos: General José de San Martín (34,3 por ciento), Orán (28,5) y Anta (17,8 por ciento). El poroto compete por el uso del suelo con otros cultivos de verano, en especial con la soja.

El sector azucarero muestra una reorientación parcial en el destino de su producción vinculado a un cambio en la dinámica a escala nacional. Debido a los beneficios de la **Ley de Biocombustibles** se observa una gran expansión de la producción de bioetanol.

El Ingenio San Martín de Tabacal es el más importante, siendo responsable del

80 por ciento de la producción provincial. Históricamente fue propiedad de capitales nacionales (Patrón Costas), pero en los años noventa fue vendido a capitales norteamericanos (Seaboard Corporation). Tanto el Ingenio San Martín de Tabacal como San Isidro incorporan a sus actividades la destilación de alcohol, así como también la producción de bioetanol. La producción de bioetanol provincial creció 63 por ciento entre 2012 y 2020. Según [el Centro Azucarero Argentino](#), en 2020, El Tabacal produjo 101.050.350 litros de bioetanol.

Tabaco y vid

El cultivo de tabaco se introdujo en la época colonial. Salta produce principalmente tabaco Virginia. Detrás de Jujuy, es la segunda provincia productora de este tipo: en 2017, aportó [el 44 por ciento del total nacional](#).

Es una actividad de tipo empresarial, explotaciones de gran escala y se concentra en los Valles de Lerma y Siancas. En la campaña 2017/18, los principales departamentos donde se produjo tabaco fueron Cerrillos (42 por ciento), Chicoana (19), General Güemes (19) y Rosario de Lerma (13 por ciento).

La vitivinicultura posee una larga tradición en Salta. [Según datos presentados por el Observatorio Vitivinícola Argentino](#) en base a datos proporcionados el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en el año 2020 se registró en Salta, una superficie cultivada de uva (común y fina) de 3574 hectáreas distribuidas en 286 viñedos.

Están situados entre los 1600 y más de 2000 metros sobre el nivel del mar, razón por la cual los vinos son promocionados como “vinos de altura”. En 2020 el departamento de Cafayate concentró el 75,1 por ciento de la superficie, seguido por San Carlos (18,4 por ciento), Molinos (3,6), Cachi (2,6) y La Viña (0,2 por ciento).

“Generamos salud desde la alimentación”

Según lo informado por el [último Censo Agropecuario](#), en Salta existen, en unidades productivas, 183 dedicadas a la agricultura orgánica, 20 a la biodinámica y 282 a la agroecología.

Tamara Rufolo es productora agroecológica e integrante del [proyecto comunitario Aluna del Monte](#), ubicado a las orillas del Río Rosario-Horcones, a pocos kilómetros de la Ruta Nacional 34 (Rosario de la Frontera). Abrazando los valores del “buen vivir”, buscan regenerar el hábitat, “en un proceso simultáneo de co-creación con el medio ambiente, y la comunidad local, traspasando la sostenibilidad y generando abundancia desde el amor”.

En Aluna, desde hace cuatro años, se producen 75 hectáreas que se trabajan en función de las lluvias y el clima. Producen poroto negro, maíz y distintas variedades de zapallo, sin utilizar agrotóxicos. “Nuestra producción, en cuanto al rinde, es variable. Nuestro foco está puesto en la calidad de los alimentos más que en la cantidad. Generamos granos sanos y salud desde la alimentación”, explica.

A contramano del mercado, que siempre ponen el foco en maximizar ganancias y en producir más, en Aluna priorizan el sabor, el color y los nutrientes que deben tener los alimentos. En cuanto al apoyo que recibe este tipo de producciones señala que falta mucho. “Este año, que enfrentamos mucha seca y se quemaron muchos de los cultivos, la provincia anunció una ayuda. Pero por la burocracia esa asistencia se demora y no llega en el momento necesario”, señala.

Esas políticas son para todos los productores, independientes del manejo que hagan. Usen o no agroquímicos biocidas. Rufolo señala que, más que algún encuentro o charla, aún no hay asistencia específica ni organismo que cuente con presupuesto destinado a desarrollar la producción sana. “Nuestro trabajo es tejer redes y aspiramos a poder sumarnos a colectivos, a crecer junto a otros emprendimientos en organización, mayormente la logística de distribución para nuestros productos. Se piensa que el campo es todo lo mismo y no”, afirma.

Capital del desmonte

277

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a la Argentina [entre los diez países que más desmontaron](#) entre 1990 y 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas.

“Salta es una de las provincias con más deforestación de las últimas tres décadas. Y las topadoras no se detuvieron a pesar de la Ley de Bosques. **Los terratenientes desmontaron incluso donde estaba prohibido** con la complicidad del Gobierno y ahora reclaman aún más impunidad para arrasar la mitad de sus fincas. Sería un verdadero ecocidio. No podemos perder ni una hectárea más”, afirman desde la Campaña de Bosques de Greenpeace.

Entre 1997 y 2008 en Salta se desmontó el 26 por ciento del total de los bosques existentes. Desde la década del 1990 y hasta el año 2008, en el área conocida como Umbral al Chaco, los desmontes alcanzaron una superficie total de 1,5 millón de hectáreas, según datos del Ministerio **Ambiente y Desarrollo Sostenible la Nación**. La propia Secretaría de Medioambiente y Desarrollo Sustentable de Salta (actual Secretaría de Política Ambiental) reconocía en 2006 (en el auge de los desmontes) que los departamentos más afectados por la deforestación eran Anta, Orán, Rosario de la Frontera, San Martín y General Güemes, totalizando en los últimos ocho años una pérdida de 600.000 hectáreas

de selva pedemontana y bosque chaqueño, con un alarmante incremento en la velocidad de la misma”.

Según datos oficiales del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos, **desde la sanción de la Ley 26.331 en Salta se desmontaron 703.421 hectáreas**. Las numerosas recategorizaciones prediales (algo no permitido por la Ley 26.331), autorizaron **desmontes en zonas protegidas**. Actualmente Salta se encuentra **rediscutiendo un ordenamiento** territorial, se reitera el discurso "productivista" que deja en segundo plano el cuidado del ambiente y la salud de la población.

--

Familias campesinas, pueblos indígenas y cooperativistas. Son el campo que produce una enorme diversidad de alimentos sanos, esos que están en los platos argentinos, que hacen a la cultura local, a la historia y al futuro de los sectores populares del país.

Todo eso es parte fundamental de las “Radiografías del agro argentino”. Un material periodístico, **pensado y realizado por Agencia Tierra Viva**, para dar testimonio de un sector que resiste la avanzada del extractivismo, que cultiva sin transgénicos ni agrotóxicos, que construye soberanía alimentaria y futuro.

De Cuyo a la Pampa Húmeda, de la Patagonia al Norte, son 23 investigaciones repletas de información que reflejan lo que sucede en la ruralidad de Argentina: la concentración de tierras en pocas manos, los monocultivos y las políticas de Estado en favor del agronegocio. Están presentes la megaminería, la explotación petrolera y la actividad forestal, todas actividades con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias.

Pero también sobresale la agroecología, que crece en cada provincia; la producción diversificada, desde las huertas para autoconsumo hasta la producción a escala, desde las ferias locales hasta la comercialización regional, siempre a precios justos.

En todos los casos se da cuenta de la gran cantidad de organizaciones locales y provinciales que construyen soberanía alimentaria o, en términos indígenas, el buen vivir. Y, no casualmente, se priorizan las voces de mujeres y hombres que todos los días meten las manos en la tierra, que siembran presente y futuro.

Un libro para conocer, pensar y saber que “el campo” está lejos de ser un sector uniforme, que es muy diverso —como la misma agricultura— y tiene protagonistas tan históricos como imprescindibles para la producción de alimentos sanos: familias campesinas, cooperativistas y pueblos indígenas.



HEINRICH BÖLL STIFTUNG
BUENOS AIRES
Argentina | Uruguay | Paraguay

TIERRA VIVA
NOTICIAS DEL CAMPO QUE PRODUCE ALIMENTOS

agenciaterraviva.com.ar